Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA: APARTES DE LA LEY 734 DEL 2002 Y DE LA LEY 1952 DEL 2019

2 mensajes

nixon torres <nixontorrescarcamo@gmail.com> 19 de agosto de 2020, 21:28
Para: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>, secretaria2@corteconstitucional.gov.co, secretaria4@corteconstitucional.gov.co, secretariadigital@corteconstitucional.gov.co

4 adjuntos

- **INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA LEY 734 DEL 2002 Y 1952 DEL 2019.pdf**
  547K
- **LEY 734 DE 2002.docx**
  370K
- **LEY 1952 DE 2019.docx**
  290K
- **Sentencia.Petro.18.08.2020.pdf**
  654K

secretaria4 corte constitucional <secretaria4@corteconstitucional.gov.co> 19 de agosto de 2020, 21:30
Para: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **nixon torres** <nixontorrescarcamo@gmail.com>
Date: mié., 19 ago. 2020 a las 21:28
Subject: INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA: APARTES DE LA LEY 734 DEL 2002 Y DE LA LEY 1952 DEL 2019
To: Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>, <secretaria2@corteconstitucional.gov.co>, <secretaria4@corteconstitucional.gov.co>, <secretariadigital@corteconstitucional.gov.co>

4 adjuntos

- **INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA LEY 734 DEL 2002 Y 1952 DEL 2019.pdf**
  547K
- **LEY 734 DE 2002.docx**
  370K
- **LEY 1952 DE 2019.docx**
  290K
- **Sentencia.Petro.18.08.2020.pdf**
  654K

Tribunal Constitucional, en el que se radica la presente acción de inconstitucionalidad:

Corte Constitucional
Bogotá D.C.

Asunto: Inconstitucionalidad contra apartes normativos de la Ley 734 del 2002 y de la Ley 1952 del 2019.

NIXON TORRES CÁRCAMO, identificado con la cédula de ciudadanía No 72.193.712, **DIANA TRUJILLO CHAVEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.128.407.964, **MARCO JAIRO ACEVEDO TAPIA,** identificado con la cédula de ciudadanía No 1.128.060.20, **STEWIN ARTEAGA PADILLA,** identificado con la cédula de ciudadanía No 1.129.487.418, **MARCO ANTONIO BOSSIO VASQUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No 1.143.351.438 Y **MAXIMO NORIEGA RODRIGUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No 6.889.892, ciudadano en ejercicio, con fundamento en el numeral 6 del artículo 40 de la Carta Política, en ejercicio de la Acción Pública de Inconstitucionalidad consagrada en el numeral 5 del artículo 241 Superior, respetuosamente acudimos ante esta alta Corporación, pretendiendo la Inconstitucionalidad de los segmentos que abajo detallaré de la Ley 734 del 2002 y de la Ley 1952 del 2019, en los siguientes términos:

1. PRESUPUESTOS PROCESALES:

1.1. OPORTUNIDAD:

Es oportuna la presentación de la acción pública de Inconstitucionalidad, por ejercitarse posteriormente a la sanción y publicación de la Ley 734 del 2002, mediante el Diario oficial No *44.708 de 13 de febrero de 2002 y de la Ley 1952 del 2019, mediante el Diario Oficial No* 50.850 de 28 de enero de 2019.

1.2. COMPETENCIA:

La Honorable Corte Constitucional es competente para conocer de esta acción pública de Inconstitucionalidad en razón a lo previsto en el numeral 4 del artículo 241 Superior y del numeral 6 del artículo 40 Superior, que a la letra señalan;

1.2.1. "*ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:*

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley".

1.2.2. *"ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:*

*"*Numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, que señala; "*Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación".".*

1.2.3. Competencia, que se desarrolla:

1.2.3.1. A partir de la competencia adscrita desde el texto constitucional, a la Corte Constitucional, para conocer las acciones públicas que en defensa del orden jurídico, que presentemos los ciudadanos contra leyes de la república de Colombia, como en el presente caso, acción pública de inconstitucionalidad contra apartes de la Ley 734 del 2002 y de la Ley 1952 del 2019.

1.3. LA PARTE DEMANDANTE:

NIXON TORRES CÁRCAMO, identificado con la cédula de ciudadanía No 72.193.712, **DIANA TRUJILLO CHAVEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.128.407.964, **MARCO JAIRO ACEVEDO TAPIA,** identificado con la cédula de ciudadanía No 1.128.060.20, **STEWIN ARTEAGA PADILLA,** identificado con la cédula de ciudadanía No 1.129.487.418, **MARCO ANTONIO BOSSIO VASQUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No 1.143.351.438 Y **MAXIMO NORIEGA RODRIGUEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No 6.889.892.

2. DISPOSICIONES NORMATIVAS ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

2.1. De la Ley 734 del 2002;

2.1.1. Numeral 4 y apartes del parágrafo primero del artículo 38.

2.1.2. El segmento normativo ***Destitución e inhabilidad general,*** contenido en el numeral 1 del artículo 44.

2.1.3. Los literales a), b) c) d) del numeral 1 del artículo 45.

2.1.4. El segmento normativo ***La inhabilidad general…,*** contenido en el inciso primero del artículo 46.

2.1.5. Como a continuación se detalla;

"LEY 734 DE 2002

(febrero 5)

Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002

<NOTA DE VIGENCIA: Ley derogada, a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único!.

"ARTÍCULO 38. OTRAS INHABILIDADES. ***<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>*** *También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:*

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Numeral 1o. del Artículo 43 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía: "Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública."

Los textos subrayados y en letra itálica fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-111-98 del 25 de marzo de 1998, "advirtiendose que tal disposición se declara exequible en el entendido de que ella no es aplicable a los servidores de la Rama Judicial, pues para éstos ha sido consagrada norma especial y posterior sobre inhabilidades -el artículo 150 de la Ley 270 de 1996-, que señala la manera taxativa las vigencias para ejercer cargos dentro de aquélla." Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

. Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, siempre y cuando se entienda que ésta hace referencia a los delitos contra el patrimonio del Estado. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-544-05, (violación al principio de favorabilidad) mediante Sentencia C-987-06 de 29 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Fallo inhibitorio en relación con el cargo por violación del principio de igualdad.

- Numeral 2. declarado EXEQUIBLE, por el cargo examinado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-544-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral declarado EXEQUIBLE, por los cargos de vulneración de los artículos 1o., 2o., 40.7, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-18 de 19 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente ***será inhábil para el ejercicio de cargos públicos*** *y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.*

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Parágrafo 1o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos de vulneración de los artículos 1o., 2o., 40.7, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-18 de 19 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

- Parágrafo 1o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-077-07 de 7 de febrero de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el parágrafo 1 del numeral 4. por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1196-05 de 22 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

PARÁGRAFO 2o. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado".
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-064-03, mediante Sentencia C-652-03 de 5 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. .

- Parágrafo 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-064-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería; "en el sentido que respecto de las conductas culposas, se aplicarán las inhabilidades previstas en la ley".

"ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. ***<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>*** *El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:*

1. ***Destitución e inhabilidad general,*** *para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.*
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Expresión "Destitución e inhabilidad general" en letra itálica declarada EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-500-14 16 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. Estarse a lo resuelto en la C-028-06 que declaró exequible este numeral en relación con el cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución.

- Numeral 1 declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- Numeral 1. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

- El Inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 contenía el siguiente texto: "Las faltas gravísimas serán sancionadas con terminación del contrato de trabajo ~~o de~~

~~prestación de servicios personales~~, destitución, desvinculación, remoción o pérdida de investidura. "

Los textos subrayados, tachados y en letra itálica fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte tachado del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte subrayado del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996 siempre y cuando se entienda que en estos casos también es aplicable el artículo 110 de la Constitución Política. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte en letra itálica del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, siempre y cuando se entienda que no se aplica a los Congresistas y que para los miembros de las Corporaciones Públicas de las entidades territoriales son causas autónomas de pérdida de investidura las previstas por los artículos 110 y 291 inciso primero de la Constitución. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Numeral 2. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- El Inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 contenía el siguiente texto: "Las faltas graves se sancionarán con multa entre once (11) y noventa (90) días del salario devengado al tiempo de cometerlas, suspensión en el cargo hasta por el mismo término o suspensión del contrato de trabajo ~~o de prestación de servicios~~ hasta por tres (3) meses, ..."

Los textos subrayados y tachados fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte tachado del inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte subrayado del inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 contenía el siguiente texto: "Las faltas graves se sancionarán con multa entre once (11) y noventa (90) días del salario devengado al tiempo de cometerlas, suspensión en el cargo hasta por el mismo término o suspensión del contrato de trabajo ~~o de prestación de servicios~~ hasta por tres (3) meses, ..."

Los textos subrayados y tachados fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte tachado del inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte subrayado del inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este numeral corresponde en similar sentido al texto del Numeral 2o. del Artículo 29 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.

PARÁGRAFO. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Parágrafo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

"ARTÍCULO 45. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES. ***<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>***

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Expresión "elección", subrayada, declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-111-19 de 13 de marzo de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o

c) La terminación del contrato de trabajo, y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Literal d) declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- El Artículo 30, Numeral 3o. de la Ley 200 de 1995 establecía:

ARTÍCULO 30. SANCIONES ACCESORIAS. Son sanciones accesorias las siguientes:

...

3. La exclusión de la carrera".

Este Numeral 3o. fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. Aclara la Corte: "... condicionado a que se entienda que la sanción accesoria en él contemplada no procede frente a faltas disciplinarias graves ni leves".

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.

4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida.

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva".

"ARTÍCULO 46. LÍMITE DE LAS SANCIONES. ***<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>*** *<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible>* ***La inhabilidad general será de diez a veinte años****; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.*

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte en letra itálica "La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante Sentencia C-211-03 de 11 de marzo de 2003, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante Sentencia C-070-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-948-02.

- Aparte en letra itálica "La inhabilidad general será de diez a veinte años" declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, "bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política".

La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.

La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.

La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida".

*(**Lo que está en negrillas es lo que se demanda).***

2.2. De la Ley 1952 del 2019;

2.2.1. Numeral 4 y apartes del parágrafo 1 del artículo 42.

2.2.2. El segmento normativo ***Destitución e inhabilidad general…,*** contenido en el numeral 1 del artículo 48.

2.2.3. El Segmento normativo ***Destitución e inhabilidad general…,*** contenido en el numeral 2 del artículo 48.

2.2.4. Los literales a), b) c) d) del numeral 1 del artículo 49.

2.2.5. Como a continuación se detalla;

"LEY 1952 DE 2019

(enero 28)

Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019

<Rige a partir del 1 de julio de 2021>

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario".

<Resumen de Notas de Vigencia>

NOTAS DE VIGENCIA:

- El plazo de entrada en vigencia de esta ley se prorrogo hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"", publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-099-18 de 24 de octubre de 2018, Magistrado Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional levantó los términos suspendidos mediante el Auto A-411-18, y declaró cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, y lo ordenado en las Sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017, en cuanto a los numerales 1º y 3º del artículo 55 y 1º del 58 del Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario". En consecuencia, ***DECLARAR EXEQUIBLE*** *el Proyecto de Ley en relación con las objeciones analizadas en esta sentencia.*

*- Mediante Auto A-411-18 de 27 de juniode 2018, Magistrado Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional resuelve: "****ABSTENERSE DE DECIDIR*** *acerca del trámite cumplido en ejecución de las Sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017 con respecto a las objeciones gubernamentales de la referencia, hasta tanto no se cumplan los presupuestos constitucionales y legales requeridos para hacerlo".*

- Mediante Sentencia C-704-17 de 29 de noviembre de 2017, Magistrado Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional levantó los términos suspendidos mediante el Auto 569 del 30 de noviembre de 2016, y se pronunció sobre al trámite seguido al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara.

*- Mediante Auto A-569-16 de 30 de noviembre de 2016, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo., la Corte Constitucional resuelve: "****ABSTENERSE DE DECIDIR*** *acerca del trámite cumplido en ejecución de la sentencia C-284 de 2016 con respecto a las objeciones gubernamentales de la referencia, hasta tanto no se cumplan los presupuestos constitucionales y legales requeridos para hacerlo".*

- Mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte se pronunció sobre las objeciones al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

"ARTÍCULO 42. OTRAS INHABILIDADES. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.

Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de la pena privativa de la libertad.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Numeral 1o. del Artículo 43 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía: "Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública."

Los textos subrayados y en letra itálica fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-111-98 del 25 de marzo de 1998, "advirtiendose que tal disposición se declara exequible en el entendido de que ella no es aplicable a los servidores de la Rama Judicial, pues para éstos ha sido consagrada norma especial y posterior sobre inhabilidades -el artículo 150 de la Ley 270 de 1996-, que señala la manera taxativa las vigencias para ejercer cargos dentro de aquélla." Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

. Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, siempre y cuando se entienda que ésta hace referencia a los delitos contra el patrimonio del Estado. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-544-05, (violación al principio de favorabilidad) mediante Sentencia C-987-06 de 29 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Fallo inhibitorio en relación con el cargo por violación del principio de igualdad.

- Este numeral corresponde al numeral 2. del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por el cargo examinado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-544-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Este numeral corresponde al numeral 4. del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos de vulneración de los artículos 1o., 2o., 40.7, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-18 de 19 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente ***será inhábil para el ejercicio de cargos públicos*** *y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.*

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos de vulneración de los artículos 1o., 2o., 40.7, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-18 de 19 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-077-07 de 7 de febrero de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1196-05 de 22 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

PARÁGRAFO 2o. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-064-03, mediante Sentencia C-652-03 de 5 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. .

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 2 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-064-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería; "en el sentido que respecto de las conductas culposas, se aplicarán las inhabilidades previstas en la ley".

"ARTÍCULO 48. CLASES Y LÍMITES DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

1. ***Destitución e inhabilidad general*** *de diez (10) a veinte (20) años para las faltas gravísimas dolosas.*
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

Sobre el límite de las sanciones la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el texto "La inhabilidad general será de diez a veinte años (...)", contenido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, así:

. Aparte en letra itálica "La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia

C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

. La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante las Sentencias C-211-03 , C-070-03 y C-037-03 .

. Aparte en letra itálica "La inhabilidad general será de diez a veinte años" declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Sobre el texto de este numeral del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que en similar sentido establecía: "1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima", la Corte Constitucional se pronunció así:

. Expresión "Destitución e inhabilidad general" en letra itálica declarada EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-500-14 16 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. Estarse a lo resuelto en la C-028-06 que declaró exequible este numeral en relación con el cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución.

. Declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

. Declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

Sobre el texto del inciso 3o. del artículo 32 de la Ley 200 de 1995 que en similar sentido establecia: "Las faltas gravísimas serán sancionadas con terminación del contrato de trabajo ~~o de prestación de servicios personales~~, destitución, desvinculación, remoción o pérdida de investidura.", La Corte Constitucional se pronunció así

. Aparte tachado del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte subrayado del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996 siempre y cuando se entienda que en estos casos también es aplicable el artículo 110 de la Constitución Política. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte en letra itálica del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, siempre y cuando se entienda que no se aplica a los Congresistas y que para los miembros de las Corporaciones Públicas de las entidades territoriales son causas autónomas de pérdida de investidura las previstas por los artículos 110 y 291 inciso primero de la Constitución. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

2. ***Destitución e inhabilidad general*** *de cinco (5) a diez (10) años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima.*
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

Sobre el límite de las sanciones la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el texto "La inhabilidad general será de diez a veinte años (...)", contenido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, así:

. Aparte en letra itálica "La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

. La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante las Sentencias C-211-03 , C-070-03 y C-037-03 .

. Aparte en letra itálica "La inhabilidad general será de diez a veinte años" declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Sobre el texto de este numeral del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 que en similar sentido establecía: "1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima", la Corte Constitucional se pronunció así:

- Expresión "Destitución e inhabilidad general" en letra itálica declarada EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-500-14 16 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. Estarse a lo resuelto en la C-028-06 que declaró exequible este numeral en relación con el cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución.

- Declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- Declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

3. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a cuarenta y ocho (48) meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

Sobre el límite de las sanciones la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el texto "la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses (...)", contenido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, así:

. Aparte en letra itálica "La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

4. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a veinticuatro (24) meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas graves dolosas.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

Sobre el límite de las sanciones la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el texto "la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses (...)", contenido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, así:

. Aparte en letra itálica "La inhabilidad general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

Sobre el texto del numeral 2o. del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que en similar sentido establecía: "2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.", la Corte Constitucional se pronunció así:

. Numeral 2. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

5. Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a dieciocho (18) meses para las faltas graves culposas.

6. Multa de veinte (20) a noventa (90) días de salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves dolosas.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este numeral corresponde en similar sentido al texto del Numeral 2o. del Artículo 29 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

7. Multa de cinco (5) a veinte (20) días de salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves culposas.

PARÁGRAFO. CONVERSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. En el evento en que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial".

Corte Constitucional

- El texto de este parágrafo contenido igualmente en el inciso 2o. del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

"ARTÍCULO 49. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES.

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección; o
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Expresión "elección", subrayada, declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-111-19 de 13 de marzo de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la Constitución Política y la ley; o

c) La terminación del contrato de trabajo; y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera".
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este literal d. corresponde al texto del literal d. del artículo 45 de la Ley 734 de 2002 que fue declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- El Artículo 30, Numeral 3o. de la Ley 200 de 1995 establecía:

ARTÍCULO 30. SANCIONES ACCESORIAS. Son sanciones accesorias las siguientes:

...

3. La exclusión de la carrera".

Este Numeral 3o. fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. Aclara la Corte: "... condicionado a que se entienda que la sanción accesoria en él contemplada no procede frente a faltas disciplinarias graves ni leves".

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva".

(**Lo que está en negrillas es lo que se demanda).**

3. RAZONES QUE SUSTENTAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS SEGMENTOS DEMANDADOS DE LA LEY 734 DEL 2002 Y DE LA LEY 1952 DEL 2019

3.1. ÚNICA RAZÓN: Consideramos vulnerado el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, que señala;

"Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

<Incisos 3 y 4 adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:>

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él".

3.1.1. Al desconocer los segmentos normativos demandados de la Ley 734 del 2002 y de la Ley 1952 del 2019, el Bloque de Constitucionalidad, conformado por el Tratado de Derechos Humanos Continental, denominado la **Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al artículo 93 Superior,** aprobada por el Congreso de la República de Colombia, a través de la Ley 16 de 1972, en los sus siguientes artículos, que invocamos como violados, en la estructuración de la demanda:

"***ARTÍCULO 2o. DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO***.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el Artículo 1o. no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".

ARTÍCULO 8. GARANTÍAS JUDICIALES:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia".

ARTÍCULO 23. DERECHOS POLÍTICOS:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

*"**ARTÍCULO 29. NORMAS DE INTERPRETACIÓN**.*

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a). Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella.

b). Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados.

c). Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d). Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

3.1.2. Violación de la constitución que se sustenta:

En que el Estado colombiano, no ha adoptado las disposiciones normativas para adecuar la anulación o inhabilitación de derechos políticos de sus ciudadanos, a

través de un proceso y juez, cuya naturaleza debe ser penal, toda vez que así lo consagra el artículo 23 convencional en la parte final de su numeral 2, dotando de plenas garantías judiciales, que materialicen el derecho fundamental al debido, como emana del artículo 8 convencional, conforme al precedente judicial de **la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego vs. Colombia, en sentencia del 8 de julio del 2020,** que es vinculante en los términos de la **sentencia C-500 del 2014,** proferida por la Corte Constitucional, en la cual, nuestro tribunal Constitucional, señaló;

"8.3. Variación del significado de normas integradas al bloque de constitucionalidad en sentido estricto y la cosa juzgada.

8.3.1. La Corte destaca, como premisa central, que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo obligan al Estado colombiano cuando éste ha sido parte en el respectivo proceso. Esta conclusión, que reconoce el carácter definitivo e inapelable asignado por el artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos a los fallos de la Corte Interamericana, encuentra apoyo normativo directo en lo prescrito en el artículo 68.1 de la referida convención conforme al cual los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

8.3.2. Ahora bien, el planteamiento del demandante exige establecer si puede considerarse, hipotéticamente, la posibilidad de reabrir un asunto previamente examinado por la Corte Constitucional en consideración a las interpretaciones sobrevinientes de la Corte Interamericana de Derechos respecto de una disposición internacional integrada al parámetro de control constitucional.

Para la Corte tal hipótesis solo podría abrirse paso cuando se acredite adecuadamente el cumplimiento de condiciones muy estrictas. En efecto, ello solo será posible en aquellos casos en los cuales (i) el parámetro de control del asunto previamente examinado haya sido una norma integrada al bloque de constitucionalidad en sentido estricto; (ii) los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

hayan variado radicalmente y de forma clara el sentido de tal norma; (iii) la nueva interpretación resulte compatible con la Constitución Política; (iv) ofrezca un mayor grado de protección a los derechos, que el otorgado por la Constitución; (v) se integre a la ratio decidendi de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y (vi) sea uniforme y reiterada. En estos casos, destaca la Corte, el demandante tendrá la obligación de demostrar con absoluta precisión cada uno de los requisitos antes referidos"

Este planteamiento de la corte Constitucional, obedeció a que, frente a la pretensión, de declarar inexequible la facultad de inhabilitación por parte de la Procuraduría General de la Nación, de la demanda que se discutía en ese momento, donde se estudió la cosa juzgada constitucional, por existir previamente un pronunciamiento, como fue el contenido en la **Sentencia C-028 del 2006, magistrado Ponente el Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, donde la Corte Constitucional, se pronunció;**

"PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA-Restricciones legales al acceso de cargos públicos

La Corte considera que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, en lo que concierne a la imposición de restricciones legales al ejercicio del derecho de acceder a cargos públicos por la imposición de condenas penales, siendo interpretado sistemáticamente con otros instrumentos internacionales universales y regionales de reciente adopción en materia de lucha contra la corrupción, no se opone a que los Estados Partes en aquél adopten otras medidas, igualmente sancionatorias aunque no privativas de la libertad, encaminadas a proteger el erario público, y en últimas, a combatir un fenómeno que atenta gravemente contra el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados en el Protocolo de San Salvador.

TRATADOS INTERNACIONALES QUE HACEN PARTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Deben interpretarse de manera armónica y sistemática

Esta Corporación estima que la pertenencia de una determinada norma internacional al llamado bloque de constitucionalidad, de manera alguna puede ser interpretada en términos de que esta última prevalezca sobre el Texto Fundamental; por el contrario, dicha inclusión conlleva necesariamente a adelantar interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen. Así las cosas, la técnica del bloque de constitucionalidad parte de concebir la Constitución como un texto abierto, caracterizado por la presencia de diversas cláusulas mediante las cuales se operan reenvíos que permiten ampliar el espectro de normas jurídicas que deben ser respetadas por el legislador.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Forma parte del bloque de constitucionalidad/**BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD**-Normas que lo integran no tienen el rango de normas supraconstitucionales

En lo que respecta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en diversas ocasiones, la Corte ha considerado que hace parte del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 Superior. Bajo este contexto, es claro que el mencionado instrumento internacional forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, debe ser utilizado como parámetro que guíe el examen de constitucionalidad de las leyes colombianas, pero ello no significa que las normas pertenecientes al bloque adquieran el rango de normas supraconstitucionales. En ese sentido, la confrontación de una ley con un tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario, a su vez, interpretarla sistemáticamente con el texto de la Constitución.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-No se opone a que legislador establezca sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos/**INHABILIDADES POR FALTA DISCIPLINARIA Y PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA/PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION**-Facultad para imponer

sanciones disciplinarias que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se opone realmente a que los legisladores internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado. En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.

INHABILIDADES PARA EJERCER FUNCIONES PUBLICAS POR SANCION DISCIPLINARIA-No resulta desproporcionada o irrazonable porque busca la salvaguarda de la moralidad pública/**DERECHO DE ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PUBLICOS**-No vulneración al establecer inhabilidad por sanción disciplinaria

El legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa para establecer el régimen de inhabilidades de quienes aspiran a la función pública, por lo que la definición de los hechos configuradores de las causales de inhabilidad, así como el tiempo de duración de las mismas, son competencia de aquél y objeto de una potestad discrecional amplia, pero subordinada a los valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos, como lo es precisamente aquel de acceso a cargos públicos. En este orden de ideas, la limitación que conoce el derecho político de acceso a cargos públicos debido a la imposición de una sanción disciplinaria, no

resulta ser desproporcionada o irrazonable, por cuanto busca la obtención de fines constitucionalmente válidos, en especial, la salvaguarda de la moralidad pública".

Y en su parte resolutiva, señaló;

***"PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO** en sentencia C- 948 de 2002, mediante la cual se declaró **EXEQUIBLE**, la expresión "pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente", contenida en el inciso primero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, en el entendido que "se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política".*

***SEGUNDO.-** Declarar **EXEQUIBLES,** por los cargos analizados en esta sentencia, los artículos 44 numeral 1, 45, literal d) y las expresiones "La inhabilidad general será de diez años a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses", contenidas en el inciso primero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002".*

Incluso en sentencia C-101 del 2018, Magistrada Ponente, la Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, la Corte Constitucional, sobre la exequibilidad del numeral 4 y del parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 del 2002, que se demanda en la presente demanda, señaló;

"*113.6. Adicionalmente, existe una relación indirecta entre la circunstancia que configura la causal y la declaratoria administrativa de responsabilidad fiscal, pues la existencia de aquel hecho y su verificación objetiva generan la limitación del derecho de acceso al desempeño de cargos públicos. En ese sentido, no se desconoce el artículo 23 de la CADH, puesto que se trata del ejercicio de una potestad administrativa de responsabilidad que se adecúa a la interpretación evolutiva que de la mencionada normativa internacional ha decantado la Corte IDH.*

De esta manera, si en gracia de discusión se aceptara la interpretación literal, aislada y estática propuesta por el demandante, otras restricciones fijadas directamente por el Constituyente desconocerían la CADH, tal y como pasa a verse a continuación:

- Artículo 126:

> *"Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista,* ***no podrá ser reelegido para el mismo****. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus funciones:*
> *Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil." (Énfasis agregado)*

- Artículo 179:

> *"No podrán ser congresistas:*
> *(…)*
> *2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.*
> *3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.*
> *4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.*
> *5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.*

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha."

- Artículo 197:

"No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente."

- Artículo 232:

"Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:
(…)
4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, ***con buen crédito****, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer." (Énfasis agregado)*

- Artículo 233:

"Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho

*años, **no podrán ser reelegidos** y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso." (Énfasis agregado)*

Los anteriores ejemplos establecen situaciones de inelegibilidad, inhabilidades y condiciones para el acceso al cargo, particularmente: i) la prohibición de reelección; ii) los vínculos de consanguinidad o de matrimonio; iii) la pérdida de investidura; y iv) el ejercicio de la profesión con buen crédito, las cuales fueron establecidas directamente por el Constituyente y, bajo el entendimiento del demandante, serían contrarias al artículo 23 de la CADH, pues no se refieren a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal, que considera como las únicas circunstancias legítimas para restringir el derecho de ingreso a la función pública.

Esta interpretación vaciaría por completo las competencias de los Estados para establecer sus sistemas políticos y la función pública, principalmente, reduciría el margen de apreciación de las especiales circunstancias jurídicas, sociales y culturales, así como las necesidades de fortalecimiento de sus instituciones democráticas.

113.7. Por otra parte, el trámite que se surte ante la Contraloría General de la República está revestido por las garantías del debido proceso administrativo, además, cuenta con la revisión judicial de la actuación, bien mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o, de forma subsidiaria, a través de la solicitud de tutela, cuando el responsable considere que la sanción en concreto es desproporcionada y configura una restricción permanente a su derecho fundamental de acceso al ejercicio de cargos públicos.

113.8. Finalmente, la Corte considera que la medida acreditó su constitucionalidad a partir de su naturaleza temporal, bien sea por el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, por el pago del condenado o exclusión del boletín por parte de la autoridad competente.

En conclusión, el numeral 4º y el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 no desconocen los artículos 1º, 2º, 40.7, 93 y 94 de la Constitución y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues como se acreditó previamente, la medida de inhabilitación para desempeñar cargos públicos por haber sido declarado fiscalmente responsable fue proferida con el amplio marco de competencia regulativa del Legislador, y adicionalmente, es razonable, en atención a que cumple con una finalidad legítima, no está prohibida y es constitucionalmente válida, adicionalmente, constituye un medio adecuado para su efectividad, pues su configuración responde a las necesidades de la comunidad, al contexto constitucional y al ejercicio del amplio margen de configuración nacional del Estado colombiano". .

Si nos detenemos en este pronunciamiento de la Corte Constitucional, de la C-101 del 2018, no se podría volver a activar nuevamente un debate constitucional sobre esta disposición normativa, sin embargo;

Con base en los pronunciamientos de la sentencia C-028 del 2006, en la sentencia C-500 del 2014, se estudió el fenómeno de la cosa juzgada, sobre la aplicación del Convención Americana de Derechos Humanos en el ámbito de las facultades de inhabilitación del Ministerio Público, señalando la Corte Constitucional;

"*2.5. Inexistencia de cosa juzgada constitucional.*

Respecto de los planteamientos formulados no existe cosa juzgada constitucional. En efecto, aunque en las sentencias C-948 de 2002, C-124 de 2003 y C-028 de 2006 se examinó la constitucionalidad del numeral del que hace parte la expresión demandada, la confrontación constitucional se hizo, respectivamente, (i) con los artículos 2, 29, 122 y 256.3 de la Constitución, (ii) con el artículo 29 de la Carta y (iii) con los artículos 13, 40 y 93 del texto constitucional así como el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Adicionalmente, considerado el pronunciamiento de la Corte Interamericana de derechos Humanos en el caso "López

Mendoza Vs. Venezuela", es posible adelantar un nuevo debate constitucional respecto de la posibilidad de decretar por vía administrativa la sanción de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas".

Y en su parte resolutiva, determinó;

***"Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO** en la sentencia C-028 de 2006 que declaró **EXEQUIBLE** el numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, en relación con el cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución.*

***Segundo.-** Declarar **EXEQUIBLE** la expresión "Destitución e inhabilidad general" del numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, por los cargos examinados en esta sentencia".*

3.1.3. .Lo anterior nos plantearía que, en esta ocasión, no se podría reabrir el debate constitucional, sobre segmentos normativos que ya no solo están estipulados en la Ley 734 del 2002, sino que también hacen parte integral de la Ley 1952 del 2019, normas en las cuales se desarrolla la facultad de inhabilitación en un proceso administrativo, que es competencia de los órganos que componen el Ministerio Público y cuya cabeza principal es la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, atendiendo la misma prescripción que hiciera la Corte constitucional, en la Sentencia C-500 del 2014, donde señaló;

"8.3. Variación del significado de normas integradas al bloque de constitucionalidad en sentido estricto y la cosa juzgada.

8.3.1. La Corte destaca, como premisa central, que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo obligan al Estado colombiano cuando éste ha sido parte en el respectivo proceso. Esta conclusión, que reconoce el carácter

definitivo e inapelable asignado por el artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos a los fallos de la Corte Interamericana, encuentra apoyo normativo directo en lo prescrito en el artículo 68.1 de la referida convención conforme al cual los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

Nos encontramos que, al ser la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego vs. Colombia, en sentencia del 8 de julio del 2020, un precedente donde el estado colombiano ha sido parte y tanto el razonamiento y la parte decisoria de la sentencia, se constituyen en ese pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige como condición jurídica vinculante, la Corte Constitucional, como el fundamento que permitiría reabrir el debate constitucional, que estamos proponiendo, más cuando dicho pronunciamiento de la CIDH, en varia de las de las razones de ser de la sentencia, señala;

"90. La Corte ha señalado, en relación con la protección a los derechos políticos, que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención forma parte, y constituye un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante "Carta de la OEA") 13. En este sentido, la Carta de la OEA, tratado constitutivo de la organización de la cual Colombia es Parte desde el 12 de julio de 1951, establece como uno de sus propósitos esenciales "la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención"114".

"91. En el Sistema Interamericano la relación entre derechos humanos, democracia representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA 115 . Dicho instrumento señala en sus artículos 1, 2 y 3 que:

Artículo 1

Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

92. La Carta Democrática Interamericana hace entonces referencia al derecho de los pueblos a la democracia, al igual que destaca la importancia en una democracia representativa de la participación permanente de la ciudadanía en el marco del orden legal y constitucional vigente, y señala como uno de los elementos constitutivos de la democracia representativa el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho 116. Por su parte, el artículo 23 de la Convención Americana reconoce derechos de los ciudadanos que tienen una dimensión individual y colectiva, pues protegen tanto aquellas personas que participen como candidatos como a sus electores. El párrafo primero de dicho artículo reconoce a todos los ciudadanos los derechos: a) de

participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a funciones públicas de su país 117".

*"117. Finalmente, en lo que respecta al alegato de los representantes sobre la inconvencionalidad de las interpretaciones de las facultades disciplinarias por parte de la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal advierte que las mismas no constituyen un riesgo en sí mismo para el ejercicio de los derechos políticos del señor Petro y, por lo tanto, no constituyen una violación al artículo 23 de la Convención en relación con el artículo 2 del mismo instrumento. Sin perjuicio de ello, el Tribunal recuerda que del artículo 2 de la Convención se desprende la obligación estatal de desarrollar prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en dicho tratado. En consecuencia, es necesario que la interpretación y aplicación de las facultades disciplinarias se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la Corte recuerda que la interpretación de las normas que disponen las facultades de la Procuraduría o la Contraloría por parte de la Corte Constitucional, y de las demás autoridades del Estado colombiano, deben ser coherentes con los principios convencionales en materia de derechos políticos previstos en el artículo 23 de la Convención y que han sido reiterados en el presente caso"***.***

118. No obstante lo señalado anteriormente, en relación con la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de funcionarios públicos democráticamente electos, mediante las sanciones de inhabilitación y destitución, esta Corte considera oportuno entrar al análisis de las garantías aplicadas en el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro. Este Tribunal ha señalado que el artículo 8.1 de la Convención reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus

derechos; todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) 152 . De acuerdo con las disposiciones del artículo 8 de la Convención, para que en un proceso existanverdaderas garantías judiciales es preciso que se observen todos los requisitos que "sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho" 153 , es decir, las "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial" 154".

.

119. En relación con lo anterior, si bien el artículo 8 de la Convención se titula "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, "sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" 155 a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos 156 . De este modo, cuando la Convención alude al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", está refiriéndose a cualquier autoridad pública, ya sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas 157 . De esta forma, se desprende que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8.1 de la Convención Americana 158 . Por esta razón, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de cualquier carácter, se debe observar "las debidas garantías" que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso 159 . Esto significa que el incumplimiento de una de esas garantías conlleva necesariamente una violación de dicha disposición 160".

120. Por su parte, el artículo 8.2 de la Convención establece adicionalmente las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso legal 161. La Corte ha indicado que estas garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión

pueda afectar los derechos de las personas 162 . En otras palabras, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal 163. Particularmente, en el caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala, la Corte destacó que "el derecho disciplinario forma parte del derecho sancionador [...] en la medida en que está compuesto por un conjunto de normas que permiten imponer sanciones a los destinatarios que realicen una conducta definida como falta disciplinaria", por lo que "se acerca a las previsiones del derecho penal" y, en razón de su "naturaleza sancionatoria", las garantías procesales de este "son aplicables mutatis mutandis al derecho disciplinario"164".

121. Tomando en cuenta lo anterior, respecto de la destitución por vía administrativa de funcionarios públicos, la Corte ha señalado que, por su naturaleza sancionatoria y debido a que implica una determinación de derechos, las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana hacen parte del elenco de garantías mínimas que deben ser respetadas para adoptar una decisión no arbitraria y ajustada al debido proceso 165. En atención a ello, el Tribunal analizará si el proceso administrativo seguido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General contra el señor Petro cumplió con las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención.

3.1.4. La anterior ratio decidendi de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nos plantea de forma ineludible, la viabilidad jurídica de reabrir el debate, al ser evidente que se cumplen a cabalidad los parámetros que la Corte Constitucional, estipuló en la sentencia C-500 del 2014, para poder reabrir el debate, así;

(i) el parámetro de control del asunto previamente examinado haya sido una norma integrada al bloque de constitucionalidad en sentido estricto;

El parámetro jurídico convencional, entre otros analizado por la Corte Interamericana, fue el artículo 2, 8 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en razón del artículo 27 de la misma Convención, que señala;

"*Artículo 27. Suspensión de Garantías*

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión".

Son derechos que ni siquiera en estados de excepción, pueden ser suspendidos.

(ii) los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hayan variado radicalmente y de forma clara el sentido de tal norma;

En el análisis traído a colación, como parámetro jurisprudencial, para el análisis, tenido en cuenta en la Sentencia C-500 del 2014, fue el caso convencional LEOPOLDO LOPEZ vs VENEZUELA, frente al cual la Corte Constitucional, señaló;

"8.3.2.1. En el pronunciamiento de fecha 1º de septiembre de 2011 en el caso López Mendoza Vs. Venezuela, la Corte Interamericana estudió si el Estado había vulnerado el derecho a ser elegido, a las garantías judiciales y la igualdad ante la ley, con la decisión de la Contraloría General de la República de inhabilitar al señor Leopoldo López Medina, con seis años para el ejercicio de funciones públicas. Los hechos que fundamentaron la demanda tuvieron origen en la expedición en el 2001, de una Ley Orgánica de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que en el artículo 105 establece que cuando se declare administrativamente responsable a un funcionario público, el Contralor está facultado para imponer sanciones de suspensión, destitución o inhabilitación.

Al explicar el alcance del artículo 23 de la Convención y, en particular, las reglas aplicables cuando los Estados establecen la inhabilitación en ejercicio de la potestad sancionatoria indicó:

> *"(…) El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores, y iii) a acceder a las funciones públicas de su país (…).*
>
> *(…) El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de*

sanción, debería tratarse de una "condena, por juez competente, en proceso penal". Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un "juez competente", no hubo "condena" y las sanciones no se aplicaron como resultado de un "proceso penal", en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el Artículo 8 de la Convención Americana."

Y luego, al ocuparse de la similitud existente entre las medidas penales y las medidas disciplinarias, este Tribunal sostuvo:

"(…) Sin perjuicio de lo anteriormente señalado respecto al derecho a ser elegido, el Tribunal procede a analizar la controversia entre las partes respecto a la alegada violación de diversas garantías en los procesos administrativos que se llevaron a cabo tanto para la imposición de la multa como para la inhabilitación para ser candidato.

(…) Al respecto, la Corte ha indicado que todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana (…). Asimismo, la Corte recuerda lo expuesto en su jurisprudencia previa en el sentido que las sanciones administrativas y disciplinarias son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas (…)."(Subrayas no hacen parte del texto original)

8.3.2.2. Previamente a esa decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se había ocupado de precisar el alcance del artículo 23 de la Convención. En el caso Yatama Vs. Nicaragua, la Corte evaluó, en su pronunciamiento de fecha 23 de junio de 2005, si el Estado había desconocido la convención al negar la posibilidad de participar en las elecciones, por no inscribirse con un partido político, a los integrantes de la comunidad indígena Yatama. Al precisar el alcance del artículo 23 sostuvo:

"(…) La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones (…). Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue (…).

(…) Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Dichos estándares, deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje la soberanía del pueblo, tomando en que cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, "[p]romover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia", para lo cual se pueden diseñar normas orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad, tales como los miembros de las comunidades indígenas y étnicas." (Subrayas no hacen parte del texto original)

Y más adelante, explicando la infracción de las normas de la Convención por parte del Estado, concluyó:

> *"Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó los artículos 23 y 24 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de los candidatos propuestos por YATAMA para participar en las elecciones municipales de noviembre de 2000, ya que dispuso y aplicó disposiciones de la Ley Electoral de 2000 No. 331 que establecen una restricción indebida al ejercicio del derecho a ser elegido y lo reglamentan de forma discriminatoria. Asimismo, el Tribunal estima que el Estado violó el artículo 23.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de dichos candidatos, como consecuencia de que las decisiones que los excluyeron de ejercer dicho derecho fueron adoptadas en contravención de las garantías previstas en el artículo 8 de la Convención y no pudieron ser controladas a través de un recurso judicial (supra párrs. 164, 173 y 176)."*

8.3.2.3. En el caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos se examinaba si desconocía o no la Convención, la decisión de las autoridades de México de negar la inscripción como candidato independiente a la Presidencia de la Republica de Jorge Castañeda aduciendo que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales preveía que sólo los partidos políticos tienen la facultad de solicitar el registro de candidatos para cargos de elección popular. Al preguntarse si además de las establecidas en el artículo 23.2 de la Convención, los Estados podrían acudir a otros criterios para restringir los derechos políticos, la Corte Interamericana -en sentencia de fecha 6 de agosto de 2008- indicó lo siguiente:

> *"El artículo 23 de la Convención Americana debe ser interpretado en su conjunto y de manera armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 1 de dicho artículo e interpretar el párrafo 2 de manera aislada, ni*

tampoco es posible ignorar el resto de los preceptos de la Convención o los principios básicos que la inspiran para interpretar dicha norma.

(…) Como ya se ha señalado, el artículo 23 de la Convención Americana se refiere a los derechos de los ciudadanos y reconoce derechos que se ejercen por cada individuo en particular. El párrafo 1 de dicho artículo reconoce a todos los ciudadanos los derechos: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país (supra párrs. 144 a 150).

(…) Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales derechos, exclusivamente en razón de la "edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal". La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único – a la luz de la Convención en su conjunto y de sus principios esenciales – evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en las legislaciones electorales nacionales, que prevén el establecimiento de edades mínimas para votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre otras regulaciones. Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se trata de límites que legítimamente los Estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos

políticos deben cumplir para poder ejercerlos."(Subrayas no hacen parte del texto original)

Y un poco más adelante advirtió:

"Son éstas las bases que la Corte estima deben guiar la resolución de esta causa, que se refiere a la manera cómo México diseñó este sistema. Los representantes alegan que "el marco jurídico mexicano, al exigir como requisito indispensable para que una persona pueda participar en una contienda electoral el que la postulación sea presentada exclusivamente por un partido político, es violatoria del segundo párrafo del artículo 23 de la Convención".

(…) Como se desprende de lo anterior, la Corte estima que no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana. Sin embargo, las medidas que los Estados adoptan con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos convencionales no están excluidas de la competencia de la Corte Interamericana cuando se alega una violación de los derechos humanos previstos en la Convención. Consecuentemente, la Corte debe examinar si uno de esos aspectos vinculados a la organización y reglamentación del proceso electoral y de los derechos políticos, la exclusividad de nominación de candidatos a cargos federales por parte de los partidos políticos, implica una restricción indebida a los derechos humanos consagrados en la Convención." (Subrayas no hacen parte del texto original)

8.3.3. Un examen de este grupo de decisiones permite concluir que el artículo 23 de la Convención y, en particular, su numeral 2º ha sido objeto de varias y diferentes aproximaciones interpretativas. En efecto, aunque el demandante hace énfasis en la consideración vertida en la sentencia que resolvió el caso López Mendoza Vs. Venezuela de acuerdo con la cual la decisión de la contraloría del Estado desconocía los

derechos políticos de una persona al imponerle como sanción la inhabilitación para acceder a cargos públicos debido a que ello no ocurrió en un proceso penal y con la intervención de una autoridad judicial, en otras providencias el enfoque respecto de los límites que pueden imponerse a los derechos a ser elegido y a ejercer funciones públicas ha sido diverso. Así por ejemplo, en algunos casos se ha señalado que la norma del artículo 23.2 tiene como único propósito evitar la adopción de medidas discriminatorias de manera tal que, bajo la condición de encontrarse justificadas, podrían ser establecidas otras restricciones.

También ha señalado, en consonancia con ello, que las razones para restringir los derechos políticos que se enuncian en el artículo 23 de la Convención, no se agotan en las establecidas en su numeral 2º de manera tal que podrían ser establecidas otras como, por ejemplo, las relativas a la pertenencia a un partido político. Incluso, tal y como lo sostuvo ese Tribunal en la misma decisión López Mendoza Vs. Venezuela, pueden ser asimilables las sanciones penales y las disciplinarias, en tanto expresión del poder punitivo del Estado, siendo ellas aceptables como instrumento de limitación de derechos bajo la condición de respetar las reglas propias del debido proceso[1]".

Concluyendo la Corte Constitucional, en esta sentencia C-500 del 2014:

"De acuerdo con lo expuesto no es posible derivar ni del texto de la Convención Americana ni de la jurisprudencia de la Corte Interamericana una regla clara, uniforme y reiterada que tenga la aptitud para confrontar la disposición acusada

[1] Para sostenerlo, la Corte se apoya en la sentencia de fecha 2 de febrero de 2001 correspondiente al caso Baena Ricardo Vs. Panamá en la que ese Tribunal explicó: "En relación con lo anterior, conviene analizar si el artículo 9 de la Convención es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de serlo, evidentemente, a la penal. Los términos utilizados en dicho precepto parecen referirse exclusivamente a esta última. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. Asimismo, en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. (…) Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva."

una vez más y a pesar de la sentencia C-028 de 2006, con el artículo 23 de dicha Convención y, por esa vía con el artículo 93 de la Carta".

Empero, con la sentencia del 8 de julio del 2020, proferida por la Corte Interamericana, en el caso PERTO URREGO vs COLOMBIA, se cumple la condición de que se presenta una variación radical en cuanto a la aplicación convencional del artículo 23, en sentido concreto en la violación que de este artículo convencional, hace el estado colombiano con la confección normativa, que no se ajusta al derecho convencional.

Y el alcance que le otorga la Corte Interamericana al artículo 23 Convencional, es un sentido claro al identificar no solo las normas del código disciplinario, sino también al de los procesos fiscales en cabeza de la Contraloría, que conlleva a la vulneración de la convención.

(iii) la nueva interpretación resulte compatible con la Constitución Política;

Se cumple con este requisito, al ser compatible con nuestro orden jurídico constitucional, el análisis que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las competencia de la Procuraduría General de la Nación, desde el texto constitucional, que no riñe con la Convención, puesto que la inconvencionalidad radica es por no adelantarse el juicio de responsabilidad, que limite los derechos políticos de los funcionarios públicos de elección popular, por la vía penal y por no separarse el órgano o la instancia que investiga de la que sanciona o condena, tal y como lo señala la CIDH;

"112. En el presente caso, el Tribunal constata que el artículo 277.6 de la Constitución Política de Colombia faculta al Procurador para "ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley". Por su parte, el artículo 278 del texto constitucional establece que el Procurador ejercerá directamente la función de "1. Desvincular del cargo, previa audiencia y

mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas [...]". La Corte observa que el primer período del inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero del artículo 278 de la Constitución de Colombia admiten la posibilidad de ser interpretados de modo compatible con la Convención Americana y con el modelo de Estado de derecho establecido por el artículo 1º de la propia Constitución 151, a condición de entender que la referencia a los funcionarios de elección popular está limitada únicamente a la potestad de vigilancia del Procurador. Conforme a la regla de que no debe declararse una norma violatoria de la Convención en tanto admita una interpretación compatible con ésta, la Corte encuentra que el inciso 6º del artículo 277, y el numeral primero del artículo 278 de la Constitución Política de Colombia, no son incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana".

"125. Asimismo, la Corte ha indicado que, como fundamento de las garantías judiciales 172, el principio de presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad 173 y que no recae en él demostrar que no ha cometido la falta que se le atribuye pues el onus probandi corresponde a quien acusa 174 . La presunción de inocencia guarda un vínculo estrecho con la imparcialidad en la medida en que implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa 175 . De tal suerte, esta garantía se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial a él concerniente refleja que lo es 176 . Además, el Tribunal ha señalado que la institución de la recusación tiene como finalidad actuar como garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la jurisdicción 177".

(iv)ofrezca un mayor grado de protección a los derechos, que el otorgado por la Constitución;

Al tener competencia la Corte Interamericana, para fallar el caso sometido a estudio, como lo fue el caso PETRO URREGO vs COLOMBIA, por la pertenencia de

Colombia, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la sentencia proferida el 8 de julio del 2020, representa un mayor grado de protección, al referirse que la limitación de los derechos políticos de los ciudadanos colombianos, entratándose de servidores públicos de elección popular, donde se desarrolla uno de los aspectos de nuestra democracia representativa, no se les puede limitar sus derechos políticos a través de un proceso distinto al proceso penal, por ser una disposición literal y taxativa establecida convencionalmente, además de prevenir la vulneración, en los procesos disciplinarios, de que se prejuzgue, al ser el investigador, la misma instancia de quien finalmente termina juzgado, lo que implica que se debe separar procesalmente la función de investigación de la instancia u órgano que profiere decisión de juzgamiento. Aspectos importantes que conmina la sentencia de la Corte Interamericana y que se traduce en un nivel de protección mayor al contemplado en nuestro orden jurídico constitucional.

(v) se integre a la ratio decidendi de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

La sentencia proferida el 8 de julio del 2020, por la Corte Interamericana, está integrada a la ratio decidendi sobre la aplicación por parte de los Estados pertenecientes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de los artículos 2, 8, 23, 27, 29, 32 de la Convención Americana. Cumpliéndose el requisito constitucional de que la ratio decidendi de la sentencia del 8 de julio del 2020, está integrada a la interpretación normativa interamericana, sobre la limitación de los derechos políticos, por proceso penal y de las garantías jurídicas que se deben brindar en cualquier proceso que se adelante, como parte de la filosófica de protección de los derechos humanos en el continente.

(vi)sea uniforme y reiterada

Como podemos observar, este requisito se cumple a cabalidad, en el entendido que la misma precisión que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la en Sentencia proferida el 1 de septiembre del 2011, en el caso LOPEZ MENDOZA vs

VENEZUELA, donde entre otras consideraciones, la Corte Interamericana, señaló;

"200. Al respecto, la Corte observa que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela ha analizado el cumplimiento del principio de legalidad en relación con las sanciones establecidas en el artículo 105 de la LOCGRSNCF. Dicho Tribunal ha precisado que:

> *El principio de tipicidad exige una lex certa que ofrezca seguridad jurídica a los ciudadanos acerca de las consecuencias gravosas de la infracción administrativa. No obstante, con ocasión de la vigencia matizada del ius puniendi del Estado en el derecho administrativo sancionador, se ha aceptado estándares deontológicos de conducta que canalizan la verificación de la infracción administrativa a través de la descripción normativa de actos, hechos u omisiones generado[res] de responsabilidad administrativa; de ninguna manera podrían asimilarse a lo que en el derecho penal se denominan "leyes penales en blanco". […] El hecho es que, en el ámbito administrativo la implementación de lo que la doctrina llama "conceptos jurídicos indeterminados" no está proscrita; antes más, son empleados para la verificación de la gradación de la sanción, pero no de la infracción en sí misma. Se trata entonces de un criterio que ofrece al órgano sancionador un margen de apreciación que no riñe con el principio de tipicidad, pues en él debe llenarse, a través de un examen pormenorizado y concreto de los hechos y de una calificación desde los valores comprometidos en el concepto, las*

---

269 *"The law should be both adequately accessible and foreseeable, that is, formulated with sufficient precision to enable the individual – if need be with appropriate advice – to regulate his conduct. ECHR, Case Hasan and Chaush v. Bulgaria, Judgment of 26 October 2000, para. 84. Asimismo, en el caso Malone v. The United Kingdom, el Tribunal estableció que "[t]he law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an indication that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given case". ECHR, Case Malone v. The United Kingdom, Judgment of 2 August 1984, Serie A no. 82, para. 66.*

"

270 "The law should be accessible to the persons concerned and formulated with sufficient precision to enable them – if need be, with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail". ECHR, Case Maestri v. Italy, Judgment of17 February 2004, para. 30. Asimismo, en el caso Malone v. The United Kingdom, el Tribunal señaló que "a norm cannot be regarded as 'law' unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen toregulate his conduct: he must be able - if need be with appropriate advice - to foresee, to a degree that isreasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail". ECHR, Case Malone,supra nota 269, para. 66. Ver también, ECHR, Case Silver and others v. The United Kingdom, Judgment of 25March 1983, Serie A no. 61, para 88.

"271 "[T]he Court reiterates that a rule is 'foreseeable' if it is formulated with sufficient precision to enable any individual – if need be with appropriate advice – to regulate his conduct". ECHR, Case of Landvreugd v. The Netherlands, Judgment of 4 June 2002, para. 59".

272 "The level of precision required of domestic legislation – which cannot in any case provide for every eventuality – depends to a considerable degree on the content of the instrument in question, the field it is designed to cover and the number and status of those to whom it is addressed". ECHR, Case Hasan and Chaush v. Bulgaria, Judgment of 26 October 2000, para. 84 y Case Maestri, supra nota 270, para. 30.

> *máximas exigidas para justificar el por qué de la sanción impuesta. Lo importante para que no se incurra en el quebrantamiento del principio de tipicidad es que el ilícito o la infracción se encuentren perfectamente definidos, así como también la sanción. […] En el caso del artículo 105 de la [LOCGRSNCF] se estipula que la declaratoria de responsabilidad administrativa será sancionada con la multa prevista en el artículo 94 de la*

Ley, de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios causados siguiendo lo dispuesto en el artículo 66 y siguientes del Reglamento de la Ley […]; y que el Contralor impondrá la sanción de suspensión sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable en atención a la entidad del ilícito cometido; y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años atendiendo a la gravedad de la irregularidad. Los conceptos jurídicos indeterminados allí expresados ofrecen un margen de apreciación discrecional al órgano de control fiscal para la gradación de la sanción atendiendo a la entidad de la infracción y de sus efectos[273]".

"206. En consecuencia, al no cumplir con el requisito de previsibilidad y, además, teniendo en cuenta lo señalado en el sentido que el artículo 105 de la LOCGRSNCF permite la restricción del derecho a ser elegido por una autoridad que no es juez penal (supra párrs. 107 y 108), la Corte concluye en el presente caso se vulneraron los artículos 8.1, 23.1.b y 23.2, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana".

En el caso PETRO URREGO vs COLOMBIA, se reitera la misma posición jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar;

118. No obstante lo señalado anteriormente, en relación con la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de funcionarios públicos democráticamente electos, mediante las sanciones de inhabilitación y destitución, esta Corte considera oportuno entrar al análisis de las garantías aplicadas en el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro. Este Tribunal ha señalado que el artículo 8.1 de la Convención reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos; todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) 152 . De acuerdo con las disposiciones del artículo 8 de la Convención, para que en un proceso existanverdaderas garantías judiciales es preciso que se observen todos los requisitos que "sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho" 153 , es decir, las "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial" 154".

Con base en lo anterior, se cumple con los requisitos establecidos en la Sentencia C-500 del 2014, para reabrir el debate Constitucional.

3.1.5. Por tal razón, los siguientes segmentos demandados, de la ley 734 del 2002 y de la Ley 1952 del 2002, son inconstitucionales;

3.1.5.1. El Numeral 4 y apartes del parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 del 2002 y el Numeral 4 y apartes del parágrafo 1 del artículo 42 de la Ley 1952 del 2019,

Ley 734 del 2002	Ley 1952 del 2019
ARTÍCULO 38. OTRAS INHABILIDADES. ***<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>*** *También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:* *1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez*	*"ARTÍCULO 42. OTRAS INHABILIDADES. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:* *1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.*

años anteriores, salvo que se trate de delito político.	*Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de la pena privativa de la libertad.*
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.	*2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.*
3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.	*3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.*
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.	***4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.***
PARÁGRAFO 1o. ***Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos*** *y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del*	*PARÁGRAFO 1o.* ***Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos*** *y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente,*

boletín de responsables fiscales. *Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.* *PARÁGRAFO 2o. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los*	*cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.* *Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.* *PARÁGRAFO 2o. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,*

bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público. *Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado".*	*disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.* *Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado".*

.

Son inconstitucionales por vulnerar la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace parte de la Constitución Política de Colombia, por su pertenencia al Bloque de Constitucionalidad, al inaplicar la protección convencional, que solo a través de un proceso penal, es que se puede limitar el derecho político a acceder a las funciones públicas, principalmente a las funciones que se desprenden de cargos de elección popular, tal y como lo señaló la Corte Interamericana, en la sentencia de PETRO URREGO vs COLOMBIA, el 8 de julio del 2020, donde se señaló;

"114. Por otro lado, el Tribunal constata que el artículo 60 de la Ley 610 de 18 de agosto de 2000 señala que "la Contraloría General de la República publicará con periodicidad trimestral un boletín que contendrá los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él". Asimismo, dicho artículo señala que no se podrán posesionar en cargos públicos "quienes aparezcan en el boletín de responsables" hasta que se cancele la sanción. Para efectos del presente análisis, esta norma debe ser entendida en su relación con el artículo 38 del Código Disciplinario Único, el cual prevé que "[t]ambién constituyeninhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: [...] 4. Haber sido declarado responsable fiscalmente". De lo anterior se concluye que, aun cuando las facultades de la Contraloría no contemplan

la atribución directa para destituir o inhabilitar funcionarios públicos de elección popular, las sanciones pecuniarias que pueden imponer, cuando estas resultan en la obligación de realizar el pago de una deuda fiscal de alta cuantía, como sucedió en el caso del señor Petro, pueden tener el efecto práctico de inhabilitarlo en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Disciplinario Único y de la prohibición a los funcionarios competentes de dar posesión a quienes aparezcan en el boletín de responsables fiscales".

"115. En relación con lo anterior, la Corte concluye que las sanciones impuestas por la Contraloría pueden tener el efecto práctico de restringir derechos políticos, incumpliendo así las condiciones previstas en el artículo 23.2 de la Convención y que han sido reiteradas en la presente sentencia. En esa medida, el Tribunal considera que el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el artículo 38 fracción 4 del Código Disciplinario Único son contrarios al artículo 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 2 del mismo instrumento".

Estableciendo la ratio decidendi de esta sentencia, que el restringir el acceso a funciones públicas, mediante un proceso distinto al penal, se constituye, como los segmentos demandados en una clara violación a las prescripciones convencionales, que solo es a través de un proceso penal, más no fiscal, el que puede tener la vocación de inhabilitar el ejercicio de derechos políticos a acceder a cargos públicos.

3.1.5.2. El segmento normativo ***Destitución e inhabilidad general,*** contenido en el numeral 1 del artículo 44 y el segmento normativo ***La inhabilidad general…,*** contenido en el inciso primero del artículo 46 de la ley 734 del 2002 y el segmento normativo ***Destitución e inhabilidad general…,*** contenido en el numeral 1 y 2 del artículo 48 de la Ley 1952 del 2019;

Ley 734 del 2002	**Ley 1952 del 2019**
ARTÍCULO 44. CLASES DE SANCIONES. ***<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>*** *El*	*"ARTÍCULO 48. CLASES Y LÍMITES DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:*

servidor público está sometido a las siguientes sanciones: *1. **Destitución e inhabilidad general,** para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.* *2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.* *4. Multa, para las faltas leves dolosas.* *5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.* *PARÁGRAFO. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones"* *ARTÍCULO 46. LÍMITE DE LAS SANCIONES. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> **La**	*1. **Destitución e inhabilidad general** de diez (10) a veinte (20) años para las faltas gravísimas dolosas.* *2. **Destitución e inhabilidad general** de cinco (5) a diez (10) años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima.* *3. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a cuarenta y ocho (48) meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave.* *4. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a veinticuatro (24) meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas graves dolosas.* *5. Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a dieciocho (18) meses para las faltas graves culposas.* *6. Multa de veinte (20) a noventa (90) días de salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves dolosas.* *7. Multa de cinco (5) a veinte (20) días de salario básico devengado para la época*

***inhabilidad general será de diez a veinte años**; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.* *La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.* *La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.* *La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida"*	*de los hechos para las faltas leves culposas.* *PARÁGRAFO. CONVERSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. En el evento en que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial".*

Son segmentos inconstitucionales, al consagrarse en los apartes demandados, las clases de sanciones y sus limites o duración en el tiempo, que conlleva a que una persona, como ciudadano colombiano, por un proceso disciplinario en sede administrativa, más no judicial, se le pueda imponer separación de las funciones que

desarrolla en un cargo público y por un tiempo que oscila entre los 5 a 20 años, dependiendo de la graduación de la falta, tiempo en el cual además, no podrá ejercer cargo público alguno. Riñendo tales disposiciones, las de la Ley 734 del 2002, vigentes hasta el mes de julio del 2021 y las de la Ley 1952 del 2020, que entran en vigencia partir del 1 de julio del 2021, con la garantía convencional, que solo es a través de u proceso penal, que se puede limitar el acceso al ejercicio de funciones públicas, como un derecho político, tal y como quedó determinado en la ratio decidendi de la Sentencia PERO URREGO vs COLOMBIA, del 8 de julio del 2020, que en uno de sus razonamientos, señaló;

> *"154. Este Tribunal encontró que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia de diversos dispositivos del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, la Corte considera que, como garantía de no repetición, el Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en los párrafos 111 a 116 de la presente Sentencia"*.

Indica lo anterior, que mantener en el orden jurídico colombiano, las disposiciones normativas que contrarían la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que respecta a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de nuestro país, como un derecho político, que solo puede ser restringido por la ley a través de un proceso cuya naturaleza jurídica, es la pertenencia a la jurisdicción penal, establece una obligación que vincula en su cumplimiento a los estados que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre ellos a Colombia, en razón de esa obligación que debe ser observada conforme al artículo 26 de la Convención de Viena, que estipula; **26*. "Pacta sunt servanda".*** *Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe* y del artículo 27 de la misma convención, que señala; *"**El derecho interno y la observancia de los tratados.** Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46",* es decir que mantener la

inhabilidad y la destitución como facultades de órganos administrativos, que no son penales, para limitar o restringir el derecho político de acceso a funciones públicas, se torna inconstitucional.

3.1.5.3. Los literales a), b) c) d) del numeral 1 del artículo 45 de la Ley 734 del 2002 y los literales a), b) c) d) del numeral 1 del artículo 49 de la Ley 1952 del 2019;

Ley 734 del 2002	***Ley 1952 del 2019***
ARTÍCULO 45. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES. ***<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>*** ***1. La destitución e inhabilidad general implica:*** ***a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o*** ***b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o*** ***c) La terminación del contrato de trabajo, y*** ***d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función***	*"ARTÍCULO 49. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES.* ***1. La destitución e inhabilidad general implica:*** ***a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección; o*** ***b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la Constitución Política y la ley; o*** ***c) La terminación del contrato de trabajo; y*** ***d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera".***

pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. *2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.* *3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.* *4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida.* *Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva".*	*2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.* *3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.* *Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva".*

Son inconstitucionales, las definiciones del tipo de sanciones y las implicaciones jurídicas de afectación al ejercicio del derecho político de acceder a funciones públicas, como un derecho humano, contenidas en las normas disciplinarias, la 734

del 2002, que tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2021 y la 1952 del 2019, que entra en vigencia el 1 de julio del 2021, según el artículo 40 de la Ley 1955 del 2019, son disposiciones normativas que por significar el tipo de sanciones y los efectos de las mismas, que desprenden de la confección de procesos disciplinarios, distintos a un proceso penal, se constituye en una grave vulneración al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que, lo segmentos demandados de la norma positiva, desarrollan la restricciones al derecho político de acceso a las funciones públicas, desconociendo que convencionalmente no son admisibles dichas restricciones al derecho político como derecho humano, desde la óptica de un proceso distinto al un proceso penal, por ser la prescripción convencional de protección del derecho político, valga la redundancia como un derecho humano.

Por ello, el que se mantenga vigente en el orden jurídico, prescripciones internas que, existiendo la ratio decidendi de un proceso, que vincula directamente, el respeto por la s normas convencionales, como es el caso de PETRR5O UUREGO vs COLOMBIA, es una clara manifestación inconvencional, que debe ser retirada del orden jurídico, para adecuar el sistema normativo sancionatorio a partir del derecho punitivo del estado, conforme a las estipulaciones convencionales del 23 – 2.

Por las anteriores razones, consideramos vulnerada la convención Americana de derechos humanos, por parte de los segmentos demandados de la Ley 734 del 2002 y de la Ley 1952 del 2019.

4. PRETENSIONES EN ESTA ACCIÓN PÚBLICA

4.1. Que se declaren inexequibles

4.1.1. .De la Ley 734 del 2002;

4.1.1.1. Numeral 4 y apartes del parágrafo primero del artículo 38.

4.1.1.2. El segmento normativo ***Destitución e inhabilidad general,*** contenido en el numeral 1 del artículo 44.

4.1.1.3. Los literales a), b) c) d) del numeral 1 del artículo 45.

4.1.1.4. El segmento normativo ***La inhabilidad general…,*** contenido en el inciso primero del artículo 46.

4.1.2. De la Ley 1952 del 2019;

4.1.2.1. Numeral 4 y apartes del parágrafo 1 del artículo 42.

4.1.2.2. El segmento normativo ***Destitución e inhabilidad general…,*** contenido en el numeral 1 del artículo 48.

4.1.2.3. El Segmento normativo ***Destitución e inhabilidad general…,*** contenido en el numeral 2 del artículo 48.

4.1.2.4. Los literales a), b) c) d) del numeral 1 del artículo 49.

5. ANEXOS

5.1. Téngase como tal:

5.1.1. Ley 734 del 2002.

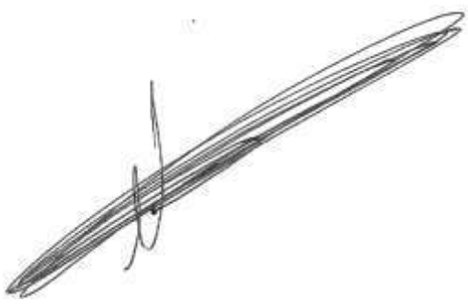
5.1.2. Ley 1952 del 2019.

5.1.3. PDF del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio del 2020, en el caso PETRO URREGO vs COLOMBIA.

6. NOTIFICACIONES

6.1. Las recibimos en el correo electrónico: nixontorrescarcamo@gmail.com

Atentamente;



NIXON TORRES CARCAMO

C.C. No 72.193.712



DIANA FERNANDA TRUJILLO CHAVEZ

C.C. No 1.128.407.964



MARCO JAIRO ACEVEDO TAPIA

C.C. No 1.128.060.20.



STEWING ARTEAGA PADILLA
C.C. 1129487418



MARCO ANTONIO BOSSIO VASQUEZ

C.C. No 1.143.351.438.



MAXIMO NORIEGA RODRIGUEZ

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO PETRO URREGO VS. COLOMBIA

SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 2020

(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso *Petro Urrego Vs. Colombia*,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal" o "este Tribunal"), integrada por los siguientes Jueces[*]:

Elizabeth Odio Benito, Presidenta;
Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;
Eduardo Vio Grossi, Juez;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez;
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez, y
Ricardo Pérez Manrique, Juez,

presentes además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Romina I. Sijniensky, Secretaria Adjunta,

de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención") y con los artículos 31, 32, 62, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:

[*] El Juez Humberto Antonio Sierra Porto, de nacionalidad colombiana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.

TABLA DE CONTENIDOS

I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 3
II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 4
III COMPETENCIA 5
IV EXCEPCIONES PRELIMINARES 5
A. Excepción por falta de agotamiento de los recursos internos 6
A.1. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes 6
A.2. Consideraciones de la Corte 7
B. Excepción por falta de competencia para realizar un control de convencionalidad en abstracto; por falta de fundamento de los alegatos concernientes al derecho a la integridad personal; y por la exposición de hechos que no caracterizan una violación a la Convención Americana 10
B.1. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes 10
B.2. Consideraciones de la Corte 11
V PRUEBA 12
A. Admisibilidad de la prueba documental 12
B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial 13
VI HECHOS 13
A. Antecedentes 13
A.1. La presunta víctima 13
A.2. La crisis de recolección de basura en la ciudad de Bogotá a finales del año 2012 14
B. Proceso disciplinario ante la Procuraduría General por la modificación del esquema de prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá 17
B.1. Procedimiento 17
B.2. Sanción disciplinaria 18
B.3. Recursos de recusación y reposición 19
B.4. Acciones de tutela, sustitución del señor Petro como Alcalde de Bogotá y adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión 19
B.5. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 22
C. Proceso disciplinario ante la Procuraduría General por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial 23
D. Multa de la Superintendencia de Industria y Comercio 24
E. Proceso ante la Contraloría por la modificación de las tarifas del servicio de transporte 26
F. Marco normativo aplicable 28
VII FONDO 29
VII-1 DERECHOS POLÍTICOS Y DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y LA PROTECCIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y AL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 29
A. Alegatos de la Comisión y de las partes 29
B. Consideraciones de la Corte 32
B.1. Derechos políticos 32
B.1.1. Los alcances de los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención Americana 32
B.1.2. Análisis del caso concreto 36
B.1.2.1. La aplicación del principio de complementariedad 37
B.1.2.2 Las facultades la Procuraduría y la Contraloría, y otras disposiciones legales del ordenamiento jurídico colombiano 43
B.2. Derechos a las garantías judiciales y la protección judicial 46
C. Conclusión del capítulo 51
VII-2 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 52
A. Alegatos de la Comisión y de las partes *52*
B. Consideraciones de la Corte 53
VIII REPARACIONES 55
A. Parte Lesionada 55
B. Medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición 55
B.1. Medidas de satisfacción 55
B.2. Garantías de no repetición 56
C. Otras medidas solicitadas 57
D. Indemnizaciones compensatorias *58*
D.1. Daño material 58
D.2. Daño inmaterial 58
E. Costas y gastos 59
F. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 60
IX PUNTOS RESOLUTIVOS 61

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. *El caso sometido a la Corte.* – El 7 de agosto de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión")[1] sometió a la jurisdicción de la Corte el caso "Gustavo Petro Urrego" contra la República de Colombia (en adelante "el Estado" o "Colombia"). La controversia versa sobre las alegadas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación de Gustavo Francisco Petro Urrego (en adelante también "el señor Petro" o "la presunta víctima") como Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Capital. La Comisión consideró que el Estado violó los derechos políticos, así como la garantía de imparcialidad en relación con el principio de presunción de inocencia y el derecho a recurrir el fallo del señor Petro. Asimismo, determinó que se violó la garantía del plazo razonable y la protección judicial, así como el derecho a la igualdad ante la ley debido a que las acciones disciplinarias iniciadas en su contra tenían una motivación discriminatoria.

2. *Trámite ante la Comisión.* – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:

a) *Petición.* – El 28 de octubre de 2013, la Comisión recibió la petición inicial, presentada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA) (en adelante "los representantes").

b) *Informes de Admisibilidad y de Fondo.* – El 6 de diciembre de 2016 y el 25 de octubre de 2017, la Comisión aprobó, respectivamente, el Informe de Admisibilidad No. 60/16 (en adelante "Informe de Admisibilidad") y el Informe de Fondo No. 130/17 (en adelante "Informe de Fondo"). En el Informe de Fondo llegó a conclusiones[2] y formuló recomendaciones al Estado.

3. *Notificación al Estado.* – La Comisión notificó al Estado el Informe No. 130/17 mediante una comunicación de 7 de noviembre de 2017, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

4. *Informes sobre las recomendaciones de la Comisión.* – El 7 de febrero de 2018, la Comisión concedió al Estado una prórroga de tres meses y, el 7 de mayo de 2019, una segunda prórroga de tres meses. En total, Colombia contó con un plazo de 9 meses para cumplir con las recomendaciones del Informe de Fondo. El Estado aportó información sobre la restitución de los derechos políticos del señor Petro; sin embargo, "no informó concretamente sobre su voluntad y capacidad para cumplir con uno de los aspectos estructurales que identificó la Comisión en su informe y que tiene que ver con la adecuación interna constitucional y legal para eliminar la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en cabeza de la Procuraduría General de la Nación".

5. *Sometimiento a la Corte.* – El 7 de agosto de 2018, la Comisión sometió el caso a la Corte respecto a los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo.

---

[1] Designó como sus delegados al entonces Comisionado Francisco Eguiguren Praeli y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, y a Silvia Serrano Guzmán y Christian González Chacón como asesora y asesor legal.

[2] La Comisión concluyó que Colombia es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial establecidos en los artículos 8.1, 8.2, 8.2.h), 23.1, 23.2, y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 24, 1.1 y 2 del mismo instrumento.

6. *Solicitudes de la Comisión.* – Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó a este Tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones contenidas en su Informe de Fondo y se ordenara al Estado, como medidas de reparación, aquellas incluidas en dicho Informe. Este Tribunal nota que, entre la presentación de la petición inicial ante la Comisión y el sometimiento del caso ante la Corte, han transcurrido cuatro años y nueve meses.

II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

7. *Notificación a los representantes y al Estado.* – El sometimiento del caso fue notificado a los representantes de la presunta víctima y al Estado, por medio de comunicaciones de 4 de septiembre de 2018.

8. *Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.* – El 2 de noviembre de 2018, los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "escrito de solicitudes y argumentos"), conforme los artículos 25 y 40 del Reglamento. Coincidieron con los alegatos de la Comisión y, además, solicitaron que la Corte declare responsable al Estado por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio del señor Petro Urrego.

9. *Escrito de excepciones preliminares y contestación*. - El 4 de febrero de 2019, Colombia presentó su escrito de excepciones preliminares, contestación al sometimiento del caso y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante "escrito de contestación"), en los términos del artículo 41 del Reglamento del Tribunal[3]. El Estado interpuso cuatro excepciones preliminares, además negó las violaciones alegadas y la procedencia de las medidas de reparación solicitadas.

10. *Observaciones a las excepciones preliminares*. – El 4 y 6 de mayo de 2019, los representantes y la Comisión Interamericana presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares.

11. *Amici curiae*. – El Tribunal recibió cuatro escritos en calidad de *amicus curiae* presentados por: a) la Contraloría General de la República de Colombia[4]; b) el Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos (SELDH) de la Universidad de Antioquía[5]; c) la Procuraduría General de la Nación[6], y d) la Clínica de Interés Público de la Universidad Sergio Arboleda[7].

---

[3] El Estado designó como Agente para el presente caso al señor Camilo Alberto Gómez Alzate, Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

[4] El escrito firmado por Carlos Felipe Córdoba Larrarte versa sobre el sistema de control fiscal y la responsabilidad fiscal en Colombia.

[5] El escrito firmado por Ángela Patricia Benavides Cerón y Alejandro Gómez Restrepo versa sobre los alcances del derecho disciplinario en Colombia.

[6] El escrito firmado por Iván Darío Gómez Lee versa sobre el régimen sancionatorio disciplinario en Colombia.

[7] El escrito firmado por Camilo Guzmán Gómez versa sobre la corrupción en Colombia y el régimen jurídico aplicable a la Procuraduría General de la República.

12. *Audiencia Pública.* – El 12 de diciembre de 2019, el entonces Presidente de la Corte dictó una Resolución[8] en la que convocó a las partes y a la Comisión a una audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, y para escuchar los alegatos y observaciones finales orales de las partes y de la Comisión, respectivamente[9]. La audiencia pública fue celebrada el 6 de febrero de 2020, durante el 133º Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en su sede en San José, Costa Rica[10].

13. *Alegatos y observaciones finales escritos*. – El 9 de marzo de 2020 la Comisión presentó sus observaciones finales escritas y el Estado y los representantes remitieron sus respectivos alegatos finales escritos.

14. *Observaciones a los anexos a los alegatos finales*. – El 24 de marzo de 2020 los representantes presentaron sus observaciones a los anexos remitidos junto a los alegatos finales escritos del Estado. El 25 de marzo de 2020 la Comisión solicitó a la Corte valorar la admisibilidad de la prueba aportada por el Estado en sus alegatos finales escritos. El Estado no presentó observaciones respecto de los anexos a los alegatos finales escritos de los representantes.

15. *Deliberación del presente caso*. – La Corte deliberó la presente Sentencia, a través de una sesión virtual, durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2020[11].

III
COMPETENCIA

16. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, ya que Colombia es Estado Parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de este Tribunal el 21 de junio de 1985.

IV
EXCEPCIONES PRELIMINARES

17. El Estado presentó cuatro excepciones preliminares, las cuales serán analizadas en el siguiente orden: a) falta de agotamiento de los recursos internos; y b) falta de competencia para realizar un control de convencionalidad en abstracto sobre normas del ordenamiento jurídico colombiano; falta de fundamento de los alegatos respecto al artículo 5 de la

---

[8] *Cfr. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Convocatoria a audiencia*. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 12 de diciembre de 2019. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/petro_urrego_12_12_19.pdf

[9] *Cfr. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Convocatoria a audiencia*. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2020. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/petro_27_01_20.pdf

[10] A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta , Jorge H. Meza Flores y Christian González, Asesores; b) por los representantes de la presunta víctima: Rafael Barrios Mendivil, Carlos Rodríguez Mejía, María Paula Lemus Parra y María Alejandra Escobar Cortázar, abogados y abogadas, y c) por el Estado: Camilo Gómez Alzate, Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, María del Pilar Gutiérrez Perilla y Nicolás Eduardo Ramos Calderón, Asesora y Asesor de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.

[11] Debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia COVID-19, esta Sentencia fue deliberada y aprobada durante el 135 Período Ordinario de Sesiones, el cual se llevó a cabo utilizando medios tecnológicos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Corte. Ver comunicado de Prensa No. 39/2020, de 25 de mayo de 2020, disponible aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_39_2020.pdf

Convención Americana, y exposición de hechos que no caracterizan una violación a dicho instrumento.

A. Excepción por falta de agotamiento de los recursos internos

A.1. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes

18. El ***Estado*** alegó que el señor Petro solo agotó los recursos internos en uno[12] de los cinco[13] procesos administrativos de los que fue objeto. Respecto de los demás procesos, estaba pendiente ser interpuesto, o agotado, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (en adelante también "medio de control de nulidad"). El Estado afirmó que el medio de control de nulidad constituye un recurso adecuado y efectivo para proteger los derechos alegados como violados. En consecuencia, su falta de agotamiento tornó inadmisibles los alegatos de los representantes. Adicionalmente, el Estado sostuvo que el señor Petro también tuvo a su disposición la acción de tutela, a través de la cual se puede decretar la suspensión provisional de los actos administrativos cuando resulte necesario para prevenir un perjuicio irremediable o cuando las acciones disponibles ante la jurisdicción contencioso administrativa no constituyan un recurso idóneo para obtener un amparo integral de tales derechos. Finalmente, afirmó que la presunta víctima tiene a su disposición el recurso de revocatoria directa, el cual puede ser interpuesto ante autoridades administrativas. El Estado alegó que cada uno de estos recursos constituye un recurso adecuado y efectivo que no fue agotado en el caso, sin que se configure ninguna de las excepciones previstas en el artículo 46.2 de la Convención.

19. La ***Comisión*** alegó que el argumento del Estado en relación con la acción de tutela y la solicitud de revocatoria directa es genérico y no fue presentado en la etapa de admisibilidad, por lo que resulta extemporáneo. De manera subsidiaria, la Comisión alegó que el requisito del agotamiento de los recursos internos no significa que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos estén obligadas a agotar todos los recursos disponibles. Si la presunta víctima planteó la cuestión por alguna de las alternativas adecuadas según el ordenamiento jurídico interno, y el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su jurisdicción, la finalidad de la norma está cumplida. En ese sentido, la Comisión planteó que la presunta víctima interpuso una serie de recursos, tales como el de reposición, nulidad y restablecimiento del derecho, y tutela, sin que ninguno fuera efectivo para cuestionar las facultades del Procurador para imponer la sanción de inhabilitación y destitución. Asimismo, afirmó que la práctica de los órganos del Sistema Interamericano es exigir el agotamiento de los recursos internos frente a la violación principal, y no de manera separada y autónoma frente a cada uno de los efectos derivados de una violación principal, pues eso no atendería a

---

[12] El Estado se refirió en este sentido al proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación respecto de actos relacionados con la adopción del esquema público de recolección de basura de la ciudad de Bogotá.

[13] El Estado hizo referencia a cinco procesos administrativos: a) proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación respecto de actos relacionados con la adopción del esquema público de recolección de basura en la ciudad de Bogotá; b) proceso administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio por la realización de prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia en el mercado de prestación de servicios de aseo en Bogotá; c) proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría de Bogotá en relación con el detrimento patrimonial causado al Distrito Capital por la adopción del esquema público de recolección de basuras; d) proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría de Bogotá en relación con el detrimento patrimonial causado al Distrito Capital por la reducción de las tarifas del servicio de transporte público Transmilenio, y e) proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación en relación con la adopción, vía decreto, del Plan de Ordenamiento Territorial.

los parámetros de razonabilidad. En segundo lugar, respecto a la alegada falta de agotamiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría Distrital de Bogotá, la Comisión consideró que dichos hechos son supervinientes, por lo que no es necesario exigir el agotamiento de los recursos internos, y que en todo caso el Estado debió presentar dicho alegato en la debida oportunidad procesal, situación que no ocurrió en el presente caso.

20. Los ***representantes*** alegaron que los argumentos del Estado no deben ser tomados en cuenta en virtud del principio de *estoppel*, pues el Estado no estaba facultado para cambiar la posición mantenida en el trámite de la petición relativa a la indicación de los recursos a agotar por parte de la presunta víctima. Señalaron que el Estado no argumentó la existencia e idoneidad de la revocatoria directa durante el trámite ante la Comisión, y lo hizo de manera breve respecto de la acción de tutela. En relación con la solicitud de revocatoria directa, manifestaron que el Estado omitió mencionar que dicho recurso no tiene una naturaleza judicial, y que contra las decisiones de responsabilidad fiscal se presentaron los recursos de reposición y apelación. Estos últimos recursos eran las vías pertinentes para que la decisión fuera revocada. En relación con la acción de tutela, argumentaron la inexistencia de mención concreta sobre la falta de agotamiento de dicho recurso durante el trámite ante la Comisión. Los representantes agregaron que, por la naturaleza del recurso, este no debe ser agotado para asistir ante el Sistema Interamericano. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestaron que no se trata de un recurso eficaz ni idóneo para dar respuesta a las violaciones en perjuicio del señor Petro, pues no permite cuestionar las potestades sancionatorias de destitución e inhabilitación del Procurador. Asimismo, indicaron que dicho recurso no fue invocado en el momento procesal oportuno en lo que respecta a los fallos fiscales, por lo que resultaría extemporáneo.

A.2. Consideraciones de la Corte

21. El artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que, para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con los artículos 44 o 45 del mismo instrumento, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos[14]. La Corte recuerda que la regla del previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios[15]. Lo anterior significa que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino que también deben ser adecuados y efectivos, como se desprende de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención[16].

22. La Corte determinará, en primer lugar, si la excepción preliminar fue planteada por el Estado en el momento procesal oportuno. Al respecto, la Corte recuerda que una objeción al ejercicio de su jurisdicción basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos

---

[14] *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares*. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 85, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 27 de enero de 2020. Serie C No. 398, párr. 24.

[15] *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. *Fondo*, *supra*, párr. 61, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra*, párr. 25.

[16] *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. *Fondo*, *supra*, párr. 63, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador*, *supra*, párr. 25.

debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es durante la admisibilidad del procedimiento ante la Comisión[17]. Por tanto, el Estado debe, en primer lugar, precisar claramente ante la Comisión, durante la etapa de admisibilidad del caso, los recursos que, en su criterio, aún no se habrían agotado. Por otra parte, los argumentos que dan contenido a la excepción preliminar interpuesta por el Estado ante la Comisión durante la etapa de admisibilidad deben corresponder con aquellos esgrimidos ante la Corte[18].

23. Al respecto, la Corte nota que los representantes alegaron, en su escrito inicial ante la Comisión Interamericana de 28 de octubre de 2013, con relación al cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos internos, que "la Corte Constitucional colombiana declaró que las normas que facultan al Procurador a sancionar con destitución e inhabilidad para el ejercicio de la función pública eran constitucionales" y así "impide la posibilidad de proteger los derechos vulnerados mediante los recursos internos"[19]. Por su parte, el Estado, en su escrito de contestación a dicho escrito de los representantes, señaló que "el peticionario no ha agotado los recursos de la jurisdicción interna respecto a los hechos enmarcados en el trámite del procedimiento contencioso administrativo iniciado por Gustavo F. Petro Urrego contra la decisión de destitución e inhabilidad dictada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación". En particular, el Estado sostuvo que "la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el recurso adecuado y eficaz para controlar la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, declarando la nulidad de la misma, si así lo encuentra probado, así como resarciendo los derechos del afectado y que en consecuencia es un recurso que debe ser impetrado y tramitado por el señor Petro Urrego". En razón de lo anterior, el Estado solicitó a la Comisión que "se declare inadmisible la presente petición por incumplimiento de los presupuestos exigidos en los artículos 47 a) y 46.1 a) de la Convención Americana […]"[20].

24. El Tribunal constata que, en el procedimiento ante la Comisión, el Estado presentó la excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos en el momento procesal oportuno en lo que respecta al medio de control de nulidad, al señalarlo como la acción idónea y eficaz de la cual dispuso el señor Petro para impugnar la sanción de destitución e inhabilitación que le fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación (en adelante también, "la Procuraduría" o la "Procuraduría General") el 9 de diciembre de 2013 por la adopción del esquema público de recolección de basura en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la Corte advierte que el Estado no alegó en su escrito de contestación ante este Tribunal que el señor Petro Urrego no hubiera agotado el medio de control de nulidad y restablecimiento en el momento procesal oportuno respecto de la sanción antes mencionada[21], sino que lo

---

[17] *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares*, *supra*, párrs. 84 y 85, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador*, *supra*, párr. 25.

[18] *Cfr. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 29, y *Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 15.

[19] Petición de "Denuncia contra el Estado colombiano por hechos de persecución y violación de derechos políticos de Gustavo Francisco Petra Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá" presentada ante la CIDH el 28 de octubre de 2013 (expediente de prueba, folio 3206-3207).

[20] *Cfr.* Escrito del Estado respecto a aspectos de admisibilidad y competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 18 de julio de 2014 (expediente de prueba, folio 1113).

[21] En su escrito de contestación, el Estado alegó lo siguiente: "[s]egún se explicó anteriormente, el senador Petro fue objeto de fallos condenatorios en los primeros cuatro procesos anteriormente mencionados. Sin embargo, solo en relación con el primero de estos fallos se han agotado los recursos internos. Respecto de los demás, está pendiente de ser interpuesta o agotada, según el caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como se explicará a continuación. Esta acción, tal como lo demostró la sentencia expedida por el Consejo de Estado en

alegó en sus alegatos finales escritos. En tal sentido, los alegatos finales escritos no son el momento procesal oportuno para afirmar ante este Tribunal que no se habrían agotado los recursos internos respecto del referido proceso disciplinario. En razón de lo anterior, la Corte no se pronunciará sobre dicho alegato.

25. De esta forma, el alegato planteado por el Estado en el escrito de contestación que presentó ante este Tribunal, en cuanto a la falta de agotamiento de los recursos internos, subsiste respecto de los siguientes procesos[22]: a) proceso administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante también "la SIC") por la realización de prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia en el mercado de prestación de servicios de aseo en Bogotá; b) proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría de Bogotá (en adelante también "la Contraloría") en relación con el detrimento patrimonial causado al Distrito Capital por la adopción del esquema público de recolección de basuras; c) proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría en relación con el detrimento patrimonial causado al Distrito Capital por la reducción de las tarifas del servicio de transporte público Transmilenio, y d) proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General en relación con la modificación, vía decreto, del Plan de Ordenamiento Territorial[23].

26. En relación con dichos procesos, la Comisión alegó que el Estado no presentó la excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos en el momento procesal oportuno con relación al fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría y, por lo tanto, esta debe ser desechada[24]. Al respecto, el Tribunal nota que los hechos vinculados con el proceso ante la SIC, el proceso ante la Contraloría por la reducción de tarifas del servicio Transmilenio, así como aquellos relacionados con el proceso ante la Procuraduría por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, fueron puestos en conocimiento de la Comisión por parte de los representantes mediante los escritos de 9 y 13 de marzo de 2017 y trasladados al Estado el 15 de marzo de 2017[25]. El Estado se pronunció respecto de dichos procesos mediante su escrito de 27 de octubre de 2017, donde manifestó que "[e]l presente caso ha mutado desde el momento en que fue presentada la petición, el 28 de octubre de 2013, hasta la actualidad", y procedió a describir algunos hechos relacionados con los procesos que fueron puestos en su conocimiento[26]. Asimismo, manifestó que "en la actualidad la única decisión que está limitando la posibilidad de que la presunta víctima pueda postularse y ejercer cargos públicos, es la proferida por la Contraloría Distrital"[27].

---

favor del senador Petro, constituye un recurso judicial adecuado y efectivo para proteger los derechos que éste considera que le han sido violados. En consecuencia, su falta de agotamiento torna inadmisibles los alegatos de los representantes". Escrito de contestación del Estado de 4 de febrero de 2019, (expediente de fondo, folio 431).

[22] Escrito de contestación del Estado de 4 de febrero de 2019 (expediente de fondo, folio 430).

[23] El Tribunal advierte que los hechos relacionados con el proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría de Bogotá en relación con el detrimento patrimonial causado al Distrito Capital, por la adopción del esquema público de recolección de basuras, no fue incluido por la Comisión Interamericana en su Informe de Fondo. En ese sentido, dado que los hechos relacionados con dicho proceso no forman parte del marco fáctico del litigio ante la Corte, tampoco resulta pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos internos.

[24] Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado (expediente de fondo, folio 666).

[25] Comunicaciones de la Comisión Interamericana de 15 de marzo de 2017 (expediente de prueba, folios 2756 y 2758).

[26] Observaciones del Estado de 27 de octubre de 2017 (expediente fondo, folios 1620-1632).

[27] Observaciones del Estado de 27 de octubre de 2017 (expediente de fondo, folio 1632).

27. De lo anterior se desprende que los hechos relacionados con el proceso ante la SIC, el proceso ante la Contraloría por la modificación de las tarifas del servicio Transmilenio, y el proceso ante la Procuraduría por los cambios al Plan de Ordenamiento Territorial, fueron puestos en conocimiento del Estado con posterioridad a la adopción del Informe de Admisibilidad de 6 de diciembre de 2016, pero antes de la adopción del Informe de Fondo de 25 de octubre de 2017. En ese sentido, la Corte advierte que la excepción preliminar planteada por el Estado ante la Comisión el 28 de octubre de 2013, que se refería al primer proceso ante la Procuraduría (*supra* párr. 23), no fue presentada respecto a los demás procesos bajo análisis. Por otro lado, la Corte advierte que el Estado tuvo la oportunidad de expresar sus objeciones a la admisibilidad de los procesos antes mencionados durante el trámite ante la Comisión y antes de la emisión del Informe de Fondo, pero se limitó a realizar apreciaciones fácticas sobre los mismos y a realizar alegaciones sobre el fondo, sin invocar aspectos de admisibilidad por falta de agotamiento de los recursos internos.

28. En razón de ello, este Tribunal estima que, si el Estado consideraba que dichos procesos no eran admisibles pues no se habían agotado los recursos internos disponibles en el ordenamiento jurídico colombiano, debió señalar dicha objeción en sus observaciones de 27 de octubre de 2017, o en cualquier otro momento antes de la emisión del Informe de Fondo. Al no hacerlo, el Tribunal concluye que operó el principio de preclusión procesal. En consecuencia, el Tribunal desestima la excepción preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos presentada por el Estado.

B. Excepciones por falta de competencia para realizar un control de convencionalidad en abstracto; por falta de fundamento de los alegatos concernientes al derecho a la integridad personal; y por la exposición de hechos que no caracterizan una violación a la Convención Americana

B.1. Alegatos del Estado y observaciones de la Comisión y de los representantes

29. El ***Estado*** alegó que los representantes pretenden que la Corte se pronuncie sobre la convencionalidad de una serie de normas en abstracto, para lo cual carece de competencia en el marco de su función contenciosa. En relación con el artículo 5 de la Ley 1864, sostuvo que no ha existido ninguna investigación por el delito de elección ilícita, por lo que no ha sido aplicado al caso. En relación con los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución Política, los artículos 44 y 45, 66 y 38 de la Ley 734 de 2002, y el artículo 60 de la ley 610 de 2000, afirmó que, si bien estas normas fueron aplicadas en el proceso seguido contra el señor Petro, realizar un control de convencionalidad sería abstracto porque dichos actos administrativos no llegaron a afectar en la práctica los derechos políticos del señor Petro, y además fueron anulados en su totalidad por el Consejo de Estado. Adicionalmente, el Estado alegó que la supuesta violación al artículo 5 de la Convención en perjuicio del señor Petro es manifiestamente infundada porque no existe evidencia alguna de que hubiera sido víctima de hostigamientos y amenazas, ni mucho menos sobre cómo dichos hostigamientos serían atribuibles al Estado. Por otro lado, el Estado sostuvo que no existen hechos que puedan ser caracterizados como una violación a los derechos políticos previstos en la Convención, puesto que no existió un daño en perjuicio del señor Petro. Al respecto, añadió que en este caso los medios judiciales fueron adecuados y efectivos ya que permitieron al señor Petro ejercer su cargo como alcalde, que se presentara como candidato presidencial, y que se posesionara posteriormente como senador de la República.

30. La ***Comisión*** alegó que el argumento del Estado, según el cual la Corte no tiene competencia para realizar un control de convencionalidad en abstracto sobre la Ley 1864, no tiene el carácter de excepción preliminar porque no se relaciona con una cuestión de admisibilidad del caso, sino que atañe al fondo de la litis. Respecto al alegato del Estado sobre la falta de competencia de la Corte para pronunciarse sobre las normas constitucionales y respecto al Código Disciplinario, la Comisión sostuvo que, al tratarse de un argumento de complementariedad, es necesario que el Estado haya aceptado su responsabilidad internacional, cesado el hecho ilícito y reparado a la víctima. Esta situación no ha ocurrido en el caso, y además la evaluación de dicha cuestión tendría que ser analizada en el fondo del asunto. Adicionalmente, la Comisión afirmó que el Estado no ha hecho cesar la violación, pues persiste un marco normativo inconvencional que permite que se impongan sanciones de inhabilitación y destitución de funcionarios de elección popular mediante actos administrativos que no constituyen una condena penal firme como lo indica la Convención. La Comisión recordó que inadmitió el artículo 5 de la Convención en su Informe de Admisibilidad al considerar que "el peticionario no ofrece alegatos o sustento para su presunta violación". No obstante, consideró que los hechos que sustentaban la violación de este artículo convencional se referían al impacto de los procedimientos disciplinarios en la presunta víctima, y en tanto que forman parte del marco fáctico del Informe de Fondo, podrían ser invocados por los representantes.

31. Los ***representantes*** alegaron que el debate sobre la afectación al marco normativo es una controversia propia del fondo del asunto, por lo que no es admisible como excepción preliminar. Asimismo, afirmaron que no han solicitado la realización de un control de convencionalidad en abstracto, sino que a la luz del artículo 2 de la Convención el Estado reforme un régimen legal contrario a la Convención Americana, frente al cual no existe un recurso judicial en el ordenamiento interno, máxime cuando esta normativa fue aplicada en el caso concreto. Los representantes alegaron que la afectación de los derechos políticos del señor Petro continúa ante el incumplimiento del artículo 2 de la Convención. Asimismo, manifestaron que han presentado información actualizada e íntimamente relacionada con la petición inicial respecto a la situación de riesgo y seguridad del señor Petro, así como sobre las implicaciones morales y patrimoniales de la persecución política de la que ha sido víctima. En consecuencia, solicitaron a la Corte que desestime la excepción preliminar relacionada con el artículo 5 de la Convención.

B.2. Consideraciones de la Corte

32. El Tribunal recuerda que, conforme a su jurisprudencia, únicamente considerará como excepciones preliminares aquellos argumentos que tienen o podrían tener exclusivamente tal naturaleza atendiendo a su contenido y finalidad, es decir, que de resolverse favorablemente impedirían la continuación del procedimiento o el pronunciamiento sobre el fondo[28]. Ha sido criterio reiterado de la Corte que, por medio de una excepción preliminar, se presentan objeciones relacionadas con la admisibilidad de un caso o la competencia de la Corte para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, tiempo o lugar[29]. Por ello, independientemente de que el Estado defina un planteamiento como "excepción preliminar", si al analizar tales planteamientos fuere necesario

---

[28] *Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 35, y *Caso Gorigoitía Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Serie C No. 382, párr. 19.

[29] *Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares.* Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 32, y *Caso Gorigoitía Vs. Argentina, supra*, párr. 19.

entrar a considerar previamente el fondo de un caso, los mismos perderían su carácter preliminar y no podrían ser analizados como tales[30].

33. La Corte advierte que los alegatos del Estado no constituyen excepciones preliminares, pues son precisamente dichas cuestiones las que se debatirán en el fondo del asunto. Al valorar los méritos del caso, la Corte decidirá si las sanciones de destitución e inhabilitación que le fueron impuestas al señor Petro por la Procuraduría General de la Nación constituyeron una violación a sus derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Determinar la vigencia y alcance de dichas sanciones, y la convencionalidad de las normas que facultaron su imposición, cuestiones controvertidas por las partes, así como el riesgo que el artículo 5 de la Ley 1864 de 2017 representaría para el goce de los derechos políticos de la presunta víctima, es un análisis que corresponde al fondo de la controversia. Asimismo, es una cuestión de fondo determinar si los hechos alegados por los representantes como constitutivos de una afectación moral, y como fuente de angustia y temor que habría experimentado el señor Petro como resultado de las sanciones que le fueron aplicadas, constituyeron violaciones a su derecho a la integridad personal. En consecuencia, la Corte desestima las excepciones preliminares presentadas por el Estado en virtud de que no se refieren a cuestiones de admisibilidad del caso, sino a cuestiones que atañen al fondo de la controversia.

V
PRUEBA

A. Admisibilidad de la prueba documental

34. El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión, los representantes y el Estado (*supra* párrs. 1, 5 y 6), los cuales, como en otros casos, admite en el entendido que fueron presentados en la debida oportunidad procesal (artículo 57 del Reglamento)[31] y su admisibilidad no fue controvertida ni objetada.

35. Los ***representantes*** señalaron que el anexo 2, aportado por el Estado junto con sus alegatos finales escritos, contiene "doce archivos en total, seis de los cuales no fueron anunciados en el escrito estatal", por lo que solicitaron su exclusión. Por su parte, la ***Comisión*** solicitó a la Corte "valorar [su] admisibilidad y pertinencia tomando en cuenta su [R]eglamento y jurisprudencia". El ***Estado*** no se refirió a dichas objeciones.

36. La Corte recuerda que, en lo que se refiere a la oportunidad procesal para la presentación de prueba documental, de conformidad con el artículo 57.1 del Reglamento, esta debe ser presentada, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. En tal sentido, el Tribunal reitera que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en caso de las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del Reglamento, a saber: fuerza mayor, impedimento grave o si se tratare de un hecho ocurrido con posterioridad

[30] *Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 39, y *Caso Gorigoitía Vs. Argentina, supra*, párr. 19.

[31] *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra*, párr. 140, y *Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua. Fondo y Reparaciones.* Sentencia de 3 de junio de 2020. Serie C No. 403, párr. 12.

a los citados momentos procesales[32]. Con relación a los documentos presentados por el Estado con sus alegatos finales escritos, cuya admisibilidad fue objetada por los representantes, la Corte nota que su presentación extemporánea no fue justificada en alguna de las causales excepcionales previstas en el Reglamento, ni fueron expresamente solicitados por la Corte como prueba para mejor resolver, de modo tal que no serán tomados en cuenta.

B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial

37. Este Tribunal estima pertinente admitir las declaraciones rendidas ante fedatario público[33] y en audiencia pública[34] en la medida en que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos y al objeto del presente caso[35].

VI
HECHOS

38. En atención a los alegatos presentados por las partes y la Comisión, y a lo resuelto en el capítulo de excepciones preliminares, a continuación se expondrán los hechos relevantes del caso en el siguiente orden: a) antecedentes, donde la Corte se referirá al perfil de la presunta víctima y a la información concerniente a la denominada "crisis de la recolección de basura" ocurrida en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a finales del año 2012; b) proceso disciplinario por la modificación del esquema de prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá; c) proceso disciplinario por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá; d) multa de la SIC por prácticas anticompetitivas en la prestación del servicio público de aseo; e) proceso ante la Contraloría por la modificación de las tarifas del servicio público de transporte, y f) marco normativo aplicable respecto a las facultades del Procurador General de la Nación y otras leyes de interés para el presente caso.

A. Antecedentes

A.1. La presunta víctima

39. El señor Gustavo Francisco Petro Urrego nació el 19 de abril de 1960. Es un político y economista que se identifica como "líder de izquierda y oposición"[36]. Primero se vinculó como

---

[32] *Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 17, y *Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C No. 402, párr. 34.

[33] Declaraciones rendidas por Gustavo Francisco Petro Urrego y Edgardo José Maya Villazón en audiencia pública celebrada el 6 de febrero de 2020, y dictámenes periciales rendidos por Roberto Gargarella y Matthias Herdegen en la misma audiencia.

[34] Declaración rendida por Iván Cepeda Castro el 23 de enero de 2020 (expediente de fondo, folios 1115 a 1133); declaración rendida por Olga Lucía Durán Giraldo el 27 de enero de 2020 (expediente de fondo, folios 1271 a 1283) declaración a título informativo rendida por Jaime Bernal Cuellar el 20 de enero de 2020 (expediente de fondo, folios 1139 a 1197); dictamen pericial rendido por Alfredo Beltrán Sierra el 27 de enero de 2020 (expediente de fondo, folios 1277 a 1283), y dictamen pericial rendido por Carlos Enrique Arévalo Narváez el 27 de enero de 2020 (expediente de fondo, folios 1199 a 1265).

[35] Los objetos de las declaraciones se encuentran establecidos en la Resolución del Presidente de la Corte de 12 de diciembre de 2019.

[36] El señor Petro expresó lo siguiente: "[…] Yo soy un dirigente político de izquierda; siempre he estado en la oposición". *Cfr*. Declaración rendida por Gustavo Francisco Petro Urrego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia pública celebrada el 6 de febrero de 2020.

militante del Movimiento Guerrillero 19 de abril (en adelante también "M-19")[37], grupo en el que llegó a ser miembro de la Dirección de la Región Central[38]. Fungió como personero[39] de Zipaquira en 1981 y concejal entre 1984 y 1986. Después de la suscripción del Acuerdo de Paz entre el Estado y el M-19 en 1990, y la subsecuente incorporación de los integrantes de dicho grupo a la política a través del partido Alianza Democrática M-19, el señor Petro fue elegido –entre otros- a los siguientes cargos públicos: miembro de la Cámara de Representantes en 1991, 1998 y 2002, y del Senado en 2006 y 2018[40].

40. En el 2010, el señor Petro se presentó como candidato a la Presidencia de la República de Colombia. El 30 de octubre de 2011, fue elegido Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. (en adelante también "Alcalde de Bogotá"), cargo que ocupó entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2016. Dicho cargo fue ejercido de manera ininterrumpida salvo por el período comprendido entre el 20 de marzo de 2014 y el 23 de abril de 2014, en virtud de la sanción de destitución e inhabilidad dispuesta por la Procuraduría General el 9 de diciembre de 2013. El 27 de mayo de 2018, el señor Petro fue candidato a la Presidencia de la República de Colombia, obteniendo la segunda votación más alta en dicha elección[41]. Actualmente, es Senador de la República[42].

A.2. La crisis de recolección de basura en la ciudad de Bogotá a finales del año 2012

41. Previo a la toma de posesión del señor Petro como Alcalde de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (en adelante también "UAESP") ordenó, mediante Resolución 364 de 25 de mayo de 2011, la apertura de la licitación pública No. 001 a fin de concesionar el servicio público de aseo en la ciudad. Dicha licitación tuvo por objeto concesionar bajo "la figura de áreas de servicio exclusivo" la prestación del "servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva"[43]. La Asociación de Recicladores de Bogotá presentó una acción de tutela contra dicha licitación, por lo que el 18 de agosto de 2011 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de

---

[37] *Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 89.

[38] *Cfr. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 89.

[39] De conformidad con el texto original del Decreto 1333 de 1986, "[e]n cada municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo o veedor ciudadano y agente del Ministerio Público, llamado Personero Municipal, que tendrá un suplente nombrado por el mismo que elija el principal. El suplente reemplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal, mientras se provee lo conveniente por quien corresponda". Decreto 1333 de 25 de abril de 1986, por el cual "se expide el Código de Régimen Municipal". Diario Oficial No. 37.466 de 14 de mayo de 1986, Artículo 135.

[40] *Cfr.* Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de 2 de noviembre de 2018 (expediente de fondo, folios 160 y 161).

[41] El señor Petro expresó lo siguiente: "[…] en el 2018 volví a hacer candidato presidencial y saqué 8 millones de votos en la segunda votación del país […]". *Cfr.* Declaración rendida por Gustavo Francisco Petro Urrego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia pública celebrada el 6 de febrero de 2020.

[42] El señor Petro expresó lo siguiente: "[…] en este momento soy Senador de la República de Colombia". *Cfr.* Declaración rendida por Gustavo Francisco Petro Urrego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia pública celebrada el 6 de febrero de 2020.

[43] Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

Colombia (en adelante también "Corte Constitucional") emitió el Auto 183, mediante el cual ordenó a la UAESP la suspensión de la licitación, con fundamento en el incumplimiento de lo ordenado por la Sentencia T-724/03[44].

42. El 8 de septiembre de 2011, a través de la Resolución 552, la UAESP declaró la "urgencia manifiesta" de dar continuidad a la prestación del servicio público de aseo, por lo que el 12 de septiembre de 2011 celebró los contratos Nos. 157E, 158E, 159E y 160E con las empresas Ciudad Limpia, Aseo Capital, LIME y ATESA, todas operadoras privadas, para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá por un término de seis meses[45]. Con ocasión de una solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724/03 y el Auto 268/10[46], presentada por la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional expidió el Auto 275/11 de 19 de diciembre de 2011, mediante el cual dejó sin efecto la licitación pública No. 001 de 2011 y todos los actos administrativos subsecuentes, ordenando a la UAESP que definiera un "esquema de metas" a corto plazo para "la formalización y regularización de la población de recicladores, que contenga acciones concretas, cualificadas, medibles y verificables", a ser entregado a la referida Corte y a la Procuraduría General a más tardar el 31 de marzo de 2012[47].

43. El 8 de febrero de 2012, con posterioridad a la toma de posesión del señor Petro como Alcalde de Bogotá, a través de la Resolución 065, la UAESP declaró la "urgencia manifiesta" de continuar la prestación del servicio público de aseo. El 7 de marzo de 2012, la UAESP contrató dicho servicio con las empresas LIME, Aseo Capital, Ciudad Limpia y ATESA por un término de seis meses. El 19 de abril de 2012, mediante Auto 084, la Corte Constitucional reconoció que la UAESP había cumplido con el plazo para la entrega del "esquema de metas" solicitado en el Auto 275/11, e "instó a la entidad a continuar el proceso". El 16 de agosto de 2012, la UAESP prorrogó por tres meses los contratos con las operadoras privadas, los cuales se computarían a partir del 18 de septiembre de 2012. El 11 de octubre de 2012, la UAESP suscribió el contrato interadministrativo 017 con la Empresa Acueducto y Alcantarillado de

---

[44] En el año 2003, la Asociación de Recicladores de Bogotá presentó una acción de tutela contra el Distrito Capital de Bogotá y la UAESP por la licitación pública No. 001 de 2002. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia expidió la Sentencia No. T-724 de 20 de agosto de 2003, en la que constató que la UAESP no incluyó medida efectiva alguna encaminada al mantenimiento y fortalecimiento de la actividad que la Asociación de Recicladores había realizado como grupo marginado de la sociedad. En consecuencia, en la parte resolutiva de la sentencia, la Corte Constitucional ordenó que en futuras ocasiones la UAESP debía incluir acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogotá "cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, debido a que la actividad que [los recicladores] desarrollan está ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que por ningún motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurrió en la Licitación No. 1 de 2002, respecto de los recicladores de Bogotá". *Cfr.* Sentencia No. T-724/03 de la Corte Constitucional de Colombia de 20 de agosto de 2003; Auto No. 183/11 de la Corte Constitucional de Colombia de 18 de agosto de 2011, y Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486)**.**

[45] *Cfr.* Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486)**.**

[46] El 30 de julio de 2010, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional declaró, mediante Auto No. 268/10, que la UAESP había incumplido con las disposiciones de la Sentencia T-724/03; le otorgó un plazo de tres días para que presentara una adenda "donde se modifiquen las condiciones de la Licitación 01 de 2010, en el sentido de incluir como requisito habilitante que los proponentes se presenten conformados con una organización de segundo nivel de recicladores de Bogotá", y ordenó a la Procuraduría General el seguimiento de lo resuelto. *Cfr.* Auto No. 268/10 de la Corte Constitucional de Colombia de 30 de julio de 2010 (expediente de prueba, folios del 3681 al 3737).

[47] *Cfr.* Auto No. 275/11 de la Corte Constitucional de Colombia de 19 de diciembre de 2011 (expediente de prueba, folios del 3491 al 3680), y Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

Bogotá (en adelante "EAAB"), cuyo objeto consistía en la "gestión y operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C."[48].

44. Con motivo del referido contrato, en el 2012 se suscribieron los contratos Nos. 1-06-263000848 y 1-06-263000851, cuyo objeto fue "la adquisición de maquinaria y equipos para la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá por parte de la [EAAB]", para lo cual se adelantó "la invitación pública 804 con un presupuesto de $80.888.107.999". El 4 de diciembre de 2012, la EAAB suscribió con la empresa Aguas de Bogotá, S.A.E.S.P. (en adelante "Aguas de Bogotá") el contrato No. 1-07-10200-0809-2012 (en adelante "contrato 809") para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, con un valor de $116.000.000.000 por un término de cuatro meses y 14 días a partir del 18 de diciembre de 2012[49].

45. El 10 de diciembre de 2012, el señor Petro expidió el Decreto 564, mediante el cual "se adopta[ro]n disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-724/03 y en los autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012" y, de tal manera, "atender la obligación de ejecutar a cabalidad el plan de inclusión de la población recicladora, así como garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y sin discriminación para la totalidad de los habitantes de la ciudad y asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones de prestación, coordinación, supervisión y control del servicio atribuida por la Constitución Política y la ley al Distrito Capital"[50].

46. El 14 de diciembre de 2012, días antes del vencimiento de los contratos entre la UAESP y las operadoras privadas, el señor Petro expidió el Decreto 570 en el marco de la "transición en el modelo de prestación del servicio público de aseo"[51], mediante el cual se decretó un estado de prevención o alerta amarilla "con el objeto de prevenir y precaver cualquier situación que llegare a amenazar la calidad ambiental o la salud de los habitantes del Distrito Capital por las actividades derivadas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos mediante la implementación de las medidas de prevención y control". En virtud de lo anterior, se ordenaron -entre otras- las siguientes medidas: a) autorizar "el uso de vehículos automotores tipo volquetas, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de aseo y como medida de precaución para minimizar eventuales impactos ambientales y sanitarios", y b) implementar un "Plan Operativo de Emergencia para el esquema transitorio adoptado por

---

[48] En el contrato, se especificó lo siguiente: "[…] El servicio de recolección, barrido y limpieza de vías en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final en el Distrito Capital de Bogotá, tendrá una cobertura del ciento por ciento (100%), y se prestará a todos los usuarios y elementos del mobiliario urbano de las localidades que hacen parte de las mismas. En el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA apoyará a la UAESP además para dar cumplimiento a las órdenes de la H. Corte Constitucional impartidas en el Auto 275 de 2011 y al Plan de Metas presentado por la UAESP y avalado en el Auto 084 de 2012 de la misma Corte, en el sentido de garantizar la inclusión de la población recicladora de oficio en el servicio de aseo- componente de aprovechamiento, según los contratos o convenios que celebre la UAESP para el efecto, y remunerando vía tarifa el trabajo que esta población realiza en los componentes de recolección y transporte de residuos sólidos, y del componente de aprovechamiento como costo evitado de disposición final, con base en los modelos tarifarios vigentes […]". Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

[49] *Cfr.* Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

[50] Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

[51] Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

el Decreto Distrital 564", por parte de las empresas de servicios públicos pertenecientes al Distrito Capital[52].

47. El 17 de diciembre de 2012, la UAESP y la EAAB suscribieron una adenda al contrato interadministrativo 017[53]. El mismo día, la UAESP declaró una "urgencia manifiesta", en virtud de lo cual suscribió a finales de 2012 contratos con operadoras privadas para lograr la prestación del servicio público de aseo en la ciudad[54]. A pesar de la suscripción de estos contratos, el 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, la ciudad de Bogotá "enfrentó una crisis y emergencia en la prestación del servicio público de aseo". Durante tales días, aproximadamente 5,841 toneladas de basura no fueron recogidas[55]. Luego de la crisis, los operadores privados continuaron prestando el servicio público de aseo en alrededor del 48% de la ciudad[56].

B. Proceso disciplinario ante la Procuraduría General por la modificación del esquema de prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá

B.1. Procedimiento

48. En enero de 2013, el Secretario General de la Federación Regional de Trabajadores, un Concejal del Distrito de Bogotá, el Personero del Distrito de Bogotá y el Defensor del Pueblo presentaron una queja contra el Alcalde de Bogotá ante el Procurador General. El 13 de enero del mismo año, dicha autoridad emitió un auto mediante el cual delegó en la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General (en adelante también "Sala Disciplinaria") la competencia para adelantar una investigación disciplinaria contra el señor Petro, en su calidad de Alcalde de Bogotá, "por presuntas irregularidades relacionadas a la prestación del servicio público de

---

[52] *Cfr.* Decreto Distrital No. 570 de 14 de diciembre de 2012 (expediente de prueba, folios del 4414 al 4419).

[53] En la adenda, se agregaron –entre otras- las cláusulas siguientes: "[…] PARÁGRAFO: En el evento en que la UAESP decida contratar con personas diferentes de la EAAB, actividades relacionadas con el servicio público de aseo y sus actividades complementarias en la ciudad de Bogotá, se entenderá para todos los efectos legales y contractuales, que tales actividades se sustraen del objeto del presente contrato, reduciendo así de manera proporcional el 100% de la cobertura asignada al contratista, sin que para ello se requiera mayor formalidad que una comunicación de la UAESP, mediante la cual informe a la EAAB sobre el contrato celebrado, su alcance y la fecha a partir de la cual se dará inicio al mismo. (…) CLÁUSULA 35. PERÍODO DE TRANSICIÓN Y AJUSTE. Durante los cuatro (4) primeros meses a partir de la expedición del Decreto Distrital No. 570 del 14 de diciembre de 2012, el CONTRATISTA realizará sus obligaciones contractuales, en aplicación de dicho acto administrativo, término durante el cual deberá ajustar sus labores operativas para la prestación eficiente del servicio, en los términos del reglamento técnico y operativo que hace parte integral del contrato. En todo caso las frecuencias mínimas durante el Reglamento Técnico y Operativo […]". Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

[54] En particular, se suscribieron los siguientes contratos: a) contrato No. 257 de 18 de diciembre, celebrado con Ciudad Limpia respecto a la zona 6 de la ciudad; b) contrato No. 260 de 19 de diciembre, celebrado con Aseo Capital respecto a la zona 4 de la ciudad; c) contrato No. 261 de 19 de diciembre, celebrado con LIME respecto a la zona 1 de la ciudad; d) contrato No. 268 de 21 de diciembre, celebrado con ATESA respecto a la zona 2 de la ciudad; e) adenda de 22 de diciembre al contrato No. 260 con Aseo Capital para incluir nuevas localidades, y f) adenda de 22 de diciembre al contrato No. 261 con LIME para que diera "apoyo" en otras localidades. *Cfr.* Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

[55] *Cfr.* Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folio del 3 al 486).

[56] *Cfr.* Fallo No. 02 de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Distrital de Bogotá de 20 de octubre de 2017 (expediente de prueba, folios del 4907 al 4954).

aseo"[57]. El 20 de junio de 2013, la Sala Disciplinaria formuló cargos contra el señor Petro, con fundamento en "tres hechos puntuales"[58]: a) la suscripción de los contratos 017 de 11 de octubre de 2011 y 809 de 4 de diciembre de 2012; b) la expedición del Decreto 564 de 10 de diciembre de 2012, y c) la emisión del Decreto 570 de 14 de diciembre de 2012. En relación con tales hechos, la Sala Disciplinaria formuló los siguientes cargos contra el señor Petro:

> Primer cargo: Falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, a título de dolo y bajo la modalidad de determinador, por "[h]aber tomado la decisión, para el segundo semestre de 2012, y en su condición de alcalde mayor de Bogotá y jefe de la administración distrital, de que las empresas del Distrito de Bogotá asumieran la prestación del servició público de aseo, decisión que conllevó a que el director de la [UAESP] y el gerente de la [EAAB] suscribieran el contrato interadministrativo 017 del 11 de octubre de 2012, sin que esta empresa contara con las más mínima experiencia y capacidad requerida. [Asimismo], la decisión del señor alcalde mayor de Bogotá conllevó a que el gerente de la [EAAB] y el gerente de [Aguas de Bogotá] suscribieran el contrato interadministrativo 809 del 4 de diciembre de 2012, sin que esta empresa contara con la más mínima experiencia y capacidad requerida".
>
> Segundo cargo: Falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 60 del artículo 48 del Código Disciplinario único, a título de dolo, por "[h]aber expedido el Decreto 564 del 10 de diciembre de 2012, mediante el cual se adoptó un esquema de prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá totalmente contrario al ordenamiento jurídico [...]".
>
> Tercer cargo: Falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 37 del artículo 48 del Código Disciplinario único, a título de culpa gravísima, por "[h]aber expedido el Decreto 570 del 14 de diciembre de 2012, mediante el cual autorizó el uso de vehículos tipo volquetas, «con el fin de garantizar la continuidad del servicio público de aseo y como medida de precaución para minimizar eventuales impactos ambientales y sanitarios», pues con dicha autorización se violaron disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente, con lo cual se originó un riesgo grave para la salud humana de los habitantes de la ciudad de Bogotá y para el medio ambiente"[59].

B.2. Sanción disciplinaria

49. El 9 de diciembre de 2013, luego de haber adelantado un procedimiento disciplinario, la Sala Disciplinaria declaró probados los tres cargos formulados contra el señor Petro y lo juzgó "responsable disciplinariamente" por la comisión de las siguientes faltas disciplinarias: a) la falta gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, consistente en "[p]articipar en la etapa precontractual o en la etapa contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley"; b) la falta gravísima contenida en el numeral 60 del artículo 48 del mismo Código, consistente en "[e]jercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante", y c) la falta gravísima contenida en el numeral 37 del artículo

---

[57] Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

[58] Auto de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 20 de junio de 2013 (expediente de prueba, folios del 3231 al 3489).

[59] Auto de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 20 de junio de 2013 (expediente de prueba, folios del 3231 al 3489).

48 del mismo Código, consistente en "[p]roferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección [...] del medio ambiente"[60].

50. En consecuencia, el señor Petro fue sancionado con la pena de destitución como Alcalde de Bogotá e inhabilidad general para ocupar cualquier cargo público por el término de 15 años[61].

B.3. Recursos de recusación y reposición

51. El señor Petro presentó escritos de recusación contra el Procurador General, la Viceprocuradora General, los integrantes de la Sala Disciplinaria y "cualquier otro funcionario de la Procuraduría que pudiera conocer la actuación"[62]. El 2 de enero de 2014, la Viceprocuradora General rechazó la recusación y lo mismo hicieron los miembros de la Sala Disciplinaria mediante auto de la misma fecha. Cinco días después, el Procurador General también rechazó la recusación, ordenando a la Sala Disciplinaria continuar "el respectivo trámite del proceso disciplinario". Concomitantemente a las solicitudes de recusación, el señor Petro interpuso un recurso de reposición contra la decisión de 9 de diciembre de 2013. En el marco de este recurso, el señor Petro solicitó, mediante escrito de 31 de diciembre de 2013, la práctica de una serie de pruebas sobre sanciones similares impuestas por la Procuraduría General, así como peritajes sobre los posibles riesgos a la salud humana que pudieron haberse producido por exposición a la basura.

52. Mediante resolución de 13 de enero de 2014, la Sala Disciplinaria denegó la práctica de las pruebas solicitadas, confirmando la resolución de 9 de diciembre de 2013. En las motivaciones sobre las diligencias probatorias, la Sala Disciplinaria argumentó que estas "debieron ser solicitadas en el momento procesal oportuno y no después de haberse proferido el fallo de única instancia" y señaló, además, que "no advierte la necesidad de que se practiquen de oficio las pruebas pedidas […], en la medida en que ellas están relacionadas con situaciones y hechos que han sido ampliamente analizados […], sobre los cuales existen sobrados elementos de juicio y suficiente ilustración"[63]. Como consecuencia de lo anterior, la sanción de destitución e inhabilidad quedó en firme.

B.4. Acciones de tutela, sustitución del señor Petro como Alcalde de Bogotá y adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión

53. Contra la sanción de la Sala Disciplinaria, tanto el señor Petro como otras personas interpusieron simultáneamente múltiples acciones de tutela ante distintas autoridades jurisdiccionales. Algunos de estos recursos fueron admitidos y otros rechazados.

B.4.1. Acciones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y destitución del señor Petro mediante decreto presidencial

---

[60] Auto de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 20 de junio de 2013 (expediente de prueba, folios del 3231 al 3489).

[61] *Cfr.* Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 484 al 486).

[62] Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 13 de enero 2014 (expediente de prueba, folios del 488 al 835).

[63] Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 13 de enero 2014 (expediente de prueba, folios del 488 al 835).

54. El 13 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda -Subsección A acogió la acción de tutela interpuesta por el ciudadano JGP, actuando a título personal y como agente oficioso del señor Petro, y ordenó la suspensión provisional de las resoluciones de la Sala Disciplinaria de 9 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014[64]. A su vez, el 17 de enero del mismo año, la Subsección C de la Sección Segunda del referido tribunal rechazó por "improcedente" otra acción de tutela interpuesta por el señor Petro contra las decisiones de la Sala Disciplinaria. El 5 de marzo de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la sentencia expedida el 17 de enero de 2014 por la Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, "en razón de que el afectado dispone de otro medio de defensa judicial"[65].

55. El 18 de marzo de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó la sentencia emitida el 13 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consecuentemente rechazando la acción de tutela y levantando la suspensión provisional de los fallos de la Sala Disciplinaria[66]. De esta forma, el 20 de marzo de 2014, mediante el Decreto 570, el Presidente de la República dispuso la destitución del señor Petro[67]. El 11 de junio de 2015, la Corte Constitucional confirmó la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de 5 de marzo de 2014[68].

B.4.2. Acciones ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá

56. El 23 de enero de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá decidió las acciones intentadas por 368 personas y concedió "el amparo del derecho a elegir y participar en el control político" a 173 de los demandantes y rechazó la tutela de derechos respecto de los 195 restantes. Esta decisión también ordenó la suspensión transitoria de los efectos del fallo proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General. La sentencia fue impugnada y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia de 6 de marzo de 2014, revocó la decisión anterior y en su lugar denegó la protección solicitada por los accionantes[69]. El 30 de abril de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá rechazó otra acción de tutela contra el fallo disciplinario de la por falta de legitimación activa. Esta decisión

---

64 *Cfr.* Resolución de Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda -Subsección A de 13 de enero de 2014 (expediente de prueba, folios del 3738 al 3758).

65 Resolución de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 5 de marzo de 2014 (expediente de prueba, folios del 3759 al 3814).

66 *Cfr.* Decreto Presidencial No. 570 de 20 de marzo de 2014, "por el cual se da cumplimiento a una decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que ordenó destituir al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y se hace un encargo". Diario Oficial No. 49.098 de 20 de marzo de 2014.

67 El Decreto 570 de 2014 señalaba lo siguiente: "Artículo 1°. *Destitución.* Destitúyase en el ejercicio del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá D.C, al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, identificado con la cédula de ciudadanía número 208079, con el fin de dar cumplimiento al fallo de única instancia del 9 de diciembre de 2013, con número de radicación IUS 2012447489, IUC D 2013-661-576188, confirmado mediante fallo del 13 de enero de 2014, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto". Decreto Presidencial No. 570 de 20 de marzo de 2014, "por el cual se da cumplimiento a una decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que ordenó destituir al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y se hace un encargo". Diario Oficial No. 49.098 de 20 de marzo de 2014.

68 *Cfr.* Sentencia No. SU355-15 de la Corte Constitucional de Colombia de 11 de junio de 2015.

69 *Cfr.* Decreto Presidencial No. 570 de 20 de marzo de 2014, "por el cual se da cumplimiento a una decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que ordenó destituir al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y se hace un encargo". Diario Oficial No. 49.098 de 20 de marzo de 2014.

fue confirmada por la Corte Constitucional, mediante sentencia T-976/14 de 18 de diciembre de 2014[70].

B.4.3. Medidas cautelares de la Comisión y sustitución del señor Petro mediante decreto presidencial

57. De manera paralela a lo antes señalado, el 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana emitió una resolución de medidas cautelares, mediante la cual solicitó al Estado la suspensión provisional de las decisiones de la Sala Disciplinaria de 9 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014[71]. En razón de ello, entre el 21 y el 30 de marzo de 2014, un grupo de electores del señor Petro presentó varias tutelas con el fin de dar cumplimiento a la medida cautelar.

58. El 20 de marzo de 2014, mediante el Decreto 570, el Presidente de la República, además de disponer la destitución del señor Petro, encargó al señor RPR como Alcalde de Bogotá "mientras se conformaba una terna para proceder a realizar la designación en los términos de la Ley 1475 de 2011"[72]. El 21 de abril de 2014, el Presidente decretó encargar las funciones del empleo de Alcalde Mayor de Bogotá a la señora MMMC, mediante el Decreto 761[73].

B.4.4. Acción ante la Sala Civil-Restitución de Tierras y reincorporación del señor Petro mediante decreto presidencial

59. El 21 de abril de 2014, la Sala Civil-Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá acogió la acción de tutela incoada por el ciudadano OAV y ordenó al Presidente de la República que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, dejara "sin efectos el Decreto 570 del 20 de marzo de 2014, y en consecuencia, tome las decisiones a que haya lugar para el acatamiento de la medida cautelar […] proferida por la [Comisión] en la Resolución 05 del 18 de marzo de 2014"[74]. El 23 de abril de 2014, el Presidente de la República emitió el Decreto 797 que dejó sin efectos los decretos 570 y 761, en "cumplimiento de la Sentencia de 21 de abril de 2014"[75]. En virtud de ello, el señor Petro fue restituido al cargo de Alcalde de Bogotá.

60. Con ocasión de la impugnación presentada por parte del Presidente de la República y la Procuraduría General, el 6 de junio de 2014, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema

---

70 *Cfr.* Sentencia No. T-976/14 de la Corte Constitucional de Colombia de 18 de diciembre de 2014.

71 *Cfr.* Resolución de medidas cautelares No. 5/2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2014 (expediente de prueba, folios del 3180 al 3190).

72 Decreto Presidencial 761 de 21 de abril de 2014, por "el cual se encarga Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.". Diario Oficial No. 49.129 de 21 abril de 2014 (expediente de prueba, folios 3226 y 3227), y Decreto Presidencial No. 570 de 20 de marzo de 2014, "por el cual se da cumplimiento a una decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que ordenó destituir al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y se hace un encargo". Diario Oficial No. 49.098 de 20 de marzo de 2014.

73 *Cfr.* Decreto Presidencial 761 de 21 de abril de 2014, por "el cual se encarga Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.". Diario Oficial No. 49.129 de 21 abril de 2014 (expediente de prueba, folios 3226 y 3227).

74 Resolución de la Sala Civil-Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de 21 de abril de 2014 (expediente de prueba, folios del 6864 al 6891).

75 Decreto Presidencial 797 de 23 de abril de 2014, por "el cual cesan los efectos de unos decretos en cumplimiento de una sentencia" (expediente de prueba, folios del 3228 al 3230).

de Justicia revocó la sentencia de 21 de abril de 2014 por falta de legitimación activa[76]. El 18 de diciembre de 2014, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional confirmó la sentencia de 6 de junio de 2014 y otras decisiones[77] que habían declarado improcedentes distintas acciones de tutela por parte de ciudadanos para el cumplimiento de las medidas cautelares, al considerar que "no existe una legitimación en la causa activa, en la medida en que el objeto y sujeto de protección de la resolución de medidas cautelares adoptada por la [Comisión] el pasado 18 de marzo de 2014, es específicamente el ejercicio de los derechos políticos del Alcalde Mayor de Bogotá, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y en ese orden, los ciudadanos que actúan como actores [...] no están legitimados para hacerlo"[78].

B.5. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

61. El 31 de marzo de 2014, el señor Petro interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones emitidas el 9 diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014 por la Sala Disciplinaria, y solicitó medidas cautelares de urgencia con el objeto de ser reincorporado a su cargo y de que fueran reestablecidos sus derechos políticos. Ese mismo día, dicho tribunal remitió la demanda a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por razones de competencia. El 10 de abril de 2014, la referida Sala admitió la demanda y, el 13 de mayo de 2014, emitió una resolución en la que decretó la suspensión provisional "de los efectos jurídicos" de las decisiones de 9 de diciembre 2013 y 13 de enero de 2014, y ofició a la División de Registro y Control de la Procuraduría General para que tomara "nota de la suspensión de la sanción de inhabilidad que recae sobre el señor [Petro]"[79]. La Procuraduría General interpuso recurso de súplica contra la referida resolución, el cual fue rechazado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (en adelante también "el Consejo de Estado") mediante auto de 17 de marzo de 2015, que confirmó la decisión de 13 de mayo de 2014[80].

62. El 15 de noviembre de 2017, el Consejo de Estado acogió la demanda y declaró la nulidad de las decisiones de la Sala Disciplinaria de 9 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014, subsecuentemente ordenando a la Procuraduría General el pago al señor Petro de "los salarios y prestaciones dejados de percibir por el accionante durante el tiempo que estuvo efectivamente separado del servicio". El Consejo de Estado sostuvo que las resoluciones impugnadas estaban viciadas de nulidad debido a la "(i) falta de competencia del ente que impuso la sanción, garantía mínima del derecho al debido proceso del señor [Petro] y (ii) violación al principio de tipicidad de la falta disciplinaria que guarda relación estricta con el

---

[76] *Cfr.* Sentencia No. T-976/14 de la Corte Constitucional de Colombia de 18 de diciembre de 2014.

[77] Dentro de las decisiones confirmadas, se encuentran la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de 30 de abril de 2014, y tres decisiones emitidas por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 9 y 11 de abril de 2014, respectivamente, que también habían rechazado acciones de tutela.

[78] *Cfr.* Sentencia No. T-976/14 de la Corte Constitucional de Colombia de 18 de diciembre de 2014.

[79] Resolución de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 13 de mayo de 2014 (expediente de prueba, folios del 4959 al 4988).

[80] *Cfr.* Resolución de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 (expediente de prueba, folios del 4990 al 5085).

principio de legalidad de la sanción"[81]. En cuanto a la solicitud de reintegro en el cargo de Alcalde de Bogotá, el Consejo de Estado adujo que esta "carece de objeto" porque el señor Petro ya había sido reincorporado como consecuencia de la resolución de 13 de mayo de 2014. Asimismo, en la parte dispositiva de su sentencia, el Consejo de Estado dispuso lo siguiente:

> […] EXHORTAR al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que en un plazo, no superior a dos (2) años, contando a partir de la notificación de esta providencia, implemente las reformas a que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el orden interno, con fundamento en las consideraciones emitidas y la *ratio decidendi* de esta sentencia"[82].

C. Proceso disciplinario ante la Procuraduría General por la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial

63. El 26 de agosto de 2013, el señor Petro expidió el Decreto 364 en su condición de Alcalde de Bogotá. Mediante este Decreto, se modificaron "excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C.", debido a "[c]ambios en las proyecciones y composición de la población de Bogotá" y a la "[n]ecesidad de ejecutar proyectos de impacto en la movilidad de la ciudad", con el objeto de "[i]ntegrar la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático al ordenamiento territorial" y "[a]rmonizar el ordenamiento del suelo rural con las normas nacionales"[83].

64. Con ocasión de una acción de nulidad interpuesta por el ciudadano JJM, el 27 de marzo de 2014, el Consejo de Estado decretó "la suspensión provisional del Decreto Distrital 364 de 26 de agosto de 2013"[84] Con base en una denuncia presentada el 26 de septiembre de 2013, el Procurador General dispuso "la apertura de una investigación disciplinaria" contra el señor Petro, mediante auto de 16 de mayo de 2014[85]. El 19 de agosto de 2014, "se dispuso el cierre de la investigación disciplinaria, advirtiéndose que se otorgaba el recurso de reposición". El 21 de agosto de 2014, se notificó dicha decisión. El 2 de septiembre de 2014, "el auto de cierre fue objeto de impugnación por el apoderado del disciplinado", recurso que fue resuelto por auto de 26 del indicado mes y año.

65. El 10 de agosto de 2015, la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el señor Petro por haber incumplido "las normas constitucionales, legales y reglamentarias que le imponían el deber de acatar la decisión del Concejo Distrital en lo que se refiere a la aprobación de los proyectos de acuerdo puestos a consideración del cuerpo colegiado", como consecuencia de la adopción "de manera excepcional" del Decreto 364 de 26 de agosto de 2013. En función de lo anterior, se acusó al señor Petro de haber violado el numeral 1 del

---

[81] Resolución de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 (expediente de prueba, folios del 4990 al 5085).

[82] Resolución de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 (expediente de prueba, folios del 4990 al 5085).

[83] Decreto Distrital No. 364 de 26 de agosto de 2013, por "el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004".

[84] Resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 27 de marzo de 2014 (expediente de prueba, folios del 6893 al 6933).

[85] *Cfr.* Resolución del Procurador General de la Nación de 27 de junio de 2016 (expediente de prueba, folios del 837 al 921).

artículo 34 del Código Disciplinario Único. El 27 de junio de 2016, el Procurador General sancionó al señor Petro "en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá, por la falta grave a título de dolo, con DOCE MESES DE SUPENSIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL por el mismo término"[86].

66. Esta decisión fue impugnada por la defensa del señor Petro. En virtud de dicha impugnación, la Procuraduría General declaró la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos, con lo cual el fallo disciplinario quedó sin efectos. El plazo para revaluar los cargos prescribió, por lo que, mediante auto de 16 de septiembre de 2019, la Procuraduría General dispuso el archivo del proceso[87] .

D. Multa de la Superintendencia de Industria y Comercio

67. El 4 de abril de 2013, mediante Resolución No. 14902, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC (en adelante también "Delegatura de la SIC") abrió una investigación y formuló pliego de cargos con base en las denuncias por parte de operadoras privadas del sector de aseo sobre la presunta comisión de prácticas restrictivas de la libre competencia, a fin de determinar si la UAESP, la EAAB y Aguas de Bogotá "actuaron en contravención a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 10 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992"[88]. Además de dichas entidades, la investigación involucró al señor Petro y a varios funcionarios de la UAESP, a título personal.

68. A través de la Resolución No. 43307 de 26 de julio de 2013, la Delegatura de la SIC incorporó al proceso a la empresa LIME como tercera interesada. El 27 de diciembre de 2013, mediante Resolución No. 6083, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo aceptó "el impedimento" manifestado por el Superintendente de Industria y Comercio para conocer de todos los asuntos vinculados a la investigación. El 16 de enero de 2014, mediante el Decreto 056, se designó al Superintendente de Sociedades, el señor LVC, como Superintendente de Industria y Comercio *Ad-hoc* "para conocer y decidir cualquier asunto relacionado con la investigación"[89]. El 7 de febrero de 2014, el señor Petro presentó una solicitud de nulidad, que amplió mediante comunicación del día 14 del mismo mes y año.

69. En su informe de investigación, la Delegatura de la SIC recomendó "sancionar a la UAESP, la [EAAB] y Aguas de Bogotá, por considerar que sus conductas constituyeron una violación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959", así como que fuera archivado el caso en lo concerniente al cargo por la violación del artículo 47, numeral 10, del Decreto 2153 de 1992. Asimismo, en el informe la Delegatura de la SIC alegó que los investigados "diseñaron e implementaron un esquema de prestación del servicio de aseo en Bogotá, en virtud del cual una empresa distrital [...] asumiría el 100% de la prestación del servicio de aseo en la ciudad [...], impidiendo que cualquier otro prestador del servicio ingresara o se mantuviera en el mercando sin la autorización de la UAESP". La Delegatura de la SIC argumentó que se impusieron "condiciones injustificadas" para que los operadores privados que antes habían

---

[86] Resolución del Procurador General de la Nación de 27 de junio de 2016 (expediente de prueba, folios del 837 al 921).

[87] Gráficas sobre los procesos fiscales y disciplinarios adelantados contra el señor Petro (expediente de prueba, folios del 7807 al 7812).

[88] Resolución No. 53788 de la Superintendencia de Industria y Comercio de 3 de septiembre de 2014 (expediente de prueba, folios del 974 al 1078).

[89] Resolución No. 53788 de la Superintendencia de Industria y Comercio de 3 de septiembre de 2014 (expediente de prueba, folios del 974 al 1078).

prestado el servicio accedieran al mismo, como la necesidad de suscribir un contrato con la UAESP.

70. El 7 de abril de 2014, se escuchó al Consejo Asesor de Competencia del Superintendente de Industria y Comercio, quien recomendó sancionar a los investigados por la violación de la Ley 155 de 1959. El 21 de abril de 2014, el Superintendente de Industria y Comercio *ad-hoc* emitió la Resolución No. 25036 en la que estableció la responsabilidad tanto de la UAESP, la EAAB y Aguas de Bogotá por la transgresión del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 como de las personas naturales involucradas por la violación del artículo 4, numeral16, del Decreto 2153 de 1992, imponiendo las siguientes multas: a) UAESP ($17.864.000.000); b) EAAB ($61.600.000.000); c) Aguas de Bogotá ($2.217.500.000); d) señor Petro ($410.256.000), y e) resto de investigados (multas desde $40.040.000 a $410.256.000). De igual modo, en la referida resolución se ordenó a la UAESP, la EAAB y Aguas de Bogotá "adecuar el esquema de recolección de basuras vigente" en un plazo de seis meses, y "abstenerse de realizar [...] cualquier conducta encaminada a bloquear o limitar la permanencia de competidores en el mercado de prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá"[90].

71. El 9 de mayo de 2014, el señor Petro interpuso recurso de reposición contra la Resolución 25036. El 16 de junio de 2014, el señor Petro presentó una solicitud de recusación respecto al Superintendente de Industria y Comercio *ad-hoc*, la cual fue rechazada mediante resoluciones Nos. 32186 y 32896. El señor Petro solicitó la nulidad de dichas resoluciones y presentó además un recurso de revocatoria directa, solicitudes que fueron negadas por el Superintendente de Industria y Comercio *ad-hoc*. El 3 de septiembre de 2014, la SIC emitió la Resolución No. 53788, mediante la cual resolvió el recurso de reposición, confirmando "en todas sus partes la Resolución No. 25036 de 2014", con la excepción de que bajó los montos de la multa impuesta a dos de las personas investigadas. En su decisión, la SIC ponderó lo siguiente:

> "[...] [L]a conducta desplegada por los investigados de no respetar el principio de libre concurrencia al mercado de prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, llevó a que varias empresas perdieran la calidad de prestadores, y pasaran a ser operadores, como única alternativa para no verse excluidas totalmente del mismo (por lo menos mientras la UAESP quiera mantenerles el contrato, según su libre albedrío)".
>
> "[...] [N]o son de recibo para esta Superintendencia los argumentos expuestos por los recurrentes respecto a la ineficiencia de implementar un esquema de libre competencia [...] como causal para exonerar de toda responsabilidad a los Investigados [...]. Nótese que fueron el constituyente y el legislador quienes escogieron los modelos para prestar los servicios públicos en Colombia, sin que sea viable que un ciudadano o una empresa (pública o privada) los desconozca bajo el argumento de que no los consideran eficientes. Si los investigados consideran inadecuado o insuficiente el modelo escogido por el constituyente y el legislador, lo que deben hacer no es incumplirlo o desplegar mecanismos de "autotutela" para apartarse de él, sino promover un debate legislativo que lleve al cambio de modelo escogido por la Constitución y la ley, conforme a las vías democráticas previstas en el régimen legal colombiano".

[90] Resolución No. 53788 de la Superintendencia de Industria y Comercio de 3 de septiembre de 2014 (expediente de prueba, folios del 974 al 1078).

1. El 3 de mayo de 2019, el señor Petro interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la multa impuesta por la SIC, cuyo fondo se encuentra pendiente de ser resuelto[91]

E. Proceso ante la Contraloría por la modificación de las tarifas del servicio de transporte

72. El 23 de julio de 2012, el señor Petro expidió el Decreto 356 en su condición de Alcalde de Bogotá. Mediante este decreto, se fijó en $1.700,00 pesos colombianos "la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros del componente troncal" del Sistema Integrado de Transporte Público y en $1.400,00 pesos colombianos la tarifa correspondiente al "componente zonal"; adicionalmente, se establecieron descuentos, *inter alia*, para las personas mayores con una edad superior a los 62 años[92].

73. El 27 de agosto de 2012, el Contralor de Bogotá, D.C. (en adelante "el Contralor") ordenó abrir una indagación preliminar contra el señor Petro debido a "la reducción de tarifas de transporte público en el Sistema Transmilenio, dispuesta a través del Decreto 356"[93], ascendente a $64.063.000.000.00 pesos colombianos. El 26 de diciembre de 2012, se expidió auto de apertura al proceso de responsabilidad fiscal. El 22 de julio de 2013, se agregó al proceso "la reducción de los ingresos en el Sistema Integrado de Transporte Público" desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 28 de abril de 2013, ascendente a $46.743.160.150.00 pesos colombianos. El 25 de febrero de 2014, se agregó la reducción por el mismo concepto, pero respecto al período del 29 de abril al 30 de octubre de 2013, estimada en $76.732.822.520.00 pesos colombianos.

74. El 27 de junio de 2016, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría (en adelante también "Dirección de Responsabilidad Fiscal") emitió el Fallo No. 1, en el que "resolvió fallar con responsabilidad fiscal"[94] contra el señor Petro, otras personas y algunas compañías aseguradoras, en calidad de garantes solidarios de la suma de $217.204.847.989 pesos colombianos[95], con base en el "detrimento patrimonial" causado por la "rebaja generalizada de tarifas del servicio de transporte urbano masivo de pasajeros del Sistema Transmilenio y del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público"[96].

75. El 15 y 18 de julio de 2016, el señor Petro y otros investigados solicitaron la nulidad del referido fallo, la cual fue rechazada por la Dirección de Responsabilidad Fiscal el 25 de julio

---

91 Gráficas sobre los procesos fiscales y disciplinarios adelantados contra el señor Petro (expediente de prueba, folios del 7807 al 7812).

92 *Cfr.* Decreto No. 356 de 23 de julio de 2012, "por el cual se establece la tarifa del servicio de transporte urbano masivo de pasajeros del Sistema TransMilenio y del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público "SITP" en el Distrito Capital".

93 Fallo No. 1 de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C. de 27 de junio de 2016 (expediente de prueba, folios del 5601 al 5956).

94 Resolución No. 4501 de la Contraloría de Bogotá D.C. de 29 de noviembre de 2016 (expediente de prueba, folios del 923 al 972).

95 *Cfr*. Fallo No. 1 de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C. de 27 de junio de 2016 (expediente de prueba, folios del 5601 al 5956).

96 Resolución No. 4501 de la Contraloría de Bogotá D.C. de 29 de noviembre de 2016 (expediente de prueba, folios del 923 al 972).

de 2016[97]. Transcurridos dos días, el 27 de julio, el señor Petro presentó otra solicitud de nulidad que también fue rechazada, mediante auto de 3 de agosto de 2016. Con motivo de unos recursos de reposición, el 27 de octubre de 2016, la Dirección de Responsabilidad Fiscal confirmó el Fallo No. 1[98]. El 31 de octubre de 2016, se dio traslado al Contralor de varios recursos de apelación. El 29 de noviembre de 2016, el Contralor expidió la Resolución No. 4501 mediante la cual rechazó los recursos de apelación y confirmó el Auto No. 1[99] . En la Resolución No. 4501, el Contralor señaló lo siguiente:

> "[...] El proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta en contra del doctor Petro Urrego y otros, no se llevó a cabo por el simple hecho de expedir un decreto, (….) sino por las consecuencias que conllevó la realización del conjunto de actividades económicas y jurídicas, entre otras, que causaron un detrimento durante su gestión.
>
> En efecto [...] la decisión tomada a través del Decreto 356 del 23 de julio de 2012, suscrita por Gustavo Petro Urrego, en calidad de Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. [...] sí implicó un detrimento patrimonial al Distrito Capital, por la rebaja generalizada de tarifas del servicio de transporte urbano masivo de pasajeros del Sistema Transmilenio y del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público [...], sin ajustarse al marco de sostenibilidad financiera del sistema [...].
>
> (...)[E]stá plenamente demostrado que justamente la disminución generalizada de tarifas produjo un detrimento patrimonial en cuantía de $217.204.847.989 por la transferencia de recursos del Distrito Capital [...] para cubrir el diferencial tarifario ocasionado con la rebaja general de las referidas tarifas"[100]**.**

76. El 31 de marzo de 2017, el señor Petro interpuso un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría[101]. En el marco de este recurso, el señor Petro solicitó la suspensión provisional de las decisiones de la Dirección de Responsabilidad Fiscal de 27 de junio y 27 de octubre de 2016 y de la resolución del Contralor de 29 de noviembre de 2016. Esta solicitud fue negada mediante auto de 21 de julio de 2017. Dicho auto fue recurrido por el señor Petro y, el 3 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo revocó y declaró la suspensión provisional de las indicadas decisiones. Esta sentencia fue revocada por el Consejo de Estado mediante auto del 19 de noviembre de 2018. Sin embargo, mediante sentencia de 31 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca otorgó nuevamente las medidas cautelares a favor del señor Petro[102], por lo que los efectos del fallo de responsabilidad fiscal se encuentran actualmente suspendidos y el fondo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está pendiente de ser resuelto.

---

97 Auto de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C. de 25 de julio de 2016 (expediente de prueba, folios del 5957 al 6010).

98 *Cfr*. Auto de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C. de 27 de octubre de 2016 (expediente de prueba, folios del 6011 al 6123).

99 *Cfr.* Resolución No. 4501 de la Contraloría de Bogotá D.C. de 29 de noviembre de 2016 (expediente de prueba, folios del 923 al 972).

100 Resolución No. 4501 de la Contraloría de Bogotá D.C. de 29 de noviembre de 2016 (expediente de prueba, folios del 923 al 972).

101 *Cfr.* Resolución del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B de 3 de noviembre de 2017 (expediente de prueba, folios del 6349 al 6427).

102 *Cfr*. Resolución del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección B de 31 de enero de 2019.

F. Marco normativo aplicable

77. En relación con el marco jurídico relevante para el presente caso, la Corte constata los siguientes hechos: a) que el artículo 277.6 de la Constitución Política de Colombia señala que el Procurador General tendrá el poder de "[e]jercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular", y el artículo 278 señala que podrá ejercer "directamente las siguientes funciones: [...] [d]esvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones [...]"[103]; b) que las facultades disciplinarias del Procurador General están reguladas en el Código Disciplinario Único, cuyo artículo 44 establece la destitución e inhabilidad como sanciones y cuyo artículo 45 dispone las implicaciones de dichas sanciones[104]; c) que el artículo 38 del referido Código establece que "[h]aber sido declarado responsable fiscalmente" constituye una inhabilidad para ocupar cargos públicos[105]; d) que el 24 de octubre de 2018 la Corte Constitucional emitió la sentencia C-101/18, mediante la cual se pronunció sobre el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías y sobre los alcances del artículo 23.2 de la Convención Americana[106]; y e) que la Ley 1864 de 2017 modificó el Código Penal para incluir delitos relacionados con los mecanismos de participación

---

[103] El artículo 277 dispone expresamente lo siguiente: "El Procurador General de la Nación, por si o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: […] 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley […]". Por su parte, el artículo 278 establece lo siguiente: "El Procurador General de la Nación ejercerá directamente las siguientes funciones: 1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo [...]". Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No. 114 de 4 de julio de 1991.

[104] El artículo 44 del Código Disciplinario Único establece las siguientes clases de sanción: a) destitución e inhabilidad general respecto a las "faltas gravísimas o realizadas con culpa gravísima"; b) suspensión e inhabilidad especial para "las faltas graves dolosas o gravísimas culposas"; c) suspensión para las "faltas graves culposas"; d) multa para las "faltas leves dolosas", y e) amonestación escrita para las "faltas leves culposas"[104]. Asimismo, este artículo señala que la culpa será "gravísima" cuando se incurre en la falta por "ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento", y será "grave" cuando derive de la "inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones". Por su parte, el artículo 45 del indicado código define los tipos de sanción: "[...] 1. La destitución e inhabilidad general implica: a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución, o c) La terminación del contrato de trabajo, y d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo. 3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida". Ley 734 de 2002, por la cual "se expide el Código Disciplinario Único". Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002.

[105] Al respecto, el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 dispone que la "Contraloría General de la República publicará con periodicidad trimestral un boletín que contendrá los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él [...]". Ley 610 de 2000, por la cual "se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías". Diario Oficial No. 44.133 de 18 de agosto de 2010.

[106] *Cfr.* Sentencia No. C-101/18 de la Corte Constitucional de Colombia de 24 de octubre de 2018.

democrática, tipificando como delito la "elección ilícita de candidatos"[107]. En lo pertinente, el Tribunal se referirá a los aspectos relacionados con dicha normativa.

VII
FONDO

78. El Tribunal advierte que la principal controversia planteada en el presente caso es determinar si la destitución e inhabilitación ordenadas por la Procuraduría en el primer proceso disciplinario, el procedimiento y el marco normativo que las sustentan, así como los recursos intentados para combatirlas, constituyeron una violación a los derechos políticos, las garantías judiciales, y la protección judicial del señor Petro en relación la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, así como un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno por parte del Estado. También corresponde determinar si los efectos de la sanción impuesta contra el señor Petro habrían constituido una violación a su derecho a la integridad personal. El análisis también tomará en cuenta aquellas cuestiones de fondo planteadas por la Comisión y los representantes relacionadas con el proceso ante la SIC, el proceso ante la Contraloría por la reducción de las tarifas del servicio de transporte público Transmilenio, y ante la Procuraduría por los cambios al Plan de Ordenamiento Territorial. En razón de ello, la Corte analizará el fondo del presente caso en dos capítulos. En el primer capítulo, evaluará lo siguiente en relación con la presunta víctima: a) la presunta violación a los derechos políticos, y b) la presunta violación a las garantías judiciales y la protección judicial. En un segundo capítulo, se analizará: c) la presunta violación al derecho a la integridad personal.

VII-1
DERECHOS POLÍTICOS[108], A LAS GARANTÍAS JUDICIALES[109] Y LA PROTECCIÓN JUDICIAL[110] EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY[111], LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO[112]

A. Alegatos de la Comisión y de las partes

79. La ***Comisión*** consideró que la sanción de destitución e inhabilitación de un funcionario de elección popular por infracciones meramente administrativas que no constituyen delitos, no satisface el estándar de proporcionalidad estricta en virtud del grado de afectación a los derechos políticos, y además constituye una afectación a la libre expresión de la voluntad de los electores mediante el sufragio universal. Asimismo, consideró que del artículo 23.2 se desprende la existencia de una regla clara conforme a la cual la sanción de inhabilitación para

---

107 En el artículo 4 de la citada ley se dispuso la modificación del artículo 389 del Código Penal a fin de establecer el tipo penal de elección ilícita de candidatos, que consiste en lo siguiente: "[…] Artículo 389A. Elección ilícita de candidatos. El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes". Ley 1864 de 2017, por la cual "se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática". Diario Oficial No. 50.328 de 17 de agosto de 2017.

108 Artículo 23 de la Convención Americana.

109 Artículo 8 de la Convención Americana.

110 Artículo 25 de la Convención Americana.

111 Artículo 24 de la Convención Americana.

112 Artículo 2 de la Convención Americana.

ser elegido en un cargo de elección popular no puede ser impuesta sino a través de una condena penal en firme y no por la vía administrativa. En el caso, la Comisión observó que las sanciones al señor Petro por parte de la Procuraduría no fueron impuestas por un tribunal penal, mediante condena en firme, como lo exigen los estándares de la Convención. Adicionalmente, consideró que la Procuraduría no es la autoridad adecuada para imponer sanciones severas de esa naturaleza, debido a su naturaleza administrativa, y que las faltas disciplinarias en que incurrió el señor Petro no alcanzaron a constituir delito penal.

80. La Comisión alegó que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención no se limitan a procesos penales, sino que se aplican a procesos de otra naturaleza. De esta forma, sostuvo que las garantías de independencia, competencia e imparcialidad deben ser satisfechas por las autoridades que tengan en su conocimiento procesos disciplinarios sancionatorios, al constituir una función materialmente jurisdiccional. En el caso, la Comisión consideró lo siguiente: a) que el proceso disciplinario que impuso sanciones de inhabilitación y destitución fue realizado de tal forma que el mismo órgano emitió tanto los pliegos de cargos como la sanción, lo cual resultó problemático en relación con la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia; b) que el hecho de que la misma autoridad que resolvió sobre la decisión sancionatoria resolviera el recurso de reposición no satisface los requisitos mínimos previstos por el artículo 8.2.h) de la Convención; c) que el hecho de que transcurrieran más de 3 años y 6 meses desde la interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo sancionatorio, y que no haya sido resuelto a la fecha de la emisión del Informe de Fondo, implicó una violación a la garantía del plazo razonable; d) finalmente, alegó que el hecho de que el señor Petro no pudiera presentar pruebas luego de la sanción le impidió desarrollar por vía administrativa su alegato de discriminación, por lo que la legislación debía permitir presentar prueba sobre ese extremo.

81. Asimismo, en relación con el artículo 2 de la Convención, la Comisión consideró que la violación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno se configura por la vigencia y aplicación al caso de las normas de la Constitución Política y del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular, así como de la reciente penalización de la conducta de ser elegido estando inhabilitado mediante decisión disciplinaria o fiscal. En ese sentido, manifestó que resulta "sumamente preocupante la reciente promulgación del artículo 5 de la Ley 1864", la cual sanciona con pena de prisión a quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado por decisión "judicial, disciplinaria o fiscal". Finalmente, recordó que aun cuando la Corte Constitucional ya estableció que la facultad del Procurador de inhabilitar por vía disciplinaria no viola la Convención, esta interpretación es incompatible con los estándares fijados por la Corte y la Comisión.

82. En consecuencia, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación a los artículos 23.1 y 23.2, 8.1, 8.2, 8.2.h) y 25.1 de la Convención en relación con los artículos 24, 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Petro.

83. Los ***representantes*** alegaron que, conforme a la Convención Americana, los derechos políticos están protegidos en toda circunstancia, y solo pueden ser suspendidos o derogados en atención a lo dispuesto por el artículo 23.2 de la Convención. En ese sentido, manifestaron que los requisitos que deben atenderse cuando se trata de una restricción de los derechos políticos por vía de sanción son: a) que exista condena; b) que dicha condena sea impuesta por un juez competente; y c) que la sanción proceda de un proceso penal. Los representantes afirmaron que en la Convención Americana los derechos políticos gozan de una protección reforzada, pues no pueden ser suspendidos ni aún en estados de emergencia y, además, son

derechos esenciales para la consolidación de un régimen democrático. En el caso, los representantes alegaron que el proceso disciplinario que regula el Código Disciplinario Único, y por lo tanto la sanción impuesta al señor Petro por parte de la Procuraduría, atentó contra sus derechos políticos al ser impuesta por una autoridad administrativa, y que su conducta no alcanzar a tener la condición de una infracción penal.

84. Concatenado con lo anterior, los representantes alegaron que el Estado es responsable por la violación al 23 de la Convención en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, en razón de la existencia de un régimen legal violatorio de la Convención Americana y una interpretación judicial contraria al régimen convencional. En concreto, expresaron que el Código Disciplinario Único, la Ley 610 de 2000 por la cual se reglamentan los procesos de responsabilidad fiscal, el Código Penal en lo relacionado con la protección de los mecanismos de participación democrática (Ley 1864), y la interpretación de las facultades disciplinarias realizada por la Corte Constitucional, son contrarios a la Convención Americana y al deber de realizar un control de convencionalidad, de conformidad con las interpretaciones de la Corte Interamericana. Asimismo, los representantes manifestaron que las sanciones que fueron impuestas al señor Petro perseguían un fin discriminatorio en razón de su ideología política, pues estas acciones estaban dirigidas a restringir su participación en las elecciones presidenciales de 2018. Además, concluyeron que las acciones discriminatorias seguidas en contra del señor Petro constituyeron un acto de desviación de poder, carecen de los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y que estos actos discriminatorios continúan ejerciéndose.

85. En relación con las garantías judiciales y la protección judicial, los representantes argumentaron que las violaciones relacionadas con los derechos políticos del señor Petro se enmarcan en las siguientes circunstancias: a) la ausencia de la garantía de imparcialidad y el principio de presunción de inocencia, pues el régimen constitucional permite que los procesos se adelanten en el marco de una única instancia, siendo el Procurador quien investiga, emite la sanción y ante quien se impone un solo recurso; b) se vulneró el derecho a la defensa frente a la ausencia de oportunidad probatoria, pues el señor Petro no tuvo oportunidad de demostrar la motivación discriminatoria del proceso; c) se vulneró el derecho a un recurso adecuado y efectivo, porque el recurso de reposición no satisface los requisitos del artículo 25 ni los parámetros de la jurisprudencia , y d) se vulneró la garantía del plazo razonable ya que a la fecha del Informe de Fondo no se habría resuelto la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se habría presentado el 31 de marzo de 2014.

86. En consecuencia, alegaron que el Estado es responsable por la violación a los artículos 23.1, 23.2, 8.1, 8.2 y 25, en relación con los artículos 24, 1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio del señor Petro.

87. El ***Estado*** alegó que no existe a nivel internacional un estándar que señale que el único mecanismo legítimo de restricción de derechos políticos como consecuencia del ejercicio del poder sancionatorio del Estado sea el procedimiento penal, pues una interpretación sistemática, teleológica y evolutiva del artículo 23.2 de la Convención admite la restricción legítima de derechos políticos por autoridades distintas a jueces penales siempre que se respeten las garantías inherentes al debido proceso. Por otro lado, el Estado alegó que la limitación del ejercicio del control de la función pública promueve la penalización de conductas que no necesariamente constituyen delitos, y obstaculiza el control de la función pública, la transparencia y el combate a la corrupción. Expresó que estos deberes han sido formulados en una convención de carácter universal y una regional en el marco de las cuales se exige a los Estados adoptar normatividad e implementar mecanismos adecuados y efectivos para

prevenir, identificar y sancionar conductas relacionadas con la corrupción. Asimismo, el Estado alegó que el estándar establecido en el caso de *López Mendoza Vs. Venezuela* no es aplicable al presente caso porque en dicho caso el órgano que sancionó al señor López no era competente, independiente e imparcial, y además en el caso del señor Petro la sanción que le fue impuesta no se concretó en restricción alguna. En razón de ello, el Estado sostuvo que no existen fundamentos de hecho o de derecho para señalar que los derechos políticos del señor Petro fueron restringidos de manera arbitraria como resultado de los procesos disciplinarios y fiscales adelantados en su contra, y que el régimen jurídico existente en Colombia se adecua a las garantías derivadas de la Convención.

88. En relación con las garantías judiciales y la protección judicial, el Estado alegó que el hecho de que misma autoridad que formula el pliego de cargos sea la que posteriormente juzga la responsabilidad del procesado no resulta contrario a las garantías de imparcialidad y presunción de inocencia, ya que la formulación de cargos es una etapa preliminar dentro del proceso en la cual no se hace ninguna apreciación o determinación en relación con la responsabilidad del disciplinante. Asimismo, afirmó que el Código Disciplinario Único es compatible con el derecho a la defensa, y en el caso del proceso seguido en contra del señor Petro fue respetado toda vez que: a) fue notificado de todos los actos adelantados en su contra y gozó de amplias oportunidades para solicitar y controvertir pruebas; b) el fallo disciplinario fue debidamente motivado; c) la decisión de la Procuraduría de negar la prueba solicitada al señor Petro no fue arbitraria, sino que se basó en la legislación aplicable; d) tuvo a su disposición un recurso judicial adecuado y efectivo a través del cual pudo controvertir el fallo, incluyendo la supuesta motivación discriminatoria. Por otro lado, el Estado argumentó que la duración del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue razonable, dada su complejidad y alta importancia. Adicionalmente, manifestó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y la acción de tutela, son recursos judiciales efectivos. Asimismo, sostuvo que no se ha demostrado que los actos administrativos sancionatorios hayan sido emitidos como consecuencia de una desviación de poder, toda vez que los representantes no desvirtuaron la presunción de legalidad que los cobija, ni fue demostrada una discriminación por motivo de las opiniones políticas de la presunta víctima.

89. En consecuencia, el Estado concluyó que no es responsable por la violación de los artículos 23.1, 23.2, 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 24, 1.1 y 2 del mismo instrumento.

B. Consideraciones de la Corte

B.1. Derechos políticos

B.1.1. Los alcances de los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención Americana

90. La Corte ha señalado, en relación con la protección a los derechos políticos, que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención forma parte, y constituye un principio reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante "Carta de la OEA")[113]. En este sentido, la Carta de la OEA, tratado constitutivo de la organización de la cual Colombia es Parte desde

[113] *Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34, y *Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párr. 149.

el 12 de julio de 1951, establece como uno de sus propósitos esenciales "la promoción y la consolidación de la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención"[114].

91. En el Sistema Interamericano la relación entre derechos humanos, democracia representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA[115]. Dicho instrumento señala en sus artículos 1, 2 y 3 que:

> Artículo 1
> Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.
>
> Artículo 2
> El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.
>
> Artículo 3
> Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

92. La Carta Democrática Interamericana hace entonces referencia al derecho de los pueblos a la democracia, al igual que destaca la importancia en una democracia representativa de la participación permanente de la ciudadanía en el marco del orden legal y constitucional vigente, y señala como uno de los elementos constitutivos de la democracia representativa el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho[116]. Por su parte, el artículo 23 de la Convención Americana reconoce derechos de los ciudadanos que tienen una dimensión individual y colectiva, pues protegen tanto aquellas personas que participen como candidatos como a sus electores. El párrafo primero de dicho artículo reconoce a todos los ciudadanos los derechos: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a funciones públicas de su país[117].

---

114 Artículo 2.b de la Carta de la Organización de Estados Americanos.

115 *Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. México, supra,* párr. 142, y *Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302., párr. 150.

116 *Cfr. Caso López Lone y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 151.

117 *Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 195 a 200, y *Caso Argüelles y Otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr. 221.

93. El ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención[118]. Además, de conformidad con el artículo 23 convencional, sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de "oportunidades". Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos[119]. Los derechos políticos y su ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político[120]. Por lo tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación[121]. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa o, en general, para intervenir en asuntos de interés público, como por ejemplo la defensa de la democracia[122].

94. Por otro lado, la Corte recuerda que los derechos políticos no son absolutos, de forma tal que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones. Sin embargo, la facultad de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. En este sentido, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a los derechos reconocidos en el párrafo 1 de dicho artículo, "exclusivamente" en razón de la "edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal"[123]. Asimismo, cabe recordar que, como lo establece el artículo 29 de la Convención, ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella.

95. La Corte advierte que la Comisión y las partes sostienen interpretaciones divergentes respecto al alcance del artículo 23.2 de la Convención, en particular sobre si dicho artículo admite restricciones a los derechos políticos de autoridades democráticamente electas como resultado de sanciones impuestas por autoridades distintas a un "juez competente, en proceso penal", y las condiciones en que dichas restricciones podrían ser válidas. Al respecto, el Tribunal recuerda que en el caso *López Mendoza Vs. Venezuela* se pronunció sobre el alcance de las restricciones que impone el artículo 23.2 respecto de la inhabilitación del señor Leopoldo López Mendoza por parte del Contralor General de la República, mediante la cual le fue prohibida su participación en las elecciones regionales del año 2008 en Venezuela. En aquel precedente, la Corte señaló lo siguiente:

---

118 *Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. México, supra*, párr. 143, y *Caso López Lone y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 162.

119 *Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra*, párr. 195, y *Caso López Lone y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 162.

120 *Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra*, párr. 192, y *Caso López Lone y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 162.

121 *Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra*, párr. 195, y *Caso López Lone y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 162.

122 *Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra*, párr. 195, y *Caso López Lone y otros Vs. Honduras, supra*, párr. 162.

123 *Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra*, párrs. 195 a 200, y *Caso Argüelles y Otros Vs. Argentina, supra*, párr. 222.

> 107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una "condena, por juez competente, en proceso penal". Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un "juez competente", no hubo "condena" y las sanciones no se aplicaron como resultado de un "proceso penal", en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana[124].

96. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal. El Tribunal considera que la interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores[125].

97. Esta interpretación literal resulta corroborada si se acude al objeto y fin de la Convención para comprender los alcances del artículo 23.2 del mismo instrumento. La Corte ha afirmado que el objeto y fin de la Convención es "la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos"[126], así como la consolidación y protección de un ordenamiento democrático[127]. El artículo 23.2 de la Convención corrobora esa finalidad, pues autoriza la posibilidad de establecer regulaciones que permitan la existencia de condiciones para el goce y ejercicio de los derechos políticos. De igual forma lo hace la Declaración Americana en su artículo XXVIII, en el sentido de que reconoce la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio de los derechos políticos cuando estos son "necesarios en una sociedad democrática". Para los mismos efectos, resulta relevante el artículo 32.2 de la Convención en el sentido de que establece que "[l]os derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática".

98. La interpretación teleológica permite resaltar que, en las restricciones a los derechos reconocidos por la Convención, debe existir un estricto respeto de las debidas garantías convencionales. La Corte considera que el artículo 23.2 de la Convención, al establecer un listado de posibles causales para la limitación o reglamentación de los derechos políticos, tiene

---

124 *Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, párr. 107.

125 *Cfr.* Peritaje de Roberto Gargarella rendido durante la audiencia pública del caso (expediente de fondo, folio 1553). El perito Gargarella expresó en este sentido que el artículo 23.2 es "clarísimo" en el sentido que las palabras "condena", por "juez competente" en "proceso penal" "significa exactamente lo que todos entendemos por eso, que es lo que sostuvo contundentemente la Corte en *López Mendoza* (una afirmación perfectamente aplicable a nuestro caso)".

126 *Cfr. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.* Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 29, y *Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párr. 91.

127 *Cfr. Caso Castañeda Gutman Vs. México, supra*, párrs. 141 y 142.

como objeto determinar criterios claros y regímenes específicos bajo los cuales dichos derechos pueden ser limitados. Lo anterior busca que la limitación de los derechos políticos no quede al arbitrio o voluntad del gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas. De esta forma, el Tribunal considera que las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por parte de una autoridad administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a los derechos políticos no contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención Americana, son incompatibles no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento.

B.1.2. Análisis del caso concreto

99. La Corte recuerda que el 9 de diciembre de 2013 el señor Petro fue sancionado disciplinariamente por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General con una pena de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años, por haber incurrido en: a) falta gravísima contenida en el numeral 31 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, consistente en "[p]articipar en la etapa precontractual o en la etapa contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley", por la suscripción de los contratos interadministrativos 017 de 11 de octubre de 2012 y 809 de 4 de diciembre de 2012[128]; b) falta gravísima contenida en el numeral 60 del artículo 48 del mismo código, consistente en "[e]jercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante", por la expedición del Decreto 564 de 10 de diciembre de 2012[129], y c) falta gravísima contenida en el numeral 60 del artículo 48 del referido Código, consistente en "[p]roferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección […] del medio ambiente", por la adopción del Decreto 570 de 14 de diciembre de 2012[130]. Esta decisión fue confirmada por la Sala Disciplinaria el 13 de enero de 2014.

---

128 La Sala Disciplinaria consideró que este hecho fue "totalmente irregular pues las empresas contratadas para la prestación del servicio público de basura no contaban con la experiencia y la capacidad técnica y operativa para prestar el servicio púbico de aseo". La firma de estos contratos habría también constituido un "incumplimiento de varios principios de la contratación estatal", a saber: el principio de transparencia, principio de economía, principio de selección objetiva, y el principio de responsabilidad. En cuanto al dolo, se calificó que el señor Petro dio instrucciones precisas para que fueran las instituciones del Distrito las que asumieran la prestación del servicio, a pesar de las múltiples advertencias sobre la incapacidad de estas empresas para realizar dicha labor. *Cfr.* Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folio 394).

129 En concepto de la Sala Disciplinaria, "el señor alcalde mayor de Bogotá utilizó las normas del ordenamiento jurídico, que lo habilitaban para expedir actos administrativos relacionados con el servicio público de aseo, para violar el principio de libertad de empresa, aspecto este último que se constituyó una finalidad totalmente diferente a las normas constitucionales y legales que regían la materia", así como que "los principios de la función pública como la legalidad e imparcialidad se vieron seriamente afectados por haberse adoptado un esquema de aseo para la ciudad de Bogotá por fuera del ordenamiento jurídico". La Procuraduría consideró que el señor Petro actuó con dolo pues cuando expidió el Decreto 564 de 2012 conocía que imponer restricciones y limitaciones al principio de libertad de empresa era contrario al ordenamiento jurídico, siendo una prueba de ello las múltiples advertencias que directa e indirectamente le hicieron algunas entidades, entra las que se destacan la Procuraduría, la Contraloría Distrital […]". *Cfr.* Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folio 399).

130 Para la Sala Disciplinaria, al haber autorizado dicho decreto el uso de vehículos tipo volqueta para la prestación del servicio de aseo, "se violaron disposiciones constitucionales y legales referentes a la protección del medio ambiente, originándose un riesgo grave para la salud humana a de los habitantes de la ciudad de Bogotá y para el medio ambiente". Dichos actos fueron calificados como dolosos por la Procuraduría puesto que "desde antes de adoptar la decisión sabía que para la prestación del servicio de aseo se necesitaban vehículos compactadores, situación que él mismo se la refirió al entonces gerente de la EAAB […] en los meses de julio y agosto de 2012", y que "su formación profesional y su ocupación en el cargo en una de las máximas dignidades dentro de la Estructura

100. Tal como fue señalado con anterioridad, del artículo 23.2 de la Convención se desprenden los requisitos para que proceda la restricción de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23.1 como consecuencia de una sanción de destitución e inhabilitación de un funcionario público democráticamente electo. En el caso de la sanción impuesta al señor Petro, ninguno de esos requisitos se cumplió, pues el órgano que impuso dicha sanción no era un "juez competente", no hubo "condena" y las sanciones no se aplicaron como resultado de un "proceso penal", en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana. Además, la sanción de destitución –aun cuando esta haya ocurrido por un período de un mes- constituyó una restricción a los derechos políticos tanto del funcionario democráticamente electo, que no pudo continuar ejerciendo su cargo, como una afectación a los derechos de aquellas personas que lo eligieron, y en general afecta la dinámica del juego democrático al constituir una alteración de la voluntad de los electores.

B.1.2.1. La aplicación del principio de complementariedad

101. El Estado señaló que los efectos de la sanción de destitución e inhabilitación quedaron suspendidos mientras la demanda de nulidad y reestablecimiento del derecho era fallada de fondo por el Consejo de Estado, por lo que el señor Petro habría podido concluir su mandato como Alcalde de Bogotá. Asimismo, señaló que la decisión del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 –en virtud de la cual se falló sobre el fondo del asunto- expulsó del mundo jurídico los actos administrativos sancionarios expedidos por la Procuraduría, por lo que el señor Petro pudo ejercer sus derechos políticos y gozó de todas las garantías para participar en elecciones posteriores. En ese sentido, sostuvo que la declaración de nulidad de las sanciones de destitución e inhabilitación deriva en que el caso carezca de objeto, pues los actos reclamados han dejado de existir en el mundo jurídico. En consecuencia, alegó que no le corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado por violaciones ocurridas en virtud de las sanciones de la Procuraduría, y por las normas que fueron aplicadas, pues esto constituiría un control en abstracto. El Tribunal procede a analizar dicho alegato en aplicación del principio de complementariedad.

102. En razón de lo anterior, en primer lugar corresponde reiterar que el sistema interamericano comparte con los sistemas nacionales la competencia para garantizar los derechos y libertades previstos en la Convención, e investigar y en su caso juzgar y sancionar las infracciones que se cometieren; y en segundo lugar, que si un caso concreto no es solucionado en la etapa interna o nacional, la Convención prevé un nivel internacional en el que los órganos principales son la Comisión y la Corte. En este sentido, la Corte ha indicado que cuando una cuestión ha sido resuelta en el orden interno, según las cláusulas de la Convención, no es necesario traerla ante el Tribunal Interamericano para su aprobación o confirmación. Lo anterior se asienta en el principio de complementariedad, que informa transversalmente el sistema interamericano de derechos humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la Convención Americana, "coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos"[131].

---

del Estado le hacían saber que era un deber cumplir con las normas contenidas en el ordenamiento jurídico". *Cfr.* Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folio 480).

131 *Cfr. Caso Las Palmeras Vs. Colombia.Excepciones Preliminares.* Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 33, y C*aso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 14 de octubre de 2019. Serie C No. 387, párr. 57.

103. El referido carácter complementario de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa[132]. De tal manera, el Estado es el principal garante de los derechos humanos de la personas, por lo que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es él quien debe de resolver el asunto a nivel interno y, de ser el caso, reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales[133]. En este sentido, la jurisprudencia reciente ha reconocido que todas las autoridades de un Estado Parte en la Convención, tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos[134].

104. De lo anterior se desprende que en el sistema interamericano existe un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas (primariamente obligadas) y las instancias internacionales (en forma complementaria), de modo que los criterios de decisión, y los mecanismos de protección, tanto los nacionales como los internacionales, puedan ser conformados y adecuados entre sí[135]. Así, la jurisprudencia de la Corte muestra casos en que, en forma concordante con las obligaciones internacionales, los órganos, instancias o tribunales internos han adoptado medidas adecuadas para remediar la situación que dio origen al caso[136]; ya han resuelto la violación alegada[137]; han dispuesto reparaciones razonables[138], o han ejercido un adecuado control de convencionalidad[139]. En este sentido, la Corte ha señalado que la responsabilidad estatal bajo la Convención solo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reconocer, en su caso, una violación de un derecho, y de reparar por sus propios medios los daños ocasionados[140].

105. En el presente caso, el Tribunal constata que la decisión del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 concluyó que los actos administrativos sancionatorios de 9 de diciembre

---

132 *Cfr. Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre de 2014. Serie C No. 286*, párr. 137, y *Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 58.

133 *Cfr. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*, párr. 66, y C*aso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 58.

134 *Cfr. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330., párr. 93, y *Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 58.

135 *Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones*. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 143, y C*aso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 59.

136 *Cfr. Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Perú, supra,* párrs. 139 a 141, y *Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 4 de febrero de 2019. Serie C No. 373., párr. 80.

137 Véase, por ejemplo, *Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párrs. 97 a 115, y *Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador, supra*, párr. 80.

138 Véase, por ejemplo, *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, supra,* párrs. 334 a 336, y *Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador, supra*, párr. 80.

139 Véase, por ejemplo, *Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones.* Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 239, y *Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia, supra*, párr. 100.

140 *Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, supra,* párr. 143, y C*aso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 59.

de 2013 y 13 de enero de 2014, proferidos por la Procuraduría, estuvieron viciados de nulidad por la falta de competencia del ente que impuso la sanción, garantía mínima del derecho al debido proceso, y por la violación al principio de tipicidad de la falta disciplinaria que guarda relación estricta con el principio de legalidad de la sanción. En consecuencia, el Consejo de Estado decidió "[d]eclarar la nulidad" de las decisiones de 9 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014, mediante las cuales se impuso la sanción de destitución e inhabilitación general por el término de 15 años al señor Petro, y ordenó a la Procuraduría que "pague los salarios y prestaciones dejados de percibir por el accionante durante el tiempo que estuvo separado del servicio"[141]. Asimismo, ordenó que se procediera a la "desanotación de las sanciones impuestas" y exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a implementar las reformas pertinentes en la materia. En palabras del Consejo de Estado:

> "PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos: 1.Decisión de única instancia proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 9 de diciembre del 2013, mediante la cual se impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años al señor Gustavo Francisco Petro Urrego.
>
> 2. Decisión del 13 de enero del 2014, proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que resolvió no reponer y en consecuencia confirmar el fallo de única instancia del 9 de diciembre del 2013.
>
> SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que pague los salarios y prestaciones dejados de percibir por el accionante durante el tiempo que estuvo efectivamente separado del servicio, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.
>
> [...]
>
> TERCERO. OFICIAR a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para que [...] proceda a efectuar la correspondiente desanotación de las sanciones impuestas.
>
> [...]
>
> SEXTO: EXHORTAR al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación para que en un plazo, no superior a dos (2) años, contado a partir de la notificación de esta providencia, implemente las reformas a que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el orden interno, con fundamento en las consideraciones emitidas y la *ratio decidendi* de esta sentencia. Para los efectos de este numeral, comuníquese esta decisión al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la República y al señor Procurador General de la Nación."

106. El Consejo de Estado expresó que la anterior conclusión obedecía a dos razones: la "primera, porque al no ser sancionado el señor Petro por una conducta que constituyera un acto de corrupción, la Procuraduría General de la Nación contravino una disposición de rango superior (artículo 23.2 convencional) que obliga, por vía del principio *pacta sunt servanda*, a su ineludible observancia por parte de los Estados miembros de la Convención [...]", y la "segunda, porque el artículo 23.2 convencional supone la preservación del principio

[141] *Cfr.* Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 (expediente de prueba, folios del 4990 al 5085).

democrático y la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos de Bogotá en observancia del principio de soberanía popular"[142]. De esta forma, razonó que el Procurador carecía de competencia para imponer una sanción que implicó la destitución y la inhabilidad general del señor Petro debido a que sus acciones u omisiones, si bien podrían ser contrarias a derecho, no constituyeron actos de corrupción[143]. La Corte destaca que el Consejo de Estado consideró que le correspondió "como juez de convencionalidad, examinar, para este proceso, la competencia de la Procuraduría General de la Nación a la luz de las normas convencionales" y en ese sentido manifestó lo siguiente:

> "Colombia, como Estado parte del Pacto de San José de Costa Rica celebrado en 1969, se obliga a "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social", conforme al artículo 1 de la Convención, de tal manera que "si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".
>
> [...]
>
> Al ser la Corte IDH un medio de protección y el intérprete autorizado de las normas convenidas en la CADH, sus decisiones tienen efectos vinculantes y de obligatoria observancia para los Estados Partes, de tal manera que ellos están sometidos a verificar que las normas de su ordenamiento jurídico interno sean compatibles con las normas convenidas multilateralmente y que, en caso de que ello no lo sea, se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. Esto es lo que la jurisprudencia interamericana ha denominado como control de convencionalidad.
>
> [...]
>
> Ahora bien, un control de convencionalidad del artículo 44.1 de la Ley 734 del 2002, fundamento sancionatorio en el presente caso, permite advertir una incompatibilidad entre tal disposición y el artículo 23.2 convencional y concluir, de manera diáfana, que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para imponer una sanción que restringiera, casi que a perpetuidad, los derechos políticos de una persona para ser elegida en cargos de elección popular, como también para separarlo del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá para el que fue elegido mediante sufragio universal, por las siguientes razones:
>
> La primera, porque al no ser sancionado el señor Gustavo Petro por una conducta que constituyera un acto de corrupción, la Procuraduría General de la Nación contravino una disposición de rango superior (artículo 23.2 convencional) que obliga, por vía del

---

[142] Dentro de sus consideraciones, el Consejo de Estado mencionó lo siguiente: "[...][A] la luz de las facultades otorgadas por la Constitución de 1991 al poder judicial, y de la integración de estas con la salvaguarda a los derechos políticos que ostentan los servidores públicos de elección popular, es dable establecer que, a la luz del artículo 23 convencional, solo los jueces de la República resultan competentes para imponer las sanciones que impliquen la destitución y la inhabilidad general de derechos políticos cuando quiera que estas provengan de acciones u omisiones que, no obstante ser contrarias a derecho, no constituyan casos de corrupción" Resolución de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 (expediente de prueba, folio 5023).

[143] *Cfr.* Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017 (expediente de prueba, folios del 5020 y 5021).

> principio *pacta sunt servanda,* a su ineludible observancia por parte de los Estados miembros de la Convención, norma que dispone que solo un juez penal, mediante una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, puede restringir los derechos políticos de una persona.
>
> [...]
>
> La [s]egunda, porque el artículo 23.2 convencional supone la preservación del principio democrático y la preponderancia del derecho a elegir que tienen los ciudadanos de Bogotá en observancia del principio de soberanía popular, de tal manera que mantener vigente una sanción que restringe los derechos políticos del elegido no solamente implicaría cercenar derechos del sancionado, sino también hacer nugatorios los derechos políticos de sus electores que, como constituyente primario, han acordado definir los medios y las formas para autodeterminarse, elegir a sus autoridades y establecer los designios y las maneras en los que habrán de ser gobernados.
>
> [...]
>
> Conforme con lo dicho, la Procuraduría General de la Nación mantiene incólume sus funciones de investigación y sanción a servidores públicos de elección popular. No obstante, no le está permitido sancionar con destitución e inhabilidad o suspensión e inhabilidad para el ejercicio de derechos políticos a servidores públicos elegidos popularmente por conductas diferentes a las catalogadas como actos de corrupción, pues, en esos casos, corresponderá a la Procuraduría General de la Nación poner en conocimiento de la justicia penal, para que en un debido proceso se imponga una condena, si el hecho amerita ser sancionado penalmente por la actuación del servidor".

107. En relación con lo anterior, la Corte recuerda que el control de convencionalidad ha sido concebido como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal[144]. El control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención[145], los cuales deben, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados[146]. Los jueces y órganos judiciales deben prevenir potenciales violaciones a derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, o bien solucionarlas a nivel interno cuando ya hayan ocurrido,

---

144 Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer *ex officio* un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. *Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. *Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, y *Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra*, párr. 269.

145 *Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220., párr. 225, y *Caso Gelman Vs. Uruguay, supra*, párr. 239.

146 *Cfr. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128, y *Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú*, *supra,* párr. 269.

teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana[147]. Solo en caso contrario pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control complementario de convencionalidad. En ese sentido, un adecuado control de convencionalidad a nivel interno fortalece la complementariedad del Sistema Interamericano y la eficacia de la Convención Americana al garantizar que las autoridades nacionales actúen como garantes de los derechos humanos de fuente internacional[148].

108. En ese sentido, la Corte considera que la decisión del Consejo de Estado constituyó un adecuado y oportuno control de convencionalidad de las sanciones de destitución e inhabilitación impuestas en contra del señor Petro por parte de la Procuraduría, en tanto cesó y reparó las violaciones a los derechos políticos que ocurrieron en perjuicio del señor Petro como resultado de dichas sanciones. El Consejo de Estado tomó debida consideración de los estándares desarrollados por este Tribunal en relación con los límites a las restricciones permitidas por el artículo 23.2 de la Convención, para así garantizar adecuadamente los derechos políticos del señor Petro al: a) declarar la nulidad de dicha sanción; b) ordenar el pago de los salarios dejados de percibir por el tiempo separado de su cargo; c) ordenar la desanotación de las sanciones impuestas; y d) exhortar al gobierno a realizar las reformas dirigidas a lograr la compatibilidad de las facultades del Procurador con el artículo 23 de la Convención Americana. Asimismo, la sentencia del Consejo de Estado reconoció que en el caso concreto no sólo fueron afectados los derechos políticos del señor Petro, sino que la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría vulneraba el principio democrático y los derechos políticos de sus electores, lo cual resultaba contrario al artículo 23.2 convencional. Pese a ello, en coincidencia con lo manifestado en el párrafo 100 (*supra* párr. 100), si bien es encomiable la decisión del Consejo de Estado, la Corte advierte que, por la naturaleza del derecho afectado, no fue subsanada totalmente la violación, pues el derecho al ejercicio de un cargo de elección popular fue interrumpido durante más de un mes por la sanción impuesta por la Procuraduría.

109. Sentado lo anterior, el Tribunal procederá a analizar aquellos hechos que no fueron cubiertos por la sentencia del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017, pero que, habiendo sido alegados por la Comisión o los representantes ante esta Corte, pudieron constituir violaciones a la Convención Americana en perjuicio del señor Petro. En ese sentido, el Tribunal advierte que el Consejo de Estado exhortó a diversas instancias del gobierno para realizar aquellas reformas legislativas dirigidas a "poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana" en relación con las facultades del Procurador. De esta forma, si bien cesaron las violaciones a los derechos

---

147 *Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, supra,* párr. 143, y C*aso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 58.

148 Véase, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador de 17 de septiembre de 2014, en la cual se señaló lo siguiente: "En virtud de la irradiación constitucional que experimenta el ordenamiento jurídico ecuatoriano, dentro del cual no solo existe un reconocimiento expreso de la supremacía constitucional, sino también de la jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el control de convencionalidad se constituye en un mecanismo básico para la garantía de los derechos, en tanto permite que los órganos jurisdiccionales no se limiten a un análisis de sus disposiciones internas, sino que además recurran a los instrumentos internacionales y la interpretación efectuada de estos, a fin de dotar de contenido integral a los derechos, por ende a la dignidad humana, de lo que se deriva un control integral sobre el respeto a los derechos constitucionales/humanos." *Cfr.* Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia No. 003-14-SIN-CC, 17 de septiembre de 2014, pág. 20. Véase también, Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia No. 113-14-SEP-CC, 30 de julio de 2014; Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia No. 146-14-SEP-CC, Caso No. 1773-11-EP, 1 de octubre de 2014;Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), Jurisprudencia 1ª./J 4/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 1, publicada el 19 de febrero de 2016; y Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina), "Mazzeo, Julio Lilio s/recurso de casación e inconstitucionalidad", sentencia del 13 de julio de 2007, Fallos 330.3248.

políticos de la presunta víctima en virtud de la sentencia del Consejo de Estado, en definitiva, el Estado no ha reparado integralmente el hecho ilícito, pues no ha modificado las normas jurídicas que permitieron la imposición de dichas sanciones, las cuales se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. En razón de lo anterior, en primer lugar, corresponde abordar el alegato de los representantes respecto a la existencia de un régimen legal inconvencional a partir del artículo 23 de la Convención Americana en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia de diversas disposiciones previstas en el Código Disciplinario Único, la Ley 610 de 2000, la Ley 1864 de 2017 en lo relacionado con la protección de los mecanismos de participación democrática, y la interpretación de las facultades disciplinarias realizadas por la Corte Constitucional. Posteriormente, el Tribunal se abocará a resolver la controversia subsistente respecto a las alegadas violaciones al debido proceso, la protección judicial, la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación.

B.1.2.2 Las facultades la Procuraduría y la Contraloría, y otras disposiciones legales del ordenamiento jurídico colombiano

110. Los representantes alegaron que el régimen legal que fue aplicado al señor Petro resulta violatorio del artículo 23 en relación con el artículo 2 de la Convención en lo respectivo a: "i) las facultades de la [Procuraduría] para afectar derechos políticos mediante un régimen sancionatorio que incluye la inhabilidad para el ejercicio del poder público; y ii) otro tipo de normas que cumplen el mismo efecto de inhibir la actividad política". En el marco de este alegato, los representantes hicieron referencia a los artículos 277 de la Constitución Política y los artículos 44 y 45 del Código Disciplinario Único respecto de las facultades de destitución e inhabilitación de la Procuraduría, a los artículos 38 y 66 del Código Disciplinario Único en lo que se refiere a los efectos que puede tener una sanción impuesta por órganos de control como la Contraloría o las Personerías, al artículo 60 de la Ley 610 que contempla el boletín de responsables fiscales, y al artículo 4 de la Ley 1864 de 2017 que tipifica la conducta delictiva de "elección ilícita de candidatos". También alegaron que diversas interpretaciones de la Corte Constitucional que consideran que la Procuraduría "estaría facultada para restringir o limitar derechos políticos", se encuentran en contravención con la Convención Americana. La Corte procederá a analizar dichos alegatos.

111. La Corte recuerda que el artículo 2[149] de la Convención contempla el deber general de los Estados Partes de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías[150]. En relación con los derechos reconocidos en el artículo 23 de la Convención, el deber de adecuar el derecho interno implica que las normas que prevén restricciones a los derechos políticos –o que facultan autoridades para su imposición- deben ajustarse a lo previsto en el artículo 23.2 del mismo instrumento (*supra* párrs. 90 al 98). Asimismo, respecto a la adopción de dichas prácticas, esta Corte ha reconocido que todas las autoridades de un

[149] El artículo 2 de la Convención establece lo siguiente: "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".

[150] *Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207 *y Caso Gorigoitía Vs. Argentina, supra*, párr. 55.

Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad (*supra* párrs. 103 y 107).

112. En el presente caso, el Tribunal constata que el artículo 277.6 de la Constitución Política de Colombia faculta al Procurador para "ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley". Por su parte, el artículo 278 del texto constitucional establece que el Procurador ejercerá directamente la función de "1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas [...]". La Corte observa que el primer período del inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero del artículo 278 de la Constitución de Colombia admiten la posibilidad de ser interpretados de modo compatible con la Convención Americana y con el modelo de Estado de derecho establecido por el artículo 1º de la propia Constitución[151], a condición de entender que la referencia a los funcionarios de elección popular está limitada únicamente a la potestad de vigilancia del Procurador. Conforme a la regla de que no debe declararse una norma violatoria de la Convención en tanto admita una interpretación compatible con ésta, la Corte encuentra que el inciso 6º del artículo 277, y el numeral primero del artículo 278 de la Constitución Política de Colombia, no son incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana.

113. Por otro lado, el Código Disciplinario Único prevé en sus artículos 44 y 45 la facultad de la Procuraduría para destituir e inhabilitar funcionarios públicos, y define las implicaciones de dichas sanciones en los siguientes términos: "a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución, o c) La terminación del contrato de trabajo, y d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera". La Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por "condena, por juez competente, en proceso penal", es contraria al artículo 23.2 de la Convención y al objeto y fin de la Convención (*supra* párr. 100). Por las mismas razones, la Corte concluye que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención, en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios públicos democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro.

114. Por otro lado, el Tribunal constata que el artículo 60 de la Ley 610 de 18 de agosto de 2000 señala que "la Contraloría General de la República publicará con periodicidad trimestral un boletín que contendrá los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él". Asimismo, dicho artículo señala que no se podrán posesionar en cargos públicos "quienes aparezcan en el boletín de responsables" hasta que se cancele la sanción. Para efectos del presente análisis, esta norma debe ser entendida en su relación con el artículo 38 del Código Disciplinario Único, el cual prevé que "[t]ambién constituyen

[151] *Cfr.* Constitución Política de Colombia, artículo 1. Dicho artículo señala lo siguiente: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general"

inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: [...] 4. Haber sido declarado responsable fiscalmente". De lo anterior se concluye que, aun cuando las facultades de la Contraloría no contemplan la atribución directa para destituir o inhabilitar funcionarios públicos de elección popular, las sanciones pecuniarias que pueden imponer, cuando estas resultan en la obligación de realizar el pago de una deuda fiscal de alta cuantía, como sucedió en el caso del señor Petro, pueden tener el efecto práctico de inhabilitarlo en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Disciplinario Único y de la prohibición a los funcionarios competentes de dar posesión a quienes aparezcan en el boletín de responsables fiscales.

115. En relación con lo anterior, la Corte concluye que las sanciones impuestas por la Contraloría pueden tener el efecto práctico de restringir derechos políticos, incumpliendo así las condiciones previstas en el artículo 23.2 de la Convención y que han sido reiteradas en la presente sentencia. En esa medida, el Tribunal considera que el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el artículo 38 fracción 4 del Código Disciplinario Único son contrarios al artículo 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 2 del mismo instrumento.

116. Asimismo, el Tribunal advierte que la Ley 1864 de 2017 modificó la Ley 599 del 2000 del Código Penal, para incluir delitos relacionados con los mecanismos de participación democrática. En el artículo 5 de la citada ley se dispuso la modificación del artículo 389 del Código Penal a fin de establecer el tipo penal de "elección ilícita de candidatos", que consiste en lo siguiente: "[...] El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes". La Corte nota que esta norma, si bien no reconoce facultades para la restricción de derechos políticos, ni fue aplicada en el caso concreto del señor Petro, puede generar el efecto de inhibir a una persona para postularse a un cargo público cuando haya sido objeto de una sanción disciplinaria o fiscal, constituyendo así un riesgo para sus derechos políticos y los de sus electores. En este sentido, el Tribunal considera que el artículo 5 de la Ley 1864 de 2017, en tanto puede generar el efecto de inhibir a una persona para postularse a un cargo público de elección popular cuando haya sido objeto de una sanción disciplinaria o fiscal, pues podría incurrir en un delito sancionado con una pena de 4 a 9 años de prisión, constituye un incumplimiento del artículo 23 de la Convención Americana en relación con el artículo 2 del mismo instrumento.

117. Finalmente, en lo que respecta al alegato de los representantes sobre la inconvencionalidad de las interpretaciones de las facultades disciplinarias por parte de la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal advierte que las mismas no constituyen un riesgo en sí mismo para el ejercicio de los derechos políticos del señor Petro y, por lo tanto, no constituyen una violación al artículo 23 de la Convención en relación con el artículo 2 del mismo instrumento. Sin perjuicio de ello, el Tribunal recuerda que del artículo 2 de la Convención se desprende la obligación estatal de desarrollar prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en dicho tratado. En consecuencia, es necesario que la interpretación y aplicación de las facultades disciplinarias se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la Corte recuerda que la interpretación de las normas que disponen las facultades de la Procuraduría o la Contraloría por parte de la Corte Constitucional, y de las demás autoridades del Estado colombiano, deben ser coherentes con los principios convencionales en materia de derechos políticos previstos en el artículo 23 de la Convención y que han sido reiterados en el presente caso.

B.2. Derechos a las garantías judiciales y la protección judicial

118. No obstante lo señalado anteriormente, en relación con la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de funcionarios públicos democráticamente electos, mediante las sanciones de inhabilitación y destitución, esta Corte considera oportuno entrar al análisis de las garantías aplicadas en el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro. Este Tribunal ha señalado que el artículo 8.1 de la Convención reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos; todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)[152]. De acuerdo con las disposiciones del artículo 8 de la Convención, para que en un proceso existan verdaderas garantías judiciales es preciso que se observen todos los requisitos que "sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho"[153], es decir, las "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial"[154].

119. En relación con lo anterior, si bien el artículo 8 de la Convención se titula "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, "sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales"[155] a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos[156]. De este modo, cuando la Convención alude al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", está refiriéndose a cualquier autoridad pública, ya sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas[157]. De esta forma, se desprende que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8.1 de la Convención Americana[158]. Por esta razón, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de cualquier carácter, se debe observar "las debidas garantías" que aseguren,

---

[152] *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares*, *supra*, párr. 91, y *Caso Noguera y Otra Vs. Paraguay, supra*, párr. 78.

[153] *Cfr. El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos).* Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 25; *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 147, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra*, párr. 175.

[154] *Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de enero de 2001, Serie C No. 71, párr. 69, y *Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400, párr. 294.

[155] *Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra*, párr. 174.

[156] *Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 69, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra*, párr. 174.

[157] *Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra*, párr. 71, y *Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párr. 26.

[158] *Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, supra*, párr. 71, y *Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala, supra*, párr. 26.

según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso[159]. Esto significa que el incumplimiento de una de esas garantías conlleva necesariamente una violación de dicha disposición[160].

120. Por su parte, el artículo 8.2 de la Convención establece adicionalmente las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso legal[161]. La Corte ha indicado que estas garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas[162]. En otras palabras, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal[163]. Particularmente, en el *caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala,* la Corte destacó que "el derecho disciplinario forma parte del derecho sancionador [...] en la medida en que está compuesto por un conjunto de normas que permiten imponer sanciones a los destinatarios que realicen una conducta definida como falta disciplinaria", por lo que "se acerca a las previsiones del derecho penal" y, en razón de su "naturaleza sancionatoria", las garantías procesales de este "son aplicables *mutatis mutandis* al derecho disciplinario"[164].

121. Tomando en cuenta lo anterior, respecto de la destitución por vía administrativa de funcionarios públicos, la Corte ha señalado que, por su naturaleza sancionatoria y debido a que implica una determinación de derechos, las garantías procesales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana hacen parte del elenco de garantías mínimas que deben ser respetadas para adoptar una decisión no arbitraria y ajustada al debido proceso[165]. En atención a ello, el Tribunal analizará si el proceso administrativo seguido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General contra el señor Petro cumplió con las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención.

122. La Comisión alegó que el Estado había violado el derecho del señor Petro a ser oído por un juez imparcial debido al "diseño conforme al cual la misma autoridad que formula cargos es la que decide sobre la responsabilidad disciplinaria, y la forma en la que operó en el presente caso, con la imposición de sanciones severas". Además, señaló que esto "también es contrario al principio de presunción de inocencia". Los representantes coincidieron con la Comisión y agregaron la violación del derecho de defensa por "la ausencia de oportunidad probatoria". En cambio, el Estado sostuvo que "el modelo del proceso disciplinario aplicado en el caso [...] es plenamente respetuoso de las garantías de imparcialidad y presunción de

---

159 *Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 117, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra*, párr. 176.

160 *Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, supra*, párr. 117, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra*, párr. 176.

161 *Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 74, y *Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra*, párr. 176.

162 *Cfr. Caso Baena Ricardo Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 127, y *Caso López y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de noviembre de 2019. Serie C No. 396, párr. 200.

163 *Cfr. Caso Baena Ricardo Vs. Panamá, supra*, párr. 124, y *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr. 349.

164 *Cfr. Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala, supra*, párr. 75.

165 *Cfr. Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala, supra*, párr. 79, y *Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 14 de octubre de 2019. Serie C No. 388, párr. 126.

inocencia", y que "el derecho de defensa del senador Petro fue respetado y garantizado a cabalidad".

123. De los alegatos de las partes se colige que, en lo que concierne al procedimiento disciplinario ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General, el conflicto se centra en las siguientes garantías del debido proceso: la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional, el principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa. La Corte analizará el caso concreto en el mismo orden, tomando en consideración los alegatos de los representantes respecto a la violación de la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación en perjuicio del señor Petro.

124. El Tribunal ha señalado que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso que permite que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática[166]. Esto implica que se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio[167] y se aproxime a los hechos de la causa careciendo de todo prejuicio y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva[168] que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad[169]. Así, la imparcialidad del tribunal comporta que sus integrantes no tengan un interés directo, posición predefinida ni preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia[170], sino que actúen única y exclusivamente conforme a -y movidos por- el derecho[171].

125. Asimismo, la Corte ha indicado que, como fundamento de las garantías judiciales[172], el principio de presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad[173] y que no recae en él demostrar que no ha cometido la falta que se le atribuye pues el *onus probandi* corresponde a quien acusa[174]. La presunción de inocencia guarda un vínculo estrecho con la

---

166 *Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171, y *Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, supra*, párr. 186.

167 *Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra*, párr. 171, y *Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, supra*, párr. 186.

168 *Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra*, párr. 171, y *Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, supra*, párr. 186.

169 *Cfr. Caso Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 56, y *Caso Rico Vs. Argentina*. *Excepción Preliminar y Fondo.* Sentencia de 2 de septiembre de 2019. Serie C No. 383, párr. 70.

170 *Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 146, y *Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, supra*, párr. 186.

171 *Cfr. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela, supra*, párr. 56, y *Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, supra*, párr. 186.

172 *Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo.* Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77, y *Caso Rodríguez Revolorio y Otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 109.

173 *CfrCfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, supra,* párrs. 76 y 77, y *Caso Rodríguez Revolorio y Otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 109.

174 *Cfr. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 154, y *Caso Valenzuela Ávila Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 11 de octubre de 2019. Serie C No. 386, párr. 113.

imparcialidad en la medida en que implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa[175]. De tal suerte, esta garantía se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial a él concerniente refleja que lo es[176]. Además, el Tribunal ha señalado que la institución de la recusación tiene como finalidad actuar como garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la jurisdicción[177].

126. Los representantes sostuvieron que en el proceso disciplinario contra el señor Petro no se respetó la garantía de la imparcialidad por dos razones: primero, porque al haber emitido el pliego de cargos, al momento de resolver el fallo disciplinario, la Sala Disciplinaria ya "tenía una posición tomada sobre la responsabilidad disciplinaria del señor Petro", y segundo, porque "estamos ante un escenario de discriminación que responde a la ideología política de Gustavo Petro, toda vez que el tipo de sanción aplicado carece de una justificación objetiva y razonable, tomando en consideración que fue extremadamente lesiva con respecto a otros casos en los que existía un proceso un proceso penal en curso o incluso condenas que establecían la responsabilidad penal de los exfuncionarios". La Corte observa que los alegatos de los representantes cuestionan, por un lado, la falta de imparcialidad objetiva por las deficiencias en el diseño normativo del proceso disciplinario seguido contra el señor Petro y, por otro, la ausencia de imparcialidad subjetiva por los motivos discriminatorios con base a los cuales fue iniciada la investigación disciplinaria.

127. En cuanto a la ausencia de imparcialidad objetiva, este Tribunal recuerda que el proceso administrativo seguido contra el señor Petro está contemplado en el Código Disciplinario Único. Este código dispone como principios rectores la legalidad[178], el debido proceso[179], la presunción de inocencia[180] y la motivación del fallo[181]. En concreto, su artículo 9 consagra el principio de presunción de inocencia en los siguientes términos: "[a] quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla"[182]. De igual modo, el artículo 94 establece que en la actuación disciplinaria se observarán, *inter alia,* los principios de contradicción e imparcialidad, mientras que el artículo 129 señala expresamente lo siguiente: "[e]l funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que

---

175 *Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, supra*, párr. 184, y *Caso Rodríguez Revolorio y Otros Vs. Guatemala, supra*, párr. 109.

176 *Cfr. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 154, y *Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra*, párr. 128.

177 *Cfr. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela, supra*, párrs. 63-64; *Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334, párr. 172, y *Caso Rico Vs. Argentina*, *supra*, párr. 70.

178 Ley 734 de 2002, por la cual "se expide el Código Disciplinario Único". Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002. Artículo 4.

179 Ley 734 de 2002, por la cual "se expide el Código Disciplinario Único". Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002. Artículo 6.

180 Ley 734 de 2002, por la cual "se expide el Código Disciplinario Único". Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002. Artículo 9.

181 Ley 734 de 2002, por la cual "se expide el Código Disciplinario Único". Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002. Artículo 19.

182 Ley 734 de 2002, por la cual "se expide el Código Disciplinario Único". Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002. Artículo 9.

demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio"[183].

128. La Corte observa que, en la fase de instrucción del proceso, el señor Petro presentó solicitudes de nulidad debido, *inter alia*, a la falta de imparcialidad de las autoridades disciplinarias, por considerar que "todo el andamiaje jurídico legal y constitucional que sustenta la defensa del señor alcalde será inútil si desde la misma Procuraduría se impone, como hasta el momento ha sucedido, un prejuzgamiento de su conducta por el sólo hecho de no hacer caso a consideraciones de la misma Procuraduría, sobre una materia que corresponde a la función propia y autónoma del alcalde"[184]. Estas solucitudes fueron rechazadas por la Sala Disciplinaria mediante resoluciones de 25 de julio de 2013 y 12 de agosto de 2013, en la primera de las cuales sostuvo lo siguiente:

> El señor defensor parte de un error, el cual consiste en equiparar la demostración de algunos hechos con la comprobación de la responsabilidad disciplinaria. En efecto, una cosa es que a partir de las pruebas recaudadas en la actuación el juez disciplinario determine la comprobación de ciertos hechos, los cuales son comunes a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta cometida y otra muy diferente es que se dé por cierta la demostración de la responsabilidad disciplinaria, aspecto que comprende no solo la conducta, sino las categorías de la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad[185].

129. No obstante las garantías contempladas en el Código Disciplinario Único, y las citadas consideraciones de la Sala Disciplinaria, la Corte constata que dicha autoridad emitió el pliego de cargos que inició el proceso disciplinario contra el señor Petro y al mismo tiempo decidió sobre su procedencia. La Corte advierte que la concentración de las facultades investigativas y sancionadoras en una misma entidad, característica común en los procesos administrativos disciplinarios, no es sí misma incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad de que se trate, cuya composición varíe de manera que tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos.

130. Esta condición no se cumple en el presente caso, pues la Sala Disciplinaria formuló el pliego de cargos el 20 de junio de 2013 y, el 9 de diciembre del mismo año, emitió el fallo disciplinario que encontró probados tales cargos, estableciendo la responsabilidad administrativa del señor Petro y, en consecuencia, ordenando su destitución e inhabilitación. En razón de lo anterior, este Tribunal advierte que el diseño particular del proceso seguido contra el señor Petro evidencia una falta de imparcialidad desde el punto de vista objetivo pues resulta lógico que, al haber formulado los cargos contra el señor Petro, la Sala Disciplinaria tenía una idea preconcebida sobre su responsabilidad disciplinaria. Esto así, puesto que el Código Disciplinario Único establece como requisito para la procedencia de la formulación de cargos que "esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que

---

[183] Ley 734 de 2002, por la cual "se expide el Código Disciplinario Único". Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002. Artículo 129.

[184] Resolución de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 9 de diciembre de 2013 (expediente de prueba, folios del 3 al 486).

[185] Auto de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de 25 de julio de 2013 (expediente de fondo, folios 520 y521).

comprometa la responsabilidad del investigado"[186]. Por otro lado, el Tribunal no cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan analizar si las acciones del Procurador General respondieron a una motivación discriminatoria.

131. En lo que respecta a los alegatos de los representantes sobre la violación del derecho a la defensa, el Tribunal observa que, si bien el señor Petro participó activamente en las diferentes fases del proceso disciplinario, y que en su curso se le ofrecieron oportunidades para la presentación de alegatos y pruebas, el hecho de que la Sala Disciplinaria no actuara con imparcialidad implicó una violación a su derecho a la defensa. La Corte recuerda que el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso. Impedir que la persona ejerza su derecho de defensa es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo[187].

132. El Tribunal recuerda que el artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por "un tribunal competente [...] establecido con anterioridad a la ley"[188]. En este caso, conforme a lo previamente señalado, el señor Petro fue destituido como alcalde e inhabilitado para ocupar cargos públicos mediante un proceso administrativo disciplinario ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General. En tanto la destitución e inhabilitación solo puede ser impuesta por un juez competente previa condena en proceso penal, la Corte advierte en este caso una violación al principio de jurisdiccionalidad. Esto es así puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa que, de conformidad con las disposiciones del artículo 23.2 de la Convención en los términos desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal[189], carece de competencia al respecto.

133. Por consiguiente, la Corte considera que en el proceso disciplinario contra el señor Petro se vulneró el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de la imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa, en los términos de los artículos 8.1 y 8.2.d) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

134. En razón de lo anterior, y en vista de las violaciones previamente declaradas, la Corte no considera necesario entrar a analizar las violaciones alegadas por la Comisión y los representantes relativas a otras garantías procesales y a la protección judicial.

C. Conclusión del capítulo

135. La Corte concluye que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría General el 9 de diciembre de 2013 y que fue confirmada el 13 de enero de 2014. Si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad de dicha sanción, ordenó el pago de salarios dejados de percibir, y ordenó la desanotación de las sanciones impuestas mediante sentencia de 15 de noviembre de 2017, la

---

[186] Ley 734 de 2002, por la cual "se expide el Código Disciplinario Único". Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002. Artículo 162.

[187] *Cfr. Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra*, párr. 117, y *Caso López y otros Vs. Argentina, supra*, párr. 206.

[188] *Cfr. Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 75, y *Caso Amrhein y Otros Vs. Costa Rica, supra*, párr. 383.

[189] *Cfr. Caso López Mendoza Vs. Venezuela, supra*, párr.107.

Corte concluye que dicha decisión no ha reparado integralmente el hecho ilícito que constituyó la violación del derecho al ejercicio de una función de elección popular del señor Petro, pues su mandato fue interrumpido por algo más de un mes mientras estuvo separado de su cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, lo cual también constituyó una afectación de los derechos políticos de sus electores y del principio democrático, y no se han modificado las normas que permitieron la imposición de dichas sanciones.

136. Adicionalmente, la Corte concluye que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de inhabilitación o destitución de funcionarios democráticamente electos previstas en general en el ordenamiento jurídico colombiano, y en particular en el Código Disciplinario Único, así como las normas que pueden tener como efecto que las decisiones de la Contraloría produzcan una inhabilidad para el ejercicio de los derechos políticos, y que fueron mencionadas en el presente capítulo, constituyen un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

137. Asimismo, la Corte concluye que el proceso disciplinario seguido contra el señor Petro no respetó la garantía de la imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues el diseño del proceso implicó que la Sala Disciplinaria fuera la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar sobre la procedencia de los mismos, concentrando así las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias. La Corte estima que la falta de imparcialidad objetiva afectó transversalmente el proceso, tornando en ilusorio el derecho de defensa del señor Petro. Además, el Tribunal advirtió que en el caso existió una violación al principio de jurisdiccionalidad puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa.

138. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación al artículo 23 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y por la violación a los artículos 8.1 y 8.2.d) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Gustavo Francisco Petro Urrego.

VII-2
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL[190]

A. Alegatos de la Comisión y de las partes

139. Los ***representantes*** alegaron la violación al derecho a la integridad personal del señor Petro como resultado de la afectación moral que habría sufrido al ser víctima de estigmatización y como consecuencia de la alegada persecución política, y que culminó en una serie de sanciones de índole disciplinaria y de responsabilidad fiscal que fueron difundidas ampliamente en los medios de comunicación. Ello habría generado que, a través de redes sociales, se lanzaran comentarios y opiniones agresivas en su contra, atentando así contra su buen nombre y dignidad. Adicionalmente, alegaron que los efectos de las decisiones adoptadas por la Contraloría y la SIC por el supuesto detrimento patrimonial sufrido, generaron sentimientos de angustia en el señor Petro. Asimismo, como consecuencia de las decisiones antes mencionadas, expresaron que sus cuentas bancarias fueron embargadas, incluyendo su salario, privándolo así de sus medios de subsistencia. De igual modo, la existencia de información sobre planes para atentar contra su vida habría generado un sentimiento de temor del riesgo que pesaba sobre él. Alegaron que, de hecho, durante la

[190] Artículo 5 de la Convención Americana.

campaña presidencial, sufrió un atentado a su vida. Los representantes sostuvieron que lo anterior demuestra que el señor Petro ha sido víctima de constante persecución en razón de su ideología política, y que el Estado es responsable por la violación del artículo 5 de la Convención. La ***Comisión*** no formuló alegatos al respecto.

140. El ***Estado*** alegó que ninguna de las tres alegaciones específicas presentadas por los representantes en relación con la violación del derecho a la integridad personal compromete la responsabilidad del Estado. Primero, por la falta de existencia de prueba respecto de la persecución política en contra del señor Petro en virtud de los procesos adelantados por los órganos de control del Estado, lo cual además quedaría demostrado por el respeto al debido proceso. El Estado sostuvo que el único objetivo perseguido por dichos procesos fue asegurar la sujeción del ejercicio del poder a la legalidad. Segundo, porque tal como se expuso en el apartado de excepciones preliminares, resulta totalmente infundado que el señor Petro haya sido privado de sus medios de subsistencia. Tercero, porque no ha sido demostrado cómo los hostigamientos y amenazas de que habría sido víctima el señor Petro son atribuibles al Estado. Afirmó que lo que sí está demostrado es que ha adoptado múltiples medidas de seguridad a favor del señor Petro, las cuales le han permitido ejercer varios cargos públicos a lo largo de su carrera. Expresó que el señor Petro actualmente es beneficiario de fuertes medidas de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección, y que como Senador de la República goza de protección por parte de la Policía.

B. Consideraciones de la Corte

141. La Convención Americana reconoce en su artículo 5 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, prevé que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y establece que toda persona privada de libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. La Corte ha establecido que la infracción a la integridad personal es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta[191]. El Tribunal también ha señalado que el derecho a la integridad personal es de tal importancia que no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia[192]. Asimismo, la Corte ha señalado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre[193].

142. La Corte ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal. Asimismo, crear una situación amenazante o amenazar a un individuo con quitarle la vida puede constituir, en algunas

---

[191] *Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo.* Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57, y *Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra*, párr. 139.

[192] *Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 157, y *Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 55.

[193] *Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.* Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111, y *Caso Hernández Vs. Argentina, supra*, párr. 55.

circunstancias, al menos, tratamiento inhumano[194]. Sin embargo, en el caso no ha sido acreditada la participación estatal -ya sea de manera directa o por aquiescencia- en las supuestas amenazas que el señor Petro recibió después de que le fueran impuestas las sanciones disciplinarias por la Procuraduría, lo que podría haber constituido un hecho con la suficiente entidad para considerar una afectación a su integridad personal atribuible al Estado. Tampoco es posible establecer un nexo causal entre la imposición de la sanción disciplinaria de 9 de diciembre de 2013 y las reacciones presuntamente amenazantes que dicha sanción pudo haber generado en redes sociales por parte de terceros.

143. En relación con el alegato de los representantes respecto a que el señor Petro habría sido privado de sus medios de subsistencia debido a las decisiones de la Contraloría y la SIC, el Tribunal constata que no existe controversia respecto a que el salario del señor Petro fue objeto de una medida cautelar de embargo con el fin de garantizar el pago de la sanción impuesta por la SIC. Sin embargo, el Tribunal advierte que, de conformidad con el artículo 155 del Código Sustantivo de Trabajo, "[e]l excedente del salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte"[195]. De lo anterior se desprende que la posible afectación a los ingresos del señor Petro solo podría haber alcanzado el 20% de su salario. Tal como fue mencionado anteriormente, el señor Petro dejó de ocupar su cargo como Alcalde de Bogotá entre el 20 de marzo de 2014 y el 23 de abril de 2014. Asimismo, según información aportada al Tribunal, debido a que el señor Petro actualmente ejerce el cargo de Senador de la República, motivo por el cual recibe un salario, no es posible afirmar que la medida de embargo haya privado a la presunta víctima de sus medios de subsistencia. En este sentido, la Corte advierte que en el expediente no consta ningún elemento probatorio tendiente a demostrar que el tiempo que dejó de percibir su salario como Alcalde de Bogotá, o el embargo del que ha sido objeto, hayan ocasionado al señor Petro un grado de angustia tal que habría vulnerado su integridad personal, y esto no puede inferirse de la aplicación de las medidas en sí mismas.

144. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte recuerda que, por su carácter alimentario[196], la provisión del salario guarda una estrecha relación con la protección del derecho a la vida digna, por cuanto permite procurar los medios para garantizar la propia subsistencia, de manera que no debe ser objeto de restricciones ilegales, arbitrarias o desproporcionadas. La Corte advierte que en ese sentido se pronuncia la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, cuyo artículo 10 dispone expresamente que el "salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determine la Ley, son inembargables"[197], y recuerda que el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963, establece en su artículo 10.2 que "el salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia"[198]. De esta forma, los Estados deberán evitar el embargo de salarios en una proporción mayor que aquella que permita a una persona gozar de una vida digna, y además siempre deberá estar prevista por la ley y ser proporcional.

---

194 *Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas*, *supra*, párr. 109, y *Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, supra*, párr. 82.

195 Código Sustantivo del Trabajo, adoptado mediante Decreto 2663 de 5 de agosto de 1950. Diario Oficial No. 27.407 de 9 de septiembre de 1950. Modificado por la Ley 11 de 1984.

196 *Cfr. Mutatis mutandis, caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375, párr. 137.

197 Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, 1948.

198 OIT. Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), adoptado el 1º de julio de 1949 en la trigésima segunda reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo.

145. En consecuencia, el Tribunal concluye que el Estado no es responsable por la violación al artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Petro.

VIII
REPARACIONES

146. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado[199]. Además, este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por tanto, la Corte deberá analizar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho[200].

147. En consecuencia, sin perjuicio de cualquier forma de reparación que se acuerde posteriormente entre el Estado y la víctima, y de acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones a la Convención declaradas en la presente Sentencia, el Tribunal procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes de la víctima, así como las observaciones del Estado a las mismas, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados[201].

A. Parte Lesionada

148. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera como "parte lesionada" a Gustavo Francisco Petro Urrego, quien en su carácter de víctima de las violaciones declaradas en el capítulo VII, será considerado beneficiario de las reparaciones que la Corte ordene.

B. Medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición

B.1. Medidas de satisfacción

149. Los ***representantes*** solicitaron que la Corte ordenara al Estado la publicación de: i) el resumen oficial de la Sentencia en un Diario Oficial; ii) el resumen oficial de la Sentencia en un diario de amplia circulación nacional, y iii) la Sentencia en su integridad en el sitio web de la Presidencia de la República, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Procuraduría General de la Nación por un año. El ***Estado*** no se refirió a esta medida.

---

199 *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párrs. 24 y 25, y *Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua, supra*, párr. 103.

200 *Cfr. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 110, y *Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua, supra*, párr. 105.

201 *Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra*, párrs. 25 y 26, y *Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua, supra*, párr. 106.

150. La Corte dispone, como lo ha hecho en otros casos[202], que el Estado publique, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en un tamaño de letra legible y adecuado: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial; b) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, y c) la presente Sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en el sitio web oficial de la Procuraduría General de la Nación. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe dispuesto en el punto resolutivo 7 de la presente Sentencia.

B.2. Garantías de no repetición

151. La ***Comisión*** solicitó que el Estado adecúe la legislación interna, en particular, las disposiciones de la Constitución Política y del Código Disciplinario Único, que contemplan respectivamente la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio de su potestad disciplinaria. Asimismo, solicitó que el Estado adecúe la normativa penal para asegurar que no se incluyan las referencias a la vía disciplinaria o fiscal en los tipos penales relacionados con la elección de personas inhabilitadas. En tal sentido, solicitó que Colombia se abstenga de aplicar el tipo penal previsto en el artículo 5 de la Ley 1834 de 2017, tomando en cuenta las determinaciones sobre la inconvencionalidad de la destitución disciplinaria o fiscal, sin condena penal en firme.

152. Los ***representantes*** solicitaron que el Estado realice una reforma de las facultades sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación con respecto a los funcionarios electos por voto popular. En tal sentido, afirmaron que el riesgo de abrir investigaciones disciplinarias en contra del señor Petro está latente, reiterando las infracciones dadas al debido proceso y a la regulación convencional en materia de derechos políticos. Asimismo, solicitaron que el Estado derogue el artículo 5 de la Ley 1864 de 2017, el cual modifica el Código Penal colombiano introduciendo como conducta punible ser elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado 'por decisión judicial, disciplinaria o fiscal', tomando en cuenta los parámetros convencionales sobre la restricción a los derechos políticos.

153. El ***Estado*** alegó que la Corte carece de competencia para pronunciarse y ordenar la modificación de las normas constitucionales y legales que consagran las facultades sancionatorias de la Procuraduría, así como la derogación del artículo 5 de la Ley 1864, ya que ello constituiría un control de convencionalidad en abstracto e iría en contradicción con la autonomía de los Estados democráticos de definir, bajo estándares internacionales, su ordenamiento jurídico. Asimismo, el Estado afirmó que a lo largo del proceso quedó demostrada la convencionalidad del ordenamiento jurídico colombiano en lo relacionado con las facultades de la Procuraduría General de la Nación para sancionar funcionarios de elección popular y destacó la promulgación del nuevo Código General Disciplinario que amplía las garantías concedidas a los procesados.

154. Este Tribunal encontró que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia de diversos dispositivos del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, la

[202] *Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo.* Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69., párr. 79, y *Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua, supra*, párr. 118.

Corte considera que, como garantía de no repetición, el Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en los párrafos 111 a 116 de la presente Sentencia.

C. Otras medidas solicitadas

155. La ***Comisión*** solicitó que la Corte ordenara al Estado que: a) deje sin efecto los actos administrativos sancionatorios que impusieron sanciones de inhabilitación al señor Petro Urrego; b) adopte las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, de forma tal que la autoridad que establece los cargos no sea la misma llamada a determinar la responsabilidad disciplinaria; c) adopte las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para garantizar la posibilidad efectiva de recurrir fallos disciplinarios ante autoridad distinta de la que determinó la responsabilidad disciplinaria, asegurando que se permita una revisión integral de los fallos sancionatorios, y d) adopte las medidas necesarias para asegurar que las acciones judiciales de nulidad y restablecimiento del derecho sean resueltas en un plazo razonable, incluyendo aquellas de competencia directa del Consejo de Estado.

156. Los ***representantes*** solicitaron a la Corte que ordenara al Estado: a) dejar sin efecto la Sentencia de la Corte Constitucional que permite el "desborde de la facultad sancionatoria respecto de los funcionarios de elección popular"; b) ordenar al Estado que ofrezca disculpas públicas; c) cesar los efectos de las decisiones fiscales emitidas por la Contraloría Distrital y las consecuencias de las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio; d) abstenerse de continuar refiriéndose al caso del señor Petro Urrego en el contexto de la lucha contra la corrupción por la Procuraduría General de la Nación; y e) abstenerse de usar los medios legales como mecanismo de persecución y exclusión política del señor Petro Urrego que encarna en un proyecto político alternativo progresista y de izquierda; f) formule e implemente una política pública que defina los lineamientos de la potestad sancionatoria dirigida a funcionarios públicos elegidos popularmente; g) realice jornadas de sensibilización dirigidas a los funcionarios públicos sobre el derecho a la oposición y a profesar ideologías políticas diferentes.

157. El ***Estado*** reiteró que la potestad sancionatoria de la Procuraduría sobre funcionarios de elección popular es acorde a la Constitución, y no ha sido ejercida de manera arbitraria ni con fines de persecución política. Asimismo, destacó que las reparaciones solicitadas por los representantes referentes a reformas legales y constitucionales tocan de fondo la arquitectura constitucional colombiana y el sistema de defensa de la legalidad adoptado por Colombia. Al respecto, afirmó que todos estos instrumentos han sido adoptados por un sistema democrático y participativo e incluso el señor Petro votó a favor del Código Disciplinario Único. Asimismo, alegó que no existe ninguna prueba en el presente caso de que se haya vulnerado el derecho del señor Petro a la oposición y a profesar ideologías diferentes. Por estas razones, solicitó el rechazo de las solicitudes de la Comisión y los representantes.

158. Este Tribunal considera que el presente caso no permite concluir la necesidad de ordenar una medida de restitución en favor del señor Petro, pues ya el mandato del señor Petro como Alcalde de Bogotá ha concluido y se declaró la nulidad de las sanciones de destitución e inhabilidad impuestas por la Procuraduría a través de sentencia del Consejo de Estado. Tampoco resulta procedente ordenar la adopción de medidas legislativas o de otra índole respecto del procedimiento disciplinario previsto en el Código Disciplinario Único, o respecto al tiempo en que deben ser resueltas las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en Colombia, pues no existen elementos para concluir la existencia de un problema

de carácter estructural que amerite la modificación de dicho procedimiento, o la necesidad de implementar políticas públicas dirigidas a la sensibilización de los funcionarios de la Procuraduría. Por otro lado, el Tribunal considera que no es procedente ordenar el cese de las de las decisiones fiscales emitidas por la Contraloría y la multa de la SIC, en tanto no existe nexo causal entre las violaciones declaradas en la presente sentencia y la solicidud de los representantes. En ese sentido, la Corte considera que la emisión de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas en este capítulo, en especial las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición previamente mencionadas, resultan suficientes y adecuadas por lo que no procede ordenar las medidas de reparación solicitadas por los representantes en el presente acápite. Sin perjuicio de ello, el Estado puede adoptarlas y otorgarlas a nivel interno.

D. Indemnizaciones compensatorias

D.1. Daño material

159. La ***Comisión*** solicitó que el Estado reparara integralmente las violaciones de derechos declaradas en el informe de Fondo, incluyendo el aspecto material e inmaterial. Los ***representantes*** consideraron que la indemnización fijada en la sentencia del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017, en la que se ordenó el restablecimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir por la presunta víctima, son suficientes en lo que respecta al lucro cesante. Por otro lado, los representantes solicitaron que la Corte fijara una suma en equidad, como daño emergente, que reconozca los recursos materiales, en tiempo y transporte, invertidos por el señor Petro Urrego para procurar su defensa en los procedimientos disciplinarios y fiscales iniciados en su contra. El ***Estado*** alegó que, al no haber una violación de la Convención Americana, es improcedente cualquier condena a la indemnización de daños.

160. Este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso[203]. En el presente caso, la Corte ordena al Estado que garantice el pago efectivo e inmediato de los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que fue destituido de su cargo como Alcalde de Bogotá, en los términos fijados en la sentencia del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017. Por otro lado, el Tribunal rechaza la solicitud de los representantes respecto al daño emergente, puesto que los recursos de tiempo, recursos materiales y transporte en que el señor Petro pudo incurrir en el curso normal de un proceso administrativo y judicial no constituyeron un daño que sea objeto de reparación en el presente caso.

D.2. Daño inmaterial

161. La ***Comisión*** solicitó que el Estado reparara integralmente las violaciones de derechos declaradas en el Informe de Fondo, incluyendo el aspecto material e inmaterial. Los ***representantes*** solicitaron que la Corte tomara en cuenta los daños morales ocasionados por las preocupaciones y aflicciones causados en el señor Petro Urrego y su familia a partir de las decisiones de la Contraloría Distrital de Bogotá, como consecuencia de las cuales fueron embargadas sus cuentas bancarias. Asimismo, solicitaron que el Tribunal tenga en consideración el daño moral causado por la multa impuesta por la SIC como consecuencia de

[203] *Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas*. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 43, y *Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua, supra*, párr. 123.

la cual fue embargado su salario y aquellos ocasionados en perjuicio del señor Petro Urrego y de sus familiares en razón de las violaciones de sus derechos humanos, incluyendo afectaciones al buen nombre, a la honra y a su tranquilidad. En virtud de lo anterior, solicitaron que la Corte fije una compensación económica por concepto de daño inmaterial en la suma de USD $40.000 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América). El ***Estado*** alegó que al no haber una violación de la Convención Americana es improcedente cualquier condena a la indemnización de daños. Asimismo, señaló que los argumentos de los representantes respecto a las supuestas afectaciones morales sufridas por el señor Petro y su familia son infundadas.

162. En el presente caso, y en vista de las violaciones declaradas a los derechos políticos y las garantías judiciales del señor Petro, la Corte decide otorgarle, en equidad, la cantidad de USD $ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) como compensación por el daño inmaterial sufrido.

E. Costas y gastos

163. Los ***representantes*** solicitaron el pago de las costas y gastos incurridos por a) la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA) y b) el Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' (CCAJAR). Como anexos a su escrito de solicitudes y argumentos, los representantes presentaron comprobantes de pago por los siguientes montos: a) USD $14.889,82 (catorce mil ochocientos ochenta y nueve dólares con ochenta y dos centavos de los Estados Unidos de América) por los gastos incurridos por CCAJAR, y c) USD $3.858 (tres mil ochocientos cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América) por los gastos incurridos por MINGA. Posteriormente, en sus alegatos finales los representantes presentaron comprobantes de pago referentes a su participación en la audiencia pública del caso por los siguientes montos: d) USD $2.944,62 (dos mil novecientos cuarenta y cuatro dólares con sesenta y dos centavos de los Estados Unidos de América) por los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de dos abogadas y abogado de CCAJAR; e) USD $900 (novecientos dólares de los Estados Unidos de América) por los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de un abogado de MINGA, y f) USD $388.91 (trecientos ochenta y ocho dólares con noventa y un centavos de los Estados Unidos de América) por los gastos de transporte y hospedaje del señor Petro Urrego.

164. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia[204], las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el Sistema Interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su *quantum* sea razonable[205].

---

[204] *Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas.* Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 82, y *Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra*, párr. 274.

[205] *Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina, supra,* párr. 82, y *Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra*, párr. 274.

165. Tomando en cuenta los montos solicitados por cada una de las organizaciones y los comprobantes de gastos presentados, la Corte dispone fijar el pago de: a) un monto total de USD $17.834,44 (diecisiete mil ochocientos treinta y cuatro dólares con cuarenta y cuatro centavos de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor de la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA); b) un monto total de USD $5.146,91 (cinco mil ciento cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor del Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' (CCAJAR). El monto fijado en favor del CCAJAR incluye aquellos gastos de transporte y hospedaje del señor Petro por su participación en la audiencia pública. Dichas cantidades deberán ser entregadas directamente a dichas organizaciones. En la etapa de supervisión del cumplimiento de la presente Sentencia, la Corte podrá disponer que el Estado reembolse a la víctima o sus representantes los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal[206].

F. Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

166. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente Sentencia directamente a la persona indicada en la misma, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor, en los términos de los siguientes párrafos.

167. En caso de que el beneficiario haya fallecido o fallezca antes de que le sea entregada la cantidad respectiva, esta se entregará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.

168. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.

169. Si por causas atribuibles al beneficiario de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera colombiana solvente, en dólares de los Estados Unidos de América, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.

170. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización por daños inmateriales, y como reintegro de costas y gastos, deberán ser entregadas a las personas y organizaciones indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.

171. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en la República de Colombia.

---

[206] *Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 29, y *Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra*, párr. 275.

IX
PUNTOS RESOLUTIVOS

172. Por tanto,

LA CORTE

DECIDE,

Por unanimidad:

1. Desestimar la excepción preliminar relativa a la alegada falta de agotamiento de recursos internos, de conformidad con los párrafos 21 a 28 de esta Sentencia.

2. Desestimar las excepciones preliminares relativas a la falta de competencia para realizar un control de convencionalidad en abstracto; la falta de fundamento de los alegatos concernientes a la integridad persona; y la caracterización de hechos que no exponen una violación a la Convención, de conformidad con los párrafos 32 a 33 de esta Sentencia.

DECLARA,

Por unanimidad, que:

3. El Estado es responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de Gustavo Petro Urrego, en los términos de los párrafos 90 a 117 y de los párrafos 135 a 138 de la presente Sentencia.

4. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 8.2.d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos, consagradas en los artículos 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Gustavo Petro Urrego, en los términos de los párrafos 118 a 133.

Por cuatro votos a favor y dos en contra, que:

5. El Estado no es responsable por la violación del derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación, en perjuicio de Gustavo Petro Urrego, en los términos de los párrafos 141 a 145 de la presente Sentencia.

Disienten los jueces Patricio Pazmiño Freire y Raúl Zaffaroni.

Y DISPONE:

Por unanimidad, que:

6. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

7. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 150 de la presente Sentencia.

8. El Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la presente Sentencia, en los términos de lo dispuesto en el párrafo 154 de la presente Sentencia.

9. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 162 de la presente Sentencia por concepto de indemnización de daño inmaterial, y por el reintegro de costas y gastos, en los términos del párrafo 165 y de los párrafos 166 a 171 de la presente Sentencia.

10. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 150 de la presente Sentencia.

11. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Los jueces L. Patricio Pazmiño Freire y Eugenio Raúl Zaffaroni dieron a conocer sus votos individuales parcialmente disidentes.

Redactada en español en San José, Costa Rica, el 8 de julio de 2020.

Corte IDH. Caso *Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.* Sentencia de 8 de julio de 2020.

Elizabeth Odio Benito
Presidenta

L. Patricio Pazmiño Freire

Eduardo Vio Grossi

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Eugenio Raúl Zaffaroni

Ricardo C. Pérez Manrique

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Elizabeth Odio Benito
Presidenta

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

LEY 734 DE 2002

(febrero 5)

Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002

<Rige a partir de los tres (3) meses de su sanción>

<NOTA DE VIGENCIA: Ley derogada, a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>

Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.

<Resumen de Notas de Vigencia>

NOTAS DE VIGENCIA:

- El plazo de entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 se prorroga hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”", publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

- Ley derogada, a partir del 28 de mayo de 2019, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, "por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario", publicada en el Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019. El procedimiento disciplinario establecido en la Ley 1952 de 2019, entrará en vigencia a partir del 28 de julio de 2020.

- Modificada por la Ley 1709 de 2014, "por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014.

- Modificada por la Ley 1523 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.411 de 24 de abril de 2012, "por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones"

- Modificada por el Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"

- Modificada por la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

- Modificado por el Decreto 4702 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.930 de 21 de diciembre de 2010, "por el cual se modifica el Decreto-ley 919 de 1989", expedido en desarrollo del Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, "por el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional".

- Modificada por el Decreto 126 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.599 de 21 de enero de 2010, "por el cual se dictan disposiciones en materia de Inspección, Vigilancia y Control, de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras

disposiciones". Decreto expedido bajo el estado de emergencia social decretado mediante el Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE.

- Modificado por el Decreto 4335 de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 47.176 de 17 de noviembre de 2008, "por el cual se asignan funciones a los Alcaldes y Gobernadores en desarrollo del Decreto número 4333 de noviembre de 2008"

- En criterio del editor para la interpretación de los Numerales 8 y 15 del Artículo 48 de esta Ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3o. Inciso 4o. del Acto Legislativo 2 de 2003, "por medio del cual se modifican los Artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo", publicado en el Diario Oficial No. 45.406 de 19 de diciembre de 2003.

En criterio del editor para la interpretación del Numeral 16 del Artículo 48 de esta Ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 1o. Inciso 4o. del Acto Legislativo 2 de 2003, "por medio del cual se modifican los Artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo", publicado en el Diario Oficial No. 45.406 de 19 de diciembre de 2003.

- En criterio del editor para la interpretación de los Artículos 34, 35 y 36 de esta Ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los Artículos 41, 42, 44 y 45 de la Ley 842 de 2003, "por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 45.340 de 14 de octubre de 2003.

- Esta versión corresponde a la ordenada por el Artículo 2 del Decreto 224 de 2002. La versión anterior fue publicada en el Diario Oficial No 44.699, de 5 de febrero de 2002.

Mediante el Decreto 224 de 2002, publicado en el Diario Oficial No 44.708, de 13 de febrero de 2002 se decreta:

"Artículo 1°. Corríjase el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, incorporando el numeral 38 al artículo 48, en la siguiente forma:

"38. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales"."

"Artículo 2°. Publíquese en el ***Diario Oficial*** la Ley 734 de 2002, con la corrección que se establece en el presente decreto."

- Ver la Ley 200 de 1995, "por la cual se adopta el Código Disciplinario Único", publicada en el Diario Oficial No. 41.946 de 31 de julio de 1995.

El Artículo 224 de la presente Ley establece: "La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública."

El Artículo 20 de la Ley 200 de 1995 establecía (subrayas fuera del texto original): "ARTICULO 20. DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son destinatarios de la Ley Disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores

del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión de Lucha Ciudadana contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional."

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

LIBRO I.
PARTE GENERAL.

T I T U L O I.
PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 1o. *TITULARIDAD DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 2

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado Acción Popular, Expediente No. 385 de 25 de mayo de 2006, C.P. Dr. Ruth Stella Correa Palacio

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1758 de 26 de julio de 2006 (autorizada publicación mediante Of. 76514 de 22/08/2006), C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 89 de 2017

ARTÍCULO 2o. *TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 34 num. 32; Art. 76

El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la jurisdicción disciplinaria.

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este inciso corresponde en similar sentido al texto del Inciso 2o. del Artículo 2o. de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 2

Ley 1796 de 2016; Art. 23 Par.

Ley 1010 de 2006; Art. 11 Num. 2o.

Ley 600 de 2000; Art. 11

Ley 472 de 1998; Art. 43

Ley 182 de 1995; Art. 8o. Inc. Final

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Quinta, Expediente No. 63001-23-33-000-2019-00080-01 20191120 de 20 de noviembre de 2019, C.P. Dr. Luis Alberto Álvarez Parra.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 55 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 49 de 2017

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2159 de 30 de octubre de 2013 (Levantada la reserva legal mediante Auto de 19/05/2014), Consejero Ponente, Dr. Álvaro Namén Vargas.

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 56 de 19 de julio de 2007, C.P. Dr. Enrique José Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 3o. *PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 171

Resolución PROCURADURÍA 251 de 2010

En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario. También se procederá en la misma forma cuando se desprenda del conocimiento de un proceso.
<Concordancias>

Ley 1480 de 2011; Art. 77

<Apartes tachados INEXEQUIBLES> ~~La Procuraduría General de la Nación y~~ el Consejo Superior de la Judicatura son competentes ~~a prevención~~ para conocer, hasta la terminación del proceso, de las faltas atribuidas a los funcionarios de la rama judicial, salvo los que tengan fuero constitucional.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 240

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 .

- Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, en consecuencia el inciso quedará así:

"El Consejo Superior de la Judicatura es el competente para conocer hasta la terminación, de las faltas atribuidas a los funcionarios de la rama judicial, salvo los que tengan fuero constitucional"

Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la administración poder disciplinario preferente.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 3

Ley 1306 de 2009; Art. 7o.

Resolución PROCURADURÍA 456 de 2017

Resolución PROCURADURÍA 23 de 2015

Resolución PROCURADURÍA 282 de 2014

Circular PROCURADURÍA 42 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 6 de 2016

Memorando PROCURADURÍA 3 de 2018

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2011-00316-00(SU) de 9 de agosto de 2016, C.P. Dr. (E) William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Acción de Tutela, Sala Plena, Expediente No. 2013-06871-01(AC) de 5 de marzo de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- Corte Constitucional, Sentencia SU-355-15 de 11 de junio de 2015, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Corte Constitucional Sentencia C-914-13 de 4 de diciembre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 149 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 8 de 2014

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias, Radicación No. 11001-03-06-000-2019-00140-00(C) de 1 de octubre de 2019, Consejero Ponente, Dr. Óscar Darío Amaya Navas.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias. Radicación No. 11001-03-06-000-2018-00009-00(C) de 5 de septiembre de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Bula Escobar.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias. Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00123-00(C) de 20 de marzo de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula.
- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1824 de 27 de mayo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. de 27/06/2007), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 4o. *LEGALIDAD*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 4

<Doctrina Concordante>

Concepto CONTADURÍA 32914 de 2004

Concepto CONTADURÍA 13413 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 25000-23-42-000-2016-02429-01(6450-18) de 5 de diciembre de 2019, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2362-12 de 6 de octubre de 2016, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 5o. *ILICITUD SUSTANCIAL.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 9

<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

Instrucción SUPERNOTARIADO 11 de 2004

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2014-00154-01(2143-16) de 26 de septiembre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 08001-23-31-000-2016-00480-01(6046-18) de 15 de octubre de 2019, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00214-00(0741-11) de 11 de abril de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2362-12 de 6 de octubre de 2016, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

ARTÍCULO 6o. *DEBIDO PROCESO*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 12

Ley 1698 de 2013

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 11001-03-25-000-2014-00073-00(0140-14) de 14 de febrero de 2019, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 48021 de 2006

ARTÍCULO 7o. *EFECTO GENERAL INMEDIATO DE LAS NORMAS PROCESALES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la misma ley determine.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02.

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 9o. de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 12

ARTÍCULO 8o. *RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 1

ARTÍCULO 9o. *PRESUNCIÓN DE INOCENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.

<Ver Notas del Editor> Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.
<Notas del Editor>

- En criterio del editor debe tenerse en cuenta que la expresión *"cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad"* contenida en el artículo 14 "presunción de inocencia" de la Ley 1952 de 2019, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-495-19 de 22 de octubre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este inciso corresponde en similar sentido al texto del Artículo 6o. de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 14

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00707-00(2697-11) de 21 de junio de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-01789-00(4750-13) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

ARTÍCULO 10. *GRATUIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 17

Resolución PROCURADURÍA 247 de 2016

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia T-678-07 de 30 de agosto de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

ARTÍCULO 11. *EJECUTORIEDAD*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta.

Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria directa establecida en el Capítulo IV del Título V del Libro IV de este Código.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 16

ARTÍCULO 12. *CELERIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en este código.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 18

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2012

Directiva PROCURADURÍA 4 de 2006

Directiva PROCURADURÍA 14 de 2005

ARTÍCULO 13. *CULPABILIDAD.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-155-02.

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 14 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-155-02 de 5 de marzo de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 10

Código Civil; Art. 63

Ley 734 de 2002; Art. 44

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-319A-12 de 3 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

"(...) El dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinable conoce la tipicidad de su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales."

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-000474-00(1855-11) de 30 de enero de 2018, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2362-12 de 6 de octubre de 2016, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 14. *FAVORABILIDAD*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 8

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00371-00(IJ) de 21 de mayo de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

ARTÍCULO 15. *IGUALDAD ANTE LA LEY DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las autoridades disciplinarias tratarán de modo igual a los destinatarios de la ley disciplinaria, sin establecer discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 7

ARTÍCULO 16. *FUNCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 5

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 14 de 2016

ARTÍCULO 17. *DERECHO A LA DEFENSA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante Sentencia C-070-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Mediante Sentencia C-037-03 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 .

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

- El Literal e. del Artículo 73 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 73. DERECHOS DEL DISCIPLINADO. ... e. Designar apoderado, si lo considera necesario, ..."

El Literal e) mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

- El Artículo 154 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 154. JUZGAMIENTO DEL AUSENTE. Si el disciplinado no presentare escrito de descargos se dejará constancia en este sentido y de inmediato se le designará un apoderado para que lo represente en el trámite procesal."

El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-627-96 del 21 de noviembre de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 15

Ley 1698 de 2013

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 54001-23-33-000-2016-00281-01(2691-17) de 15 de octubre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 149 de 2014

- Concepto PROCURADURÍA 27 de 2017

ARTÍCULO 18. *PROPORCIONALIDAD.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 6

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2015-00859-01(3638-16) de 15 de agosto de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2010-00079-00(0768-10) de 11 de abril de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 19. *MOTIVACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Toda decisión de fondo deberá motivarse.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 19

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00482-00(1915-11) de 13 de agosto de 2018, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 20. *INTERPRETACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 11

ARTÍCULO 21. *APLICACIÓN DE PRINCIPIOS E INTEGRACIÓN NORMATIVA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.

<Notas del Editor>

Tener en cuenta que con los cambios normativos debe entenderse las referencias a los siguientes códigos: Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y Ley 906 de 2004

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-067-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 22

Directiva PROCURADURÍA 10 de 2006

Directiva PROCURADURÍA 6 de 2005

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2005

Memorando PROCURADURÍA 12 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de julio de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1861-13 de 1 de junio de 2017, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

T I T U L O II.
LA LEY DISCIPLINARIA.

CAPITULO PRIMERO.
LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA FALTA DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 22. *GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 23

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2018-00160-00(2395) de 5 de febrero de 2019 (Levantada la reserva legal mediante Auto de 20/06/2019), Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula Escobar.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. ce-sc-rad2014-n2187 de 6 de agosto de 2014, Consejero Ponente, Dr. Augusto Hernández Becerra.

ARTÍCULO 23. *LA FALTA DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 26

Ley 1393 de 2010; Art. 32, Inc. 2o.

Ley 1010 de 2006

Ley 842 de 2003; Art. 13

Ley 819 de 2003; Art. 26

Circular PROCURADURÍA 17 de 2017

Circular PROCURADURÍA 18 de 2016

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

Circular PROCURADURÍA - DNP 13-4 de 2017

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1131-12 de 4 de julio de 2013, C.P. (E) Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

- Corte Constitucional Sentencia C-721-06 de 23 de agosto de 2006, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 35929 de 2018

Concepto SENA 35992 de 2018

CAPITULO SEGUNDO.
AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 24. *AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 24

Ley 1698 de 2013

CAPITULO TERCERO.
SUJETOS DISCIPLINABLES.

ARTÍCULO 25. *DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-227-15 de 29 de abril de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00067-00(0285-12) de 19 de febrero de 2018, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 372 de 2005

- Concepto PROCURADURÍA 5 de 2003

- Concepto PROCURADURÍA 293 de 2002

Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-127-03, mediante Sentencia C-694-03 de 12 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-127-03, mediante Sentencia C-151-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE, únicamente por el cargo formulado", por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-127-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, son servidores públicos disciplinables, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-127-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 25

Ley 1796 de 2016; Art. 23

Ley 1698 de 2013

Ley 1575 de 2012; Art. 38 Inc. Final

Ley 1306 de 2009; Art. 7o.

Ley 1056 de 2006; Art. 5o.

Ley 734 de 2002; Art. 53

Ley 489 de 1998; Art. 110

Decreto 564 de 2006; Art. 66; Art. 105

Resolución PROCURADURÍA 108 de 2002

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1799 de 31 de enero de 2007 (autorizada publicación mediante Of. de 20/03/2007), C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 26. *AUTORES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo o función.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 30

CAPITULO CUARTO.
FORMAS DE REALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO.

ARTÍCULO 27. *ACCIÓN Y OMISIÓN*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 27

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00027-00(0131-12) de 13 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 105 de 28 de septiembre de 2006 (autorizada publicación mediante Conflicto 11001-03-06-2006-00060-00 de 22/06/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

CAPITULO QUINTO.
EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 28. *CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito.

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo formulado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral declarado EXEQUIBLE, por el cargo formulado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2014-00860-01(0773-17) de 31 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-000474-00(1855-11) de 30 de enero de 2018, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.

No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 31

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 85001-23-33-000-2015-00129-01(1718-17) de 13 de febrero de 2020, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00340-00(1338-12) de 24 de enero de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 453 de 2005

T I T U L O III.
LA EXTINCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA.

CAPITULO PRIMERO.
CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 29. *CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del investigado.

2. La prescripción de la acción disciplinaria.

PARÁGRAFO. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 32

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

CAPITULO SEGUNDO.
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 30. *TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte tachado del texto original declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 33

Circular PROCURADURÍA 55 de 2009

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 10 de 2010

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 41001-23-33-000-2013-00512-02(0754-15) de 9 de diciembre de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 70001-23-33-000-2013-00283-01(3966-14) de 7 de febrero de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2728-12 de 27 de febrero de 2014, C.P. Dra. (E) Bertha Lucía Ramírez de Páez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0795-10 de 17 de abril de 2013, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2003-00442-01(S)IJ de 29 de septiembre de 2009, C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia.

"*Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.".*

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 188 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 81 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 39 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 13 de 2015

- Concepto PROCURADURÍA 159 de 2011

- Concepto PROCURADURÍA 148 de 2008

- Concepto PROCURADURÍA 35 de 2004

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 ~~y las del artículo 55 de este código~~.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.

ARTÍCULO 31. *RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El investigado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso la acción sólo podrá proseguirse por un término máximo de dos (2) años contados a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procederá decisión distinta a la de la declaración de la prescripción.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El aparte subrayado corresponde en el mismo sentido al aparte subrayado del artículo 36 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-556-01 de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 34

CAPITULO TERCERO.
PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 32. *TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad general o la suspensión e inhabilidad especial, una vez cumplidas se producirá la rehabilitación en forma automática, salvo lo dispuesto en la Carta Política.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 36

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-132-19 de 27 de marzo de 2019, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

T I T U L O IV.
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL SERVIDOR PUBLICO.

CAPITULO PRIMERO.
DERECHOS.

ARTÍCULO 33. *DERECHOS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos de todo servidor público:

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función.

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 6287 de 2018

4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes.

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.

7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas.

8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.

9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes generales y especiales.

10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 37

CAPITULO SEGUNDO.
DEBERES.

ARTÍCULO 34. *DEBERES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas,

los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

<Concordancias>

Resolución PROCURADURÍA 336 de 2017

Resolución PROCURADURÍA 422 de 2014

Resolución PROCURADURÍA 168 de 2012

Resolución PROCURADURÍA 339 de 2011

Resolución PROCURADURÍA 50 de 2009

Resolución PROCURADURÍA 128 de 2008

Resolución PROCURADURÍA 368 de 2006

Resolución PROCURADURÍA 249 de 2004

Directiva PROCURADURÍA 1 de 2018

Directiva PROCURADURÍA 38 de 2017

Directiva PROCURADURÍA 2 de 2017

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2016

Directiva PROCURADURÍA 2 de 2016

Directiva PROCURADURÍA 1 de 2016

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2014

Directiva PROCURADURÍA 2 de 2014

Directiva PROCURADURÍA 6 de 2013

Directiva PROCURADURÍA 6 de 2012

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2012

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2012

Directiva PROCURADURÍA 17 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 1 de 2009

Directiva PROCURADURÍA 21 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 13A de 2005

Directiva PROCURADURÍA - DEFENSORÍA 3 de 2015

Directiva PROCURADURÍA - DEFENSORÍA 4 de 2012

Circular PROCURADURÍA 7 de 2018

Circular PROCURADURÍA 5 de 2018

Circular PROCURADURÍA 3 de 2018

Circular PROCURADURÍA 2 de 2018

Circular PROCURADURÍA 15 de 2017

Circular PROCURADURÍA 14 de 2017

Circular PROCURADURÍA 9 de 2017

Circular PROCURADURÍA 20 de 2016

Circular PROCURADURÍA 1 de 2016

Circular PROCURADURÍA 6 de 2013

Circular PROCURADURÍA 38 de 2011

Circular PROCURADURÍA 15 de 2011

Circular PROCURADURÍA 63 de 2009

Circular PROCURADURÍA 28 de 2009

Circular PROCURADURÍA 22 de 2009

Circular PROCURADURÍA 20 de 2009

Circular PROCURADURÍA 8 de 2009

Circular PROCURADURÍA 14 de 2008

Circular PROCURADURÍA 71 de 2007

Circular PROCURADURÍA 31 de 2007

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

Circular PROCURADURÍA - DEFENSORÍA 21 de 2017

Circular PGN-ME-DAFP-MSPS 9 de 2016

Circular PROCURADURÍA - MINVIVIENDA 3 de 2016

Circular PROCURADURÍA - MINEDUCACIÓN 100 de 2016

Circular PROCURADURÍA - MINVIVIENDA 20 de 2015

Circular PROCURADURÍA - SIYC 9 de 2011

Circular PROCURADURÍA - REGISTRADURÍA 2 de 2007

Circular PROCURADURÍA - CONTRALORÍA 1 de 2007

Memorando PROCURADURÍA 8 de 2013

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 120342 de 2018

Concepto MINEDUCACION 60412 de 2015

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00169-00(0730-12) de 2 de diciembre de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 11001-03-24-000-2019-00293-00 de 21 de octubre de 2019, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00395-00(1506-12) de 11 de julio de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00383-00(1489-12) de 7 de febrero de 2019, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00041-00(0149-12) de 24 de enero de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-01092-00(2552-13) de 17 de mayo de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00489-00(1924-11) de 25 de enero 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030-12 de la de 1o. de febrero de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

<Concordancias>

Ley 951 de 2005

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 446-12 de 22 de agosto de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público.

4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.

<Concordancias>

Ley 1581 de 2012

Ley 951 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 00087 de 3 de julio 2009, C.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón.

5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.

<Concordancias>

Ley 1581 de 2012

Ley 951 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 70 de 2016

6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030-12 de 1o. de febrero de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.

8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.

9. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.

10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El aparte subrayado corresponde en similar sentido al aparte subrayado del Numeral 10 del Artículo 40 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, solamente por el cargo analizado, mediante Sentencia C-728-00 del 21 de junio del 2000, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz.

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.
<Concordancias>

Constitución Política de 1991; Art. 183 Numeral 2o.

Ley 5 de 1992; Art. 90; Art. 268 Num. 1o.; Art. 270 Num. 4o., Par.; Art. 274

Resolución PROCURADURÍA 83 de 2007

Resolución SGEOLOGICO 94 de 2017

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 56540 de 2019

Concepto MINEDUCACION 139685 de 2018

Concepto SENA 6287 de 2018

Concepto MINRELACIONES 16 de 2012

12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta.

13. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.

14. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.

15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos.

16. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones.

17. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo.

18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes.

19. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite del derecho de petición.

<Concordancias>

Ley 1437 de 2011; Art. 22

Ley 909 de 2004; Art. 15 Num. 2 Lit. c)

Decreto Ley 770 de 2005

Decreto Único 1069 de 2015; Art. 2.2.3.12.11

20. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento.
<Concordancias>

Ley 909 de 2004; Art. 38

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00041-00(0149-12) de 24 de enero de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 35929 de 2018

Concepto SENA 35992 de 2018

22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.
<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 35992 de 2018

Concepto CONTADURIA 75961 de 2007

23. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio.

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.
<Concordancias>

Ley 1621 de 2013; Art. 39

Decreto 2244 de 2011; Art. 5o.

Instrucción SUPERNOTARIADO 11 de 2004

Directiva MINEDUCACIÓN 2 de 2019

<Doctrina Concordante>

Concepto ICBF 44533 de 2010

25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.

26. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario.
<Concordancias>

Ley 190 de 1995; Art. 60; Art. 61

Ley 80 de 1993; Art. 41 Par. 3o.

Circular MININTERIORJUST 300 de 2006

27. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.

28. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.

29. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.

30. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa.

31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.
<Concordancias>

Resolución CONTADURÍA 328 de 2005; Art. 1

<Doctrina Concordante>

Concepto CONTADURÍA 824 de 2001

32. Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en vigencia el presente código, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte demandado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1061-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 171

33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.
<Concordancias>

Ley 1450 de 2011, Art. 227

34. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.

35. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Presidente de la República, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, reglamentará la materia.

36. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.
<Concordancias>

Ley 1450 de 2011, Art. 227

37. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar.

38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.

<Concordancias>

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011; Art. 31

39. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la ley.

40. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 842 de 2003, "por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 45.340, de 14 de octubre de 2003.

El Artículo mencionado en su versión original establece:

"ARTÍCULO 41. DEBERES DE LOS PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS O PRIVADOS. Son deberes de los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o privadas, los siguientes:

"a) Actuar de manera imparcial, cuando por las funciones de su cargo público o privado, sean responsables de fijar, preparar o evaluar pliegos de condiciones de licitaciones o concursos;

"b) Los profesionales que se hallen ligados entre sí por razón de jerarquía, ya sea en la administración pública o privada, se deben mutuamente, independiente y sin perjuicio de aquella relación, el respeto y el trato impuesto por su condición de colegas".

<Concordancias>

Ley 1753 de 2015; Art. 159 Inc. 4o.

Ley 1796 de 2016; Art. 28 Num. 5o.

Ley 1369 de 2009; Art. 15 Par.

Ley 1450 de 2011; Art. 227 Inc. 3o.

Ley 1448 de 2011; Art. 178

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia T-954-05 de 15 de septiembre de 2005, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 120342 de 2018

Concepto MINEDUCACION 55009 de 2018

CAPITULO TERCERO.
PROHIBICIONES.

ARTÍCULO 35. *PROHIBICIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Ver Notas del Editor> A todo servidor público le está prohibido:
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 39

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 38 de 2011

Circular PROCURADURÍA 26 de 2011

Circular PROCURADURÍA 21 de 2011

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 1 de 2009

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 11001-03-24-000-2019-00293-00 de 21 de octubre de 2019, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00383-00(1489-12) de 7 de febrero de 2019, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00041-00(0149-12) de 24 de enero de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 446-12 de 22 de agosto de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes.

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.
<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 8 de 2018

Circular PROCURADURÍA 19 de 2017

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del Gobierno.
<Concordancias>

Constitución Política; Art. 129

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.

6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-01092-00(2552-13) de 17 de mayo de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00064-00(0234-12) de 13 de febrero de 2020, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00383-00(1489-12) de 7 de febrero de 2019, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.
<Concordancias>

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011; Art. 31

9. <Numeral INEXEQUIBLE>
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-350-09, mediante Sentencia C-467-09 de 15 de julio de 2009, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Numeral declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-350-09 de 20 de mayo de 2009, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente.

11. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales ~~o administrativas~~ o admitidas en diligencia de conciliación.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Numeral declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

La Corte expresa, entre otros puntos, en la parte motiva lo siguiente:

"3. Analizadas tanto la norma acusada como lo expresado por la Corte en la sentencia C-728-00 de 2000, en relación con el artículo 41, numeral 13 de la Ley 200 de 1995, se encuentra por la Corte que el legislador, al expedir el artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002, ahora demandado, no hizo cosa distinta a la de incluir en el texto normativo nuevo, el condicionamiento expresado que para declarar la constitucionalidad del artículo 41, numeral 13 de la Ley 200 de 1995, introdujo la Corte en la sentencia aludida, dentro del cual incluyó las obligaciones *"admitidas en diligencia de conciliación"*, lo que resulta igualmente acorde con la Constitución, pues la conciliación surte efectos de cosa juzgada.

4. El artículo 35 de la Ley 734 de 2002, incluye también como prohibición a los servidores públicos el incumplimiento de manera reiterada e injustificada de las obligaciones impuestas en decisiones administrativas.

Al respecto, se observa por la Corte que tales decisiones pueden ser objeto de controversia judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, por lo cual son diferentes al incumplimiento reiterado e injustificado de decisiones judiciales, asunto este sobre el cual, como ya se dijo, si existe cosa juzgada material.

Ahora, tratándose de decisiones administrativas que impongan obligaciones a los servidores públicos, es claro que ellas a pesar de que gozan de la presunción de legalidad, pueden ser objeto impugnación por la vía gubernativa y de controversia ante la jurisdicción competente, e incluso de suspensión provisional, razón esta por la cual, aparece como desproporcionado erigir su incumplimiento en una falta por violación de una prohibición por parte del servidor público, pues decisiones administrativas en ese sentido pueden ser proferidas por las más diversas autoridades y de esa manera se pondría en serio peligro la continuidad del servidor en la administración pública, lo que resulta contrario al artículo 6 de la Carta. Desde luego, la decisión de la Corte no significa una autorización al desconocimiento de decisiones administrativas proferidas por las autoridades correspondientes; lo que sucede es que se deja la posibilidad de que ellas sean controvertidas tanto en la vía gubernativa como ante la jurisdicción administrativa conforme a la Constitución y a la ley. De esta suerte, si quedan en firme luego del proceso contencioso administrativo y a pesar de ello existe desconocimiento reiterado e injustificado por parte del servidor público, ello sería constitutivo de falta pues equivale a alzarse contra las decisiones de los jueces cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos y mucho más para los servidores públicos.

No habiendo variado sustancialmente las circunstancias sociales e históricas conforme a las cuales se expidió la norma acusada, no encuentra la Corte motivo alguno para declarar la inconstitucionalidad de dicha disposición, salvo la expresión *"o administrativas"*, que se declarará inexequible."

- Este Numeral corresponde en similar sentido al Numeral 13 del Artículo 41 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-728-00 del 21 de junio del 2000, "bajo el entendido de que la investigación disciplinaria acerca del reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones del servidor público sólo podrá iniciarse con base en Sentencias proferidas por las respectivas jurisdicciones, en las que se declare que un servidor público ha incumplido sus obligaciones". Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia C-819-06 de 4 de octubre de 2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 6

Directiva MINEDUCACIÓN 2 de 2019

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.
<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 31 de 3 de mayo de 2007, C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 12 de 1999

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos.
<Concordancias>

Resolución SGEOLOGICO 94 de 2017

Resolución PROCURADURÍA 83 de 2007

16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 5

17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que proceda en determinado sentido.

18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 47001-23-33-000-2017-00081-01(PI) de 8 de febrero de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López.

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2017-00078-01 de 14 de septiembre de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González.

19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior.

20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.

22. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> <Numeral modificado por el artículo 3o. de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación

o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso modificado por la Ley 1474 de 2011 declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, frente a los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-257-13 de 7 de mayo de 2013, Conjuez Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, "en el sentido de que la expresión ***"asuntos relacionados con las funciones propias del cargo"***, se aplica a las dos prohibiciones en el establecidas".

Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones.

Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existe <sic> sujetos claramente determinados.

<Notas de Vigencia>

- Numeral 22 modificado por el artículo 3o. de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Texto original del numeral 22 declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-893-03 de 7 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, "en el entendido que la prohibición establecida en este numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones; y que será de un (1) año en los demás casos, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo al que se haya estado vinculado".

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 56 Num. 4

Constitución Política; Art. 267 Inc. 5o.

Ley 1123 de 2007; Art. 29 Num. 5o.

Ley 489 de 1998; Art. 113 Inc. 2o.

Ley 182 de 1995; Art. 10

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 56540 de 2019

Concepto MINEDUCACION 139685 de 2018

Concepto PROCURADURÍA 30 de 2016

<Legislación Anterior>

Texto original Ley 734 de 2002:

22. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra.

23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos.

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.

25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo.

26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública (artículo 1o., Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-265-16 de 23 de mayo de 2016, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente permitido.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Numeral 2o. del Artículo 44 de la Ley 200 de 1995, sobre otras incompatibilidades, en similar sentido establecía: "Salvo las excepciones constitucionales y legales y el ejercicio de la docencia ~~universitaria~~ hasta por ocho horas semanales dentro de la jornada laboral."

El texto tachado fue objeto del siguiente fallo:

Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-317-96 del 18 de julio de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1508 de 12 de agosto de 2003 (autorizada publicación en 03/08/27), C.P. Dr. Augusto Trejos Jaramillo

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero.

29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular.

30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva.

31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad.

32. <CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Numeral corresponde al Numeral 8o. del Artículo 41 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, "siempre y cuando se entienda que los paros, las suspensiones de actividades o disminuciones del ritmo laboral que se efectúen por fuera de los marcos del derecho de huelga no son admisibles constitucionalmente y, por ende, están prohibidas para todos los servidores públicos y no sólo para aquellos que laboren en actividades que configuren servicios públicos esenciales".

33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales.

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado para hacerlo.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Numeral corresponde al Numeral 28 del Artículo 41 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

35. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las demás prohibiciones consagradas en la ley ~~y reglamentos~~.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-328-03 de 29 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor, para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo establecido por el Inciso 3o. del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

El texto original del Inciso 3o. del Artículo 10 es (*):

"ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. ...

Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión. ... "

(*) Por favor remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto transcrito.

- En criterio del editor para la interpretación de este Artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por los Artículos 42, 44 y 45 de la Ley 842 de 2003, "por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 45.340, de 14 de octubre de 2003.

Los Artículos mencionados en su versión original establecen:

"ARTÍCULO 42. PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN EN CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS O PRIVADOS. Son prohibiciones a los profesionales que se desempeñen en funciones públicas o privadas, las siguientes:

"a) Participar en el proceso de evaluación de tareas profesionales de colegas, con quienes se tuviese vinculación de parentesco, hasta el grado fijado por las normas de contratación pública, o vinculación societaria de hecho o de derecho. La violación de esta norma se imputará también al profesional que acepte tal evaluación;

"b) Los profesionales superiores jerárquicos, deben abstenerse de proceder en forma que desprestigie o menoscabe a los profesionales que ocupen cargos subalternos al suyo;

"c) Cometer, permitir o contribuir a que se cometan actos de injusticia en perjuicio de otro profesional, tales como destitución, reemplazo, disminución de categoría, aplicación de penas disciplinarias, sin causa demostrada y justa.

"ARTÍCULO 44. DE LAS PROHIBICIONES A LOS PROFESIONALES EN LOS CONCURSOS O LICITACIONES. Son prohibiciones de los profesionales en los concursos o licitaciones:

"a) Los profesionales que hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso o licitación deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su intervención estuviese establecida en las bases del concurso o licitación.

"ARTÍCULO 45. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES QUE AFECTAN EL EJERCICIO. Incurrirán en faltas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y por lo tanto se les podrán imponer las sanciones a que se refiere la presente ley:

"a) Los profesionales que actúen simultáneamente como representantes técnicos o asesores de más de una empresa que desarrolle idénticas actividades y en un mismo tema, sin expreso consentimiento y autorización de las mismas para tal actuación;

"b) Los profesionales que en ejercicio de sus actividades públicas o privadas hubiesen intervenido en determinado asunto, no podrán luego actuar o asesorar directa o indirectamente a la parte contraria en la misma cuestión;

"c) Los profesionales no deben intervenir como peritos o actuar en cuestiones que comprendan las inhabilidades e incompatibilidades generales de ley".

<Concordancias>

Ley 1796 de 2016; Art. 26 Num. 6o.; Art. 28 Num. 6o.

Ley 1437 de 2011; Art. 9o.

Ley 1123 de 2007; Art. 29

Ley 1010 de 2006

Ley 996 de 2005; Art. 38

Circular MINDEFENSA 85 de 2004

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 80572 de 2016

Concepto MINEDUCACION 65685 de 2015

Concepto MINEDUCACION 56889 de 2015

Concepto MINEDUCACION 51916 de 2015

Concepto MINEDUCACION 120342 de 2018

Concepto MINEDUCACION 55009 de 2018

Concepto CNELECTORAL 913 de 2005

CAPITULO CUARTO.
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES.

ARTÍCULO 36. *INCORPORACIÓN DE INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Se entienden incorporadas a este código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 40

Ley 1796 de 2016; Art. 14

Ley 842 de 2003; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 37; Art. 38; Art. 39; Art. 40; Art. 41; Art. 42; Art. 43; Art. 44; Art. 45

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia C-329-95 de 27 de julio de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

- Corte Constitucional Sentencia C-093-94 de 4 de marzo de 1994, M.Ps. Drs. Jose Gregorio Hernandez Galindo, Hernando Herrera Vergara

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 88046 de 2019

Concepto CNELECTORAL 1526 de 2004

Concepto CNELECTORAL 1540 de 2003

Concepto CNELECTORAL 1935 de 2003

Concepto CNELECTORAL 1900 de 2003

Concepto CNELECTORAL 973 de 2003

Concepto CNELECTORAL 431 de 2003

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 413 de 5 de noviembre de 1991, C.P. Dr. Humberto Mora Osejo

ARTÍCULO 37. *INHABILIDADES SOBREVINIENTES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Parte del texto de este artículo corresponde en similar sentido a la frase final del Segundo Inciso del Parágrafo del Numeral 1o. del Artículo 30 de la Ley 200 de 1995. Dicho Segundo Inciso fue objeto de los siguientes fallos:

. El fallo contenido en la sentencia C-187-98 fue reiterado mediante Sentencia C-234-98 del 20 de mayo de 1997. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

. Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-187-98 6 de mayo de 1998, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Herrera Vergara, menciona la Corte en parte resolutiva "... con la advertencia de que trata la parte motiva de esta providencia".

La frase final mencionada establecía:

"... En firme la decisión, tendrá efectos inmediatos."

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 41

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2046-07 de 29 de enero de 2015, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 56620 de 2018

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1813 de 15 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. de 26/03/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

Concepto CNELECTORAL 431 de 2003

ARTÍCULO 38. *OTRAS INHABILIDADES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 42

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Numeral 1o. del Artículo 43 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía: "Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos *hayan afectado la administración pública*."

Los textos subrayados y en letra itálica fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-111-98 del 25 de marzo de 1998, "advirtiendose que tal disposición se declara exequible en el entendido de que ella no es aplicable a los servidores de la Rama Judicial, pues para éstos ha sido consagrada norma especial y posterior sobre inhabilidades -el artículo 150 de la Ley 270 de 1996-, que señala la manera taxativa las vigencias para ejercer cargos dentro de aquélla." Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

. Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, siempre y cuando se entienda que ésta hace referencia a los delitos contra el patrimonio del Estado. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Acto Legislativo 1 de 2009; Art. 4o.

Ley 599 de 2000; Art. 43; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 51

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-544-05, (violación al principio de favorabilidad) mediante Sentencia C-987-06 de 29 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Fallo inhibitorio en relación con el cargo por violación del principio de igualdad.

- Numeral 2. declarado EXEQUIBLE, por el cargo examinado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-544-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-504-09 de 27 de julio de 2009, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

- Corte Constitucional Sentencia C-528-06 de 12 de julio de 2006, M.P. Dr. Clara Inés Vargas Hernández

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.
<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Quinta, Expediente No. 2014-00078-00 de 5 de febrero de 2015, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.

"... En síntesis, es claro que ***únicamente la sanción disciplinaria que imponga de manera explícita, bien sea la inhabilidad general o la inhabilidad especial tiene la capacidad de afectar el acto de elección o nombramiento ..."***

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral declarado EXEQUIBLE, *por los cargos de vulneración de los artículos 1o., 2o., 40.7, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,* por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-18 de 19 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Quinta, Expediente No. 11001-03-28-000-2018-00124-00_20190808 de 8 de agosto de 2019, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2099 de 24 de abril de 2012 (autorizada publicación 25/04/2012) , Consejero Ponente, Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Parágrafo 1o. declarado EXEQUIBLE, *por los cargos de vulneración de los artículos 1o., 2o., 40.7, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,* por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-18 de 19 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

- Parágrafo 1o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-077-07 de 7 de febrero de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el parágrafo 1 del numeral 4. por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1196-05 de 22 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

<Concordancias>

Ley 610 de 2000; Art. 60

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Quinta, Expediente No. 11001-03-28-000-2018-00124-00_20190808 de 8 de agosto de 2019, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

PARÁGRAFO 2o. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-064-03, mediante Sentencia C-652-03 de 5 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. .

- Parágrafo 2o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-064-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería; "en el sentido que respecto de las conductas culposas, se aplicarán las inhabilidades previstas en la ley".

<Concordancias>

Ley 1796 de 2016; Art. 25 Num. 4o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia T-960-05 de 15 de septiembre de 2005, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

- Corte Constitucional Sentencia C-329-95 de 27 de julio de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

- Corte Constitucional Sentencia C-093-94 de 4 de marzo de 1994, M.Ps. Drs. Jose Gregorio Hernandez Galindo, Hernando Herrera Vergara

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 19815 de 16 de marzo de 2006, M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 56620 de 2018

Concepto MINEDUCACION 139685 de 2018

Concepto MINEDUCACION 54695 de 2015

Concepto CNELECTORAL 1526 de 2004

Concepto CNELECTORAL 1935 de 2003

Concepto CNELECTORAL 1900 de 2003

Concepto CNELECTORAL 1540 de 2003

Concepto CNELECTORAL 973 de 2003

Concepto CNELECTORAL 431 de 2003

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 413 de 5 de noviembre de 1991, C.P. Dr. Humberto Mora Osejo

ARTÍCULO 39. *OTRAS INCOMPATIBILIDADES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 43

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el período:
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre apartes de este inciso por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1195-08 de 3 de diciembre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02.

- El Numeral 1o. del Artículo 44 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía: "Los *gobernadores*, *diputados*, *alcaldes*, concejales y miembros de las juntas administradoras locales {desde el momento de su elección} y hasta cuando esté legalmente terminado el período, así como los que reemplace el ejercicio del mismo, no podrán:"

Los textos subrayados, en letra itálica y entre corchetes fueron objeto de los siguientes fallos:

- Aparte entre corchetes "desde el momento de la elección" declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. Sobre la expresión "y hasta cuando esté legalmente terminado el período" la Corte se inhibe de fallar por ausencia de cargos.

. Apartes en letra itálica declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante sentencia C-559-96 del 24 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

. Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-426-96 del 12 de septiembre de 1996, "siempre que se entienda que la incompatibilidad establecida para los Diputados, se refiere a las controversias y asuntos en los que se discutan intereses del departamento, o aquellas que deban ser decididas por una entidad administrativa del orden departamental".

. Mediante Sentencia C-559-96 de 24 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-426-96.

. Mediante Sentencia C-326-96 de 25 de julio de 1996, Magistrado Ponente Dr. Julio Cesar Ortiz Guitierrez y C-559-96, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en Sentencia C-307-96

. Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-307-96 de julio 11 de 1996, "bajo el entendido de que subsisten las incompatibilidades y las excepciones a éstas, legalmente establecidas".

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2013-00127-01(2230-14) de 23 de agosto de 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;

b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este literal b) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1195-08 de 3 de diciembre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- El Numeral 1o., Literal b) del Artículo 44 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía: "Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales."

El literal b) fue objeto de los siguientes fallos:

. Este literal, referido a los "gobernadores" y "alcaldes", fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-559-96 del 24 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

. Este literal, referido a los "diputados", fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-426-96 del 12 de septiembre de 1996. "Siempre que se entienda que la incompatibilidad allí establecida para los Diputados, se refiere a las controversias y asuntos en los que se discutan intereses del Departamento, o aquellas que deban ser decididas por una entidad administrativa del orden departamental. Sentencia C-426-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Herrera Vergara.

. Mediante Sentencia C-559-96 de 24 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-426-96.

. Literal b) declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-307-96 de julio 11 de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, "bajo el entendido de que subsisten las incompatibilidades y las excepciones a éstas, legalmente establecidas".

2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. Esta prohibición se extiende aun encontrándose en uso de licencia.
<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 48669 de 2018

ARTÍCULO 40. *CONFLICTO DE INTERESES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, *"... en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo"*.

<Concordancia>

Ley 1952 de 2019; Art. 44

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 88046 de 2019

ARTÍCULO 41. *EXTENSIÓN DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley para los gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, se hacen extensivos a las mismas autoridades de los niveles departamental, distrital y municipal.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 45

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 56620 de 2018

T I T U L O V.
FALTAS Y SANCIONES.

CAPITULO PRIMERO.
CLASIFICACIÓN Y CONNOTACIÓN DE LAS FALTAS.

ARTÍCULO 42. *CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las faltas disciplinarias son:

1. Gravísimas

2. Graves.

3. Leves.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 46

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 60412 de 2015

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia C-721-15 de 25 de noviembre de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

ARTÍCULO 43. *CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:

1. El grado de culpabilidad.

2. La naturaleza esencial del servicio.

3. El grado de perturbación del servicio.

4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.

7. Los motivos determinantes del comportamiento.

8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral 9. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- El Artículo 27 de la Ley 200 de 1995 igualmente trataba de los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Este Artículo fue objeto de los siguientes fallos de constitucionalidad:

. Mediante Sentencia C-181-02 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en las Sentencias C-708-99 y C-202-00 <sic>.

. El fallo contenido en la Sentencia C-708-99, fue reiterado mediante Sentencia C-292-00 del 15 de marzo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

. Artículo 27 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-708-99 del 22 de septiembre de 1999, Magistrado Ponente Alvaro Tafur Galvis, "en lo referente al cargo estudiado". Esta sentencia tuvo en cuenta el fallo C-280-96.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 47

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia C-721-15 de 25 de noviembre de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00482-00(1915-11) de 13 de agosto de 2018, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2463-11 de 27 de julio de 2017, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

CAPITULO SEGUNDO.
CLASIFICACIÓN Y LÍMITE DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 44. *CLASES DE SANCIONES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 48

1. *Destitución e inhabilidad general*, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Expresión "Destitución e inhabilidad general" en letra itálica declarada EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-500-14 16 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. Estarse a lo resuelto en la C-028-06 que declaró exequible este numeral en relación con el cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución.

- Numeral 1 declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- Numeral 1. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

- El Inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 contenía el siguiente texto: "Las faltas gravísimas serán sancionadas con terminación del contrato de trabajo ~~o de prestación de servicios personales~~, destitución, desvinculación, remoción *o pérdida de investidura*. "

Los textos subrayados, tachados y en letra itálica fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte tachado del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte subrayado del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996 siempre y cuando se entienda que en estos casos también es aplicable el artículo 110 de la Constitución Política. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte en letra itálica del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, siempre y cuando se entienda que no se aplica a los Congresistas y que para los miembros de las Corporaciones Públicas de las entidades territoriales son causas autónomas de pérdida de investidura las previstas por los artículos 110 y 291 inciso primero de la Constitución. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Ley 443 de 1998; Art. 37 Literal f)

Circular CNSC 117 de 2019; Num. 1 Inc. 6

<Jurisprudencia Concordante>

Corte Constitucional:

- Corte Constitucional Sentencia SU-712-13 de 17 de octubre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

Consejo de Estado:

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00395-00(1506-12) de 11 de julio de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-02-25-000-2012-00231-00(0885-12) de 16 de mayo de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 11001-03-24-000-2019-00293-00 de 21 de octubre de 2019, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00383-00(1489-12) de 7 de febrero de 2019, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2014-00360-00(IJ) de 15 de noviembre de 2017, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2463-11 de 27 de julio de 2017, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1131-14, Auto de 13 de mayo de 2014, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

- Consejo de Estado, Acción de Tutela, Sala Plena, Expediente No. 2013-06871-01(AC) de 5 de marzo de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- Consejo de Estado Acción de Cumplimiento, Expediente No. 1987 de 5 de agosto de 2005, C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 81 de 2018

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Numeral 2. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- El Inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 contenía el siguiente texto: "Las faltas graves se sancionarán con multa entre once (11) y noventa (90) días del salario devengado al tiempo de cometerlas, suspensión en el cargo hasta por el mismo término o suspensión del contrato de trabajo ~~o de prestación de servicios~~ hasta por tres (3) meses, ..."

Los textos subrayados y tachados fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte tachado del inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte subrayado del inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Circular CNSC 117 de 2019; Num. 1 Inc. 6

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2012-00352-00(1353-12) de 16 de abril de 2015, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 contenía el siguiente texto: "Las faltas graves se sancionarán con multa entre once (11) y noventa (90) días del salario devengado al tiempo de cometerlas, suspensión en el cargo hasta por el mismo término o suspensión del contrato de trabajo ~~o de prestación de servicios~~ hasta por tres (3) meses, ..."

Los textos subrayados y tachados fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte tachado del inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte subrayado del inciso 2o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Qunta, Expediente No. 2011-00966-01 de 10 de mayo de 2013, C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 215 de 1999

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este numeral corresponde en similar sentido al texto del Numeral 2o. del Artículo 29 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.

PARÁGRAFO. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Parágrafo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Parágrafo:

Ley 1952 de 2019; Art. 29 Inc. 3 y 4

General:

Ley 1952 de 2019; Art. 48

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011; Art. 31

Circular CNSC 117 de 2019; Num. 1 Inc. 13

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-319A-12 de 3 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

"(...) El dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinable conoce la tipicidad de su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales.".

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00064-00(0234-12) de 13 de febrero de 2020, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1861-13 de 1 de junio de 2017, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 60412 de 2015

ARTÍCULO 45. *DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>**
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 49

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Expresión "elección", subrayada, declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-111-19 de 13 de marzo de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o

c) La terminación del contrato de trabajo, y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Literal d) declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- El Artículo 30, Numeral 3o. de la Ley 200 de 1995 establecía:

ARTÍCULO 30. SANCIONES ACCESORIAS. Son sanciones accesorias las siguientes:

...

3. La exclusión de la carrera".

Este Numeral 3o. fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. Aclara la Corte: "... condicionado a que se entienda que la sanción accesoria en él contemplada no procede frente a faltas disciplinarias graves ni leves".

<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2005

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 106 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 73 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 8 de 2016

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.
<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2005

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.

4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida.

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva.
<Doctrina Concordante>

Concepto CONTADURÍA 25432 de 2003

ARTÍCULO 46. *LÍMITE DE LAS SANCIONES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> *La inhabilidad general será de diez a veinte años*; *la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses*; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte en letra itálica "*La inhabilidad general será de diez a veinte años*; *la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses*" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante Sentencia C-211-03 de 11 de marzo de 2003, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante Sentencia C-070-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-948-02.

- Aparte en letra itálica "*La inhabilidad general será de diez a veinte años*" declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, "bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política".

La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. *Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial*.
<Notas del Editor>

- En criterio del editor, en relación para la interpretación de este inciso, en materia de la suspensión de los Congresistas debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el literal c) del artículo 14 de la Ley 1828 de 2017, "por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 50.125 de 23 de enero de 2017.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

"ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN Y LÍMITE DE LAS SANCIONES.(...)

"c) La suspensión de la condición congresional, consiste en la separación del ejercicio de la investidura y prerrogativas de Congresista. La misma no podrá ordenarse por un término inferior a diez (10), ni superior a ciento ochenta (180) días. Durante el término de suspensión, no se podrá ejercer ninguna función pública.

Cuando no fuere posible ejecutar la suspensión, por haber cesado definitivamente el Congresista en sus funciones, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios que corresponderá al monto devengado al momento de la comisión de la falta, los que deberá cancelar dentro de los dos (2) meses siguientes al retiro del Congreso.

La suspensión siempre se ejecutará en periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias, es decir durante el receso de labores del Congreso se suspende su aplicación.

Cuando no hubiere sido cancelado el equivalente a la sanción de suspensión, por desvinculación del Congresista, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de cada Cámara, adelantará el procedimiento administrativo de cobro coactivo, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida la Mesa Directiva de la correspondiente Cámara legislativa. (...)".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 48 Par.

La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 27 de 2005

La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida.
<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2005

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 47. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.

<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>

1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 50

a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;

b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;

c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;

d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El aparte subrayado corresponde en el mismo sentido al aparte del Literal f del Artículo 27 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado;

f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso;

g) El grave daño social de la conducta;
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este literal corresponde en similar sentido a la frase inicial del Último Inciso del Artículo 29 de la Ley 200 de 1995, la cual fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Establecía la frase inicial de dicho inciso:

"Para la selección o graduación de las sanciones se tendrán en cuenta la gravedad de la falta, ..."

h) La afectación a derechos fundamentales;

i) El conocimiento de la ilicitud;
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Literal declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00502-00(1938-11) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

2. A quien, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, se le graduará la sanción de acuerdo con los siguientes criterios:
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 50

a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

b) Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

c) Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

d) Si las sanciones son de multa se impondrá la más grave aumentada en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

e) <Literal INEXEQUIBLE> ~~Si las sanciones a imponer para cada una de las faltas son la multa o la amonestación, se impondrán todas~~.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Literal declarado INEXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia T-412-06 de 22 de mayo de 2006, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil

LIBRO II.
PARTE ESPECIAL.

T I T U L O U N I C O.
LA DESCRIPCION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR.

CAPITULO I.
FALTAS GRAVÍSIMAS.

ARTÍCULO 48. *FALTAS GRAVÍSIMAS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Son faltas gravísimas las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral 1 declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-720-06 de 23 de agosto de 2006, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Numeral 1. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 65

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Circular PROCURADURÍA 3 de 2016

Circular PROCURADURÍA 16 de 2011

Circular PROCURADURÍA 23 de 2010

Circular PROCURADURÍA 72 de 2009

Circular PROCURADURÍA 19 de 2005

Circular PROCURADURÍA - CGN MH - 803 de 2017

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-450-18 de 19 de noviembre de 2018, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

2. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, o no suministrar oportunamente a los miembros del Congreso de la República las informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control político.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 61 Nums. 1 y 2

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2005

3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado

por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62 Num. 1

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

Ley 594 de 2000; Art. 35 Lit. b)

Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.

<Jurisprudencia Vigencia>

- El numeral 4o. del Artículo 25 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El servidor público o el particular que ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial." Este numeral fue declarado condicionalmente EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-310-97 del 25 de junio de 1997, "bajo el entendido de que el incremento patrimonial debe ser aquel que no tiene causa justificada, o es indebido o ilícito". Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz. .

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62 Num. 2

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 153 de 2010

4. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 61 Num. 3

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00214-00(0741-11) de 11 de abril de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

5. Realizar cualquiera de los actos mencionados a continuación con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o social:

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El aparte subrayado, que en similar sentido corresponde a parte del Artículo 25, Numeral 5o., Literal a. de la Ley 200 de 1995, fue declarado EXEQUIBLE -por los cargos analizados- por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 1

<Concordancias>

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

a) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Lesión ~~grave~~ a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02, que declaró INEXEQUIBLE la expresión "grave".

- El aparte tachado, que en similar sentido corresponde a parte del Artículo 25, Numeral 5o., Literal a., Numeral 1) de la Ley 200 de 1995, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 1 Lit. b)

b) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 1 Lit. c)

c) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 1 Lit. d)

d) Traslado por la fuerza de miembros del grupo a otro.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 1 Lit. e)

6. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo, la muerte de uno o varios de sus miembros.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 1 Lit. a)

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 47001-23-33-000-2017-00081-01(PI) de 8 de febrero de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López.

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2017-00078-01 de 14 de septiembre de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González.

7. Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 2

Código Penal (Ley 599 de 2000); Arts. 135 a 164

Ley 875 de 2004; Art. 13

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num 53

Decreto 138 de 2005; Art. 13

Decreto 860 de 1998; Art. 5o.

8. Someter a una o varias personas a privación de la libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley.
<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este Numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3o. Inciso 4o. del Acto Legislativo 2 de 2003, "por medio del cual se modifican los Artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo", publicado en el Diario Oficial No. 45.406 de 19 de diciembre de 2003.

Acto Legislativo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.

El texto original del Artículo 3o. mencionado establece:

"ARTÍCULO 3o. El artículo 28 de la Constitución Política quedará así:

"ARTÍCULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

"La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

"En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

"Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar".

- El Inciso 5o. del Artículo 5o. del Acto Legislativo 2 de 2003 establece además:

"ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. ...

"...

"Las funciones a que se refieren el inciso 4º del artículo 15, el inciso 4º del artículo 28 y el parágrafo 2º del artículo 250 que se introducen por el presente acto legislativo se conferirán por el término de cuatro (4) años prorrogables por la mayoría absoluta del Congreso de la República.

"..."

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral, que en similar sentido corresponde al Artículo 25, Numeral 5o., Literal b. de la Ley 200 de 1995, fue declarado EXEQUIBLE -por los cargos analizados- por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 3; Art. 53 Num. 1

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1428 de 15 de agosto de 2002 (autorizada publicación mediante Auto de 16/08/2006), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

9. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Infligir a una persona dolores o sufrimientos ~~graves~~ físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 4

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

10. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52; Num. 5

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

11. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Ocasionar la muerte en forma deliberada, ~~y dentro de un mismo contexto de hechos, a varias personas que se encuentren en situación de indefensión~~, por causa de sus opiniones o actividades políticas, creencias religiosas, raza, sexo, color o idioma.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-125-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<Concordancias>

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

12. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62. Num. 3

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

13. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la libertad de esta o estas a la satisfacción de cualquier tipo de exigencias.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 53 Num. 1

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

14. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 53 Num. 2

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

15. Retardar injustificadamente la conducción de persona capturada, detenida o condenada, al lugar de destino, o no ponerla a órdenes de la autoridad competente, dentro del término legal.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este Numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3o. Inciso 4o. del Acto Legislativo 2 de 2003, "por medio del cual se modifican los Artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo", publicado en el Diario Oficial No. 45.406 de 19 de diciembre de 2003.

Acto Legislativo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.

El texto original del Artículo 3o. mencionado establece:

"ARTÍCULO 3o. El artículo 28 de la Constitución Política quedará así:

"ARTÍCULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

"La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

"En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

"Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada período de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar".

- El Inciso 5o. del Artículo 5o. del Acto Legislativo 2 de 2003 establece además:

"ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. ...

"...

"Las funciones a que se refieren el inciso 4º del artículo 15, el inciso 4º del artículo 28 y el parágrafo 2º del artículo 250 que se introducen por el presente acto legislativo se conferirán por el término de cuatro (4) años prorrogables por la mayoría absoluta del Congreso de la República.

"..."

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 53 Num. 3

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

16. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este Numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 1o. Inciso 4o. del Acto Legislativo 2 de 2003, "por medio del cual se modifican los Artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo", publicado en el Diario Oficial No. 45.406 de 19 de diciembre de 2003.

Acto Legislativo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816-04 de 30 de agosto de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes.

El texto original del Artículo 1o. mencionado establece:

"ARTÍCULO 1o. El artículo 15 de la Constitución Política quedará así:

"ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

"En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

"La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

"Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada período de sesiones el Gobie rno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las

medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

"Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley".

- El Inciso 5o. del Artículo 5o. del Acto Legislativo 2 de 2003 establece además:

"ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. ...

"...

"Las funciones a que se refieren el inciso 4º del artículo 15, el inciso 4º del artículo 28 y el parágrafo 2º del artículo 250 que se introducen por el presente acto legislativo se conferirán por el término de cuatro (4) años prorrogables por la mayoría absoluta del Congreso de la República.

"..."

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62. Num. 4

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El Numeral 10 del Artículo 25 de la Ley 200 de 1995 establecía: "10. Actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución o en la ley."

El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-391-02 de 22 de mayo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 56 Num. 1

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la expresión *"conflicto de intereses"* contenida en este numeral 17 por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-331-19 de 24 de julio de 2019, Magistrado Ponente Dr. José Fernando Reyes Cuartas.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 56 Num. 2

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-00234-00(0530-13) de 17 de octubre de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2017-00078-01 de 14 de septiembre de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González.

- Consejo de Estado Acción de Cumplimiento, Expediente No. 1987 de 5 de agosto de 2005, C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 22 de 2018

- Concepto ICBF 66 de 2018

18. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señalados en las normas vigentes.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 56 Num. 3

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

19. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Amenazar, ~~provocar~~ o agredir gravemente a las autoridades legítimamente constituidas en ejercicio o con relación a las funciones.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE y subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62. Num. 6

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2463-11 de 27 de julio de 2017, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

20. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 1

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1637 de 12 de mayo de 2005 (autorizada publicación mediante Of. 726 de 29/08/2006), C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

21. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la Constitución Política.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 2

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 3

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Circular PROCURADURÍA 26 de 2011

23. Ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 5

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

24. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 6

Ley 179 de 1994; Art. 50

Ley 143 de 1994; Art. 49

Ley 142 de 1994; Art. 12; Art. 130

Decreto 111 de 1996, Art. 44

Circular PROCURADURÍA 17 de 2005

Circular PROCURADURÍA 48 de 2008

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 120342 de 2018
Concepto MINEDUCACION 120342 de 2018

25. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 7

26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 38 Num. 41; Art. 67

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 52; Art. 55 Num. 11

<Doctrina Concordante>

Concepto CONTADURÍA 25432 de 2003

27. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 8

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 41001-23-33-000-2013-00512-02(0754-15) de 9 de diciembre de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

28. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema integrado de seguridad social, o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las nóminas de los servidores públicos al ICBF.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 9

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

Circular PROCURADURÍA 43 de 2002

Circular PROCURADURÍA 22 de 2010

Directiva PROCURADURÍA 18 de 2004

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 13001-23-33-000-2016-01107-01(pi) de 15 de marzo de 2018, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez.

29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-094-03 de 11 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 54 Num. 1

30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 54 Num. 2

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00169-00(0730-12) de 2 de diciembre de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00395-00(1506-12) de 11 de julio de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 903-10 de 9 de febrero de 2015, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

<Doctrina Concordante>

SENA

Concepto SENA 16856 de 2018

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

Concepto 1429 de 2002/08/15, Dr. Augusto Trejos Jaramillo.

¿Cuál es el alcance e interpretación correcta del numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, particularmente en lo que se refiere a la Licencia Ambiental?.

31. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o

con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, "...en el entendido que la conducta constitutiva de la falta gravísima debe ser siempre de carácter concreto y estar descrita en normas constitucionales de aplicación directa o en normas legales que desarrollen esos principios" por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-05 de agosto de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 54 Num. 3

Circular PROCURADURÍA - AGR - CGR - 14 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00169-00(0730-12) de 2 de diciembre de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00473-00(1955-12) de 14 de noviembre de 2019, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2010-00264-00(2217-10) de 24 de octubre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00395-00(1506-12) de 11 de julio de 2019, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-00234-00(0530-13) de 17 de octubre de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2520-12 de 20 de octubre de 2014, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. (1131-14), Auto de 13 de mayo de 2014, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 16856 de 2018

32. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-504-07 de 4 de julio de 2007, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 54 Num. 4

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

33. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 54 Num. 5

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

34. <Numeral modificado por el parágrafo 1o. del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

<Notas de Vigencia>

- Numeral 34 modificado por el parágrafo 1o. del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 54 Nums. 6 y 7

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 84 Par. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Circular PROCURADURÍA 21 de 2016

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional mediante Sentencia C-434-13 de 10 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos.

<Doctrina concordante>

Concepto SENA 72488 de 2018

<Legislación Anterior>

Texto original Ley 734 de 2002:

34. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.
<Concordancias>

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

36. No instaurarse en forma oportuna por parte del Representante Legal de la entidad, en el evento de proceder, la acción de repetición contra el funcionario, ex funcionario o particular en ejercicio de funciones públicas cuya conducta haya generado conciliación o condena de responsabilidad contra el Estado.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 58

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

37. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas, la salud humana o la preservación de los ecosistemas naturales o el medio ambiente.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 59 Num. 1

38. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 59 Num. 2

Directiva PROCURADURÍA 2 de 2018

Circular PROCURADURÍA 21 de 2016

Circular PROCURADURÍA 81 de 2009

Circular PROCURADURÍA 11 de 2010

Circular PROCURADURÍA - SIYC 9 de 2011

39. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-794-14 de 29 de octubre de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

Destaca el editor:

"En efecto, la expresión "controversias políticas", consagrada en el artículo 127 de la Constitución como prohibición dirigida a empleados estatales, hace referencia a las controversias políticas de tipo partidista o en el marco de procesos electorales, y en modo alguno a la intervención de estos en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general ajenas a los debates electorales o a las disputas partidistas -de partidos o movimientos políticos-, pues supondría desconocer la importancia de la deliberación pública entre todos los ciudadanos para el funcionamiento de la democracia representativa y participativa. En esa medida, establecido así el alcance constitucional de la propia expresión demandada, la disposición del artículo 48 -numeral 39- del CDU, ha de ser entendida en su alcance estrictamente partidista o electoral, no pudiendo presentarse una incompatibilidad entre el precepto legal y la norma superior.

(..)

7. Interpretación de las restricciones constitucionales al derecho de participación y límites al establecimiento de restricciones legales a tales derechos. *(i) La interpretación de las prohibiciones de participación política de los empleados estatales que realiza la Corte, debe partir de la garantía de los derechos de que gozan en un Estado democrático, contrayendo el alcance de las expresiones constitucionales relativas a tomar parte "en las controversias políticas" -materia de la demanda- a las conductas de*

intervención activa o pasiva en los debates públicos con incidencia electoral directa, de apoyo o rechazo público a una causa, organización política o candidato. (ii) No es aceptable una interpretación del artículo 127 constitucional que prohíba la intervención en discusiones o controversias públicas de interés general que se desarrollen al margen de un debate electoral o disputa partidista, pues desconocería la centralidad de la deliberación en el funcionamiento de la democracia participativa. (iii) La permisión participativa del inciso 3 del artículo 127 constitucional dispuesta para determinados empleados estatales -distintos de los judiciales, de los órganos de control o electorales, o de seguridad y fuerza pública- sólo procede con la expedición de una ley estatutaria que la autorice y fije las condiciones de ejercicio: no se trata de un imperativo constitucional para el Legislador estatutario sino de la atribución de una potestad por el constituyente, que le permitiría ampliar las excepciones a la prohibición de participación política de determinados servidores públicos, con arreglo a criterios de oportunidad y conveniencia. (iv) Las disposiciones legales que establecen prohibiciones y sanciones al ejercicio de los derechos políticos y de expresión de los empleados estatales, deberán observar los parámetros constitucionales y jurisprudenciales: obligación de proteger el contenido esencial y respeto del principio de proporcionalidad."

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 60 Num. 1

Constitución Política; Art. 127

Ley 1474 de 2011; Art. 10 Inc. 3o.; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 996 de 2005; Art. 38

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Directiva PRESIDENCIAL 5 de 2016

Directiva PROCURADURÍA 8 de 2019

Directiva PROCURADURÍA 4 de 2003

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Circular PROCURADURÍA 7 de 2019

Circular SENA 53 de 2013

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 56055 de 2015

40. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.

<Concordancias>

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

Directiva PROCURADURÍA 8 de 2019

Directiva PRESIDENCIAL 5 de 2016

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Circular PROCURADURÍA 7 de 2019

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 56055 de 2015

41. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a la administración o la adjudicación de contratos a favor de determinadas personas, con ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el Estado o solicitar a los congresistas, diputados o concejales tales prebendas aprovechando su intervención en dicho trámite.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62 Num. 7

42. Influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente descrita.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62 Num. 8

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

43. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas no autorizadas.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62 Num. 5

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

44. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62 Num. 6

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 50

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

45. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con ~~el buen nombre y prestigio~~ de la institución a la que pertenece.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES y aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030-12 de 1o. de febrero de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 39 Num. 31

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

46. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado del asunto.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 56 Num. 5

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 59; Art. 175 Inc. 2o.

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia T-800-06 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería

47. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 1

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

48. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes.

Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Teniendo en cuenta que esta norma continua vigente, debe tenerse en cuenta que el aparte *"asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave"* contenido en el artículo 55 Num. 2 de la Ley 1952 de 2019, fue declarado EXEQUIBLE por el cargo de desconocimiento del artículo 25 de la Constitución, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-536-19 según Comunicado de Prensa de 13 de noviembre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos. Sobre la misma expresión, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-252 de 2003 en relación con el cargo de la demanda que se fundamentó en el artículo 16 de la Constitución.

Destaca el editor el siguiente fragmento contenido en la síntesis de la providencia, publicada en el Comunicado de Prensa:

"En el caso concreto, la Sala Plena consideró que tipificar como falta disciplinaria asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes es legítima, razonable y proporcional, dado que busca el adecuado ejercicio de la función y labor pública. Sin embargo, con base en las Sentencias C-948 de 2002, C-252 de 2003, C-431 de 2004, C-284 de 2016 y C-636 de 2016, precisó que el fragmento censurado del numeral 2 del artículo 55 de la ley 1952 de 2019 debe ser aplicado siempre que el consumo de alcohol o estupefacientes afecte el ejercicio del cargo, función o servicio publico, dado que ahí radica la antijuridicidad del ilícito disciplinario. Dicha interpretación de la disposición demandada garantiza que los poderes de dirección y de disciplina del empleador se restrinjan a la función pública. Con ello, quedan protegidos el derecho al trabajo y el adecuado ejercicio de la función pública, además se asegura que los poderes de dirección y de disciplina del Estado se ejerzan dentro de los límites de las garantías constitucionales."

- Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-252-03 de 25 de marzo de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, "en el entendido que la expresión 'en lugares públicos' es exequible en cuanto la conducta descrita afecte el ejercicio de la función pública".

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 2

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Resolución MLEGAL 1183 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 85001-23-33-000-2015-00129-01(1718-17) de 13 de febrero de 2020, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 43 de 2009

49. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala conducta.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 12

Ley 1369 de 2009; Art. 15 Par.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00489-00(1924-11) de 25 de enero 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

50. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o cambiario.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 10

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 44; Art. 55 Num. 11

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

51. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser enajenados en razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros los adquieran.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 3

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 11

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num 26; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

Circular CONTADURÍA 5 de 2015; Inc. Final

Circular PROCURADURÍA 17 de 2005

53. Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el manejo del orden público o la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1029-02 de 27 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 12

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num 7;

54. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los términos de ley.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 4

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

55. El abandono injustificado del cargo, función o servicio.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este numeral, que en similar sentido corresponde al Artículo 25, Numeral 8o. de la Ley 200 de 1995, fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-769-98 del 10 de diciembre de 1998, Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 5

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 85001-23-33-000-2015-00046-01(4876-16) de 4 de julio de 2019, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00230-00(0884-12) de 6 de junio de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1929-11 de 13 de febrero de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACIÓN 95143 de 2019

Concepto PROCURADURÍA 126 de 2017

Concepto PROCURADURÍA 126 de 2016

56. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 6

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1982-09 de 11 de julio de 2013, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

57. No enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la información que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir, referida a las sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 38 Num. 43

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

Resolución Orgánica AGR 18 de 2005

58. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de antecedentes, de las sanciones o causas de inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades competentes informen a la Procuraduría General de la Nación, o hacer la anotación tardíamente.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 7

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

59. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir otras en cargo diferente, a sabiendas de la existencia de decisión judicial o administrativa, de carácter cautelar o provisional, de suspensión en el ejercicio de las mismas.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num. 8

Ley 1474 de 2011; Art. 45; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 46; Art. 55 Num. 11; Art. 175 Inc. 2o.

60. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num 9

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1131-14, Auto de 13 de mayo de 2014, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

61. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 39 Num. 33

62. Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación y fallo de los negocios asignados. Se entiende por mora sistemática, el incumplimiento por parte de un servidor público de los términos fijados por ley o reglamento interno en la sustanciación de los negocios a él asignados, en una proporción que represente el veinte por ciento (20%) de su carga laboral.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 55 Num 9

Ley 1474 de 2011; Art. 57 Inc. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 175 Inc. 2o.

63. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num 13

<Doctrina Concordante>

Concepto CONTADURÍA 17905 de 2002

64. <Numeral INEXEQUIBLE>
<Notas de Vigencia>

- Numeral adicionado por el artículo 2 del Decreto 4335 de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 47.176 de 17 de noviembre de 2008. INEXEQUIBLE

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo 2 del Decreto 4335 de 2008 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-136-09 de 25 de febrero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.

<Legislación Anterior>

Texto adicionado por el Decreto 4335 de 2008:

64. Depositar o entregar recursos a las personas que desarrollen las actividades descritas en el artículo 1o del Decreto 4334 de 2008, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

64. <sic> <Artículo 6 del Decreto 4702 de 2010 derogado por el artículo 96 de la Ley 1523 de 2012>
<Notas de Vigencia>

- Numeral adicionado por el artículo 93 de la Ley 1523 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.411 de 24 de abril de 2012.

- Numeral adicionado por el artículo 6 del Decreto 4702 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.930 de 21 de diciembre de 2010. expedido en desarrollo del Decreto 4580

del 7 de diciembre de 2010, "por el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional"

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral adicionado por el Decreto 4702 de 2010 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-193-11 según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 18 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

<Legislación Anterior>

Texto adicionado por el Decreto 4702 de 2010:

64. <Numeral adicionado por el artículo 6 del Decreto 4702 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la prevención y atención de desastres.

64. <Numeral adicionado por el artículo 43 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción.

<Notas de Vigencia>

- Numeral adicionado por el artículo 43 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 62 Num. 10

65. <Numeral adicionado por el artículo 93 de la Ley 1523 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley.

<Notas de Vigencia>

- Numeral adicionado por el artículo 93 de la Ley 1523 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.411 de 24 de abril de 2012.

<Concordancias>

Num. 65:

Ley 1952 de 2019; Art. 59 Num 3

PARÁGRAFO 1o. Además de las faltas anteriores que resulten compatibles con su naturaleza, también serán faltas gravísimas para los funcionarios y empleados judiciales el incumplimiento de los deberes y la incursión en las prohibiciones contemplados en los artículos 153 numeral 21 y 154 numerales 8, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 63

PARÁGRAFO 2o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> También lo será la incursión en la prohibición de que da cuenta el numeral 3 del artículo 154 *ibidem* cuando la mora supere el término de un año calendario ~~*o ante un concurso de infracciones en número superior a diez*~~ ~~o haber sido sancionado disciplinariamente en tres ocasiones con anterioridad dentro de los cinco años anteriores~~.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte tachado y en letra itálica declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional Sentencia C-125-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra con respecto al resto del inciso tachado, la Corte declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02.

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia C-528-06 de 12 de julio de 2006, M.P. Dr. Clara Inés Vargas Hernández

PARÁGRAFO 3o. También será falta gravísima la incursión en la prohibición de que da cuenta el numeral 10 del artículo 154 *ibidem* cuando el compromiso por votar o escoger una determinada persona se realiza entre varios funcionarios o empleados a cambio del apoyo a otro u otros, de una decisión o de la obtención de un beneficio cualquiera.

PARÁGRAFO 4o. También serán faltas gravísimas para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias:
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 64

Ley 65 de 1993; Art. 56 Inc. 4o.; Art. 106 (Ley 1709 de 2014)

a) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella;

b) Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas, municiones, explosivos, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o insumos para su fabricación;

c) <Literal modificado por el artículo 100 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Introducir o permitir el ingreso y uso de elementos de comunicación no autorizados, tales como teléfonos, radios, radioteléfonos, buscapersonas, similares y accesorios;

<Notas de Vigencia>

- Literal modificado por el artículo 100 de la Ley 1709 de 2014, "por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014.

<Concordancias>

Ley 65 de 1993; Art. 16A Par. 3o. Art. 45 Lit f) (Ley 1709 de 2014)

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

c) Introducir o permitir el ingreso de elementos de comunicación no autorizados, tales como teléfonos, radios, radioteléfonos, buscapersonas, similares y accesorios;

d) Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con sus familiares;

e) Facilitar a los internos las llaves o implementos de seguridad que permitan el acceso a las dependencias del establecimiento;

f) Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden de remisión o desviarse de la ruta fijada sin justificación;

g) Dejar de hacer las anotaciones o registros que correspondan en los libros de los centros de reclusión o no rendir o facilitar los informes dispuestos por la ley o los reglamentos a la autoridad competente sobre novedades, incautaciones de elementos prohibidos, visitas, llamadas telefónicas y entrevistas;

h) Ceder, ocupar o dar destinación diferente sin autorización legal a las Casas Fiscales;

i) Realizar actos, manifestaciones, que pongan en peligro el orden interno, la seguridad del establecimiento de reclusión o la tranquilidad de los internos;

j) Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente, bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o visitas de otra índole legalmente permitidas;

k) Tomar el armamento, municiones y demás elementos para el servicio sin la autorización debida o negarse a entregarlos cuando sean requeridos legalmente;

l) Permanecer irreglamentariamente en las instalaciones;

m) Disponer la distribución de los servicios sin sujeción a las normas o a las órdenes superiores;

n) Actuar tumultuariamente, entorpeciendo el normal y libre funcionamiento de los establecimientos de reclusión;

o) Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes al servicio;

p) Retener personas;

q) Intimidar con armas y proferir amenazas y en general;

r) Preparar o realizar hechos que afecten o pongan en peligro la seguridad de los funcionarios, de los reclusos, de los particulares o de los centros carcelarios;

s) Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspender, entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las actividades del centro de reclusión en cualquiera de sus dependencias;

t) Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientos carcelarios.
<Concordancias>

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 11

PARÁGRAFO 5o. Las obligaciones contenidas en los numerales 23, 26 y 52 sólo originarán falta disciplinaria gravísima un año después de la entrada en vigencia de este Código. El incumplimiento de las disposiciones legales referidas a tales materias serán sancionadas conforme al numeral 1 del artículo 34 <sic, debe decir 44> de este código.

PARÁGRAFO 6o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>
<Notas de Vigencia>

- Parágrafo adicionado por el artículo 25 del Decreto 126 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.599 de 21 de enero de 2010. Decreto expedido bajo el estado de emergencia social decretado mediante el Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Decreto 126 de 2010 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-302-10 de 28 de abril de 2010, Magistrado Ponente Dr. Juan Carlos Henao Pérez.

<Legislación Anterior>

Texto adicionado por el Decreto 126 de 2010: INEXEQUIBLE.

PARÁGRAFO 6. También incurrirán en falta gravísima las personas sujetas a esta ley que desvíen u obstaculicen el uso de los recursos destinados para el Sistema General de Seguridad Social en Salud o el pago de los bienes o servicios financiados con estos.

PARÁGRAFO 7o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>

<Notas de Vigencia>

- Parágrafo adicionado por el artículo 25 del Decreto 126 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.599 de 21 de enero de 2010. Decreto expedido bajo el estado de emergencia social decretado mediante el Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Decreto 126 de 2010 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-302-10 de 28 de abril de 2010, Magistrado Ponente Dr. Juan Carlos Henao Pérez.

<Legislación Anterior>

Texto adicionado por el Decreto 126 de 2010: INEXEQUIBLE.

PARÁGRAFO 7. También incurrirán en falta gravísima los servidores públicos investidos de facultades de policía judicial que se nieguen a declarar en un proceso en el cual se investigue o juzgue un evento de corrupción o fraude en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-230-04 de 8 de marzo de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, Sentencia C-157-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011; Art. 31; Art. 86

Ley 1709 de 2014; Art. 5o. Inc. 3o.; Art. 9o. Par. 3o.; Art. 41

Ley 1551 de 2012; Art. 29 Lit. d) Par.

Ley 1474 de 2011; Art. 52 Inc. 2o.

Ley 1448 de 2011; Art. 179

Ley 1340 de 2009; Art. 15 Par. 1o.

Ley 1010 de 2006; Art. 10 Num. 1o.

Ley 812 de 2003; Art. 8 Literales C. Numeral 2o. y D. Numeral 2o.

Ley 788 de 2002; Art. 103

Ley 734 de 2002; Art. 156 Inc. 2o.

Ley 715 de 2001; Art. 96

Ley 594 de 2000; Art. 35 Lit. b)

Ley 549 de 1999; Art. 16

Ley 65 de 1993; Art. 7A Inc. 3o.; Art. 16A Par. 3o.; Art. 45 Lit. f)

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia C-721-15 de 25 de noviembre de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 49. *CAUSALES DE MALA CONDUCTA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las faltas anteriores constituyen causales de mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2 del artículo 175 de la Constitución Política, cuando fueren realizadas

por el Presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 66

Ley 1625 de 2013, Art. 8o. Pars. 1o. y 2o. Inc. Final; Art. 28 Par. 1o. Inc. Final

Ley 1621 de 2013, Art. 15 Par.; Art. 24 Par. 2o.; Art. 38 Inc. 1o.; Art. 40 Pars. 2o. y 3o.

Ley 1395 de 2010; Art. 69

Ley 100 de 1993; Art. 23 Inc. 2o.

Decreto 1636 de 2006; Art. 13

Circular PROCURADURÍA 48 de 2008

Circular PROCURADURÍA 17 de 2005

ARTÍCULO 50. *FALTAS GRAVES Y LEVES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>**
Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley.

La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 43 de este código.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso 2. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, establece el fallo: "normas respecto de las cuales existe cosa juzgada material (Sentencias C-708-99 de 1999 y C-280-96 de 1996)".

Los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales como causales de mala conducta constituyen falta disciplinaria grave o leve si fueren cometidos a título diferente de dolo o culpa gravísima.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso 3. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, establece el fallo: "normas respecto de las cuales existe cosa juzgada material (Sentencias C-708-99 de 1999 y C-280-96 de 1996)".

- Inciso 3. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 67

Ley 1801 de 2016; Art. 183 Inc. 2o.

Ley 1618 de 2013, Art. 31

Ley 1607 de 2012; Art. 145

Ley 1561 de 2012, Art. 11 Par.

Ley 1474 de 2011, Art. 9o. Inc. 3o.; Art. 81

Ley 1228 de 2008; Art. 10 Par. 3o.

Ley 87 de 1993; Art. 14 Inc. 3o.

Ley 65 de 1993; Art. 16A; Art. 112 Inc. final

Decreto 2025 de 2011; Art. 7

Resolución MINSTRANSPORTE 1860 de 2013; Art. 3o. Par. 1o.

ARTÍCULO 51. PRESERVACIÓN DEL ORDEN INTERNO. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo al interior de cada dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe inmediato llamará ~~por escrito~~ la atención al autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02 , mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Este llamado de atención ~~se anotará en la hoja de vida~~ y no generará antecedente disciplinario.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02, mediante Sentencia C-210-03 de 11 de marzo de 2003, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández

- Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Inciso INEXEQUIBLE> ~~En el evento de que el servidor público respectivo incurra en reiteración de tales hechos habrá lugar a formal actuación disciplinaria~~.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02, mediante Sentencia C-252-03 de 25 de marzo de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño,

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02 , mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- Inciso 3o. declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 68

Resolución ICBF 2444 de 2006; Art. 63 Lit. a)

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 187 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 98 de 201

- Concepto PROCURADURÍA 80 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 70 de 2017

LIBRO III.
REGIMEN ESPECIAL.

T I T U L O I.
REGIMEN DE LOS PARTICULARES.

CAPITULO PRIMERO.
AMBITO DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 52. *NORMAS APLICABLES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 69

Ley 1474 de 2011; Art. 14

Ley 842 de 2003

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 48669 de 2018

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2045 de 23 de marzo de 2012 (autorizada publicación 4/05/2012) , Consejero Ponente, Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.

Concepto CONTADURÍA 25432 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1855-08 de 12 de abril de 2012, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

ARTÍCULO 53. *SUJETOS DISCIPLINABLES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.

No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso Final del texto modificado por la Ley 1474 de 2011 declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, *"bajo el entendido que la falta le fuere imputable por el incumplimiento de los deberes funcionales".* Este inciso fue una reproducción del inciso 2o. del texto original, el cual había sido declarado, en los mismos términos, CONDICIONALMENTE exequible por la Sentencia C-1076-02.

- Aparte final en letra verde declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-338-11 según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 4 de mayo 2011, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte *"que ejerzan funciones públicas en lo que tienen que ver con estas"* de este artículo (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-034-11 de 2 de febrero de 2011, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

- Aparte del inciso 1o. subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

La misma Sentencia declaró EXEQUIBLE el aparte en letra itálica, "bajo el entendido de que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el Legislador".

En relación al inciso 2o. la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02.

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte subrayado del inciso 1o. por ineptitud de la demanda.

En relación al inciso 2o., la Corte Constitucional declaró lo EXEQUIBLE, "bajo el entendido que la falta le fuere imputable por el incumplimiento de los deberes funcionales".

- Aparte del inciso 1o. corresponde en similar sentido al siguiente aparte del Artículo 20 de la Ley 200 de 1995: "y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional", el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- Mediante Sentencia C-630-96 de 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional dispuso: "ESTESE a lo resuelto por la Corte en Sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996 sobre la exequibilidad de los artículos 20 y 177 de la Ley 200 de 1995, en cuanto hicieron aplicable su régimen a todos los empleados y trabajadores del Estado"

- Mediante Sentencia C-341-96 de 5 de agosto de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-286-96.

- El Artículo 20 de la Ley 200 de 1995 incluía el siguiente aparte: "Son destinatarios de la Ley Disciplinaria ... los particulares que ejerzan funciones públicas en forma *permanente* o transitoria ..." La expresión "permanente" subrayado y en letra itálica declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-286-96 del 27 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

- La primera parte del Artículo 20 de la Ley 200 de 1995 establecía: "Son destinatarios de la Ley Disciplinaria los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. ...". El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Ley 1474 de 2011; Art. 14

Ley 734 de 2002; Art. 25

Ley 599 de 2000; Art. 83 Num. 6o.

Ley 489 de 1998; Art. 110

Decreto 556 de 2014; Art. 10 Inc. 2o.

Decreto 564 de 2006; Art. 66; Art. 105

Resolución PROCURADURÍA 108 de 2002

Circular PROCURADURÍA 19 de 2016

Circular PROCURADURÍA 34 de 2011

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 155 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 53 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 7 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 117 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 108 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 95 de 2017

- Concepto SENA 48669 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 107 de 2016

- Concepto PROCURADURÍA 159 de 2011

Concepto SUPERINDUSTRIA 3012366 de 2003

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00175-00(C) de 20 de febrero de 2018, Consejero Ponente, Dr. Óscar Darío Amaya Navas.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 00021-00(c) de 19 de marzo de 2009, Consejero Ponente, Dr. Gustavo Aponte Santos.

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 24 de 12 de abril de 2007, C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1767 de 10 de agosto de 2006 (autorizada publicación mediante Of. 39323 de 16/08/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 53. SUJETOS DISCIPLINABLES. <Las negrillas son parte del texto original. El aparte en letra itálica CONDICIONALMENTE exequible> El presente

régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; que ejerzan funciones públicas, **en lo que tienen que ver con estas;** *presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política*, administren recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado.

<Inciso 2o. CONDICIONALMENTE exequible> Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.

CAPITULO SEGUNDO.

ARTÍCULO 54. *INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Constituyen inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y violación al régimen de conflicto de intereses, para los particulares que ejerzan funciones públicas, las siguientes:

1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión.

2. Las contempladas en los artículos 8o. de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, o en las normas que los modifiquen o complementen.

3. Las contempladas en los artículos 37 y 38 de esta ley.

Las previstas en la Constitución, la ley y decretos, referidas a la función pública que el particular deba cumplir.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado del último inciso declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002,

Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, "en el entendido de que se trata de decretos con fuerza de ley".

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 71

Ley 1796 de 2016: Art. 25; Art. 26; Art. 27

Decreto 564 de 2006; Art. 97 ; Art. 105

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2905-14 de 9 de febrero de 2017, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2045 de 23 de marzo de 2012 (autorizada publicación 4/05/2012) , Consejero Ponente, Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.

Concepto SENA 88046 de 2019

Concepto SUPERINDUSTRIA 3012366 de 2003

CAPITULO TERCERO.

ARTÍCULO 55. *SUJETOS Y FALTAS GRAVÍSIMAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los sujetos disciplinables por este título sólo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas. Son faltas gravísimas las siguientes conductas:

1. Realizar una conducta tipificada objetivamente en la ley como delito sancionable a título de dolo, por razón o con ocasión de las funciones.

2. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en la Constitución o en la ley.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 1

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

3. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 2

4. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 3

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

5. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas autorizadas en el arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen erogación.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 4

6. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los servidores públicos o particulares para obtener beneficios personales que desvíen la transparencia en el uso de los recursos públicos.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 5

7. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dádivas, prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia del servicio público.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 6

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

8. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 7

9. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 8

10. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 9

11. <Numeral modificado por el artículo 45 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las consagradas en los numerales 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56, y 59, parágrafo 4o, del artículo 48 de esta ley cuando resulten compatibles con la función.
<Notas de Vigencia>

- Numeral 11 modificado por el artículo 45 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

11. Las consagradas en los numerales 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56 y 59, parágrafo cuarto, del artículo 48 de esta ley cuando resulten compatibles con la función.

PARÁGRAFO 1o. Las faltas gravísimas, sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- En Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, la Corte Constitucional resolvió -en relación con la demanda de inconstitucionalidad de este parágrafo-: "*Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-155-02, que declaró la exequibilidad del Artículo 14 de la Ley 200 de 1995*."

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este parágrafo por ineptitud de la demanda.

- El texto de este Parágrafo corresponde parcialmente al texto del Artículo 14 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante

Sentencia C-155-02 de 5 de marzo de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Par. 1

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

PARÁGRAFO 2o. Los árbitros y conciliadores quedarán sometidos además al régimen de faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses de los funcionarios judiciales en lo que sea compatible con su naturaleza particular. Las sanciones a imponer serán las consagradas para los funcionarios judiciales acorde con la jerarquía de la función que le competía al juez o magistrado desplazado.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Par. 2

Ley 1796 de 2016; Art. 28

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia C-914-13 de 4 de diciembre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 87 de 2007

ARTÍCULO 56. *SANCIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sanciones principales:

Multa de diez a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho y, concurrentemente según la gravedad de la falta, inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vinculación provenga de nombramiento oficial, será de destitución e inhabilidad de uno a veinte años.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 73

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1767 de 10 de agosto de 2006 (autorizada publicación mediante Of. 39323 de 16/08/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 57. *CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Además de los criterios para la graduación de la sanción consagrados para los servidores públicos, respecto de los destinatarios de la ley disciplinaria de que trata este libro, se tendrán en cuenta el resarcimiento del perjuicio causado, la situación económica del sancionado, y la cuantía de la remuneración percibida por el servicio prestado.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 74

T I T U L O II.
REGIMEN DE LOS NOTARIOS.

CAPITULO PRIMERO.

ARTÍCULO 58. *NORMAS APLICABLES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El régimen

disciplinario especial de los particulares, también se aplicará a los notarios y comprende el catálogo de faltas imputables a ellos, contempladas en este título.

Los principios rectores, los términos prescriptivos de la acción y de la sanción disciplinaria, al igual que el procedimiento, son los mismos consagrados en este código respecto de la competencia preferente.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 75

ARTÍCULO 59. *ORGANO COMPETENTE.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de control especial con todos sus requisitos y consecuencias, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 76

CAPITULO SEGUNDO.
FALTAS ESPECIALES DE LOS NOTARIOS

ARTÍCULO 60. *FALTAS DE LOS NOTARIOS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Constituye falta disciplinaria grave y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 78

ARTÍCULO 61. *FALTAS GRAVÍSIMAS DE LOS NOTARIOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Constituyen faltas imputables a los notarios, además de las contempladas en el artículo 48 en que puedan incurrir en el ejercicio de su función:

1. Incumplir las obligaciones para con la Superintendencia de Notariado y Registro, Fondo Cuenta Especial de Notariado, la Administración de Impuestos Nacionales, las demás de carácter oficial y las Entidades de Seguridad o Previsión Social.

2. Ejercer la función por fuera del círculo notarial correspondiente o permitir que se rompa la unidad operativa de la función notarial, estableciendo sitios de trabajo en oficinas de usuarios y lugares diferentes de la notaría.

3. Dar uso indebido o aprovecharse en su favor o en el de terceros de dineros, bienes o efectos negociables que reciban de los usuarios del servicio, en depósito o para pagos con destinación específica.

4. La transgresión de las normas sobre inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, la ley y decretos.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, "en el entendido de que se trata de decretos con fuerza de ley".

5. Celebrar convenios o contratos con los usuarios o realizar conductas tendientes a establecer privilegios y preferencias ilegales en la prestación del servicio. Son preferencias ilegales, la omisión o inclusión defectuosa de los anexos ordenados por ley, según la naturaleza de cada contrato y el no dejar las constancias de ley cuando el acto o contrato contiene una causal de posible nulidad relativa o ineficacia.

PARÁGRAFO. Las faltas gravísimas, sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- En Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, la Corte Constitucional resolvió -en relación con la demanda de inconstitucionalidad de este parágrafo-: "*Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-155-02, que declaró la exequibilidad del Artículo 14 de la Ley 200 de 1995*."

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 77

ARTÍCULO 62. *DEBERES Y PROHIBICIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Son deberes y prohibiciones de los notarios, los siguientes:

1. Les está prohibido a los notarios, emplear e insertar propaganda de índole comercial en documentos de la esencia de la función notarial o utilizar incentivos de cualquier orden para estimular al público a demandar sus servicios, generando competencia desleal.

2. Es deber de los notarios, someter a reparto las minutas de las escrituras públicas correspondientes a los actos en los cuales intervengan todos los organismos administrativos del sector central y del sector descentralizado territorial y por servicios para los efectos contemplados en el literal g) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, cuando en el círculo de que se trate exista más de una notaría.
<Concordancias>

Ley 1796 de 2016; Art. 13
Ley 1537 de 2012; Art. 44
Ley 29 de 1973; Art. 15
Resolución SUPERNOTARIADO 2277 de 2006
Resolución SUPERNOTARIADO 1986 de 2003
Resolución SUPERNOTARIADO 643 de 2003
Instrucción SUPERNOTARIADO 5 de 2016
Instrucción SUPERNOTARIADO 18 de 2003
Instrucción SUPERNOTARIADO 8 de 2003

3. Es deber de los notarios no desatender las recomendaciones e instrucciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado con el desempeño de la función notarial y prestación del servicio, contenidas en los actos administrativos dictados dentro de la órbita de su competencia.
<Concordancias>

Instrucción SUPERNOTARIADO 4 de 2018

4. Los demás deberes y prohibiciones previstas en el Decreto-ley 960 de 1970, su Decreto Reglamentario 2148 de 1983 y las normas especiales de que trata la función notarial.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 79

CAPITULO TERCERO.
SANCIONES.

ARTÍCULO 63. *SANCIONES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los notarios estarán sometidos al siguiente régimen de sanciones:

1. Destitución para el caso de faltas gravísimas realizadas con dolo o culpa gravísima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo para las faltas graves realizadas con dolo o culpa y las gravísimas diferentes a las anteriores.

3. Multa para las faltas leves dolosas.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 80

ARTÍCULO 64. *LÍMITE DE LAS SANCIONES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La multa es una sanción de carácter pecuniario la cual no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de 180 días de salario básico mensual establecido por el Gobierno Nacional.

La suspensión no será inferior a treinta días, ni superior a doce meses.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 81

ARTÍCULO 65. *CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA FALTA Y LA SANCIÓN*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Además de los criterios para la graduación de la falta y la sanción consagrados para los servidores públicos, respecto de los notarios se tendrá en cuenta la gravedad de la falta, el resarcimiento del perjuicio causado, la situación económica del sancionado, la cuantía de la remuneración percibida por el servicio prestado y los antecedentes en el servicio y en materia disciplinaria.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 82

LIBRO IV.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

T I T U L O I.
LA ACCION DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 66. *APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El procedimiento disciplinario establecido en la presente ley deberá aplicarse por las

respectivas oficinas de control interno disciplinario, personerías municipales y distritales, la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación.

El procedimiento disciplinario previsto en esta ley se aplicará en los procesos disciplinarios que se sigan en contra de los particulares disciplinables conforme a ella.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 84

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 49 de 2017

ARTÍCULO 67. *EJERCICIO DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura; la Superintendencia de Notariado y Registro; los personeros distritales y municipales; las oficinas de control disciplinario interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos, en los casos a los cuales se refiere la presente ley.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 83

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 51 de 2017

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 57 de 19 de julio de 2007, C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 105 de 28 de septiembre de 2006 (autorizada publicación mediante Conflicto 11001-03-06-2006-00060-00 de 22/06/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 68. *NATURALEZA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La acción disciplinaria es pública.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 85

ARTÍCULO 69. *OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. La Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso, podrá asumir la investigación disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cual este la suspenderá y la pondrá a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa información al jefe de la entidad. Una

vez avocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, esta agotará el trámite de la actuación hasta la decisión final.

Los personeros tendrán competencia preferente frente a la administración distrital o municipal.

Las denuncias y quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada la decisión que así lo reconoce, originarán responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 86 ; Art. 210 Inc. 1

Ley 962 de 2005; Art. 81

Circular PROCURADURÍA 38 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00619-00(2372-11) de 11 de julio de 2019, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-31-000-2013-00038-01(3352-15) de 4 de julio de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2222-10 de 4 de octubre de 2012, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

- Corte Constitucional Sentencia C-832-06 de 11 de octubre de 2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

- Corte Constitucional Sentencia T-412-06 de 22 de mayo de 2006, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 192 de 2018

- Concepto ICBF 16498 de 2009

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias, Radicación No. 11001-03-06-000-2019-00140-00(C) de 1 de octubre de 2019, Consejero Ponente, Dr. Óscar Darío Amaya Navas.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00123-00(C) de 20 de marzo de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula.

ARTÍCULO 70. *OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de**

2019> El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 87

ARTÍCULO 71. *EXONERACIÓN DEL DEBER DE FORMULAR QUEJAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El servidor público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto profesional.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Expresión "*compañero permanente*" declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, *"...en el entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo"*.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 88

ARTÍCULO 72. *ACCIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO RETIRADO DEL SERVICIO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté ejerciendo funciones públicas.

Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo previsto en este código, y en la hoja de vida del servidor público.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 89

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 73. *TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 90

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 164

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Num. 3o. Inc. 4o.

Circular PROCURADURÍA 00 de 2002

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 156 de 2017

T I T U L O II.
LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 74. *FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 91

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00314-00(1194-11) de 12 de septiembre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2046 de 3 de marzo de 2011 (autorizada publicación 17/03/2011) , Consejero Ponente, Dr. Augusto Hernández Becerra.

ARTÍCULO 75. *COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO DISCIPLINABLE.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios, disciplinar a sus servidores o miembros.

El particular disciplinable conforme a este código lo será exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación, salvo lo dispuesto en el artículo 59 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables la competencia radicará exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo la segunda en todo caso al respectivo personero. Donde ello no fuere posible la segunda instancia le corresponderá al respectivo Procurador Regional.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 92

Ley 734 de 2002; Art. 171

Ley 182 de 1995; Art. 8o. Inc. Final

Resolución PROCURADURÍA 108 de 2002

Instrucción SUPERNOTARIADO 12 de 1998

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 127 de 2017

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00123-00(C) de 20 de marzo de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula.

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 24 de 12 de abril de 2007, C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 105 de 28 de septiembre de 2006 (autorizada publicación mediante Conflicto 11001-03-06-2006-00060-00 de 22/06/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 76. *CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

Este Inciso corresponde en similar sentido al Artículo 48 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-996-01 de 19 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para los fines anotados.

En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.

PARÁGRAFO 1o. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación conocerá y fallará las investigaciones que se adelanten contra los empleados judiciales de la entidad. La segunda instancia será de competencia del señor Fiscal General de la Nación.
<Concordancias>

Resolución FISCALÍA 267 de 2017

Resolución FISCALÍA 3844 de 2016

Resolución FISCALÍA 1014 de 2012; Art. 1

PARÁGRAFO 2o. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración.

PARÁGRAFO 3o. Donde no se hayan implementado oficinas de control interno disciplinario, el competente será el superior inmediato del investigado y la segunda instancia corresponderá al superior jerárquico de aquél.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Parágrafo 3o. demandado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1061-03 de 11 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- El Artículo 57 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTICULO 57. COMPETENCIA PARA ADELANTAR LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA. La investigación disciplinaria se adelantará por el organismo de control interno disciplinario o por el funcionario que señale el jefe de la entidad o de la dependencia regional o seccional y deberá ser de igual o superior jerarquía a la del investigado. La investigación se realizará de conformidad con lo previsto en este Código."

Dicho Artículo fue objeto de los siguientes fallos:

. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-996-01 de 19 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-044-98 del 25 de febrero de 1998, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz, se declaró inhibida respecto de las expresiones "investigación", por ineptitud de la demanda.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 93

Ley 734 de 2002; Art. 2 inc. 1; Art. 34 num. 32; Art. 171

Decreto 3523 de 2009; Art. 15 Num. 16

Resolución MINDEFENSA 3643 de 2002

Resolución MINDEFENSA 3601 de 2002

Resolución MINDEFENSA 901 de 2002

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias, Radicación No. 11001-03-06-000-2019-00046-00(C) de 30 de julio de 2019, Consejero Ponente, Dr. Álvaro Namén Vargas.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias, Radicación No. 11001-03-06-000-2018-00241-00(C) de 9 de abril de 2019, Consejero Ponente, Dr. Álvaro Namén Vargas.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00123-00(C) de 20 de marzo de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula.

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 57 de 19 de julio de 2007, C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 18 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 204 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 165 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 114 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 103 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 100 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 66 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 62 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 57 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 42 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 21 de 2016

- Concepto PROCURADURÍA 26 de 2015

- Concepto PROCURADURÍA 19 de 2009

- Concepto PROCURADURÍA 231 de 2000

ARTÍCULO 77. *SIGNIFICADO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando en este código se utilice la locución "control disciplinario interno" debe entenderse por tal, la oficina o dependencia que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 94

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Inciso corresponde en similar sentido al Artículo 49 de la Ley 200 de 1995. El Artículo 49 fue objeto de los siguientes fallos:

. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-996-01 de 19 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-650-97 del 3 de diciembre de 1997, se declaró inhibida, por ineptitud de la demanda, con respecto del aparte subrayado. Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz.

ARTÍCULO 78. *COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales se tramitarán de conformidad con las competencias establecidas en la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en este código.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 95

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 56 de 2018

ARTÍCULO 79. *FALTAS COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DE DISTINTAS ENTIDADES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando en la comisión de una o varias faltas conexas hubieren participado servidores públicos pertenecientes a distintas entidades, el servidor público competente de la que primero haya tenido conocimiento del hecho, informará a las demás para que inicien la respectiva acción disciplinaria.

Cuando la investigación sea asumida por la Procuraduría o la Personería se conservará la unidad procesal.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 96

ARTÍCULO 80. *EL FACTOR TERRITORIAL.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Es competente en materia disciplinaria el funcionario del territorio donde se realizó la conducta.

Cuando no puedan ser adelantados por las correspondientes oficinas de control interno disciplinario, las faltas cometidas por los servidores públicos en el exterior y en ejercicio de sus funciones, corresponderá a los funcionarios que de acuerdo con el factor subjetivo y objetivo, fueren competentes en el Distrito Capital.

Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del territorio nacional, conocerá el funcionario competente que primero hubiere iniciado la investigación.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 97

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 31 de 3 de mayo de 2007, C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

ARTÍCULO 81. *COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CONEXIDAD.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán y decidirán en un solo proceso.

Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y decidirán en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 98

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00314-00(1194-11) de 12 de septiembre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 69 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 42 de 2017

ARTÍCULO 82. *CONFLICTO DE COMPETENCIAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 99

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 59 de 26 de julio de 2007, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 83. *COMPETENCIAS ESPECIALES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Tendrán competencias especiales:

1. El proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este código, cuyo conocimiento será de competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En el evento en que el Procurador haya sido postulado por esa corporación, conocerá la Sala Plena del Consejo de Estado. La conducción del proceso estará a cargo, de manera exclusiva y directa, del presidente de la respectiva corporación.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Inciso 1o. del Artículo 66 de la Ley 200 de 1995 establecía: "1. *Conocerán del proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este Código*, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y en el evento de que haya sido postulado por esta Corporación, lo hará la Sala Plena del Consejo de Estado."

Los textos subrayados y en letra itálica fueron objeto de los siguientes fallos:

. Mediante Sentencia C-156-97, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en Sentencia C-594-96.

. Aparte en letra itálica y subrayada del inciso 1o. del numeral 1o. del Artículo 66 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-594-96 del 6 de noviembre de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz.

. Mediante Sentencia C-594-96, de Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz, la Corte Constitucionalñ declaró estese a lo resuelto en Sentencia C-244-96 .

. Aparte subrayado del inciso 1o. del numeral 1o. del Artículo 66 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

- El Inciso 2o. del Numeral 1o. del Artículo 66 de la Ley 200 de 1995 establecía: "La conducción del proceso estará a cargo de manera exclusiva y directa del presidente de la respectiva corporación."

Este Inciso 2o. del numeral 1o. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-594-96 del 6 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 100

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 192

2. En el proceso que se adelante por las faltas disciplinarias señaladas en el artículo 48, cometidas por los servidores públicos determinados en el artículo 49 de este código, el Procurador General de la Nación por sí, o por medio de comisionado, tendrá a su cargo las funciones de Policía Judicial.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101

T I T U L O III.
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.

ARTÍCULO 84. *CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes:
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 104

1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia.

3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos procesales.

4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación.

5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales.

6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 193 de 2018

9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a menos que la demora sea debidamente justificada.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, *"... en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo"*.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 81 de 17 de agosto de 2006, C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

ARTÍCULO 85. *DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El servidor público en quien concurra cualquiera de las anteriores causales debe declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que exprese las razones, señale la causal y si fuere posible aporte las pruebas pertinentes.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 105

ARTÍCULO 86. *RECUSACIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la actuación disciplinaria, con base en las causales a que se refiere el artículo 84 de esta ley. Al escrito de recusación acompañará la prueba en que se funde.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 106

ARTÍCULO 87. *PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPEDIMENTO O DE RECUSACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el**

artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> En caso de impedimento el servidor público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al superior, quien decidirá de plano dentro de los tres días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quien corresponde el conocimiento de las diligencias.

Cuando se trate de recusación, el servidor público manifestará si acepta o no la causal, dentro de los dos días siguientes a la fecha de su formulación, vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el impedimento o se presente la recusación y hasta cuando se decida.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 107

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 23 de 2007

ARTÍCULO 88. *IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Si el Procurador General de la Nación se declara impedido o es recusado y acepta la causal, el Viceprocurador General de la Nación asumirá el conocimiento de la actuación disciplinaria.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 108

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00490-00(1972-12) de 26 de septiembre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Corte Constitucional Sentencia SU-712-13 de 17 de octubre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

T I T U L O IV.
SUJETOS PROCESALES.

ARTÍCULO 89. *SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Ver Notas del Editor> Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política.

En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, ésta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta que en la actuación disciplinaria que se adelante por acoso laboral, también es sujeto procesal

"el sujeto pasivo o su representante", según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1010 de 2006, "por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo", publicada en el Diario Oficial No. 46.160, de 23 de enero de 2006.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-014-04, mediante Sentencia C-487-09 de 22 de julio de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

- Artículo declarado CONDICIONALMENTE exequible, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, *"en el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidos por la ley".*

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 109

Ley 1010 de 2006; Art. 17

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-265-16 de 23 de mayo de 2016, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 67 de 2018

ARTÍCULO 90. *FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los sujetos procesales podrán:

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y

4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, establece el fallo: "normas respecto de las cuales existe cosa juzgada material (Sentencias C-708-99 de 1999 y C-280-96 de 1996)".

El Literal f. del Artículo 73 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... f. Que se le expidan copias de la actuación, salvo las que por mandato constitucional o legal tengan carácter reservado, siempre y cuando dicha reserva no surja de la misma investigación que contra él se siga. ..."

El Literal f. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 5 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 115 de 2004

PARÁGRAFO. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en la secretaría del despacho que profirió la decisión.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-487-09 de 22 de julio de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, establece el fallo: "normas respecto de las cuales existe cosa juzgada material (Sentencias C-708-99 de 1999 y C-280-96 de 1996)".

El aparte subrayado corresponde en igual sentido al texto subrayado del Inciso 2o. del Artículo 71 de la Ley 200 de 1995 el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-616-97 de 27 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr.Vladimiro Naranjo Mesa.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 110

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-473-17 de 21 de julio de 2017, Magistrado Ponente Dr. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

- Corte Constitucional, Sentencia T-265-16 de 23 de mayo de 2016, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

ARTÍCULO 91. *CALIDAD DE INVESTIGADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La calidad de investigado se adquiere a partir del momento de la apertura de investigación o de la orden de vinculación, según el caso.

El funcionario encargado de la investigación, notificará de manera personal la decisión de apertura, al disciplinado. Para tal efecto lo citará a la dirección registrada en el expediente o a aquella que aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser posible la notificación personal, se le notificará por edicto de la manera prevista en este código.

El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan practicado sin la presencia del implicado, en tanto se surtía dicho trámite de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el disciplinado.

Enterado de la vinculación el investigado, y su defensor si lo tuviere, tendrá la obligación procesal de señalar la dirección en la cual recibirán las comunicaciones y de informar cualquier cambio de ella.

La omisión de tal deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la última dirección conocida.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 111

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0795 de 22 de febrero de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

ARTÍCULO 92. *DERECHOS DEL INVESTIGADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Como sujeto procesal, el investigado tiene los siguientes derechos:

1. Acceder a la investigación.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

El numeral 2o. del Artículo 77 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... 2. El investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso. ..."

El numeral 2o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de 1997. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

2. Designar defensor.

3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2009 de 23 de marzo de 2017, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica.

5. Rendir descargos.

6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.

7. Obtener copias de la actuación.

8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o única instancia.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Numeral 8o. declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-107-04 de 10 de febrero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 112

<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 10 de 2010

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Num. 3o. Inc. 8o.

ARTÍCULO 93. *ESTUDIANTES DE CONSULTORIOS JURÍDICOS Y FACULTADES DEL DEFENSOR.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos, podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000. Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado; cuando existan criterios contradictorios prevalecerá el del primero.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en las Sentencias C-143-01 y C-1076-02, mediante Sentencia C-070-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 113

<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 15 de 2008

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 248 de 2013

T I T U L O V.
LA ACTUACION PROCESAL.

CAPITULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 94. *PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN PROCESAL.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La actuación disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la presente ley y en el artículo 3o. del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, se observarán los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.

<Notas del Editor>

Entiéndase referido al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) a partir de su expedición.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

El numeral 2o. del Artículo 77 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... 2. El investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso. ..."

El numeral 2o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de 1997. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 114

<Concordancias>

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); Art. 3

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 8 de 2011

ARTÍCULO 95. *RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En el procedimiento ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

El numeral 2o. del Artículo 77 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... 2. El investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso. ..."

El numeral 2o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de 1997. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 115

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 110 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 12 de 2017

ARTÍCULO 96. *REQUISITOS FORMALES DE LA ACTUACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La actuación disciplinaria deberá adelantarse en idioma castellano, y se recogerá por duplicado, en el medio más idóneo posible.

Las demás formalidades se regirán por las normas del Código Contencioso Administrativo. Cuando la Procuraduría General de la Nación ejerza funciones de policía judicial se aplicará el Código de Procedimiento Penal, en cuanto no se oponga a las previsiones de esta ley.

<Notas del Editor>

Entiéndase referido al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) a partir de su expedición.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 116

<Concordancias>

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

Ley 906 de 2004

Directiva PROCURADURÍA 10 de 2010

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 71 de 2013

ARTÍCULO 97. *MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS Y TÉRMINO PARA ADOPTAR DECISIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Salvo lo dispuesto en normas especiales de este código, todas las decisiones interlocutorias y los fallos que se profieran en el curso de la actuación deberán motivarse.

Las decisiones que requieran motivación se tomarán en el término de diez días y las de impulso procesal en el de tres, salvo disposición en contrario.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 117

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00482-00(1915-11) de 13 de agosto de 2018, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.

ARTÍCULO 98. *UTILIZACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías constitucionales.

Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito sólo cuando sea estrictamente necesario.

Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al del conductor del proceso, a través de medios como la audiencia o comunicación virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 118

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 196 de 2011

ARTÍCULO 99. *RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando se perdiere o destruyere un expediente correspondiente a una actuación en curso, el funcionario competente deberá practicar todas las diligencias necesarias para lograr su reconstrucción. Para tal efecto, se allegarán las copias recogidas previamente por escrito o en medio magnético y se solicitará la colaboración de los sujetos procesales, a fin de obtener copia de las diligencias o decisiones que se hubieren proferido; de igual forma se procederá respecto de las remitidas a las entidades oficiales.

Cuando los procesos no pudieren ser reconstruidos, deberá reiniciarse la actuación oficiosamente.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 119

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 200 de 2010

CAPITULO SEGUNDO.
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

ARTÍCULO 100. *FORMAS DE NOTIFICACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La notificación de las decisiones disciplinarias puede ser: personal, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 120

Directiva PROCURADURÍA 55 de 2009

Circular SUPERINDUSTRIA 4 de 2015

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0532-08 de 18 de agosto de 2011, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 54 de 2017

ARTÍCULO 101. *NOTIFICACIÓN PERSONAL.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 121

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El Artículo 85 de la Ley 200 de 1995 establecía: "Las providencias señaladas en el inciso 1o., del artículo anterior se notificarán personalmente ~~si el interesado comparece ante el funcionario competente antes de que se surta otro tipo de notificación~~."

El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- El Inciso 1o. del Artículo 84 de la Ley 200 de 1995 establecía: "~~Sólo~~ se notificarán las siguientes providencias: el auto de cargos, el que niega la práctica de pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos."

El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- El Inciso 2o. del Artículo 80 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... Por tanto, iniciada la indagación preliminar o la investigación disciplinaria se comunicará al interesado para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa."

El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-555-01 de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, "bajo el entendido que se refiere a la notificación personal y en subsidio a la notificación por edicto, cuando a pesar de las diligencias pertinentes, de las cuales se dejará constancia secretarial en el expediente, no se haya podido notificar personalmente".

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-429-14 de 3 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Andrés Mutis Vanegas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2015-00859-01(3638-16) de 15 de agosto de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00140-00(0607-12) de 15 de febrero de 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0795-10 de 17 de abril de 2013, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

"Argumenta el demandante que la citación para la notificación personal se envió a una dirección diferente a la que tenía registrada y en consecuencia no tuvo la oportunidad legal de conocer el fallo de segunda instancia.

"La Sala no comparte los argumentos de la parte demandante toda vez que si bien la citación al parecer se envió a una dirección diferente a la registrada, no por esta razón se releva al demandante del deber procesal que le impone la ley de estar pendiente del proceso en defensa de sus intereses.

"Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido:

""La carga procesal, es una conducta de realización facultativa establecida en beneficio del propio interés del gravado con ella, pero cuya omisión lo expone al riesgo de soportar consecuencias jurídicas desfavorables. Por lo tanto, la carga de vigilancia, atención y cuidado a las actuaciones que se surtan en el proceso, está siempre presente en todos los procesos. De tal suerte, que no obstante estar gravado con esa carga, la ley dispone que se le cite para que concurra al despacho para la práctica de la notificación personal; pero, si tal notificación se omite, no por eso desaparece la carga de comparecer a la secretaría del despacho a enterarse de la marcha del proceso, lo que permitiría por ejemplo, que si se dicta una providencia y no se ha efectuado la citación, podría sin embargo notificarse personalmente de ella <T-309-01>."

"Y es que el artículo 107 tiene por finalidad impedir que ante la no comparecencia del sujeto procesal a la notificación personal, se paralice la actuación. Por lo anterior y teniendo en cuenta los deberes del demandante y su apoderado, así como también las cargas procesales que le son propias, el hecho de no haber recibido la citación en la dirección exacta para efectos de la notificación personal no configura una causal de violación al debido proceso y al derecho de defensa, pues como quedó probado dentro del expediente, se procedió a la notificación por edicto, tal como lo establece la ley."

ARTÍCULO 102. *NOTIFICACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 122

ARTÍCULO 103. *NOTIFICACIÓN DE DECISIONES INTERLOCUTORIAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley**

1952 de 2019> Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse; si ésta no se presenta a la secretaría del despacho que profirió la decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el evento del pliego de cargos.

En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-293-08 de 2 de abril de 2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 123

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 54 de 2007

ARTÍCULO 104. *NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO COMISIONADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En los casos en que la notificación del pliego de cargos deba realizarse en sede diferente a la del competente, éste podrá comisionar para tal efecto a otro funcionario de la Procuraduría o al jefe de la entidad a la que esté vinculado el investigado, o en su defecto, al personero distrital o municipal del lugar donde se encuentre el investigado o su apoderado, según el caso. Si no se pudiere realizar la notificación personal, se fijará edicto en lugar visible de la secretaría del despacho comisionado, por el término de cinco días hábiles. Cumplido lo anterior, el comisionado devolverá inmediatamente al comitente la actuación, con las constancias correspondientes.

La actuación permanecerá en la Secretaría del funcionario que profirió la decisión.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 124

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 52 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 19 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 2 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 135 de 2017

ARTÍCULO 105. *NOTIFICACIÓN POR ESTADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil.

<Notas del Editor>

- Entiendase referido al Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) a partir de su expedición.

<Inciso adicionado por el artículo 46 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> De esta forma se notificarán los autos de cierre de investigación y el que ordene el traslado para alegatos de conclusión.

<Notas de Vigencia>

- Inciso adicionado por el artículo 46 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 125

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012); Art. 295

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2005

Memorando PROCURADURÍA 3 de 2018

ARTÍCULO 106. *NOTIFICACIÓN EN ESTRADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las decisiones que se profieran en audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado de violación del artículo 29 de la Constitución Política, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1193-08 de 3 de diciembre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería. fallo

inhibitorio por violación del preámbulo y del artículo 2 de la Constitución Política, por ineptitud sustancial de la demanda.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 126

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-33-33-000-2016-00625-01(1175-17) de 21 de junio de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 107. *NOTIFICACIÓN POR EDICTO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 87 de la Ley 200 de 1995 establecía: "Los autos de cargos, el que niega pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos se notificarán por edicto cuando, a pesar de las diligencias pertinentes de las cuales se dejará constancia secretarial en el expediente, no se hayan podido notificar personalmente."

El Artículo 87 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-627-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.

Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación personal, previo el procedimiento anterior.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 127

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0795-10 de 17 de abril de 2013, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

ARTÍCULO 108. *NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando no se hubiere realizado la notificación personal o ficta, o ésta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el procesado o su defensor no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 128

ARTÍCULO 109. *COMUNICACIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo.

Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-293-08 de 2 de abril de 2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, *"...en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha"*.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 129

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 53 de 2010

CAPITULO TERCERO.
RECURSOS.

ARTÍCULO 110. *CLASES DE RECURSOS Y SUS FORMALIDADES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y queja, los cuales se interpondrán por escrito, salvo disposición expresa en contrario.

PARÁGRAFO. Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 130

ARTÍCULO 111. *OPORTUNIDAD PARA INTERPONER LOS RECURSOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la última notificación.

Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si las mismas se realizaren en diferentes sesiones, se interpondrán en la sesión donde se produzca la decisión a impugnar.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado de violación del artículo 29 de la Constitución Política, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-763-09 de 29 de octubre de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 131

<Concordancias>

Ley 906 de 2004; Art. 169

Decreto 1950 de 1973; Art. 103

Decreto 2400 de 1968; Art. 24

Resolución PROCURADURIA 240 de 2006

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 215 de 2007

- Concepto PROCURADURÍA 55 de 2004

ARTÍCULO 112. *SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar.

Cuando la decisión haya sido proferida en estrado la sustentación se hará verbalmente en audiencia o diligencia, o en la respectiva sesión, según el caso.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 132

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 113. *RECURSO DE REPOSICIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado, y contra el fallo de única instancia.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 99 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El recurso de reposición procederá contra los autos de sustanciación, contra el que niega la recepción de la versión voluntaria y contra los fallos de única instancia."

El Artículo 99 fue objeto de los siguientes fallos:

. Mediante Sentencia C-013-01 del 17 de enero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-892-99

. Artículo 99 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- El Artículo 74 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El defensor puede presentar pruebas en la indagación preliminar y solicitar versión voluntaria sobre los hechos. La negativa se

resolverá mediante providencia interlocutoria contra la cual sólo cabe el recurso de reposición."

El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-175-01 del 14 de febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 133

<Concordancias>

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Num. 3o. Inc. 1o.

<Doctrina Concordante>

Concepto SUPERINDUSTRIA 3012366 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 649-11 de 21 de noviembre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

- Corte Constitucional, Sentencia T-962-09 de 18 de diciembre de 2010, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

ARTÍCULO 114. *TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando el recurso de reposición se formule por escrito debidamente sustentado, vencido el término para impugnar la decisión, se mantendrá en Secretaría por tres días en traslado a los sujetos procesales. De lo anterior se dejará constancia en el expediente. Surtido el traslado, se decidirá el recurso.

<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2005

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 264 de 2007

ARTÍCULO 115. *RECURSO DE APELACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 102 de la Ley 200 de 1995 establecía en similar sentido: "El recurso de apelación es procedente contra el auto que niega pruebas en la investigación disciplinaria y contra el fallo de primera instancia."

El Artículo 102 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión de archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas, cuando no se han decretado de oficio, caso en el cual se concederá en el efecto diferido; en el devolutivo, cuando la negativa es parcial.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Inciso 3o. del Artículo 103 de la Ley 200 de 1995 establecía: "En el proceso disciplinario el investigado es sujeto procesal, pero aun existiendo pluralidad de disciplinados ~~no~~ habrá lugar a la figura del apelante único, ~~excepto que el objeto de la apelación sea diferente~~. "

El Inciso 3o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-012-97 del 23 de enero de 1997, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, salvo las expresiones tachadas que se declaran INEXEQUIBLES.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 134

<Concordancias>

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Nums. 2o. Inc. Final. 3o. Incs. 7o., 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-33-33-000-2016-00625-01(1175-17) de 21 de junio de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 86 de 2017

ARTÍCULO 116. *PROHIBICIÓN DE LA* REFORMATIO IN PEJUS. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción impuesta, cuando el investigado sea apelante único.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 135

<Concordancias>

Constitución Política, Art. 31, Inc. 2

ARTÍCULO 117. *RECURSO DE QUEJA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El recurso de queja procede contra la decisión que rechaza el recurso de apelación.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 136

ARTÍCULO 118. *TRÁMITE DEL RECURSO DE QUEJA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Dentro del término de ejecutoria de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará.

Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término anterior, el funcionario competente enviará al superior funcional las copias pertinentes, para que decida el recurso.

El costo de las copias estará a cargo del impugnante.

Si quien conoce del recurso de queja necesitare copia de otras actuaciones procesales, ordenará al competente que las remita a la mayor brevedad posible. Si decide que el recurso debe concederse, lo hará en el efecto que corresponde.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 137

ARTÍCULO 119. *EJECUTORIA DE LAS DECISIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme tres

días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar ésta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.

Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández., "siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias"

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 138

Directiva PROCURADURÍA 55 de 2009

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 137 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 151 de 2005

- Concepto PROCURADURÍA 24 de 2017

ARTÍCULO 120. *DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Quien hubiere interpuesto un recurso podrá desistir del mismo antes de que el funcionario competente lo decida.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 139

ARTÍCULO 121. *CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LOS FALLOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>**

En los casos de error aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, de la entidad o fuerza donde labora o laboraba, o en la denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, o de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, éste debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo profirió.

El fallo corregido, aclarado, o adicionado, será notificado conforme a lo previsto en este código.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 140

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

CAPITULO CUARTO.
REVOCATORIA DIRECTA.

ARTÍCULO 122. *PROCEDENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 47 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió. El quejoso podrá solicitar la revocatoria del auto de archivo.

PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación por parte del Procurador General de la Nación, de oficio o a petición del quejoso que tenga la calidad de víctima o perjudicado.

PARÁGRAFO 2o. El plazo para proceder a la revocatoria será de tres (3) meses calendario.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 47 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Apartes subrayados del texto modificado por la Ley 1474 de 2011 declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Apartes subrayados del texto original declarados CONDICIONALMENTE exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, "en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación".

- El Artículo 111 de la Ley 200 de 1995 establecía: "Los fallos disciplinarios serán revocables en los siguientes casos: ..."

Este Inciso 1o. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 141

Circular PROCURADURÍA 65 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 11 de 2007

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 122. PROCEDENCIA. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió.

ARTÍCULO 123. *COMPETENCIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional.

PARÁGRAFO. El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio, en este último evento cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría o autoridad disciplinaria, o asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el cual proferirá la decisión correspondiente.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados del texto modificado por la Ley 1474 de 2011 declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Apartes subrayados del texto original declarados CONDICIONALMENTE exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, "en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, también procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación".

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 142

<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 65 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 11 de 2007

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 123. COMPETENCIA. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> Los fallos sancionatorios podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional.

PARÁGRAFO. El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría, o asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el cual proferirá el fallo sustitutivo correspondiente.

ARTÍCULO 124. *CAUSAL DE REVOCACIÓN DE LOS FALLOS SANCIONATORIOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En los casos referidos por las disposiciones anteriores, los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deban fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado del texto modificado por la Ley 1474 de 2011 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Aparte subrayado del texto original declarado CONDICIONALMENTE exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, "en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, también procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación".

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la expresión "reglamentarias" por ineptitud de la demanda.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 143

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 124. CAUSAL DE REVOCACIÓN DE LOS FALLOS SANCIONATORIOS. <Aparte sancionatorio CONDICIONALMENTE exequible> Los fallos sancionatorios son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales.

ARTÍCULO 125. *REVOCATORIA A SOLICITUD DEL SANCIONADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El sancionado podrá solicitar la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios previstos en este código.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- El Inciso 1o. del Artículo 113 de la Ley 200 de 1995 establecía: "No procederá la revocación directa prevista en este Código, a petición de parte, cuando el sancionado haya ejercido cualquiera de los recursos ordinarios".

Este Inciso 1o. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-095-98 del 18 de marzo de 1998, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Herrera Vergara.

La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser recusado, caso en el cual la actuación se remitirá inmediatamente al superior funcional o al funcionario competente para investigarlo por la Procuraduría General de la Nación, si no tuviere superior funcional, quien la resolverá en el término improrrogable de un mes designando a quien deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el Procurador General de la Nación, resolverá el Viceprocurador.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 144

ARTÍCULO 126. *REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DE LOS FALLOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> La solicitud de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-666-08 de 2 de julio de 2008, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, *"en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria".*

1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la indicación del documento de identidad y la dirección, que para efectos de la actuación se tendrá como única, salvo que oportunamente señalen una diferente.

2. La identificación del fallo cuya revocatoria se solicita.

3. La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de revocatoria en que se fundamenta la solicitud.

La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida mediante decisión que se notificará personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de cinco días para corregirla o complementarla. Transcurrido éste sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 145

ARTÍCULO 127. *EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE LA RESUELVE.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Ni la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso-administrativas.

Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno, ni a la aplicación del silencio administrativo.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 146

T I T U L O VI.
PRUEBAS.

ARTÍCULO 128. *NECESIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 147

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00169-00(0730-12) de 2 de diciembre de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00030-00(0135-12) de 4 de octubre de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2014-00633-00(1973-14) de 7 de febrero de 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2014-01086-00(3378-14) de 12 de abril de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2011-00316-00(SU) de 9 de agosto de 2016, C.P. Dr. (E) William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 3 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 13 de 2011

ARTÍCULO 129. *IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO EN LA BÚSQUEDA DE LA PRUEBA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 148

ARTÍCULO 130. *MEDIOS DE PRUEBA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Inciso 1o. modificado por el artículo 50 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, y cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

<Notas del Editor>

- En relación a la referencia a las reglas contenidas en la Ley 600 de 2000, debe tenerse en cuenta que esta ley fue derogada por la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004, mediante la cual "se expide el Código de Procedimiento Penal", aclarando que el artículo 533 de la Ley 906 de 2004 establece: *"(...) regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000."*.

<Notas de Vigencia>

- Inciso 1o. modificado por el artículo 50 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 10 de 2010

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 08001-23-33-000-2014-01034-01(4422-16) de 29 de agosto de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 41 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 37 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 154 de 2010

- Concepto PROCURADURÍA 36 de 2017

<Legislación Anterior>

Texto original Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 130. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 149

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de julio de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Para el Inc. 3

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00069-00(2089-17) de 31 de julio de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

ARTÍCULO 131. *LIBERTAD DE PRUEBAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 150

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 25000-23-42-000-2016-02429-01(6450-18) de 5 de diciembre de 2019, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 63001-23-33-000-2014-00243-01(4557-15) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0979-11 de 10 de octubre de 2013 , C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 132. *PETICIÓN Y RECHAZO DE PRUEBAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los sujetos procesales pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán rechazadas las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 151

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00020-00(0080-12) de 2 de mayo de 2019, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

ARTÍCULO 133. *PRÁCTICA DE PRUEBAS POR COMISIONADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior categoría de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales.

En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias objeto de la misma y el término para practicarlas.

El comisionado practicará aquellas pruebas que surjan directamente de las que son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido expresamente. Si el término de comisión se encuentra vencido se solicitará ampliación y se concederá y comunicará por cualquier medio eficaz, de lo cual se dejará constancia.

Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que sean necesarias para la práctica de las pruebas.

El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier funcionario para la práctica de pruebas, los demás servidores públicos de la Procuraduría sólo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera de su sede, salvo que el comisionado pertenezca a su dependencia.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 152

ARTÍCULO 134. *PRÁCTICA DE PRUEBAS EN EL EXTERIOR.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La práctica de las pruebas o de diligencias en territorio extranjero se regulará por las normas legalmente vigentes.

En las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, el Procurador General podrá, de acuerdo con la naturaleza de la actuación y la urgencia de la prueba, autorizar el traslado del funcionario que esté adelantando la actuación, previo aviso de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 153

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2011-00316-00(SU) de 9 de agosto de 2016, C.P. Dr. (E) William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 135. *PRUEBA TRASLADADA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 51 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.

También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario.

Cuando la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior de la Judicatura necesiten información acerca de una investigación penal en curso o requieran trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitarán al Fiscal General de la Nación. En cada caso, el Fiscal General evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 51 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 154

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 25000-23-25-000-2001-04154-01(1431-08) de 15 de octubre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 135. PRUEBA TRASLADADA. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la

actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.

ARTÍCULO 136. *ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de las facultades de policía judicial, tomará las medidas que sean necesarias para asegurar los elementos de prueba.

Si la actuación disciplinaria se adelanta por funcionarios diferentes a los de la Procuraduría General de la Nación, podrán recurrir a esta entidad y a los demás organismos oficiales competentes, para los mismos efectos.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 155

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 123 de 2017

ARTÍCULO 137. *APOYO TÉCNICO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El servidor público que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar, gratuitamente, a todos los organismos del Estado la colaboración técnica que considere necesaria para el éxito de las investigaciones.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 156

ARTÍCULO 138. *OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR LA PRUEBA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los sujetos procesales podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Artículo corresponde en similar sentido al Artículo 130 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de 1997, Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

- Mediante Sentencia C-555-01 de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-430-97.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 157

ARTÍCULO 139. *TESTIGO RENUENTE.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando el testigo citado sea un particular y se muestre renuente a comparecer, podrá imponérsele multa hasta el equivalente a cincuenta salarios mínimos diarios vigentes en la época de ocurrencia del hecho, a favor del Tesoro Nacional, a menos que justifique satisfactoriamente su no comparecencia, dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la declaración.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Inciso corresponde en similar sentido al Inciso 1o. del Artículo 52 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

La multa se impondrá mediante decisión motivada, contra la cual procede el recurso de reposición, que deberá interponerse de acuerdo con los requisitos señalados en este código.

Impuesta la multa, el testigo seguirá obligado a rendir la declaración, para lo cual se fijará nueva fecha.

Si la investigación cursa en la Procuraduría General de la Nación, podrá disponerse la conducción del testigo por las fuerzas de policía, siempre que se trate de situaciones de urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida de la prueba. La conducción no puede implicar la privación de la libertad.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Inciso corresponde en similar sentido al Inciso 2o. del Artículo 52 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, "siempre y cuando se entienda que se trata de situaciones de urgencia en las cuales la conducción forzada del testigo es necesaria para evitar la perdida de pruebas". Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Esta norma no se aplicará a quien esté exceptuado constitucional o legalmente del deber de declarar.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 165

Circular SENA 195 de 2019

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06840-01(4367-15) de 18 de noviembre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 122 de 2016

- Concepto PROCURADURÍA 27 de 2013

ARTÍCULO 140. *INEXISTENCIA DE LA PRUEBA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendrá como inexistente.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 158

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2011-00316-00(SU) de 9 de agosto de 2016, C.P. Dr. (E) William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 141. *APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta se fundamenta.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 159

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00064-00(0234-12) de 13 de febrero de 2020, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

ARTÍCULO 142. *PRUEBA PARA SANCIONAR.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 160

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00064-00(0234-12) de 13 de febrero de 2020, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00707-00(2697-11) de 21 de junio de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

T I T U L O VII.
NULIDADES.

ARTÍCULO 143. *CAUSALES DE NULIDAD.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Son causales de nulidad las siguientes:

1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02 y en la Sentencia C-181-02.

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, , la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02, que declaró exequible la misma expresión que aparecía en el numeral 1 del artículo 131 de la Ley 200 de 1995.

- El Numeral 1o. del Artículo 131 de la Ley 200 de 1995 establecía: "1. La incompetencia del funcionario para fallar."

El Numeral 1o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

2. La violación del derecho de defensa del investigado.
<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 18 de 2000

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

PARÁGRAFO. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 202 ; Art. 203

<Concordancias>

Directiva PROCURADURIA 10 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 66001-23-33-000-2014-00413-01(1885-17) de 31 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

ARTÍCULO 144. *DECLARATORIA OFICIOSA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 204

ARTÍCULO 145. *EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula.

La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 205

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 36 de 2014

- Concepto PROCURADURÍA 223 de 2013

ARTÍCULO 146. *REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 206

<Jurisprudencia Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 160 de 2017

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 649-11 de 21 de noviembre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 147. *TÉRMINO PARA RESOLVER.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El funcionario competente resolverá la solicitud de nulidad, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su recibo.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 207

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 649-11 de 21 de noviembre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

T I T U L O VIII.
ATRIBUCIONES DE POLICIA JUDICIAL.

ARTÍCULO 148. *ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Constitución Política, para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación tiene atribuciones de policía judicial. En desarrollo de esta facultad, el Procurador General y el Director Nacional de Investigaciones Especiales podrán proferir las decisiones correspondientes.

El Procurador General de la Nación podrá delegar en cualquier funcionario de la Procuraduría, en casos especiales, el ejercicio de atribuciones de policía judicial, así como la facultad de interponer las acciones que considere necesarias. Quien hubiere sido delegado podrá proferir las decisiones que se requieran para el aseguramiento y la práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, para efecto del ejercicio de las funciones de Policía Judicial establecidas en el inciso final del artículo 277, el Procurador General de la Nación tendrá atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas en el trámite procesal.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 200

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 130

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-475-07 de 13 de junio de 2007, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-244-96, y en consecuencia declara EXEQUIBLE este artículo, mediante Sentencia C-1121-05 de 1 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

Mediante la misma Sentencia, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA sobre los cargos presentados por violación de los artículos 16, 28 y 29 de la Constitución Política.

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 135 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

ARTÍCULO 149. *INTANGIBILIDAD DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones de policía judicial, se realizarán con estricto respeto de las garantías constitucionales y legales.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 201

T I T U L O IX.
PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

CAPITULO PRIMERO.
INDAGACIÓN PRELIMINAR.

ARTÍCULO 150. *PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. ~~En estos eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo~~.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-036-03, mediante Sentencia C-070-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra..

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 50001-23-33-000-2014-00058-01(1144-16) de 6 de junio de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El Artículo 141 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 141. TÉRMINO. Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses.

"La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos, al vencimiento de este término parentorio el funcionario sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente".

Los apartes subrayados fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-728-00 del 21 de junio del 2000, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 19001-23-33-000-2015-00069-00(2089-17) de 31 de julio de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 972-12 de 10 de octubre de 2013, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

"Violación al debido proceso por desconocimiento del término en la indagación preliminar y la investigación disciplinaria.

(...) la inobservancia del término de duración de la indagación preliminar solo vulnera los derechos del disciplinado y sus garantías constitucionales, cuando con posterioridad al vencimiento de ese límite temporal, se practican pruebas y se desarrollan actuaciones sin la debida justificación. (...)"

- Corte Constitucional, Sentencia SU-901-05 de 1o. de sepriembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 129 de 2011

- Concepto PROCURADURÍA 1 de 2010

- Concepto PROCURADURÍA 218 de 2004

- Concepto PROCURADURÍA 124 de 2001

<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE. Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para el cumplimiento de éste, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado ~~que considere necesario~~ para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-036-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-892-99.

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-892-99, que declaró la inexequibilidad de la misma expresión que figuraba en el artículo 140 de la Ley 200 de 1995.

Mediante la misma sentencia la Corte declaró EXEQUIBLE el aparte subrayado.

- El Artículo 140 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 140. FACULTADES EN LA INDAGACIÓN PRELIMINAR. Para el cumplimiento de los fines de la indagación preliminar, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición espontánea al servidor público ~~que considere necesario~~ para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado".

El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

El Artículo 140 fue declarado EXEQUIBLE en lo demás, en los términos de la Sentencia C-892-99.

Menciona la Corte en la parte motiva de la Sentencia:

"...

"Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, habrá de declararse la inexequibilidad del artículo 140 del Código Disciplinario Unico, en cuanto hace referencia a la expresión "que considere necesario", norma que es exequible en lo demás, bajo el entendido de que se

es oído en exposición espontánea, cuando así se solicita por un servidor público para fines de la investigación preliminar, constituye para éste el legitimo ejercicio del derecho de defensa como posible investigado, el cual no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del funcionario investigador, en ningún caso.

..."

- El Inciso 1o. del Artículo 147 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 147. OPORTUNIDAD PARA RENDIR EXPOSICIÓN. Quien tenga conocimiento de la existencia de una investigación disciplinaria en su contra y antes de que se le formulen cargos, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba la exposición espontánea; ~~aquél la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. En caso contrario negará la solicitud con auto de trámite~~.

El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de 1997. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de 1997, bajo la condición de que "se entienda que la oportunidad para rendir exposición voluntaria se contrae no sólo en la etapa de la investigación sino de la indagación preliminar." Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Mediante Sentencia C-555-01 de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-430-97

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

PARÁGRAFO 1o. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna.
<Concordancias>

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Lit. 2o. Inc. Final

PARÁGRAFO 2o. Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. La Procuraduría General de la Nación, o quienes ejerzan funciones disciplinarias, en los casos que se advierta la temeridad de la queja, podrá imponer sanciones de multa, previa audiencia del quejoso, por medio de resolución motivada contra la cual procede únicamente el recurso de apelación que puede ser interpuesto dentro de los dos días siguientes a su notificación.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 208; Art. 209; Art. 210

Ley 734 de 2002; Art. 101; Art 107

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 221 de 2006

ARTÍCULO 151. *RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando se adelante indagación preliminar por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios servidores públicos y solamente se identificare uno o algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal, sin perjuicio de que las actuaciones puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso bajo una misma cuerda.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 214 Num. 1

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 65 de 2017

CAPITULO SEGUNDO.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 152. *PROCEDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 211

ARTÍCULO 153. *FINALIDADES DE LA DECISIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 212

ARTÍCULO 154. *CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:

1. La identidad del posible autor o autores.

2. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.

3. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del investigado, una certificación de la entidad a la cual el servidor público esté o

hubiere estado vinculado, una constancia sobre el sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y su última dirección conocida.

4. La orden de informar y de comunicar esta decisión, de conformidad con lo señalado en este código.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 215

ARTÍCULO 155. *NOTIFICACIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Iniciada la investigación disciplinaria se notificará al investigado y se dejará constancia en el expediente respectivo. En la comunicación se debe informar al investigado que tiene derecho a designar defensor.

<Inciso modificado por el artículo 236 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Si la investigación disciplinaria la iniciare una oficina de control disciplinario interno, ésta dará aviso inmediato a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esa entidad o de la personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente. La procuraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las condiciones para que se suministre dicha información.

<Notas de Vigencia>

- Inciso modificado por el artículo 236 del Decreto 19 de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

<INCISO 2> Si la investigación disciplinaria la iniciare una oficina de control disciplinario interno, ésta dará aviso inmediato a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esta entidad o de la personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente.

Si la investigación disciplinaria la iniciare la Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales o municipales, lo comunicará al jefe del órgano de control disciplinario interno, con la advertencia de que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente, si ya la hubiere abierto, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 216

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 101; Art 107

ARTÍCULO 156. *TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Inciso 1o. modificado por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El término de la investigación disciplinaria será de doce meses, contados a partir de la decisión de apertura.
<Notas de Vigencia>

- Inciso 1o. modificado por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 156. TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. El término de la investigación disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la decisión de apertura.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 159 de 2012

- Concepto PROCURADURÍA 181 de 2011

<Inciso 2o. modificado por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos que se adelanten por faltas gravísimas, la investigación disciplinaria no podrá exceder de dieciocho meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados.

<Notas de Vigencia>

- Inciso 2o. modificado por el artículo 52 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

En los procesos que se adelanten por las faltas descritas en el artículo 48, numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de este código, la investigación disciplinaria no se podrá exceder de doce meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados.

Vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento la evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos, se archivará definitivamente la actuación.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El Inciso 3o. del Artículo 146 de la Ley 200 de 1995 establecía: "Cumplido este término y el previsto en el artículo 152 si no se hubiere realizado la evaluación mediante formulación de cargos se ordenará el archivo ~~provisional, sin perjuicio de que si con posterioridad aparece la prueba para hacerlo, se proceda de conformidad siempre que no haya prescrito la acción disciplinaria~~."

El Inciso transcrito fue declarado EXEQUIBLE salvo los apartes tachados declarados INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 213

Ley 734 de 2002; Art. 164

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2006

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00619-00(2372-11) de 11 de julio de 2019, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0532-08 de 18 de agosto de 2011, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0684-08 de 19 de mayo de 2011, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 172 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 143 de 2013

ARTÍCULO 157. *SUSPENSIÓN PROVISIONAL.* TRÁMITE. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.

El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.

El auto que decreta la suspensión provisional será responsabilidad personal del funcionario competente y debe ser consultado sin perjuicio de su inmediato cumplimiento si se trata de decisión de primera instancia; en los procesos de única, procede el recurso de reposición.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-908-13 de 3 de diciembre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos.

Destaca el editor:

"(...) la interpretación razonable consiste en que la aparte acusada se refiere a la responsabilidad disciplinaria, cuyo alcance involucra toda conducta del funcionario derivada del ejercicio de sus funciones, sin para ello se exija alguna condición normativa adicional. Así, dicha responsabilidad disciplinaria es predicable – se insiste- del mal uso de la facultad del disciplinador de suspender provisionalmente al disciplinado antes del respectivo acto administrativo, lo que no vulnera el artículo 90 de la Constitución.".

Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al afectado.

Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en secretaría por el término de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar

alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes.

Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el superior jerárquico del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.

PARÁGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el investigado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086-19 de 27 de febrero de 2019, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-450-03 , mediante Sentencia C-656-03 de 5 de agosto de 2003, Magistrada Ponente Dra.

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-450-03 de 3 de junio de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, "en el entendido de que el acto que ordene la prórroga debe reunir también los requisitos establecidos en este artículo para la suspensión inicial y la segunda prórroga sólo procede si el fallo de primera o única instancia fue sancionatorio".

- Parte del texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 115 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 217

<Concordancias>

Ley 1010 de 2006: Art. 10 Par. 2o.

<Doctrina Concordante>

- Concepto SENA 44977 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 184 de 2012

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 158. *REINTEGRO DEL SUSPENDIDO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia, ~~salvo que esta circunstancia haya sido determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o de su apoderado~~.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 116 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 218

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 25001-23-42-000-2013-06486-01(0549-17) de 28 de marzo de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0360-09 de 12 de mayo de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1879-12 de 12 de mayo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

Suspensión del cargo por orden judicial que culminó con sentencia absolutoria.

"(...) aplicación analógica del artículo 158 de la Ley 734 de 2002, dado el principio de favorabilidad que consigna el artículo 53 de la Carta Política en cuanto situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, sea reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho el reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio."

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 25000-23-25-000-2003-05439-01(0090-09) de 22 de marzo de 2012, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1384-09 de 26 de enero de 2012, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 184 de 2011

ARTÍCULO 159. *EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL*. <Artículo declarado INEXEQUIBLE>

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 159. Si el suspendido provisionalmente resultare responsable de haber cometido una falta gravísima, la sanción de destitución e inhabilidad general que se le imponga se hará efectiva a partir de la fecha de la suspensión provisional.

ARTÍCULO 160. *MEDIDAS PREVENTIVAS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Cuando la Procuraduría General de la Nación o la Personería ~~Distrital de Bogotá~~ adelanten diligencias disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público. Esta medida sólo podrá ser adoptada por el Procurador General, por quien éste delegue de manera especial, y el Personero ~~Distrital~~.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-037-03, mediante Sentencia C-210-03 de 11 de marzo de 2003, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández

- Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-977-02.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-977-02 de 13 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa,

"con respecto de los cargos analizados y en los términos de la parte motiva de esta sentencia".

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 219

ARTÍCULO 160-A. DECISIÓN DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo adicionado por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el recurso de reposición, declarará cerrada la investigación.

En firme la providencia anterior, la evaluación de la investigación disciplinaria se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

<Notas de Vigencia>

- Artículo adicionado por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 220

<Concordancias>

Ley 1474 de 2011; Art. 46

Ley 734 de 2002; Art. 105 Inc. 2o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0979-11 de 10 de octubre de 2013 , C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

CAPITULO TERCERO.
EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 161. *DECISIÓN DE EVALUACIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los quince días siguientes, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la

actuación, según corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2o. del artículo 156.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 221

<Concordancias>

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Num. 3o. Inc. 2o.

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 117 de 2011

ARTÍCULO 162. *PROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DE CARGOS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 150 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 150. FORMULACIÓN DE CARGOS. El funcionario formulará cargos cuando esté demostrada objetivamente la falta y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del disciplinado."

El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 222

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00067-00(0285-12) de 19 de febrero de 2018, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0690-10 de 10 de octubre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 163. *CONTENIDO DE LA DECISIÓN DE CARGOS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Numeral 7o. del Artículo 92 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El auto de cargos deberá contener: ... 7. La determinación provisional de la naturaleza de la falta. Cuando fueren varios los implicados se hará análisis separado para cada uno de ellos."

El numeral Numeral 7o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 48 de 2001

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.

3. La identificación del autor o autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 223

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 101 de 2009

ARTÍCULO 164. *ARCHIVO DEFINITIVO*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3o. del artículo 156 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 224

<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 00 de 2002

ARTÍCULO 165. *NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS Y OPORTUNIDAD DE VARIACIÓN*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional Sentencia C-328-03 de 29 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos planteados en la demanda, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre un aparte subrayado de este inciso por ineptitud de la demanda.

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 204 de 2006

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos planteados en la demanda, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre un aparte de este inciso por ineptitud de la demanda.

Las restantes notificaciones se surtirán por estado.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Num. 3o. Inc. 5o.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y ~~de ser necesario~~ se otorgará un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02.

- Inciso declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 225 ; Art. 229

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2015-00859-01(3638-16) de 15 de agosto de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

.- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00108-00(0348-11) de 14 de febrero de 2019, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

CAPITULO CUARTO.
DESCARGOS, PRUEBAS Y FALLO.

ARTÍCULO 166. *TÉRMINO PARA PRESENTAR DESCARGOS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la oficina de conocimiento, por el término de diez días, a disposición de los sujetos procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Inciso 1o. del Artículo 119 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El disciplinado o quien haya rendido exposición podrá pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas."

El Inciso 1o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 227

<Concordancias>

Ley 1474 de 2011; Art. 54

Ley 734 de 2002; Art. 168

ARTÍCULO 167. *RENUENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La renuencia del investigado o de su defensor a presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 228

ARTÍCULO 168. *TÉRMINO PROBATORIO*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Inciso 1o. modificado por el artículo 54 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el término señalado en el artículo 166, el funcionario competente resolverá sobre las nulidades propuestas y ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.
<Notas de Vigencia>

- Inciso modificado por el artículo 54 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Legislación Anterior>

Texto original Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 168. TÉRMINO PROBATORIO. Vencido el término señalado en el artículo anterior, el funcionario ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término no mayor de noventa días.

Las pruebas decretadas oportunamente dentro del término probatorio respectivo que no se hubieren practicado o aportado al proceso, se podrán evacuar en los siguientes casos:

1. Cuando hubieran sido solicitadas por el investigado o su apoderado, sin que los mismos tuvieren culpa alguna en su demora y fuere posible su obtención.

2. Cuando a juicio del investigador, constituyan elemento probatorio fundamental para la determinación de la responsabilidad del investigado o el esclarecimiento de los hechos.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 227

ARTÍCULO 169. *TRASLADO PARA ALEGATOS DE CONCLUSIÓN*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo

texto es el siguiente:> Si no hubiere pruebas que practicar o habiéndose practicado las señaladas en la etapa de juicio disciplinario, el funcionario de conocimiento mediante auto de sustanciación notificable ordenará traslado común de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos de conclusión.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 230

Ley 1474 de 2011; Art. 46

Ley 734 de 2002; Art. 105 Inc. 2o.

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 169. TÉRMINO PARA FALLAR. Si no hubiere pruebas que practicar, el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del término para presentar descargos, o al del término probatorio, en caso contrario.

ARTÍCULO 169-A. TÉRMINO PARA FALLAR. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo adicionado por el artículo 56 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del término de traslado para presentar alegatos de conclusión.

<Notas de Vigencia>

- Artículo adicionado por el artículo 56 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 230

ARTÍCULO 170. *CONTENIDO DEL FALLO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El fallo debe ser motivado y contener:

1. La identidad del investigado.

2. Un resumen de los hechos.

3. El análisis de las pruebas en que se basa.

4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.

5. La fundamentación de la calificación de la falta.

6. El análisis de culpabilidad.

7. Las razones de la sanción o de la absolución, y

8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 231

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2009-11 de 23 de marzo de 2017, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0690-10 de 10 de octubre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

CAPITULO QUINTO.
SEGUNDA INSTANCIA.

ARTÍCULO 171. *TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo considera necesario, decretará pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, , la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02, que declaró exequible la misma expresión contenida en el inciso segundo del artículo 157 de la Ley 200 de 1995.

- El inciso 2o. del Artículo 157 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El funcionario de segunda instancia podrá, únicamente de oficio, decretar y practicar las pruebas que

considere indispensables para la decisión, dentro de un término de diez días libres de distancia pudiendo comisionar para su práctica."

El texto subrayado fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE -en relación con los cargos de la demanda- por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño; "se condiciona a que en el trámite de la segunda instancia, se entienda que el procesado conserva la facultad de controvertir las pruebas decretadas de oficio por la autoridad disciplinaria" .

PARÁGRAFO. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 158 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 158. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar el proceso disciplinario en su integridad."

El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-012-97 del 23 de enero de 1997. La Corte advierte que "en su aplicación el superior no podrá, en ningún caso, agravar la pena impuesta al apelante único, haya o no una pluralidad de disciplinados".

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 234

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 3o.; Art. 32; Art. 34; Art. 75; Art. 76; Art. 178; Art. 214

Decreto 4886 de 2011; Art. 3 Num. 33

Decreto 3523 de 2009; Art. 3o. Num. 53

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2006

Directiva PROCURADURÍA 4 de 2006

Directiva PROCURADURÍA 14 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 649-11 de 21 de noviembre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 95 de 2001

T I T U L O X.
EJECUCION Y REGISTRO DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 172. *FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La sanción impuesta se hará efectiva por:

1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00560-00(2128-12) de 4 de abril de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.

3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de carrera.

4. <Ver Notas del Editor> Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces, respecto de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas.
<Notas del Editor>

- En relación con los Congresistas, en criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1828 de 2017, "por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones", adicionado por el artículo 1 del Decreto 1303 de 2017, "por el cual se corrige un yerro por omisión de transcripción de ciertos artículos de la Ley 1828 del 23 de enero de 2017, “por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones”", publicado en el Diario Oficial No. 50.314 de 3 de agosto de 2017.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

"ARTÍCULO 60. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN ÉTICA. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1303 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la decisión, la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente procederá en forma inmediata a hacer efectiva la sanción. De este diligenciamiento se enviará copia a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista respectiva.".

5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales.

6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales, respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos.

7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que ejerza funciones públicas.

PARÁGRAFO. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Algunos apartes de este Artículo corresponden en similar sentido al Artículo 94 de la Ley 200 de 1995. El Artículo 94, salvo el parágrafo y una expresión INEXEQUIBLE, fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-057-98 del 4 de marzo de 1998. Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 236

Constitución Política, Art. 92

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 26629 de 2017

Concepto MINRELACIONES 16 de 2013

Concepto PROCURADURÍA 136 de 2009

Concepto MINDEFENSA 15936 de 2005

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1559 de 13 de mayo de 2004 (autorizada publicación mediante Of. 18553 de 28/07/2004), C.P. Dra. Susana Montes de Echeverri

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 624 de 28 de julio de 1994 (autorizada publicación 03/08/1994), C.P. Dr. Roberto Suárez Franco

ARTÍCULO 173. *PAGO Y PLAZO DE LA MULTA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando la sanción sea de multa y el sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en forma proporcional durante los doce meses siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe por descuento. *Cuando la suspensión en el*

cargo haya sido convertida en multa el cobro se efectuará por jurisdicción coactiva.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado sus servicios el sancionado, de conformidad con el Decreto 2170 de 1992.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este inciso corresponde al Inciso 2o. del Artículo 31 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Decreto 2170 de 1992; Art. 7o.

Si el sancionado no se encontrare vinculado a la entidad oficial, deberá cancelar la multa a favor de ésta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la impuso. De no hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El aparte subrayado corresponde en el mismo sentido a la frase "... a favor de la entidad ..." contenida en el tercer Inciso del Artículo 31 de la Ley 200 de 1995 que fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Si el sancionado fuere un particular, deberá cancelar la multa a favor del Tesoro Nacional, dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión que la impuso, y presentar la constancia de dicho pago a la Procuraduría General de la Nación.

Cuando no hubiere sido cancelada dentro del plazo señalado, corresponde a la jurisdicción coactiva del Ministerio de Hacienda adelantar el trámite procesal para hacerla efectiva. Realizado lo anterior, el funcionario de la jurisdicción coactiva informará sobre su pago a la Procuraduría General de la Nación, para el registro correspondiente.

En cualquiera de los casos anteriores, cuando se presente mora en el pago de la multa, el moroso deberá cancelar el monto de la misma con los correspondientes intereses comerciales.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 237

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 1 de 2016

- Concepto PROCURADURÍA 12 de 2012

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 93 de 21 de septiembre de 2006 (autorizada publicación mediante en conflictos 11001-03-06-000-00110-00 y 11001-03-06-000-2006-00111-00 de 12/10/2006), C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 174. *REGISTRO DE SANCIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

El Numeral 4o. del Artículo 79 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... 4. La Procuraduría General de la Nación, semestralmente publicará los nombres de los servidores públicos que hayan sido desvinculados o destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria o sancionados con pérdida de investidura, una vez que esté en firme sin perjuicio del correspondiente archivo y antecedentes disciplinarios. Copia de esta publicación se enviará a todos los organismos públicos. ..."

El aparte subrayado del Numeral 4o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1o. del artículo 38 de este Código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.

<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo (parcial) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1196-05 de 22 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

- Inciso final declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1066-02 de 3 de diciembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, "en el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento".

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 238

Ley 1475 de 2011; Art. 33 Inc. 2o.

Resolución PROCURADURÍA 393 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

Corte Constitucional, Sentencia T-036-16 de 8 de febrero de 2016, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

- Consejo de Estado, Acción de Tutela, Expediente No. 2012-00445-01(AC) de 20 de febrero de 2013, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 124 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 31 de 2017

T I T U L O XI.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

CAPITULO I.
PROCEDIMIENTO VERBAL.

ARTÍCULO 175. *APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.
<Concordancias>

Ley 1719 de 2014; Art. 13 Par. 1

En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370-12 de 16 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00369-00(1422-12) de 25 de julio de 2019, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor debe tenerse en cuenta que este procedimiento también se aplicará los las faltas cometidas según lo dispuesto en el parágrafo 1o. del artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, "por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 49.186 de 18 de junio de 2014. Establece este artículo:

ARTÍCULO 13. DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. (...)

PARÁGRAFO 1o. Los funcionarios públicos que en el desarrollo del proceso penal o cualquier otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa incumplan sus obligaciones respecto de la garantía de los derechos de las víctimas de violencia sexual, responderán ante los Tribunales y Juzgados competentes, y ante las autoridades disciplinarias por dichas conductas.

El Ministerio Público vigilará el cumplimiento de los derechos de las víctimas de violencia sexual de manera prioritaria. Las investigaciones sobre presuntas faltas disciplinarias se adelantarán a través del procedimiento verbal establecido en el Capítulo 1 del Título XI del Código Disciplinario Único.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Inciso 3o. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-242-10 de 7 de abril de 2010, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

Destaca el editor:

"El reparo de falta de precisión y excesiva amplitud que, supuestamente, trae como consecuencia la posibilidad de que la autoridad disciplinaria decida de modo arbitrario el proceso que ha de aplicarse, queda contrarrestado por lo siguiente: (i) el propósito que busca alcanzar la norma es legítimo, desde el punto de vista constitucional, y concuerda además con las finalidades previstas en la Ley 734 de 2002; (ii) lo establecido en el inciso 3º del artículo 175 debe ser leído a la luz de lo dispuesto en el Libro I –contentivo de los principios de los procedimientos disciplinarios sin excepción- y debe ser comprendido como una manera de agilizar las actuaciones disciplinarias, de modo que "*en todo caso*" distinto de los previstos en los incisos 1º y 2º del artículo 175 del CDU, "*cualquiera que sea el sujeto disciplinado*" si se dan los requisitos sustanciales para levantar pliego de

cargos se puede citar a audiencia. Adviértase, de otra parte, que la eventualidad prevista en el inciso tercero acusado está precedida en el caso del procedimiento ordinario –que es en virtud de la imbricación que tiene lugar por mandato legal donde precisamente tiene aplicación el contenido normativo de dicho inciso–, de un conjunto de etapas que amplían las garantías de la persona disciplinada. Únicamente cuando se halla verificada objetivamente la falta y existe prueba que compromete la responsabilidad de la persona disciplinada, y sólo ante una eventualidad tal, puede el funcionario de conocimiento citar a audiencia. "

- Mediante Sentencia C-1077-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C1076/02, en relación a la exequibilidad del inciso 4o. del presente artículo.

- Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández. En este misma sentencia la Corte declaró INEXEQUIBLE el inciso 4o. de este mismo artículo.

<Concordancias>

Resolución PROCURADURÍA 18 de 2009

Resolución PROCURADURÍA 17 de 2009

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00064-00(0234-12) de 13 de febrero de 2020, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 55 de 2018

- Concepto PROCURADURÍA 79 de 2017

- Concepto PROCURADURÍA 19 de 2008

- Concepto PROCURADURÍA 313 de 2001

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 175. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

<Inciso INEXEQUIBLE> ~~El Procurador General de la Nación, buscando siempre avanzar hacia la aplicación de un procedimiento que desarrolle los principios de oralidad y concentración, podrá determinar otros eventos de aplicación del procedimiento verbal siguiendo los derroteros anteriores~~.

ARTÍCULO 175A. <Artículo INEXEQUIBLE>

<Notas de Vigencia>

- Artículo adicionado por el artículo 24 del Decreto 126 de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 47.599 de 21 de enero de 2010. Decreto expedido bajo el estado de emergencia social decretado mediante el Decreto 4975 de 2009. INEXEQUIBLE.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Decreto 126 de 2010 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-302-10 de 28 de abril de 2010, Magistrado Ponente Dr. Juan Carlos Henao Pérez.

<Legislación Anterior>

Texto adicionado por el Decreto 126 de 2010: INEXEQUIBLE.

ARTÍCULO 175A. También se adelantarán por el procedimiento verbal previsto en el artículo anterior los procesos disciplinarios por conductas relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

ARTÍCULO 176. *COMPETENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En todos los casos anteriores son competentes para la aplicación del procedimiento verbal, la oficina de control interno disciplinario de la dependencia en que labore el servidor público autor de la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales.

Cuando el procedimiento verbal se aplique por las oficinas de control interno se deberá informar de manera inmediata, por el medio más eficaz, al funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación o personerías distritales o municipales según la competencia.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Título IX

ARTÍCULO 177. *PROCEDIMIENTO VERBAL*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, ordenará adelantar proceso verbal y citará a audiencia al posible responsable.

En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la identificación del funcionario cuestionado, el cargo o empleo desempeñado, una relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las normas que los tipifican, la relación de las pruebas tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar, lo mismo que la responsabilidad que se estima puede caber al funcionario cuestionado.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> La audiencia debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días de la fecha del auto que la ordena. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370-12 de 16 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, *"en el entendido que este término solamente comenzará a correr a partir de la notificación del auto que ordena el proceso verbal"*

Al inicio de la audiencia, a la que el investigado puede asistir solo o asistido de abogado, podrá dar su propia versión de los hechos y aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres (3) días. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco (5) días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.

Las pruebas se practicarán conforme se regulan para el proceso ordinario, haciéndolas compatibles con las formas propias del proceso verbal.

Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea necesario y procedente. La negativa a decretar y practicar pruebas, por inconducentes, impertinentes o superfluas, debe ser motivada.

El director del proceso podrá ordenar un receso, por el tiempo que estime indispensable, para que las partes presenten los alegatos de conclusión, el cual será de mínimo tres (3) días y máximo de diez (10) días. De la misma manera podrá proceder en aquellos eventos que no estén previstos y que hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no cabe ningún recurso.

De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella. Todas las decisiones se notifican en estrados.

<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- En Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se inhibió de fallar en relación con la expresión: *"para que dentro del término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno."*, del inciso 1o. del presente artículo, por inepta demanda.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Título IX

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 20 de 2017

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 177. AUDIENCIA. Calificado el procedimiento a aplicar conforme a las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

En el curso de la audiencia, el investigado podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes.

De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella.

ARTÍCULO 178. *ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Concluidas las intervenciones se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo. La diligencia se podrá suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. Los términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia, en el verbal, se reducirán a la mitad.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Título IX

Ley 734 de 2002; Art. 171

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00064-00(0234-12) de 13 de febrero de 2020, C.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas.

ARTÍCULO 179. *EJECUTORIA DE LA DECISIÓN.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La decisión final se entenderá notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma, si no fuere recurrida.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Título IX

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 102 de 2006

ARTÍCULO 180. *RECURSOS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Artículo modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de reposición procede contra las decisiones que niegan la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, el cual debe interponerse y sustentarse verbalmente en el momento en que se profiera la decisión. El director del proceso, a continuación, decidirá oral y motivadamente sobre lo planteado en el recurso.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Expresión subrayada en este inciso declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-532-15 de 19 de agosto de 2015, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa .

El recurso de apelación cabe contra el auto que niega pruebas, contra el que rechaza la recusación y contra el fallo de primera instancia, debe sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados. Inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Las expresiones subrayadas en este inciso declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-532-15 de 19 de agosto de 2015, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa .

"La Corporación observa que si se realiza una interpretación sistemática de las diferentes disposiciones que desarrollan la figura de los impedimentos y las recusaciones en las actuaciones disciplinarias, y muy especialmente de los incisos 2º y 5º del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, puede satisfacerse el principio de imparcialidad que orienta la función administrativa, según el artículo 209 de la Constitución Política. El inciso 5º del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 constituye un precepto que viene a corregir el posible error interpretativo que puede generarse con la lectura aislada del inciso 2º, pues da claridad acerca de la competencia del funcionario ad quem para decidir el recurso de apelación contra el auto que rechaza la recusación, revocar y devolver el proceso para que se tramite por el funcionario que sea designado, en caso de encontrar procedente la solicitud presentada por el disciplinado."

- Inciso declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-401-13 de 3 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Inciso 2o. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-315-12 de 2 de mayo de 2012, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

Procede el recurso de reposición cuando el procedimiento sea de única instancia, el cual deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación en estrados, agotado lo cual se decidirá el mismo.

Las decisiones de segunda instancia se adoptarán conforme al procedimiento escrito.

De proceder la recusación, el ad quem revocará la decisión y devolverá el proceso para que se tramite por el que sea designado.

En caso de revocarse la decisión que negó la práctica de pruebas, el ad quem las decretará y practicará. También podrá decretar de oficio las que estime necesarias para resolver el fondo del asunto, debiendo garantizar el derecho de contradicción.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-401-13 de 3 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

Antes de proferir el fallo, las partes podrán presentar alegatos de conclusión, para lo cual dispondrán de un término de traslado de dos (2) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación por estado, que es de un día.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este inciso 7o. por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-315-12 de 2 de mayo de 2012, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

El ad quem dispone de diez (10) días para proferir el fallo de segunda instancia. Este se ampliará en otro tanto si debe ordenar y practicar pruebas.
<Notas de Vigencia>

- Artículo modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES, por el cargo analizado de violación del artículo 29 de la Constitución Política, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-763-09 de 29 de octubre de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Título IX

Directiva PROCURADURÍA 4 de 2006

Directiva PROCURADURÍA 14 de 2005

<Legislación Anterior>

Texto original de la Ley 734 de 2002:

ARTÍCULO 180. RECURSOS. Contra el fallo proferido en audiencia sólo procede el recurso de apelación, que se interpondrá en la misma diligencia y se sustentará verbalmente o por escrito dentro de los dos días siguientes y será decidido dos días después por el respectivo superior. Procede el recurso de reposición cuando el procedimiento sea de única instancia, el cual deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación por estrado, agotado lo cual se decidirá el mismo.

ARTÍCULO 181. *REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los aspectos no regulados en este procedimiento se regirán por lo dispuesto en el siguiente y por lo señalado en el procedimiento ordinario, siempre y cuando no afecte su naturaleza especial.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Título IX

CAPITULO II.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL ANTE EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 182. *PROCEDENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando la conducta por la cual se procede sea alguna de las previstas en el artículo 278, numeral 1, de la Constitución Política, el procedimiento aplicable será el previsto en este capítulo.

<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El Procurador General de la Nación también podrá aplicar este procedimiento especial para los casos en que su competencia para disciplinar sea en única instancia.

<Notas de Vigencia>

- Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 1474 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 183. *DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Conocida la naturaleza de la falta disciplinaria, el Procurador General de la Nación declarará la procedencia del procedimiento especial y citará a audiencia al servidor público investigado, mediante decisión motivada.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 184. *REQUISITOS DE LA DECISIÓN DE CITACIÓN A AUDIENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La decisión mediante la cual se cite a audiencia al servidor público deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Breve motivación en la que se expongan los hechos constitutivos de la falta y su tipicidad.

2. Enumeración de las pruebas con fundamento en las cuales se hace la citación a audiencia.

3. Relación de las pruebas que se practicarán en el curso de la audiencia pública.

4. Indicación del lugar, la fecha y la hora en la que se realizará la audiencia.

5. Citación al servidor público para que comparezca a la audiencia, asistido por defensor si así lo quisiere, y para que aporte, o, en su oportunidad solicite las pruebas que pretenda hacer valer en la diligencia.

6. Explicación de las causas que fundamentan la orden de suspensión provisional del cargo del servidor público, si tal medida preventiva fuere procedente, de acuerdo con las normas legales respectivas.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 185. *OPORTUNIDAD*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La audiencia se deberá realizar no antes de diez días, contados a partir de la notificación de la decisión que la ordena, ni quince días después. Durante este término el expediente permanecerá en la Secretaría de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, a disposición de los sujetos procesales.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 186. *NOTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE AUSENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La decisión que cita a audiencia se notificará personalmente al servidor público investigado, dentro de los dos días siguientes.

Si no se lograre realizar la notificación personal en el término indicado, se fijará edicto por dos días para notificar la providencia. Vencido este término, si no compareciere el investigado, se le designará defensor de oficio, a quien se le notificará la decisión y con quien se continuará el procedimiento, sin perjuicio de que el investigado comparezca o designe defensor. Contra la decisión que cita a audiencia no procede recurso alguno.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 187. *PRUEBAS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Hasta el momento de la iniciación de la audiencia pública, el investigado o su defensor, y los demás sujetos procesales podrán solicitar la práctica de las pruebas que pretendieren hacer valer en el curso de la diligencia.

El Procurador General de la Nación resolverá sobre las pruebas solicitadas, en el curso de la audiencia pública.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 188. *CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Llegados el día y la hora fijados para la celebración de la audiencia pública, por Secretaría se dará lectura a la decisión de citación a audiencia y a la solicitud de pruebas que hubiere presentado cualquiera de los sujetos procesales.

A continuación, el Procurador General de la Nación resolverá sobre las pruebas solicitadas y ordenará la práctica de las que resulten conducentes y pertinentes, así como de las que de oficio estime necesarias.

Si se tratare de pruebas que no pudieren realizarse en el curso de la audiencia, la suspenderá por un lapso no superior a diez días y dispondrá lo necesario para su práctica, con citación del investigado y de los demás sujetos procesales.

Practicadas las pruebas se concederá la palabra, por una sola vez al investigado y a su defensor.

El Procurador General de la Nación podrá solicitar al investigado o a su defensor que limiten su intervención a los asuntos relativos al objeto de la actuación disciplinaria, pero no podrá limitar temporalmente la exposición de los argumentos.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional Sentencia C-982-02 de 13 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Terminadas las intervenciones se suspenderá la diligencia, la cual deberá reanudarse en un término no superior a cinco días, con el fin de dar lectura al fallo correspondiente.

En la fecha señalada, instalada la audiencia, por Secretaría se dará lectura al fallo.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 189. *RECURSOS*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Contra las decisiones adoptadas en audiencia, incluido el fallo, procede el recurso de reposición, que será resuelto en el curso de la misma.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 190. *ACTA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** De la actuación adelantada en la audiencia se dejará constancia escrita y sucinta, en acta que suscribirán el Procurador General de la Nación y los sujetos procesales que hubieren intervenido.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

ARTÍCULO 191. *REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los aspectos no regulados en este procedimiento se regirán por lo dispuesto para el procedimiento ordinario, en lo que fuere pertinente.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 101; Art. 102; Art. 103

CAPITULO III.
COMPETENCIA CONTRA ALTOS DIGNATARIOS DEL ESTADO.

ARTÍCULO 192. *COMPETENCIA ESPECIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Es competente la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, para conocer en única instancia, de acuerdo con las formalidades consagradas en este código, de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra del Procurador General de la Nación.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 100; Art. 103

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 83.1

T I T U L O XII.
DEL REGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL.

CAPITULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 193. *ALCANCE DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero especial.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 239

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias, Radicación No. 11001-03-06-000-2019-00109-00(C) de 13 de agosto de 2019, Consejero Ponente, Dr. Edgar González López.

ARTÍCULO 194. *TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Ver Notas del Editor> La acción disciplinaria contra los funcionarios judiciales corresponde al Estado y se ejerce por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A , por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"*[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda.

- El Último Inciso del Artículo 61 de la Ley 200 de 1995 incluía algunos textos con similar sentido a los contenidos en este Artículo.

Dicho Último Inciso fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 240

ARTÍCULO 195. *INTEGRACIÓN NORMATIVA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En la aplicación del régimen disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán los principios rectores de la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las normas aquí contenidas y las consagradas en el Código Penal y de Procedimiento Penal.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 241

CAPITULO SEGUNDO.
FALTAS DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 196. *FALTA DISCIPLINARIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Constituye falta

disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-157-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 242

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-213-14 de 1 de abril de 2014, Magistrado Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

- Corte Constituicional, Sentencia T-120-14 de 3 de marzo de 2014, Magistrado Ponente Dr. María Victoria Calle Correa.

CAPITULO TERCERO.
SUJETOS PROCESALES.

ARTÍCULO 197. *SUJETOS PROCESALES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Son sujetos procesales, el disciplinado, su defensor y el Ministerio Público.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 109

CAPITULO CUARTO.
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.

ARTÍCULO 198. *DECISIÓN SOBRE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** En la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales, los impedimentos y recusaciones serán resueltos de plano por los demás integrantes de la Sala y si fuere necesario se sortearán conjueces. En las salas disciplinarias duales de los Consejos Seccionales los impedimentos y recusaciones de uno de sus miembros serán

resueltos por el otro magistrado, junto con el conjuez o conjueces a que hubiere lugar.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A , por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"*[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 243

CAPITULO QUINTO.
PROVIDENCIAS.

ARTÍCULO 199. *FUNCIONARIO COMPETENTE PARA PROFERIR LAS PROVIDENCIAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los autos interlocutorios y las sentencias serán dictados por la Sala, y los autos de sustanciación por el Magistrado Sustanciador.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 244

ARTÍCULO 200. *TÉRMINOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los autos de sustanciación se dictarán dentro del término de cinco (5) días. El Magistrado Ponente dispondrá de treinta (30) días para registrar proyecto de sentencia y la Sala de veinte (20) para proferirla. Para decisiones interlocutorias los términos se reducen a la mitad.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 254

CAPITULO SEXTO.
NOTIFICACIONES Y EJECUTORIA.

ARTÍCULO 201. *NOTIFICACIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Se notificarán por estado los autos susceptibles de recursos y por edicto la sentencia.

Se notificarán personalmente al disciplinado y/o su defensor el pliego de cargos y la sentencia. Si no fuere posible la notificación personal del pliego de cargos al investigado, vencidos los términos previstos en esta ley, se le designará defensor de oficio con quien se surtirá la notificación y continuará el trámite de la actuación.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 15; Art. 121

PARÁGRAFO. Podrán ser designados defensores de oficio los miembros de los consultorios jurídicos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley 583 de 2000 y/o defensores públicos.

Al Ministerio Público se notificarán personalmente las providencias susceptibles de recursos; trámite que se entenderá agotado tres (3) días después de ponerse el expediente a su disposición, si no se surte con anterioridad.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 15; Art. 245

<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 19 de 2012

ARTÍCULO 202. *COMUNICACIÓN AL QUEJOSO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Del auto de archivo definitivo y de la sentencia absolutoria se enterará al quejoso mediante comunicación acompañada de copia de la decisión que se remitirá a la dirección registrada en el expediente al día siguiente del pronunciamiento, para su eventual impugnación de conformidad con lo establecido en esta normatividad. Si fueren varios los quejosos se informará al que primero haya formulado la denuncia o quien aparezca encabezándola.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 129

<Doctrina Concordante>

- Concepto PROCURADURÍA 157 de 2017 - Concepto PROCURADURÍA 5429 de 1996

ARTÍCULO 203. *NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO COMISIONADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley**

1952 de 2019> En los casos en que la notificación personal deba realizarse en sede diferente del competente, la Sala Jurisdiccional disciplinaria* del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales podrán comisionar a cualquier otro funcionario o servidor público con autoridad en el lugar donde se encuentre el investigado o su defensor.

<Notas del Editor>

* La referencia a la Sala Jurisdiccional disciplinaria debe entenderse hecha a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una vez entre en funcionamiento, en aplicación a la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A, por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"*[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 245

ARTÍCULO 204. *NOTIFICACIÓN POR EDICTO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Cuando no haya sido posible notificar personalmente al imputado o a su defensor dentro de los cinco (5) días siguientes al envío de la comunicación, la sentencia se notificará por edicto.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 127

ARTÍCULO 205. *EJECUTORIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La sentencia de única instancia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria* del Consejo Superior de la Judicatura y las que resuelvan los recursos de apelación, de queja, la consulta, y aquellas no susceptibles de recurso, quedarán ejecutoriadas al momento de su suscripción.

<Notas del Editor>

* La referencia a la Sala Jurisdiccional disciplinaria debe entenderse hecha a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una vez entre en funcionamiento, en aplicación a la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A, por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"*[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 246

ARTÍCULO 206. *NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria* del Consejo Superior de la Judicatura, y la providencia que resuelva los recursos de apelación y de queja, y la consulta se notificarán sin perjuicio de su ejecutoria inmediata.

<Notas del Editor>

* La referencia a la Sala Jurisdiccional disciplinaria debe entenderse hecha a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una vez entre en funcionamiento, en aplicación a la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A, por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"*[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 246

CAPITULO SEPTIMO.
RECURSOS Y CONSULTA.

ARTÍCULO 207. *CLASES DE RECURSOS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Contra las providencias proferidas en el trámite disciplinario proceden los recursos a que se refiere este Código. Además, procederá la apelación contra el auto de archivo definitivo y el auto que niega las pruebas.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 247

Ley 734 de 2002; Arts. 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120

ARTÍCULO 208. *CONSULTA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas con el superior solo en lo desfavorable a los procesados.

<Notas del Editor>

* La referencia a la Sala Jurisdiccional disciplinaria debe entenderse hecha a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una vez entre en funcionamiento, en aplicación a la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A, por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"*[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 248

CAPITULO OCTAVO.
PRUEBAS.

ARTÍCULO 209. *PRÁCTICA DE PRUEBAS POR COMISIONADO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Para la práctica de pruebas los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales podrán comisionar dentro de su sede a sus abogados asistentes, y fuera de ella a funcionarios judiciales de igual o inferior categoría.

Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, podrán comisionar a sus abogados asistentes y a cualquier funcionario judicial del país para la práctica de pruebas.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A , por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas*

Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 249

CAPITULO NOVENO.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 210. *ARCHIVO DEFINITIVO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el presente Código.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 250

ARTÍCULO 211. *TÉRMINO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La investigación disciplinaria contra funcionarios de la Rama Judicial se adelantará dentro del término de seis (6) meses, prorrogable a tres (3) más cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o se trate de dos o más inculpados.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 251

ARTÍCULO 212. *SUSPENSIÓN PROVISIONAL.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La suspensión provisional a que se refiere este Código, en relación con los funcionarios judiciales será ordenada por la Sala respectiva.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 252

ARTÍCULO 213. *REINTEGRO DEL SUSPENDIDO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo y tendrá derecho a la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación termine con archivo definitivo o se produzca fallo absolutorio, o cuando expire el término de suspensión sin que hubiere concluido la investigación, ~~salvo que esta~~

~~circunstancia haya sido determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o de su defensor~~. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 253

CAPITULO DECIMO.
PROCEDIMIENTO VERBAL.

ARTÍCULO 214. *APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El procedimiento especial establecido en este Código procede de conformidad con la competencia de las Salas Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales. Lo adelantará el Magistrado Sustanciador en audiencia hasta agotar la fase probatoria. Dentro de los cinco (5) días siguientes registrará el proyecto de fallo que será dictado por la Sala en el término de ocho (8) días. Contra el anterior fallo procede el recurso de apelación.

Los términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia, en el verbal, se reducirán a la mitad.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A , por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"*[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 171

ARTÍCULO 215. EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA SE PODRÁN UTILIZAR MEDIOS TÉCNICOS Y SE LEVANTARÁ UN ACTA SUCINTA DE LO SUCEDIDO EN ELLA. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los sujetos procesales podrán presentar por escrito en la misma diligencia un resumen de sus alegaciones.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 255

CAPITULO UNDECIMO.
RÉGIMEN DE LOS CONJUECES Y JUECES DE PAZ.

ARTÍCULO 216. *COMPETENCIA.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Corresponde exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los Jueces de Paz.

Corresponde exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en única instancia, el conocimiento de los asuntos disciplinarios contra los Conjueces que actúan ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo y Consejos Seccionales de la Judicatura.
<Notas del Editor>

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta la modificación introducida a la Constitución Política, Art. 257A , por el artículo *19 del Acto Legislativo 2 de 2015, el cual "Introdujo el nuevo sistema disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, así como de los abogados en ejercicio, mediante la creación de la Comisión Nacional del Disciplina Judicial y la trasformación de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial"*[1]

1 - Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 256

ARTÍCULO 217. *DEBERES, PROHIBICIONES, INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El régimen disciplinario para los Conjueces en la Rama Judicial comprende el catálogo de deberes y prohibiciones previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto resulten compatibles con la función respecto del caso en que deban actuar, y el de inhabilidades, incompatibilidades,

impedimentos y conflictos de intereses previstos en dicha ley y en las demás disposiciones que los regulen.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 257

ARTÍCULO 218. *FALTAS GRAVÍSIMAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** El catálogo de faltas gravísimas imputables a los Conjueces es el señalado en esta ley, en cuanto resulte compatible con la función respecto del caso en que deban actuar.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 258

Ley 734 de 2002; Art. 48

ARTÍCULO 219. *FALTAS GRAVES Y LEVES, SANCIONES Y CRITERIOS PARA GRADUARLAS.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Para la determinación de la gravedad de la falta respecto de los conjueces se aplicará esta ley, y las sanciones y criterios para graduarlas serán los establecidos en el presente Código.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art.

Ley 734 de 2002; Arts. 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50

CAPITULO DUODECIMO.
EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 220. *COMUNICACIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Ejecutoriada la sentencia sancionatoria, se comunicará por la Sala de primera o única instancia, según el caso, a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y al nominador del funcionario sancionado.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 260

ARTÍCULO 221. *EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Las sanciones a los funcionarios judiciales se ejecutarán en la forma prevista en este Código. Las multas serán impuestas a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

Igual destino tendrán las sanciones impuestas por quejas temerarias a que refiere esta normatividad.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 261

ARTÍCULO 222. *REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO.* **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los aspectos no regulados en este Título, se regirán por lo dispuesto para el procedimiento ordinario y verbal según el caso, consagrados en este Código.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 262

TRANSITORIEDAD Y VIGENCIA.

ARTÍCULO 223. *TRANSITORIEDAD*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren con auto de cargos continuarán su trámite hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento anterior.
<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1416 de 13 de junio de 2002 (autorizada publicación mediante Of. 6099 de 15/07/2002), C.P. Dr. César Hoyos Salazar

ARTÍCULO 224. *VIGENCIA*. **<Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019>** La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-328-03 de 29 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1416 de 13 de junio de 2002 (autorizada publicación mediante Of. 6099 de 15/07/2002), C.P. Dr. César Hoyos Salazar

<Doctrina Concordante>

Concepto PROCURADURÍA 401 de 2002

El Presidente del honorable Senado de la República,
CARLOS GARCÍA ORJUELA.

El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,
LUIS FRANCISCO BOADA GÓMEZ.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,
RÓMULO GONZÁLEZ TRUJILLO.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
MAURICIO ZULUAGA RUIZ.

LEY 1952 DE 2019

(enero 28)

Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019

<Rige a partir del 1 de julio de 2021>

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

<Resumen de Notas de Vigencia>

NOTAS DE VIGENCIA:

- El plazo de entrada en vigencia de esta ley se prorrogo hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”", publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-099-18 de 24 de octubre de 2018, Magistrado Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional levantó los términos suspendidos mediante el Auto A-411-18, y declaró cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, y lo ordenado en las Sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017, en cuanto a los numerales 1º y 3º del artículo 55 y 1º del 58 del Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara, "*Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario*". En consecuencia, **DECLARAR EXEQUIBLE** el Proyecto de Ley en relación con las objeciones analizadas en esta sentencia.

- Mediante Auto A-411-18 de 27 de juniode 2018, Magistrado Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional resuelve: *"**ABSTENERSE DE DECIDIR** acerca del trámite cumplido en ejecución de las Sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017 con respecto a las objeciones gubernamentales de la referencia, hasta tanto no se cumplan los presupuestos constitucionales y legales requeridos para hacerlo".*

- Mediante Sentencia C-704-17 de 29 de noviembre de 2017, Magistrado Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, la Corte Constitucional levantó los términos suspendidos mediante el Auto 569 del 30 de noviembre de 2016, y se pronunció sobre al trámite seguido al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara.

- Mediante Auto A-569-16 de 30 de noviembre de 2016, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo., la Corte Constitucional resuelve: *"**ABSTENERSE DE DECIDIR** acerca del trámite cumplido en ejecución de la sentencia C-284 de 2016 con respecto a las objeciones gubernamentales de la referencia, hasta tanto no se cumplan los presupuestos constitucionales y legales requeridos para hacerlo".*

- Mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte se pronunció sobre las objeciones al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

LIBRO I.
PARTE GENERAL.

TÍTULO I.
PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS DE LA LEY DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 1o. RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad humana.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 8

ARTÍCULO 2o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA Y AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.

El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios y empleados judiciales, los particulares y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente es la jurisdicción disciplinaria.

La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este inciso corresponde en similar sentido al texto del Inciso 2o. del Artículo 2o. de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 1 ; Art. 2

Ley 1796 de 2016; Art. 23 Par.

Ley 1010 de 2006; Art. 11 Num. 2o.

Ley 600 de 2000; Art. 11

Ley 472 de 1998; Art. 43

Ley 182 de 1995; Art. 8o. Inc. Final

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Quinta, Expediente No. 63001-23-33-000-2019-00080-01 20191120 de 20 de noviembre de 2019, C.P. Dr. Luis Alberto Álvarez Parra.

- Consejo de Estado Acción Popular, Expediente No. 385 de 25 de mayo de 2006, C.P. Dr. Ruth Stella Correa Palacio

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2159 de 30 de octubre de 2013 (Levantada la reserva legal mediante Auto de 19/05/2014), Consejero Ponente, Dr. Álvaro Namén Vargas.

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 56 de 19 de julio de 2007, C.P. Dr. Enrique José Arboleda Perdomo

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1758 de 26 de julio de 2006 (autorizada publicación mediante Of. 76514 de 22/08/2006), C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

ARTÍCULO 3o. PODER DISCIPLINARIO PREFERENTE. La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y personerías distritales y municipales. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 234

Resolución PROCURADURÍA 251 de 2010

Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la administración poder disciplinario preferente.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 3

Ley 1306 de 2009; Art. 7o.

Resolución PROCURADURÍA 456 de 2017

Resolución PROCURADURÍA 23 de 2015

Resolución PROCURADURÍA 282 de 2014

Circular PROCURADURÍA 42 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 6 de 2016

Memorando PROCURADURÍA 3 de 2018

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. AP3622-2019 de 27 de agosto de 2019, M.P. Dr. Eugenio Fernández Carlier

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias. Radicación No. 11001-03-06-000-2018-00009-00(C) de 5 de septiembre de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Bula Escobar.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conflicto de Competencias. Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00123-00(C) de 20 de marzo de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula.

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2011-00316-00(SU) de 9 de agosto de 2016, C.P. Dr. (E) William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Acción de Tutela, Sala Plena, Expediente No. 2013-06871-01(AC) de 5 de marzo de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- Corte Constitucional, Sentencia SU-355-15 de 11 de junio de 2015, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Corte Constitucional Sentencia C-914-13 de 4 de diciembre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1824 de 27 de mayo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. de 27/06/2007), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. Los destinatarios de este código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén

descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. La preexistencia también se predica de las normas complementarias.

La labor de adecuación típica se someterá a la aplicación de los principios de especialidad y subsidiariedad.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 4

<Doctrina Concordante>

Concepto CONTADURÍA 32914 de 2004

Concepto CONTADURÍA 13413 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2362-12 de 6 de octubre de 2016, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 5o. FINES DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. La sanción disciplinaria tiene finalidad preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 16

ARTÍCULO 6o. PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. La imposición de la sanción disciplinaria deberá responder a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

La sanción disciplinaria debe corresponder a la clasificación de la falta y a su graduación de acuerdo con los criterios que fija esta ley.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 18

Ley 1952 de 2019; Art. 50

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 7o. IGUALDAD. Las autoridades disciplinarias deberán hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física, mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. El sexo, la raza, color, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar o étnico, la lengua, el credo religioso, la orientación sexual, la identidad de género, la opinión política o filosófica, las creencias o prácticas culturales en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso disciplinario como elementos de discriminación.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 15

ARTÍCULO 8o. FAVORABILIDAD. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución Política.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La expresión "salvo lo dispuesto en la Constitución Política" corresponde al texto contenido en el artículo 14 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 14

ARTÍCULO 9o. ILICITUD SUSTANCIAL. La conducta del sujeto disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este inciso corresponde al texto del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

Instrucción SUPERNOTARIADO 11 de 2004

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2014-00154-01(2143-16) de 26 de septiembre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2362-12 de 6 de octubre de 2016, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Habrá afectación sustancial del deber cuando se contraríen los principios de la función pública.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 5

ARTÍCULO 10. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-155-02.

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 14 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-155-02 de 5 de marzo de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 13

Código Civil; Art. 63

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-319A-12 de 3 de mayo de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

"(...) El dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinable conoce la tipicidad de su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales."

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-000474-00(1855-11) de 30 de enero de 2018, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2362-12 de 6 de octubre de 2016, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 11. FINES DEL PROCESO DISCIPLINARIO. Las finalidades del proceso son la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 20

ARTÍCULO 12. DEBIDO PROCESO. El sujeto disciplinable deberá ser investigado y juzgado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 6 ; Art. 7

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

ARTÍCULO 13. INVESTIGACIÓN INTEGRAL. Las autoridades disciplinarias tienen la obligación de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad.

ARTÍCULO 14. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El sujeto disciplinable se presume inocente y debe ser tratado como tal mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación disciplinaria toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable ~~cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad~~.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte tachado *"cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad"* declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-495-19 de 22 de octubre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.

- El texto de de la última parte de este inciso corresponde en similar sentido al texto del artículo 6o. de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 9

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00707-00(2697-11) de 21 de junio de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-01789-00(4750-13) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

ARTÍCULO 15. DERECHO A LA DEFENSA. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial. Si no lo hiciere, se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- La expresión "*que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente*" de este inciso corresponde al texto del artículo 17 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

- El Literal e. del Artículo 73 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 73. DERECHOS DEL DISCIPLINADO. ... e. Designar apoderado, si lo considera necesario, ..."

El Literal e) mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

- El Artículo 154 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 154. JUZGAMIENTO DEL AUSENTE. Si el disciplinado no presentare escrito de descargos se dejará constancia en este sentido y de inmediato se le designará un apoderado para que lo represente en el trámite procesal."

El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-627-96 del 21 de noviembre de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 17

Decreto Ley 196 de 1971; Art. 30

ARTÍCULO 16. COSA JUZGADA DISCIPLINARIA. El destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante de naturaleza disciplinaria, proferidos por autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta.

Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria directa establecida en la ley.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 11

ARTÍCULO 17. GRATUIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los sujetos procesales.

Los sujetos procesales tendrán derecho a que se les entregue de manera gratuita copia simple o reproducción de los autos interlocutorios, del auto de citación a audiencia y formulación de cargos y de los fallos que se profieran.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 10

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia T-678-07 de 30 de agosto de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

ARTÍCULO 18. CELERIDAD DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. El funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en este código.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 12

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2012

Directiva PROCURADURÍA 4 de 2006

Directiva PROCURADURÍA 14 de 2005

ARTÍCULO 19. MOTIVACIÓN. Toda decisión de fondo deberá motivarse.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 19

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00482-00(1915-11) de 13 de agosto de 2018, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 20. CONGRUENCIA. El disciplinado no podrá ser declarado responsable por hechos ni faltas disciplinarias que no consten en el auto de citación a audiencia y formulación de cargos, sin perjuicio de la posibilidad de su variación.

ARTÍCULO 21. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN. Toda prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo quedeberá excluirse de la actuación procesal.

Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Se deben considerar, al respecto, las siguientes excepciones: la fuente independiente, el vínculo atenuado, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley.

ARTÍCULO 22. PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES E INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley, además de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. En lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, General del Proceso, Penal y de Procedimiento Penal en lo que no contravengan a la naturaleza del derecho disciplinario.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 21

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)

Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)

Código Penal (Ley 599 de 2000)

Directiva PROCURADURÍA 10 de 2006

Directiva PROCURADURÍA 6 de 2005

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2005

Memorando PROCURADURÍA 12 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de julio de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1861-13 de 1 de junio de 2017, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Corte Constitucional. Sentencia C-067-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

TÍTULO II.
DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I.
LA FUNCIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO 23. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Con el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 22

CAPÍTULO II.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 24. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA. La ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 24

Ley 1698 de 2013

CAPÍTULO III.
SUJETOS DISCIPLINABLES.

ARTÍCULO 25. DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en esta ley.

Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998; son servidores públicos disciplinables los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este inciso corresponde al texto del inciso 3o. del artículo 25 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-127-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Los indígenas que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado, serán disciplinados conforme a este código.
<Jurisprudencia Concordante>

Inciso 3:

- Corte Constitucional, Sentencia C-127-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 25

Ley 1796 de 2016; Art. 23

Ley 1698 de 2013

Ley 1575 de 2012; Art. 38 Inc. Final

Ley 1306 de 2009; Art. 7o.

Ley 1056 de 2006; Art. 5o.

Ley 734 de 2002; Art. 53

Ley 489 de 1998; Art. 110

Decreto 564 de 2006; Art. 66; Art. 105

Resolución PROCURADURÍA 108 de 2002

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1799 de 31 de enero de 2007 (autorizada publicación mediante Of. de 20/03/2007), C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

CAPÍTULO IV.
LA FALTA DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 26. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 23

Ley 1393 de 2010; Art. 32, Inc. 2o.

Ley 1010 de 2006

Ley 842 de 2003; Art. 13

Ley 819 de 2003; Art. 26

Circular PROCURADURÍA 17 de 2017

Circular PROCURADURÍA 18 de 2016

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

Circular PROCURADURÍA - DNP 13-4 de 2017

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1131-12 de 4 de julio de 2013, C.P. (E) Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

- Corte Constitucional Sentencia C-721-06 de 23 de agosto de 2006, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería

ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y OMISIÓN. La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo equivale a producirlo.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 27

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00027-00(0131-12) de 13 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 105 de 28 de septiembre de 2006 (autorizada publicación mediante Conflicto 11001-03-06-2006-00060-00 de 22/06/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 28. DOLO. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización.

ARTÍCULO 29. CULPA. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria, por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y cuando el sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder evitarla.

La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave. La culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria.

Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 44 Par.

La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 44 Par.

PARÁGRAFO. Las faltas señaladas en el artículo 65 de este Código podrán ser sancionadas a título de culpa, siempre y cuando la modalidad del comportamiento así lo permita.

ARTÍCULO 30. AUTORES. Es autor quien realice la falta disciplinaria o determine a otro a realizarla, aun cuando los efectos de la conducta se produzcan después de la dejación del cargo o función.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 26

ARTÍCULO 31. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando la conducta se realice:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito.

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- la expresión "de mayor importancia que el sacrificado" contenida igualmente en la Ley 734 de 2002 fue declarada EXEQUIBLE, por el cargo formulado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

4. Para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 4 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE , por el cargo formulado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

5. Por insuperable coacción ajena.

6. Por miedo insuperable.

7. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2014-00860-01(0773-17) de 31 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-000474-00(1855-11) de 30 de enero de 2018, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

8. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se informará a la dependencia administrativa correspondiente.

No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 28

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00340-00(1338-12) de 24 de enero de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

TÍTULO III.
LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.

CAPÍTULO I.
LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 32. CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del sujeto disciplinable.

2. La prescripción de la acción disciplinaria.

PARÁGRAFO. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 29

ARTÍCULO 33. PRESCRIPCIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribirá en cinco años, contados para las faltas de ejecución instantánea desde el día de su consumación, para las de ejecución permanente o continuada, desde la realización del último acto y para las omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar. La prescripción se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. En este evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la autoridad disciplinaria tendrá un término de dos años contados a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la decisión.

Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de prescripción será de doce años, el cual se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. En este evento, para emitir y notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, la autoridad disciplinaria tendrá un término de tres años contados a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la decisión.

Cuando se investiguen varias conductas en un solo proceso, la prescripción se cumplirá independientemente para cada una de ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que ratifique Colombia.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 30

ARTÍCULO 34. RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN. El sujeto disciplinable podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso la acción solo podrá proseguirse por un término máximo de dos (2) años contados a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procederá decisión distinta a la de la declaración de la prescripción.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El aparte subrayado corresponde en el mismo sentido al aparte subrayado del artículo 36 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-556-01 de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 31

CAPÍTULO II.
LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 35. CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. Son causales de extinción de la sanción disciplinaria:

1. La muerte del sancionado.

2. La prescripción de la sanción disciplinaria.

ARTÍCULO 36. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.

Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad general o la suspensión e inhabilidad especial, una vez cumplidas se producirá la rehabilitación en forma automática, salvo lo dispuesto en la Carta Política.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto del aparte subrayado, corresponde al texto del artículo 32 de la Ley 734 de 2002, declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 32

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-132-19 de 27 de marzo de 2019, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

TÍTULO IV.
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES DEL SERVIDOR PÚBLICO.

CAPÍTULO I.
DERECHOS.

ARTÍCULO 37. DERECHOS. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos de todo servidor público:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 33

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función.

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.

4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.

5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales o convencionales vigentes.

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.

7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas.

8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.

9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes generales y especiales.

10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

CAPÍTULO II.
DEBERES.

ARTÍCULO 38. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 34

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás

ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

<Concordancias>

Resolución PROCURADURÍA 336 de 2017

Resolución PROCURADURÍA 422 de 2014

Resolución PROCURADURÍA 168 de 2012

Resolución PROCURADURÍA 339 de 2011

Resolución PROCURADURÍA 50 de 2009

Resolución PROCURADURÍA 128 de 2008

Resolución PROCURADURÍA 368 de 2006

Resolución PROCURADURÍA 249 de 2004

Directiva PROCURADURÍA 1 de 2018

Directiva PROCURADURÍA 38 de 2017

Directiva PROCURADURÍA 2 de 2017

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2016

Directiva PROCURADURÍA 2 de 2016

Directiva PROCURADURÍA 1 de 2016

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2014

Directiva PROCURADURÍA 2 de 2014

Directiva PROCURADURÍA 6 de 2013

Directiva PROCURADURÍA 6 de 2012

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2012

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2012

Directiva PROCURADURÍA 17 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 1 de 2009

Directiva PROCURADURÍA 21 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 13A de 2005

Directiva PROCURADURÍA - DEFENSORÍA 3 de 2015

Directiva PROCURADURÍA - DEFENSORÍA 4 de 2012

Circular PROCURADURÍA 7 de 2018

Circular PROCURADURÍA 5 de 2018

Circular PROCURADURÍA 3 de 2018

Circular PROCURADURÍA 2 de 2018

Circular PROCURADURÍA 15 de 2017

Circular PROCURADURÍA 14 de 2017

Circular PROCURADURÍA 9 de 2017

Circular PROCURADURÍA 20 de 2016

Circular PROCURADURÍA 1 de 2016

Circular PROCURADURÍA 6 de 2013

Circular PROCURADURÍA 38 de 2011

Circular PROCURADURÍA 15 de 2011

Circular PROCURADURÍA 63 de 2009

Circular PROCURADURÍA 28 de 2009

Circular PROCURADURÍA 22 de 2009

Circular PROCURADURÍA 20 de 2009

Circular PROCURADURÍA 8 de 2009

Circular PROCURADURÍA 14 de 2008

Circular PROCURADURÍA 71 de 2007

Circular PROCURADURÍA 31 de 2007

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

Circular PROCURADURÍA - DEFENSORÍA 21 de 2017

Circular PGN-ME-DAFP-MSPS 9 de 2016

Circular PROCURADURÍA - MINVIVIENDA 3 de 2016

Circular PROCURADURÍA - MINEDUCACIÓN 100 de 2016

Circular PROCURADURÍA - MINVIVIENDA 20 de 2015

Circular PROCURADURÍA - SIYC 9 de 2011

Circular PROCURADURÍA - REGISTRADURÍA 2 de 2007

Circular PROCURADURÍA - CONTRALORÍA 1 de 2007

Memorando PROCURADURÍA 8 de 2013

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 120342 de 2018

Concepto MINEDUCACION 60412 de 2015

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-01092-00(2552-13) de 17 de mayo de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00489-00(1924-11) de 25 de enero 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

2. Acatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el manejo del orden público.

3. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados corresponden al texto del numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030-12 del 1o. de febrero de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

<Concordancias>

Ley 951 de 2005

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 446-12 de 22 de agosto de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

4. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos.

5. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.
<Concordancias>

Ley 1581 de 2012

Ley 951 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 00087 de 3 de julio 2009, C.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón.

6. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
<Concordancias>

Ley 1581 de 2012

Ley 951 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Apartes subrayados corresponden al texto del numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030-12 del 1o. de febrero de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

8. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.

9. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.

10. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.

11. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El aparte subrayado corresponde en similar sentido al aparte subrayado del Numeral 10 del Artículo 40 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, solamente por el cargo analizado, mediante Sentencia C-728-00 del 21 de junio del 2000, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz.

12. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.
<Concordancias>

Constitución Política de 1991; Art. 183 Numeral 2o.

Ley 5 de 1992; Art. 90; Art. 268 Num. 1o.; Art. 270 Num. 4o., Par.; Art. 274

Resolución PROCURADURÍA 83 de 2007

Resolución SGEOLOGICO 94 de 2017

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 139685 de 2018

Concepto SENA 6287 de 2018

Concepto MINRELACIONES 16 de 2012

13. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta.

14. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.

15. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.

16. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos.

17. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones.

18. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo.

19. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes.

20. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite del derecho de petición.
<Concordancias>

Ley 1437 de 2011; Art. 22

Ley 909 de 2004; Art. 15 Num. 2 Lit. c)

Decreto Ley 770 de 2005

Decreto Único 1069 de 2015; Art. 2.2.3.12.11

21. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento.
<Concordancias>

Ley 909 de 2004; Art. 38

22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.
<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 35929 de 2018

Concepto SENA 35992 de 2018

23. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.
<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 35992 de 2018

Concepto CONTADURIA 75961 de 2007

24. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la Personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio.

25. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.
<Concordancias>

Ley 1621 de 2013; Art. 39

Decreto 2244 de 2011; Art. 5o.

Instrucción SUPERNOTARIADO 11 de 2004

<Doctrina Concordante>

Concepto ICBF 44533 de 2010

26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.

27. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, y en la página web, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y su valor y el nombre del adjudicatario.
<Concordancias>

Ley 190 de 1995; Art. 60; Art. 61

Ley 80 de 1993; Art. 41 Par. 3o.

Circular MININTERIORJUST 300 de 2006

28. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República dentro del término legal, las partidas por concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.

29. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.

30. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.

31. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa.

32. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría, Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.
<Concordancias>

Resolución CONTADURÍA 328 de 2005; Art. 1

<Doctrina Concordante>

Concepto CONTADURÍA 824 de 2001

33. Implementar el Control Disciplinario Interno al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública.

34. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), así como los demás sistemas de información a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.
<Concordancias>

Ley 1450 de 2011, Art. 227

35. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado.

36. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.

37. Publicar en la página web de la respectiva entidad, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.
<Concordancias>

Ley 1450 de 2011, Art. 227

38. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar.

39. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.
<Concordancias>

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011; Art. 31

40. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la ley.

41. Llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, y los de contabilidad financiera.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 26

42. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.

43. Enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la información que de acuerdo con la ley los servidores públicos están obligados a remitir, referida a las sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía.
<Concordancias>

Num. 43:

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 57

<Concordancias>

Ley 1753 de 2015; Art. 159 Inc. 4o.

Ley 1796 de 2016; Art. 28 Num. 5o.

Ley 1369 de 2009; Art. 15 Par.

Ley 1450 de 2011; Art. 227 Inc. 3o.

Ley 1448 de 2011; Art. 178

Ley 842 de 2003; Art. 41

CAPÍTULO III.
PROHIBICIONES.

ARTÍCULO 39. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 35

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 38 de 2011

Circular PROCURADURÍA 26 de 2011

Circular PROCURADURÍA 21 de 2011

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2011

Directiva PROCURADURÍA 1 de 2009

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 446-12 de 22 de agosto de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes.

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.
<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 8 de 2018

Circular PROCURADURÍA 19 de 2017

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del Gobierno.
<Concordancias>

Constitución Política; Art. 129

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.

6. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo, o demás servidores públicos.

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado.

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.
<Concordancias>

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011; Art. 31

9. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin justificación.

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o compañera permanente.

11. Incumplir, de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación.
<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia C-819-06 de 4 de octubre de 2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

12. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

13. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.
<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 31 de 3 de mayo de 2007, C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

14. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos.
<Concordancias>

Resolución PROCURADURÍA 83 de 2007

Resolución SGEOLOGICO 94 de 2017

15. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 47001-23-33-000-2017-00081-01(PI) de 8 de febrero de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López.

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2017-00078-01 de 14 de septiembre de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González.

16. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contenciosa-administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior.

17. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.

18. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.

19. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o contra personas con las que tenga relación por razón del servicio.

20. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.

21. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo.

22. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra de la vida pública (artículo 1o, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).
<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-265-16 de 23 de mayo de 2016, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

23. Ejercer la docencia por un número superior a cinco horas semanales dentro de la jornada laboral, salvo lo previsto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

24. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero.

25. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular.

26. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva.

27. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad.

28. <Ver Jurisprudencia Vigencia sobre condicionamiento a este numeral en la ley anterior> Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de

actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Numeral corresponde al Numeral 8o. del Artículo 41 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, *"siempre y cuando se entienda que los paros, las suspensiones de actividades o disminuciones del ritmo laboral que se efectúen por fuera de los marcos del derecho de huelga no son admisibles constitucionalmente y, por ende, están prohibidas para todos los servidores públicos y no sólo para aquellos que laboren en actividades que configuren servicios públicos esenciales"*.

29. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales.

30. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado para hacerlo.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Numeral corresponde al Numeral 28 del Artículo 41 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

31. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con la institución a la que pertenece.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num 45

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

Corte Constitucional

- Corte Constitucional mediante Sentencia C-030-12 de 1o. de febrero de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

32. Intimidar o coaccionar a una persona por cualquier razón que comporte alguna clase de discriminación.

33. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num 61

34. Las demás prohibiciones consagradas en la ley.
<Concordancias>

Ley 1796 de 2016; Art. 26 Num. 6o.; Art. 28 Num. 6o.

Ley 1474 de 2011; Art. 10 Inc 3o.

Ley 1437 de 2011; Art. 9o.

Ley 1123 de 2007; Art. 29

Ley 1010 de 2006

Ley 996 de 2005; Art. 38

Ley 842 de 2003; Art. 42; Art. 44; Art. 45

Circular MINDEFENSA 85 de 2004

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 80572 de 2016

Concepto MINEDUCACION 65685 de 2015

Concepto MINEDUCACION 56889 de 2015

Concepto MINEDUCACION 51916 de 2015

Concepto MINEDUCACION 120342 de 2018

Concepto MINEDUCACION 55009 de 2018

Concepto CNELECTORAL 913 de 2005

CAPÍTULO IV.
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES.

ARTÍCULO 40. INCORPORACIÓN DE INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. Se entienden incorporados a este código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 36

Ley 1796 de 2016; Art. 14

Ley 842 de 2003; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 34; Art. 35; Art. 36; Art. 37; Art. 38; Art. 39; Art. 40; Art. 41; Art. 42; Art. 43; Art. 44; Art. 45

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia C-329-95 de 27 de julio de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

- Corte Constitucional Sentencia C-093-94 de 4 de marzo de 1994, M.Ps. Drs. Jose Gregorio Hernandez Galindo, Hernando Herrera Vergara

<Doctrina Concordante>

Concepto CNELECTORAL 1526 de 2004

Concepto CNELECTORAL 1540 de 2003

Concepto CNELECTORAL 1935 de 2003

Concepto CNELECTORAL 1900 de 2003

Concepto CNELECTORAL 973 de 2003

Concepto CNELECTORAL 431 de 2003

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 413 de 5 de noviembre de 1991, C.P. Dr. Humberto Mora Osejo

ARTÍCULO 41. INHABILIDADES SOBREVINIENTES. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 37

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2046-07 de 29 de enero de 2015, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 56620 de 2018

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1813 de 15 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. de 26/03/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

Concepto CNELECTORAL 431 de 2003

ARTÍCULO 42. OTRAS INHABILIDADES. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 38

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.

Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de la pena privativa de la libertad.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Numeral 1o. del Artículo 43 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía: "Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos *hayan afectado la administración pública*."

Los textos subrayados y en letra itálica fueron objeto de los siguientes fallos:

. Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-111-98 del 25 de marzo de 1998, "advirtiendose que tal disposición se declara exequible en el entendido de que ella no es aplicable a los servidores de la Rama Judicial, pues para éstos ha sido consagrada norma especial y posterior sobre inhabilidades -el artículo 150 de la Ley 270 de 1996-, que señala la manera taxativa las vigencias para ejercer cargos dentro de aquélla." Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

. Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, siempre y cuando se entienda que ésta hace referencia a los delitos contra el patrimonio del Estado. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Acto Legislativo 1 de 2009; Art. 4o.

Ley 599 de 2000; Art. 43; Art. 44; Art. 45; Art. 46; Art. 51

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-544-05, (violación al principio de favorabilidad) mediante Sentencia C-987-06 de 29 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla. Fallo inhibitorio en relación con el cargo por violación del principio de igualdad.

- Este numeral corresponde al numeral 2. del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por el cargo examinado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-544-05 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-504-09 de 27 de julio de 2009, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

- Corte Constitucional Sentencia C-528-06 de 12 de julio de 2006, M.P. Dr. Clara Inés Vargas Hernández

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.
<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Quinta, Expediente No. 2014-00078-00 de 5 de febrero de 2015, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.

*"... En síntesis, es claro que **únicamente la sanción disciplinaria que imponga de manera explícita, bien sea la inhabilidad general o la inhabilidad especial tiene la capacidad de afectar el acto de elección o nombramiento ..."***

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Este numeral corresponde al numeral 4. del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, *por los cargos de vulneración de los artículos 1o., 2o., 40.7, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,* por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-18 de 19 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2099 de 24 de abril de 2012 (autorizada publicación 25/04/2012) , Consejero Ponente, Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.

PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, *por los cargos de vulneración de los artículos 1o., 2o., 40.7, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,* por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-18 de 19 de septiembre de 2018, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-077-07 de 7 de febrero de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1196-05 de 22 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

<Concordancias>

Ley 610 de 2000; Art. 60

PARÁGRAFO 2o. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 1 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-064-03, mediante Sentencia C-652-03 de 5 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. .

- Este parágrafo corresponde al parágrafo 2 del numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-064-03 de 4 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería; "en el sentido que respecto de las conductas culposas, se aplicarán las inhabilidades previstas en la ley".

<Concordancias>

Ley 1796 de 2016; Art. 25 Num. 4o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia T-960-05 de 15 de septiembre de 2005, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

- Corte Constitucional Sentencia C-329-95 de 27 de julio de 1995, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

- Corte Constitucional Sentencia C-093-94 de 4 de marzo de 1994, M.Ps. Drs. Jose Gregorio Hernandez Galindo, Hernando Herrera Vergara

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 19815 de 16 de marzo de 2006, M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 56620 de 2018

Concepto MINEDUCACION 139685 de 2018

Concepto MINEDUCACION 54695 de 2015

Concepto CNELECTORAL 1526 de 2004

Concepto CNELECTORAL 1935 de 2003

Concepto CNELECTORAL 1900 de 2003

Concepto CNELECTORAL 1540 de 2003

Concepto CNELECTORAL 973 de 2003

Concepto CNELECTORAL 431 de 2003

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 413 de 5 de noviembre de 1991, C.P. Dr. Humberto Mora Osejo

ARTÍCULO 43. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 39

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta doce meses después del vencimiento de su período o retiro del servicio:
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- En numeral 1 del artículo 39 de la Ley 734 de 2002 en similar sentido establecía: *"1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el período:"* , y sobre este texto se manifestó la Corte Constitucional así:

* La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre apartes de este inciso por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1195-08 de 3 de diciembre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

* Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02.

- El Numeral 1o. del Artículo 44 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía: "Los *gobernadores*, *diputados*, *alcaldes*, concejales y miembros de las juntas administradoras locales {desde el momento de su elección} y hasta cuando esté legalmente terminado el período, así como los que reemplace el ejercicio del mismo, no podrán:"

Los textos subrayados, en letra itálica y entre corchetes fueron objeto de los siguientes fallos:

- Aparte entre corchetes "desde el momento de la elección" declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. Sobre la expresión "y hasta cuando esté legalmente terminado el período" la Corte se inhibe de fallar por ausencia de cargos.

. Apartes en letra itálica declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante sentencia C-559-96 del 24 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

. Aparte subrayado y en letra itálica declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-426-96 del 12 de septiembre de 1996, "siempre que se entienda que la incompatibilidad establecida para los Diputados, se refiere a las controversias y asuntos en los que se discutan intereses del departamento, o aquellas que deban ser decididas por una entidad administrativa del orden departamental".

. Mediante Sentencia C-559-96 de 24 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-426-96.

. Mediante Sentencia C-326-96 de 25 de julio de 1996, Magistrado Ponente Dr. Julio Cesar Ortiz Guitierrez y C-559-96, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en Sentencia C-307-96

. Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-307-96 de julio 11 de 1996, "bajo el entendido de que subsisten las incompatibilidades y las excepciones a éstas, legalmente establecidas".

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 05001-23-33-000-2013-00127-01(2230-14) de 23 de agosto de 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;
<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2019-00049-00(2414) de 23 de abril de 2019 (Levantada la reserva legal mediante Auto de 07/05/2019), Consejero Ponente, Dr. Edgar González López.

b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

Este texto corresponde al texto del literal b) del artículo 39 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte Constitucional se pronunció así:

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este literal b) por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-1195-08 de 3 de diciembre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- El Numeral 1o., Literal b) del Artículo 44 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía: "Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales."

El literal b) fue objeto de los siguientes fallos:

. Este literal, referido a los "gobernadores" y "alcaldes", fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-559-96 del 24 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

. Este literal, referido a los "diputados", fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-426-96 del 12 de septiembre de 1996. "Siempre que se entienda que la incompatibilidad allí establecida para los Diputados, se refiere a las controversias y asuntos en los que se discutan intereses del Departamento, o aquellas que deban ser decididas por una entidad administrativa del orden departamental. Sentencia C-426-96 del 12 de septiembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Herrera Vergara.

. Mediante Sentencia C-559-96 de 24 de octubre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-426-96.

. Literal b) declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-307-96 de julio 11 de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, "bajo el entendido de que subsisten las incompatibilidades y las excepciones a éstas, legalmente establecidas".

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2019-00049-00(2414) de 23 de abril de 2019 (Levantada la reserva legal mediante Auto de 07/05/2019), Consejero Ponente, Dr. Edgar González López.

2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia.

Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su vinculación y hasta doce meses después del retiro del servicio.

3. Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales.

ARTÍCULO 44. CONFLICTO DE INTERESES. <Ver Jurisprudencia Vigencia sobre condicionamiento a este artículo en la ley anterior> Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este artículo corresponde al texto del artículo 40 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual, el aparte subrayado fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, *"... en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo"*.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 40

ARTÍCULO 45. EXTENSIÓN DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS. Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley para los gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, se hacen extensivos a las mismas autoridades de los niveles departamental, distrital y municipal.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 41

TÍTULO V.
FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS.

CAPÍTULO I.
CLASIFICACIÓN Y CONNOTACIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 46. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS. Las faltas disciplinarias son:

1. Gravísimas.

2. Graves.

3. Leves.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 42

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia C-721-15 de 25 de noviembre de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

ARTÍCULO 47. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA DISCIPLINARIA. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en la ley. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 43

1. La naturaleza esencial del servicio.

2. El grado de perturbación del servicio.

3. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.

4. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

5. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se

derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.

6. Los motivos determinantes del comportamiento.

7. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El Artículo 27 de la Ley 200 de 1995 igualmente trataba de los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Este Artículo fue objeto de los siguientes fallos de constitucionalidad:

. Mediante Sentencia C-181-02 de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en las Sentencias C-708-99 y C-202-00 <sic>.

. El fallo contenido en la Sentencia C-708-99, fue reiterado mediante Sentencia C-292-00 del 15 de marzo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

. Artículo 27 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-708-99 del 22 de septiembre de 1999, Magistrado Ponente Alvaro Tafur Galvis, "en lo referente al cargo estudiado". Esta sentencia tuvo en cuenta el fallo C-280-96.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia C-721-15 de 25 de noviembre de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00482-00(1915-11) de 13 de agosto de 2018, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2463-11 de 27 de julio de 2017, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

CAPÍTULO II.
CLASIFICACIÓN Y LÍMITE DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 48. CLASES Y LÍMITES DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 44; Art. 46 Inc. 1o.

1. Destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años para las faltas gravísimas dolosas.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

Sobre el límite de las sanciones la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el texto "*La inhabilidad general será de diez a veinte años (...)",* contenido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, así:

. Aparte en letra itálica "*La inhabilidad general será de diez a veinte años*; *la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses*" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

. La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante las Sentencias C-211-03 , C-070-03 y C-037-03 .

. Aparte en letra itálica "*La inhabilidad general será de diez a veinte años*" declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Sobre el texto de este numeral del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que en similar sentido establecía: "1. *Destitución e inhabilidad general*, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima", la Corte Constitucional se pronunció así:

. Expresión "Destitución e inhabilidad general" en letra itálica declarada EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-500-14 16 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. Estarse a lo resuelto en la C-028-06 que declaró exequible este numeral en relación con el cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución.

. Declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

. Declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

Sobre el texto del inciso 3o. del artículo 32 de la Ley 200 de 1995 que en similar sentido establecia: "Las faltas gravísimas serán sancionadas con terminación del contrato de trabajo ~~o de prestación de servicios personales~~, destitución, desvinculación, remoción *o pérdida de investidura*.", La Corte Constitucional se pronunció así

. Aparte tachado del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte subrayado del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996 siempre y cuando se entienda que en estos casos también es aplicable el artículo 110 de la Constitución Política. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

. Aparte en letra itálica del inciso 3o. del Artículo 32 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, siempre y cuando se entienda que no se aplica a los Congresistas y que para los miembros de las Corporaciones Públicas de las entidades territoriales son causas autónomas de pérdida de investidura las previstas por los artículos 110 y 291 inciso primero de la Constitución. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Ley 443 de 1998; Art. 37 Literal f)

<Jurisprudencia Concordante>

Corte Constitucional:

- Corte Constitucional Sentencia SU-712-13 de 17 de octubre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

Consejo de Estado:

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2014-00360-00(IJ) de 15 de noviembre de 2017, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2463-11 de 27 de julio de 2017, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1131-14, Auto de 13 de mayo de 2014, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

- Consejo de Estado, Acción de Tutela, Sala Plena, Expediente No. 2013-06871-01(AC) de 5 de marzo de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- Consejo de Estado Acción de Cumplimiento, Expediente No. 1987 de 5 de agosto de 2005, C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

2. Destitución e inhabilidad general de cinco (5) a diez (10) años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

Sobre el límite de las sanciones la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el texto "*La inhabilidad general será de diez a veinte años (...)",* contenido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, así:

. Aparte en letra itálica "*La inhabilidad general será de diez a veinte años*; *la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses*" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

. La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02, mediante las Sentencias C-211-03 , C-070-03 y C-037-03 .

. Aparte en letra itálica "*La inhabilidad general será de diez a veinte años*" declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Sobre el texto de este numeral del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 que en similar sentido establecía: "1. *Destitución e inhabilidad general*, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima", la Corte Constitucional se pronunció así:

- Expresión "Destitución e inhabilidad general" en letra itálica declarada EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-500-14 16 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo. Estarse a lo resuelto en la C-028-06 que declaró exequible este numeral en relación con el cargo relativo a la infracción del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 93 de la Constitución.

- Declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- Declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948-02 de 6 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Ley 443 de 1998; Art. 37 Literal f)

3. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a cuarenta y ocho (48) meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

Sobre el límite de las sanciones la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el texto "*la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses (...)",* contenido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, así:

. Aparte en letra itálica "*La inhabilidad general será de diez a veinte años*; *la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses*" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

4. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a veinticuatro (24) meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas graves dolosas.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

Sobre el límite de las sanciones la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el texto "*la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses (...)",* contenido en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, así:

. Aparte en letra itálica "*La inhabilidad general será de diez a veinte años*; *la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses*" declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Adicionalmente declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-948-02 respecto al aparte subrayado.

Sobre el texto del numeral 2o. del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que en similar sentido establecía: "2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.", la Corte Constitucional se pronunció así:

. Numeral 2. declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

5. Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a dieciocho (18) meses para las faltas graves culposas.

6. Multa de veinte (20) a noventa (90) días de salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves dolosas.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este numeral corresponde en similar sentido al texto del Numeral 2o. del Artículo 29 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

7. Multa de cinco (5) a veinte (20) días de salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves culposas.

PARÁGRAFO. CONVERSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. En el evento en que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor, en relación para la interpretación de este parágrafo, en materia de la suspensión de los Congresistas debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el literal c) del artículo 14 de la Ley 1828 de 2017, "por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial No. 50.125 de 23 de enero de 2017.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

"ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN Y LÍMITE DE LAS SANCIONES.(...)

"c) La suspensión de la condición congresional, consiste en la separación del ejercicio de la investidura y prerrogativas de Congresista. La misma no podrá ordenarse por un término inferior a diez (10), ni superior a ciento ochenta (180) días. Durante el término de suspensión, no se podrá ejercer ninguna función pública.

Cuando no fuere posible ejecutar la suspensión, por haber cesado definitivamente el Congresista en sus funciones, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios que corresponderá al monto devengado al momento de la comisión de la falta, los que deberá cancelar dentro de los dos (2) meses siguientes al retiro del Congreso.

La suspensión siempre se ejecutará en periodo de sesiones ordinarias o extraordinarias, es decir durante el receso de labores del Congreso se suspende su aplicación.

Cuando no hubiere sido cancelado el equivalente a la sanción de suspensión, por desvinculación del Congresista, la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de cada Cámara, adelantará el procedimiento administrativo de cobro coactivo, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida la Mesa Directiva de la correspondiente Cámara legislativa. (...)".

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este parágrafo contenido igualmente en el inciso 2o. del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Par.:

Ley 734 de 2002; Art. 46 Inc. 2

ARTÍCULO 49. DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 45

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección; o

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Expresión "elección", subrayada, declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-111-19 de 13 de marzo de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido.

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la Constitución Política y la ley; o

<Concordancias>

Constitución Política; Art. 110; Art. 278 Num. 1

c) La terminación del contrato de trabajo; y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este literal d. corresponde al texto del literal d. del artículo 45 de la Ley 734 de 2002 que fue declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte

Constitucional mediante Sentencia C-028-06 de 26 de enero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

- El Artículo 30, Numeral 3o. de la Ley 200 de 1995 establecía:

ARTÍCULO 30. SANCIONES ACCESORIAS. Son sanciones accesorias las siguientes:

...

3. La exclusión de la carrera".

Este Numeral 3o. fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. Aclara la Corte: "... condicionado a que se entienda que la sanción accesoria en él contemplada no procede frente a faltas disciplinarias graves ni leves".

<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-02-25-000-2012-00231-00(0885-12) de 16 de mayo de 2019, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.

<Concordancias>

Directiva PROCURADURÍA 5 de 2005

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.

Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva.

ARTÍCULO 50. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Atenuantes:

a) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;

b) La confesión de la falta;

c) Haber, por iniciativa propia, resarcido el daño o compensado el perjuicio causado, y

d) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso.

2. Agravantes:

a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;

b) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;

c) El grave daño social de la conducta;

d) La afectación a derechos fundamentales;

e) El conocimiento de la ilicitud, y
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este literal contenido en el literal e. del artículo 47 de la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

f) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 47 Num. 1

ARTÍCULO 51. CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS. A quien, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición, se le graduará la sanción de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

b) Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;

c) Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal, y

d) Si la sanción más grave es la multa, esta se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 47 Num. 2

LIBRO II.
PARTE ESPECIAL.

TÍTULO ÚNICO.
LA DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIA EN PARTICULAR.

CAPÍTULO I.
FALTAS GRAVÍSIMAS.

ARTÍCULO 52. FALTAS RELACIONADAS CON LA INFRACCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

1. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo, cualquiera de los actos mencionados a continuación:
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La expresión "fundada en motivos políticos" relacionada con muerte de uno o varios de sus miembros, contenida en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 fue declarada EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 5

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

a) Matanza de miembros del grupo;
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 6

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 47001-23-33-000-2017-00081-01(PI) de 8 de febrero de 2018, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López.

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2017-00078-01 de 14 de septiembre de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González.

b) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Lesión ~~grave~~ a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-181-02, que declaró INEXEQUIBLE la expresión “grave” que figuraba en el artículo 25 de la Ley 200 de 1995 y, en consecuencia, declara INEXEQUIBLE la expresión “grave”, mediante Sentencia C-560-19 de 20 de noviembre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Sobre la expresión "grave" la Corte Constitucional declaró su INEXEQUIBILIDAD sobre los mismos textos contenidos en la Ley 734 de 2002 (Art. 48 Num. 5 Lit. a)" y la Ley 200 de 2005 (Artículo 25, Numeral 5o., Literal a., Numeral 1), así:

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional, en demanda contra el texto contenido en el artículo 5 Lit. a) la Ley 734 de 2002, declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02, que declaró INEXEQUIBLE la expresión "grave".

- El aparte tachado, que en similar sentido corresponde a parte del Artículo 25, Numeral 5o., Literal a., Numeral 1) de la Ley 200 de 1995, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 5 Lit. a)

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 5 Lit. b)

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 5 Lit. c)

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 5 Lit. d)

2. Incurrir en graves infracciones a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario conforme los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La expresión "graves", en texto similar contenido en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 7

Ley 1952 de 2019; Art. 57 Num. 12

3. Someter a una o más personas a arresto, detención, secuestro o cualquier privación de la libertad, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral, que en similar sentido corresponde al artículo 25, Numeral 5o., Literal b. de la Ley 200 de 1995, fue declarado EXEQUIBLE -por los cargos analizados- por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 8

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1428 de 15 de agosto de 2002 (autorizada publicación mediante Auto de 16/08/2006), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

4. Infligir a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 9

5. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos que una persona o un grupo de ellas se desplace de su hogar o de su lugar de residencia, o abandone sus actividades económicas habituales.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 10

6. Privar arbitrariamente a una persona de su vida.

ARTÍCULO 53. FALTAS RELACIONADAS CON LA LIBERTAD Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES.

1. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la libertad de esta o estas a la satisfacción de cualquier tipo de exigencias.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 13

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

2. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 14

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

3. Retardar injustificadamente la conducción de persona capturada, detenida o condenada, al lugar de destino, o no ponerla a órdenes de la autoridad competente, dentro del término legal.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 15

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

4. Realizar, promover, o instigar a otro servidor público a ejecutar actos de hostigamiento, acoso o persecución, contra otra persona en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología política o filosófica.

ARTÍCULO 54. FALTAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 29 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-094-03 de 11 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 29

2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 30

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 903-10 de 9 de febrero de 2015, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

<Doctrina Concordante>

Consejo de Estado:

Sala de Consulta y Servicio Civil

Concepto 1429 de 2002/08/15, Dr. Augusto Trejos Jaramillo.

¿Cuál es el alcance e interpretación correcta del numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, particularmente en lo que se refiere a la Licencia Ambiental?.

3. <Ver Jurisprudencia Vigencia sobre condicionamiento a este inciso en la ley anterior> Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en el cual, el texto subrayado, fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, *"...en el entendido que la conducta constitutiva de la falta gravísima debe ser siempre de carácter concreto y estar descrita en normas constitucionales de aplicación directa o en normas legales que desarrollen esos principios"* por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-05 de agosto de 2005, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 31

Circular PROCURADURÍA - AGR - CGR - 14 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-00234-00(0530-13) de 17 de octubre de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2520-12 de 20 de octubre de 2014, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1131-14, Auto de 13 de mayo de 2014, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 32 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que fue declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-504-07 de 4 de julio de 2007, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 32

5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 33

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 34

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Circular PROCURADURÍA 21 de 2016

7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
<Concordancias>

Num. 7.

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 33

Ley 1474 de 2011; Art. 84 Par. 2o.

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Circular PROCURADURÍA 21 de 2016

<Jurisprudencia Concordante>

Num. 7

- Corte Constitucional, Sentencia C-392-19 de 28 de agosto de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera.

- Corte Constitucional, Sentencia C-434-13 de 10 de julio de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos.

ARTÍCULO 55. FALTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO O LA FUNCIÓN PÚBLICA.

1. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró Infundadas las objeciones sobre este numeral (numeral 2 en el proyecto de ley) y por lo tanto declaró su constitucionalidad, en relación con el aspecto analizado, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 47

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

2. Consumir, en el sitio de trabajo, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave. En el evento de que esta conducta fuere cometida en lugares públicos ella será calificada como grave, siempre y cuando se verifique que ella incidió en el correcto ejercicio del cargo, función o servicio.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado *"asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave"* declarado EXEQUIBLE por el cargo de desconocimiento del artículo 25 de la Constitución, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-536-19 según Comunicado de Prensa de 13 de noviembre de 2019,

Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos. Sobre la misma expresión, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-252 de 2003 en relación con el cargo de la demanda que se fundamentó en el artículo 16 de la Constitución.

Destaca el editor el siguiente fragmento contenido en la síntesis de la providencia, publicada en el Comunicado de Prensa:

"En el caso concreto, la Sala Plena consideró que tipificar como falta disciplinaria asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes es legítima, razonable y proporcional, dado que busca el adecuado ejercicio de la función y labor pública. Sin embargo, con base en las Sentencias C-948 de 2002, C-252 de 2003, C-431 de 2004, C-284 de 2016 y C-636 de 2016, precisó que el fragmento censurado del numeral 2 del artículo 55 de la ley 1952 de 2019 debe ser aplicado siempre que el consumo de alcohol o estupefacientes afecte el ejercicio del cargo, función o servicio publico, dado que ahí radica la antijuridicidad del ilícito disciplinario. Dicha interpretación de la disposición demandada garantiza que los poderes de dirección y de disciplina del empleador se restrinjan a la función pública. Con ello, quedan protegidos el derecho al trabajo y el adecuado ejercicio de la función pública, además se asegura que los poderes de dirección y de disciplina del Estado se ejerzan dentro de los límites de las garantías constitucionales."

- La Corte Constitucional declaró sobre el texto original de este numeral en el proyecto de ley, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: *"parcialmente **INFUNDADA** la **SEGUNDA** objeción por inconstitucionalidad formulada por el Gobierno Nacional, en relación con el numeral 3° del artículo 55 del mismo proyecto de ley. En consecuencia, declarar la constitucionalidad parcial del texto reproducido en el numeral 3º del artículo 55 de este proyecto de ley, y parcialmente **FUNDADA** esta objeción, en lo relativo a la expresión "o en lugares públicos", en los términos de la sentencia C-252 de 2003."*.

- La Corte Constitucional, sobre el texto similar contenido el numeral 48 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 declaró su exequibilidad y condicionó el consumo en lugares públicos *"en el entendido que la expresión 'en lugares públicos' es exequible en cuanto la conducta descrita afecte el ejercicio de la función pública",* mediante Sentencia C-252-03 de 25 de marzo de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 48

Resolución MLEGAL 1183 de 2005

<Texto del Proyecto de Ley Anterior>

Texto original del Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara:

3. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada como grave.

3. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser enajenados en razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros los adquieran.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 51

4. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los términos de ley.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 54

5. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio por un término igual o superior a cinco (5) días sin justificación.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 55

6. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad u omitir información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró Infundadas las objeciones sobre este numeral (numeral 7 en el proyecto de ley) y por lo tanto declaró su constitucionalidad, en relación con el aspecto analizado, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 35 Num 12; Art. 48 Num. 56

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1982-09 de 11 de julio de 2013, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

7. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de antecedentes, de las sanciones o causas de inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades competentes informen a la Procuraduría General de la Nación, o hacer la anotación tardíamente.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 58

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

8. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir otras en cargo diferente, a sabiendas de la existencia de decisión judicial o administrativa, de carácter cautelar o provisional, de suspensión en el ejercicio de las mismas.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 59

9. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 60

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1131-14, Auto de 13 de mayo de 2014, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

10. Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación y fallo de los asuntos asignados. Se entiende por mora sistemática el incumplimiento por parte de un servidor público de los términos fijados por ley o reglamento interno en la sustanciación de los asuntos a él asignados, en una proporción que represente el veinte por ciento (20%) de su carga laboral.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró Infundadas las objeciones sobre este numeral (numeral 11 en el proyecto de ley) y por lo tanto declaró su constitucionalidad, en relación con el aspecto analizado, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 62

11. Adoptar decisión administrativa o concepto técnico o jurídico con el fin de favorecer intereses propios o ajenos, en contravía del bien común o del ordenamiento jurídico, u obligar a otro servidor público para que realice dicha conducta.

12. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala conducta.
<Concordancias>

Num. 11:

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 49

Ley 1369 de 2009; Art. 15 Par.

<Jurisprudencia Concordante>

Num. 11:

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00489-00(1924-11) de 25 de enero 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional reiteró la inexequibilidad del numeral 1 de este artículo contenido en el proyecto de ley Sentencia C-704-17 de 29 de noviembre de 2017, Magistrado Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo.

- La Corte Constitucional declaró, sobre el texto original del numeral 1 de este artículo contenido en el proyecto de ley, fundada la objeción y por lo tanto, su INCONSTITUCIONALIDAD mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo".

<Texto del Proyecto de Ley Anterior>

Texto original del Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara:

1. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.

ARTÍCULO 56. FALTAS RELACIONADAS CON EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS Y CONFLICTOS DE INTERESES.

1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El Numeral 10 del Artículo 25 de la Ley 200 de 1995 establecía: "10. Actuar a sabiendas de estar incurso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, establecidos en la Constitución o en la ley."

El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-391-02 de 22 de mayo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 17

Ley 1952 de 2019; Art. 73

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

2. Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona a sabiendas de que en ella concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 17 Inc. 2o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2013-00234-00(0530-13) de 17 de octubre de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2017-00078-01 de 14 de septiembre de 2017, C.P. Dra. María Elizabeth García González.

- Consejo de Estado Acción de Cumplimiento, Expediente No. 1987 de 5 de agosto de 2005, C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla

3. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las normas vigentes.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 18

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de un (1) año después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual

prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo al que haya estado vinculado.

Esta incompatibilidad será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor público conoció en ejercicio de sus funciones.

Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existen sujetos claramente determinados.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró Infundadas las objeciones sobre este numeral (proyecto de ley) y por lo tanto declaró su constitucionalidad, en relación con el aspecto analizado, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Destaca el editor los siguientes fallos al numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002; Teniendo en cuenta que el artículo 35 correspondía a "Prohibiciones". El presente artículo 56 esta en el Capítulo "Faltas gravísimas"

- En relación con la expresión "asuntos relacionados con las funciones propias del cargo", el mismo texto contenido en el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 -modificado por la Ley 1474 de 2011- fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, frente a los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-257-13 de 7 de mayo de 2013, Conjuez Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, "en el sentido de que la expresión ***"asuntos relacionados con las funciones propias del cargo"***, se aplica a las dos prohibiciones en el establecidas".

- El texto original del numeral 22 fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-893-03 de 7 de octubre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, "en el entendido que la prohibición establecida en este numeral será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones; y que será de un (1) año en los demás casos, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismo al que se haya estado vinculado".

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 35 Num 22

Constitución Política; Art. 267 Inc. 5o.

Ley 1123 de 2007; Art. 29 Num. 5o.

Ley 489 de 1998; Art. 113 Inc. 2o.

Ley 182 de 1995; Art. 10

<Doctrina Concordante>

Concepto MINEDUCACION 139685 de 2018

<Jurisprudencia Concordante>

Corte Constitucional

- Corte Constitucional, Sentencia C-257-13 de 7 de mayo de 2013, Conjuez Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

5. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado del asunto.
<Concordancias>

Num. 5:

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 46

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Jurisprudencia Concordante>

Num. 5:

- Corte Constitucional Sentencia T-800-06 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería

ARTÍCULO 57. FALTAS RELACIONADAS CON LA HACIENDA PÚBLICA.

1. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 20

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1637 de 12 de mayo de 2005 (autorizada publicación mediante Of. 726 de 29/08/2006), C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

2. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la Constitución Política.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 21

3. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 22

Circular PROCURADURÍA 26 de 2011

4. Incumplir los pagos de cuentas por pagar o reservas presupuestales, contrariando la programación establecida en actos administrativos.

5. Asumir, ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 35 Num 16; Art. 48 Num. 23

6. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró Infundadas las objeciones sobre este numeral (proyecto de ley) y por lo tanto declaró su constitucionalidad, en relación con el aspecto analizado, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 24

Ley 179 de 1994; Art. 50

Ley 143 de 1994; Art. 49

Ley 142 de 1994; Art. 12; Art. 130

Decreto 111 de 1996, Art. 44

Circular PROCURADURÍA 17 de 2005

Circular PROCURADURÍA 48 de 2008

7. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 24

8. Efectuar o autorizar la inversión de recursos asignados a la entidad o administrados por esta, en condiciones que no garanticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 27

9. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para los Sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales del Sistema Integrada de Seguridad Social o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni efectuar oportunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las nóminas de los servidores públicos al ICBF.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 28

Circular PROCURADURÍA 43 de 2002

Circular PROCURADURÍA 22 de 2010

Directiva PROCURADURÍA 18 de 2004

10. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o cambiario.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró Infundadas las objeciones sobre este numeral (proyecto de ley) y por lo tanto declaró su constitucionalidad, en relación con el aspecto analizado, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 50

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

11. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 52

Circular CONTADURÍA 5 de 2015; Inc. Final

Circular PROCURADURÍA 17 de 2005

12. Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral corresponde en similar sentido al texto del numeral 53 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en el que la expresión que fue *"congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia"* fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1029-02 de 27 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 53

13. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró Infundadas las objeciones sobre este numeral (proyecto de ley) y por lo tanto declaró su constitucionalidad, en relación con el aspecto analizado, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 63

14. Incumplir las normas que buscan garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

15. No ejecutar las transferencias para los resguardos indígenas.

16. Constituir unidad de caja con las rentas de destinación específica.

17. Incumplir los acuerdos relativos a la reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal.

18. No realizar la destinación preferente del porcentaje establecido en la ley proveniente de la renta percibida por concepto de renta de monopolio para salud y educación.

ARTÍCULO 58. FALTA RELACIONADA CON LA ACCIÓN DE REPETICIÓN. No instaurarse en forma oportuna por parte del representante legal de la entidad, en el evento de proceder, la acción de repetición contra el funcionario, exfuncionario o particular en ejercicio de funciones públicas, cuya conducta haya generado conciliación o condena de responsabilidad contra el Estado.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró, sobre el texto original del numeral 1 en el proyecto de ley, fundada la objeción y por lo tanto, su INCONSTITUCIONALIDAD mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo".

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 36

<Texto del Proyecto de Ley Anterior>

Texto original del Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara:

1. No decidir, por parte del Comité de Conciliación, la procedencia de la acción de repetición dentro del término fijado en la ley.

ARTÍCULO 59. FALTAS RELACIONADAS CON LA SALUD PÚBLICA, LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE.

1. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas, la salud humana o la preservación de los ecosistemas naturales o el medio ambiente.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 37

2. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 38

Directiva PROCURADURÍA 2 de 2018

Circular PROCURADURÍA 21 de 2016

Circular PROCURADURÍA 81 de 2009

Circular PROCURADURÍA 11 de 2010

Circular PROCURADURÍA - SIYC 9 de 2011

3. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley.
<Concordancias>

Num. 3:

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 65

ARTÍCULO 60. FALTAS RELACIONADAS CON LA INTERVENCIÓN EN POLÍTICA.

1. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 39 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en el cual la expresión *"y en las controversias políticas"* fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-794-14 de 29 de octubre de 2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

Destaca el editor:

"En efecto, la expresión "controversias políticas", consagrada en el artículo 127 de la Constitución como prohibición dirigida a empleados estatales, hace referencia a las controversias políticas de tipo partidista o en el marco de procesos electorales, y en modo alguno a la intervención de estos en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general ajenas a los debates electorales o a las disputas partidistas -de partidos o movimientos políticos-, pues supondría desconocer la importancia de la deliberación pública entre todos los ciudadanos para el funcionamiento de la democracia representativa y participativa. En esa medida, establecido así el alcance constitucional de la propia expresión demandada, la disposición del artículo 48 -numeral 39- del CDU, ha de ser entendida en su alcance estrictamente partidista o electoral, no pudiendo presentarse una incompatibilidad entre el precepto legal y la norma superior.

(..)

7. Interpretación de las restricciones constitucionales al derecho de participación y límites al establecimiento de restricciones legales a tales derechos. *(i) La interpretación de las prohibiciones de participación política de los empleados estatales que realiza la Corte, debe partir de la garantía de los derechos de que gozan en un Estado democrático, contrayendo el alcance de las expresiones constitucionales relativas a tomar parte "en las controversias políticas" -materia de la demanda- a las conductas de intervención activa o pasiva en los debates públicos con incidencia electoral directa, de apoyo o rechazo público a una causa, organización política o candidato. (ii) No es aceptable una interpretación del artículo 127 constitucional que prohíba la intervención en discusiones o controversias públicas de interés general que se desarrollen al margen de un debate electoral o disputa partidista, pues desconocería la centralidad de la deliberación en el funcionamiento de la democracia participativa. (iii) La permisión participativa del inciso 3 del artículo 127 constitucional dispuesta para determinados empleados estatales -distintos de los judiciales, de los órganos de control o electorales, o de seguridad y fuerza pública- sólo procede con la expedición de una ley estatutaria que la autorice y fije las condiciones de ejercicio: no se trata de un imperativo constitucional para el Legislador estatutario sino de la atribución de una potestad por el constituyente, que le permitiría ampliar las excepciones a la prohibición de participación política de determinados servidores públicos, con arreglo a criterios de oportunidad y conveniencia. (iv) Las disposiciones legales que establecen prohibiciones y sanciones al ejercicio de los derechos políticos y de expresión de los empleados estatales, deberán observar los parámetros constitucionales y jurisprudenciales: obligación de proteger el contenido esencial y respeto del principio de proporcionalidad."*

<Concordancias>

Constitución Política; Art. 127

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 39

Ley 1474 de 2011; Art. 10 Inc. 3o.

Ley 996 de 2005; Art. 38

Directiva PRESIDENCIAL 5 de 2016

Directiva PROCURADURÍA 4 de 2003

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

2. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista.

<Concordancias>

Num. 2:

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 40

Directiva PRESIDENCIAL 5 de 2016

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

Num. 2:

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0263-13 de 26 de marzo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 61. FALTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO, LA FUNCIÓN Y EL TRÁMITE DE ASUNTOS OFICIALES.

1. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 2

Directiva PROCURADURÍA 7 de 2005

2. Abstenerse de suministrar dentro del término que señale la ley a los miembros del Congreso de la República, las informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control político.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 2

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

3. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 4 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en el que las expresiones *"gravísimas", "dolosos", "preterintencionales o culposos"* fueron declaradas EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Num. 3:

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 4

Directiva PROCURADURÍA 16 de 2011

ARTÍCULO 62. FALTAS RELACIONADAS CON LA MORALIDAD PÚBLICA.

1. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 3

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

Ley 594 de 2000; Art. 35 Lit. b)

2. <Ver Jurisprudencia Vigencia sobre condicionamiento a este numeral en la ley anterior> Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.
<Jurisprudencia Vigencia>

- El numeral 4o. del artículo 25 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El servidor público o el particular que ejerza funciones públicas, que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial." Este numeral fue declarado condicionalmente EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-310-97 del 25 de junio de 1997, "bajo el entendido de que el incremento patrimonial debe ser aquel que no tiene causa justificada, o es indebido o ilícito". Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz. .

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 3 Inc. 2o.

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

Ley 1474 de 2011; Art. 45

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

3. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizados, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 12

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

4. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y legales.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 16

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

5. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas no autorizadas.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 43

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

6. Amenazar o agredir gravemente a las autoridades legítimamente constituidas en ejercicio o con relación a las funciones.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 19 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 en cuyo texto la expresión "gravemente" fue declarada EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 19

Ley 1952 de 2019; Art. 72 Num. 10

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2463-11 de 27 de julio de 2017, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

7. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación de recomendados a la administración o la adjudicación de contratos a favor de determinadas personas, con ocasión o por razón del trámite de un proyecto legislativo de interés para el Estado o solicitar a los congresistas, diputados o concejales tales prebendas aprovechando su intervención en dicho trámite.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 41

8. Influir en otro servidor público o particular que ejerza función pública, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero. Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente descrita.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 42

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

9. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 43

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

10. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado "hechos de corrupción" contenida en el numeral 10 declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-392-19 de 28 de agosto de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera.

<Concordancias>

Num. 10:

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 64

Ley 1474 de 2011

Ley 412 de 1997

ARTÍCULO 63. FALTAS ATRIBUIBLES A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES Y A LOS JUECES DE PAZ. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Código y en las demás disposiciones legales vigentes, para los funcionarios de la Rama Judicial y los jueces de paz también serán faltas gravísimas las siguientes:

1. Tomar interés directa o indirectamente en remates o ventas en pública subasta de bienes que se hagan en cualquier despacho judicial.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Par. 1

Ley 270 de 1996; Art. 154 Num. 8

2. Interesarse indebidamente, de cualquier modo que sea, en asuntos pendientes ante los demás despachos judiciales o emitir conceptos sobre ellos.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Par. 1

Ley 270 de 1996; Art. 154 Num. 14

3. Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales.
<Concordancias>

Ley 270 de 1996; Art. 154 Num. 14

4. Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Par. 1

Ley 270 de 1996; Art. 154 Num. 15

5. Aceptar de las partes o de sus apoderados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Par. 1

Ley 270 de 1996; Art. 154 Num. 16

6. Ejercer el comercio o la industria personalmente o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo de entidad dedicada a actividad lucrativa.
<Concordancias>

Num. 6:

Ley 734 de 2002; Art. 48 Par. 1

Ley 270 de 1996; Art. 154 Num. 17

ARTÍCULO 64. FALTAS RELACIONADAS CON EL RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Código y en las demás disposiciones legales vigentes, para los servidores públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre las instituciones penitenciarias y carcelarias también serán faltas gravísimas las siguientes:

1. Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella.

2. Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas, municiones, explosivos, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o insumos para su fabricación.

3. Introducir o permitir el ingreso de elementos de comunicación no autorizados, tales como teléfonos, radios, radioteléfonos, buscapersonas, similares y accesorios.
<Concordancias>

Ley 65 de 1993; Art. 16A Par. 3o. Art. 45 Lit f) (Ley 1709 de 2014)

4. Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o con sus familiares.

5. Facilitar a los internos las llaves o implementos de seguridad que permitan el acceso a las dependencias del establecimiento.

6. Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden de remisión o desviarse de la ruta fijada sin justificación.

7. Dejar de hacer las anotaciones o registros que correspondan en los libros de los centros de reclusión o no rendir o facilitar los informes dispuestos por la ley o los reglamentos a la autoridad competente sobre novedades, incautaciones de elementos prohibidos, visitas, llamadas telefónicas y entrevistas.

8. Ceder, ocupar o dar destinación diferente sin autorización legal a las Casas Fiscales.

9. Realizar actos, manifestaciones, que pongan en peligro el orden interno, la seguridad del establecimiento de reclusión o la tranquilidad de los internos.

10. Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los servicios de vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas irregularmente, bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar visitas de abogados o visitas de otra índole legalmente permitidas.

11. Tomar el armamento, municiones y demás elementos para el servicio sin la autorización debida o negarse a entregarlos cuando sean requeridos legalmente.

12. Permanecer irreglamentariamente en las instalaciones.

13. Disponer la distribución de los servicios sin sujeción a las normas o a las órdenes superiores.

14. Actuar tumultuariamente, entorpeciendo el normal y libre funcionamiento de los establecimientos de reclusión.

15. Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes al servicio.

16. Retener personas.

17. Intimidar con armas y proferir amenazas y en general.

18. Preparar o realizar hechos que afecten o pongan en peligro la seguridad de los funcionarios, de los reclusos, de los particulares o de los centros carcelarios.

19. Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en ellos o suspender, entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las actividades del centro de reclusión en cualquiera de sus dependencias.

20. Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientos carcelarios.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Par. 4

Ley 65 de 1993; Art. 56 Inc. 4o.; Art. 106 (Ley 1709 de 2014)

ARTÍCULO 65. FALTAS QUE COINCIDEN CON DESCRIPCIONES TÍPICAS DE LA LEY PENAL. Cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando de él.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que fue declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-720-06 de 23 de agosto de 2006, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que fue declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 1

Decreto 4173 de 2011; Art. 2o. Num. 2o.; Art. 4o. Num. 6o.; Art. 7o. Num. 12

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

Circular PROCURADURÍA 3 de 2016

Circular PROCURADURÍA 16 de 2011

Circular PROCURADURÍA 23 de 2010

Circular PROCURADURÍA 72 de 2009

Circular PROCURADURÍA 19 de 2005

Circular PROCURADURÍA - CGN MH - 803 de 2017

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-450-18 de 19 de noviembre de 2018, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

ARTÍCULO 66. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Las faltas anteriores constituyen causales de mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2 del artículo 175; numeral 3 del artículo 178 y el tercer inciso del artículo 178A* de la Constitución Política, cuando fueren realizadas por el Presidente de la República, los Magistrados de la Comisión de Aforados, Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, o de la Corte Constitucional, los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, y del Fiscal General de la Nación.

<Notas del Editor>

* Destaca el editor que el artículo 178A en este artículo remitido, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-373-16 de 13 de julio de 2016, Magistrados Ponentes Drs. Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la expresión “y el tercer inciso del artículo 178A” por carencia actual del objeto, mediante Sentencia C-560-19 de 20 de noviembre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en razón de haberse declarado inexequible el artículo 178A de la Constitución, en la Sentencia C-373 del 13 de julio de 2016; por no haber en la Constitución vigente ninguna norma que permita encontrar fundamento a la norma demandada ni resultar esta compatible con aquella; por no haber riesgo para la seguridad jurídica derivado de dicha norma; y por su relación de conexidad inescindible con el precitado artículo de la Constitución, declarado inexequible.

- El texto de este artículo corresponde al texto del artículo 49 de la Ley 734 de 2002 el cual fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Admitida demanda de inconstitucionalidad en contra de la expresión "y el tercer inciso del artículo 178 A" contenida en el artículo 66 de la Ley 1952 de 2019, expediente No D-13199 de la Corte Constitucional, publicado en el estado No. 76 de 14 de mayo de 2019.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 49

Ley 1625 de 2013, Art. 8o. Pars. 1o. y 2o. Inc. Final; Art. 28 Par. 1o. Inc. Final

Ley 1621 de 2013, Art. 15 Par.; Art. 24 Par. 2o.; Art. 38 Inc. 1o.; Art. 40 Pars. 2o. y 3o.

Ley 1395 de 2010; Art. 69

Ley 100 de 1993; Art. 23 Inc. 2o.

Decreto 1636 de 2006; Art. 13

Circular PROCURADURÍA 48 de 2008

Circular PROCURADURÍA 17 de 2005

CAPÍTULO II.
FALTAS GRAVES Y LEVES.

ARTÍCULO 67. FALTAS GRAVES Y LEVES. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima.

La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 47 de este código.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró Infundadas las objeciones sobre este artículo (proyecto de ley) y por lo tanto declaró su constitucionalidad, en relación con el aspecto analizado, mediante Sentencia C-284-16 de 1o. de junio de 2018, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto del inciso 2o. corresponde al texto del inciso 2o. del artículo 50 de la Ley 734 de 2002 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, establece el fallo: "normas respecto de las cuales existe cosa juzgada material (Sentencias C-708-99 de 1999 y C-280-96 de 1996)".

ARTÍCULO 68. PRESERVACIÓN DEL ORDEN INTERNO. Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo al interior de cada dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe inmediato adoptará las medidas correctivas pertinentes sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno. Dichas medidas no generarán antecedente disciplinario.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto vigente del artículo 51 de la Ley 734 de 2002 sobre el cual se pronunció la Corte en los siguientes fallos:

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02 , mediante Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02, mediante Sentencia C-210-03 de 11 de marzo de 2003, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández

- Artículo declarado EXEQUIBLE, salvo apartes tachados de los incisos 1o. y 2o y la totalidad del inciso 3o. que se declaran INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 51

LIBRO III.
RÉGIMEN ESPECIAL.

TÍTULO I.
RÉGIMEN DE LOS PARTICULARES.

CAPÍTULO I.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 69. NORMAS APLICABLES. El régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos.
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 52

Ley 1474 de 2011; Art. 14

Ley 842 de 2003

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 48669 de 2018

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2045 de 23 de marzo de 2012 (autorizada publicación 4/05/2012) , Consejero Ponente, Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.

Concepto CONTADURÍA 25432 de 2003

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1855-08 de 12 de abril de 2012, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

ARTÍCULO 70. SUJETOS DISCIPLINABLES. <Ver Jurisprudencia Vigencia sobre condicionamiento a este inciso en la ley anterior> El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria; que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de la justicia.

Los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este Código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos.

<Ver Jurisprudencia Vigencia sobre condicionamiento a este inciso en la ley anterior> Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, según el caso.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Inciso Final del texto modificado por la Ley 1474 de 2011 que al igual que en el presente texto establecía *"Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva."* fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-084-13 de 20 de febrero de 2013, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, *"bajo el entendido que la falta le fuere imputable por el incumplimiento de los deberes funcionales".* Este inciso fue una reproducción del inciso 2o. del texto original, el cual había sido declarado, en los mismos términos, CONDICIONALMENTE exequible por la Sentencia C-1076-02.

- El parte del inciso 1o. del texto original del artículo 53 de la Ley 734 de 2002, que establecia *"que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales"* fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

La misma Sentencia declaró EXEQUIBLE el aparte el aparte "**;** *presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la Constitución Política*", *"bajo el entendido de que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el Legislador"*.

- El texto del inciso 2o. del texto original del artículo 53 de la Ley 734 de 2002, que establecía: *"Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.",* fue declarado EXEQUIBLE, "bajo el entendido que la falta le fuere imputable por el incumplimiento de los deberes funcionales", por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

- Aparte del inciso 1o. corresponde en similar sentido al siguiente aparte del Artículo 20 de la Ley 200 de 1995: "y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Nacional", el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- El Artículo 20 de la Ley 200 de 1995 incluía el siguiente aparte: "Son destinatarios de la Ley Disciplinaria ... los particulares que ejerzan funciones públicas en forma *permanente* o transitoria ..." La expresión "permanente" subrayado y en letra itálica declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-286-96 del 27 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

<Concordancias>

Ley 1474 de 2011; Art. 14

Ley 734 de 2002; Art. 25

Ley 599 de 2000; Art. 83 Num. 6o.

Ley 489 de 1998; Art. 110

Decreto 556 de 2014; Art. 10 Inc. 2o.

Decreto 564 de 2006; Art. 66; Art. 105

Resolución PROCURADURÍA 108 de 2002

Circular PROCURADURÍA 19 de 2016

Circular PROCURADURÍA 34 de 2011

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 48669 de 2018

Concepto SUPERINDUSTRIA 3012366 de 2003

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00175-00(C) de 20 de febrero de 2018, Consejero Ponente, Dr. Óscar Darío Amaya Navas.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 00021-00(c) de 19 de marzo de 2009, Consejero Ponente, Dr. Gustavo Aponte Santos.

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 24 de 12 de abril de 2007, C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1767 de 10 de agosto de 2006 (autorizada publicación mediante Of. 39323 de 16/08/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

CAPÍTULO II.
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES.

ARTÍCULO 71. INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. Constituyen inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y violación al régimen de conflicto de intereses, para los particulares que ejerzan funciones públicas, las siguientes:

1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión.

2. Las contempladas en los artículos 8o de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, o en las normas que los modifiquen o complementen.

3. Las contempladas en los artículos 42 y 43 de esta ley.

Las previstas en la Constitución y la ley, referidas a la función pública que el particular deba cumplir.

PARÁGRAFO. CONFLICTO DE INTERESES. El particular disciplinable conforme a lo previsto en este código deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del particular disciplinable deberá declararse impedido.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 54

Ley 1796 de 2016: Art. 25; Art. 26; Art. 27

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2905-14 de 9 de febrero de 2017, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2045 de 23 de marzo de 2012 (autorizada publicación 4/05/2012) , Consejero Ponente, Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.

Concepto SUPERINDUSTRIA 3012366 de 2003

CAPÍTULO III.
SUJETOS, FALTAS Y SANCIONES.

ARTÍCULO 72. SUJETOS Y FALTAS GRAVÍSIMAS. Los sujetos disciplinables por este título solo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas; son faltas gravísimas las siguientes conductas:

1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses establecidos en la Constitución o en la ley.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 2

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

2. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o entidad pública titular de la función.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 3

3. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 4

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

4. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas autorizadas en el arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen erogación.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 5

5. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los servidores públicos o particulares para obtener beneficios personales que desvíen la transparencia en el uso de los recursos públicos.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 6

6. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dádivas, prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia del servicio público.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 7

Resolución PROCURADURÍA 118 de 2003

7. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 8

8. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 9

9. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num. 10

10. Las consagradas en el numeral 14 del artículo 39; numerales 2, 3, 6 y 7 del artículo 54; numerales 4, 7 y 10 del artículo 55; numeral 3 del artículo 56; numerales 1, 8, 9, 10 y 11 del artículo 57; numeral 2 del artículo 60; numeral I del artículo 61; numerales 1, 4, 5, 6 y 8 del artículo 62, cuando resulten compatibles con la función, servicio o labor.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Num.

11. Cuando la conducta no pueda adecuarse a ninguna de las anteriores faltas, en virtud de los principios de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando de él.

PARÁGRAFO 1o. Las faltas gravísimas solo son sancionables a título de dolo o culpa.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este parágrafo corresponde al texto del parágrafo 1o. del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte Constitucional en Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, la Corte Constitucional resolvió "*Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-155-02, que declaró la exequibilidad del Artículo 14 de la Ley 200 de 1995*."

- El texto de este Parágrafo corresponde parcialmente al texto del Artículo 14 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-155-02 de 5 de marzo de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 55 Par. 1

Circular PROCURADURÍA 11 de 2007

PARÁGRAFO 2o. Los árbitros y conciliadores quedarán sometidos además al régimen de faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses de los funcionarios judiciales en lo que sea compatible con su naturaleza particular. Las sanciones a imponer serán las consagradas para los funcionarios judiciales acorde con la jerarquía de la función que le competía al juez o magistrado desplazado.
<Concordancias>

Par. 2o.

Ley 734 de 2002; Art. 55 Par. 2

<Concordancias>

Ley 1796 de 2016; Art. 28

ARTÍCULO 73. SANCIÓN. Los particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sanciones principales:

Multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho y, concurrentemente, inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años.
Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vinculación provenga de nombramiento oficial, será de destitución e inhabilidad de 1 a 20 años.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 56

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1767 de 10 de agosto de 2006 (autorizada publicación mediante Of. 39323 de 16/08/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 74. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. Además de los criterios para la graduación de la sanción consagrados para los servidores públicos, respecto de los destinatarios de la ley disciplinaria de que trata este libro, se tendrán en cuenta el resarcimiento del perjuicio causado, la situación económica del sancionado y la cuantía de la remuneración percibida por el servicio prestado.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 57

TÍTULO II.
RÉGIMEN DE LOS NOTARIOS.

CAPÍTULO I.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 75. NORMAS APLICABLES. El Régimen Disciplinario Especial de los particulares también se aplicará a los notarios y comprende el catálogo de faltas imputables a ellos, contempladas en este título.

Los principios rectores, los términos prescriptivos de la acción y de la sanción disciplinaria, al igual que el procedimiento, son los mismos consagrados en este código respecto de la competencia preferente.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 58

ARTÍCULO 76. ÓRGANO COMPETENTE. El régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de control especial con todos sus requisitos y consecuencias, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 59

CAPÍTULO II.
FALTAS ESPECIALES DE LOS NOTARIOS.

ARTÍCULO 77. FALTAS GRAVÍSIMAS DE LOS NOTARIOS. Constituyen faltas imputables a los notarios, además de las faltas gravísimas contempladas en este Código, las siguientes:

1. Incumplir las obligaciones para con la Superintendencia de Notariado y Registro, Fondo Cuenta Especial de Notariado, la Administración de Impuestos Nacionales, las demás de carácter oficial y las entidades de seguridad o previsión social.

2. Ejercer la función por fuera del círculo notarial correspondiente o permitir que se rompa la unidad operativa de la función notarial, estableciendo sitios de trabajo en oficinas de los usuarios.

3. Dar uso indebido o aprovecharse en su favor o en el de terceros de dineros, bienes o efectos negociables que reciban de los usuarios del servicio, en depósito o para pagos con destinación específica.

4. <Ver Jurisprudencia Vigencia> La transgresión de las normas sobre inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, la ley y decretos.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- La expresión "decretos" contenida igualmente en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 734 de 2002, fue declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, *"en el entendido de que se trata de decretos con fuerza de ley"*.

5. Celebrar convenios o contratos con los usuarios o realizar conductas tendientes a establecer privilegios y preferencias ilegales en la prestación del servicio. Son preferencias ilegales, la omisión o inclusión defectuosa de los anexos ordenados por ley, según la naturaleza de cada contrato y el no dejar las constancias de ley cuando el acto o contrato contiene una causal de posible nulidad relativa o ineficacia.

PARÁGRAFO. Las faltas gravísimas solo son sancionables a título de dolo o culpa.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- En Sentencia C-124-03 de 18 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, la Corte Constitucional resolvió -en relación con la demanda de inconstitucionalidad del mismo texto de este parágrafo contenido en el artículo 61 de la Ley 734 de 2002-: "*Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-155-02, que declaró la exequibilidad del Artículo 14 de la Ley 200 de 1995*."

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 61

ARTÍCULO 78. FALTAS DE LOS NOTARIOS. Constituye falta disciplinarla grave y, por lo tanto, da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 60

ARTÍCULO 79. DEBERES Y PROHIBICIONES. Son deberes y prohibiciones de los notarios, los siguientes:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 62

1. Les está prohibido a los notarios, emplear e insertar propaganda de índole comercial en documentos de la esencia de la función notarial o utilizar incentivos de cualquier orden para estimular al público a demandar sus servicios, generando competencia desleal.

2. Es deber de los notarios, someter a reparto las minutas de las escrituras públicas correspondientes a los actos en los cuales intervengan todos los organismos administrativos del sector central y del sector descentralizado territorial y por servicios para los efectos contemplados en el literal g) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, cuando en el círculo de que se trate exista más de una notaría.
<Concordancias>

Ley 1796 de 2016; Art. 13

Ley 1537 de 2012; Art. 44

Ley 29 de 1973; Art. 15

Resolución SUPERNOTARIADO 2277 de 2006

Resolución SUPERNOTARIADO 1986 de 2003

Resolución SUPERNOTARIADO 643 de 2003

Instrucción SUPERNOTARIADO 5 de 2016

Instrucción SUPERNOTARIADO 18 de 2003

Instrucción SUPERNOTARIADO 8 de 2003

3. Es deber de los notarios no desatender las recomendaciones e instrucciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado con el desempeño de la función notarial y prestación del servicio, contenidas en los actos administrativos dictados dentro de la órbita de su competencia.
<Concordancias>

Instrucción SUPERNOTARIADO 4 de 2018

4. Los demás deberes y prohibiciones previstos en el Decreto-ley 960 de 1970, su Decreto Reglamentario número 2148 de 1983 y las normas especiales de que trata la función notarial.

CAPÍTULO III.
SANCIONES.

ARTÍCULO 80. SANCIONES. Los notarios estarán sometidos al siguiente régimen de sanciones:

1. Destitución e inhabilidad para el caso de faltas gravísimas realizadas con dolo o culpa gravísima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo para las faltas graves realizadas con dolo o culpa y las gravísimas diferentes a las anteriores.

3. Multa para las faltas leves dolosas.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 63

ARTÍCULO 81. LÍMITE DE LAS SANCIONES. La inhabilidad no será inferior a cinco (5) ni superior a veinte (20) años.

La suspensión no será inferior a un (1) mes, ni superior a cuarenta y ocho (48) meses.

La multa es una sanción de carácter pecuniario la cual no podrá ser inferior al valor de 10, ni superior al de ciento ochenta (180) días del salario mínimo legal mensual vigente establecido por el Gobierno nacional.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 64

ARTÍCULO 82. CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA FALTA Y LA SANCIÓN. Además de los criterios para la graduación de la falta y la sanción consagrados para los servidores públicos, respecto de los notarios se tendrá en cuenta la gravedad de la falta, el resarcimiento del perjuicio causado, la situación económica del sancionado, la cuantía de la remuneración percibida por el servicio prestado y los antecedentes en el servicio y en materia disciplinaria.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 65

LIBRO IV.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.

TÍTULO I.
LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 83. EJERCICIO DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces; la Superintendencia de Notariado y Registro; los Personeros Distritales y Municipales; las Oficinas de Control Disciplinario Interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los nominadores.

El poder disciplinario de los Personeros Distritales y Municipales no se ejercerá respecto del Alcalde y de los Concejales. Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 67

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 57 de 19 de julio de 2007, C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 105 de 28 de septiembre de 2006 (autorizada publicación mediante Conflicto 11001-03-06-2006-00060-00 de 22/06/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 84. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El procedimiento disciplinario establecido en la presente ley deberá aplicarse por las respectivas Oficinas de Control Disciplinario Interno, personerías municipales y distritales, y la Procuraduría General de la Nación.

PARÁGRAFO. Los procesos que se adelantan por la jurisdicción disciplinaria se tramitarán conforme al procedimiento establecido en este Código en lo que no contravenga la naturaleza de la jurisdicción.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 66

ARTÍCULO 85. NATURALEZA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria es pública.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 68

ARTÍCULO 86. OFICIOSIDAD Y PREFERENCIA. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.

La Procuraduría General de la Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la violación del debido proceso, podrá asumir la investigación disciplinaria iniciada por otro organismo, caso en el cual este la suspenderá y la pondrá a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa información al jefe de la entidad. Una vez avocado el conocimiento por parte de la Procuraduría, esta agotará el trámite de la actuación hasta la decisión final.

Los personeros tendrán competencia preferente frente a la administración distrital o municipal.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 69

Ley 1952 de 2019; Art. 83 Inc. 2o.

Ley 962 de 2005; Art. 81

Circular PROCURADURÍA 38 de 2011

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2222-10 de 4 de octubre de 2012, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

- Corte Constitucional Sentencia C-832-06 de 11 de octubre de 2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

- Corte Constitucional Sentencia T-412-06 de 22 de mayo de 2006, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00123-00(C) de 20 de marzo de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula.

ARTÍCULO 87. OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta

disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.

Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 70

ARTÍCULO 88. EXONERACIÓN DEL DEBER DE FORMULAR QUEJAS. El servidor público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto profesional.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este artículo corresponde al texto del artículo 71 de la Ley 734 de 2002 en el cual la expresión "*compañero permanente*" fue declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, *"...en el entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo"*.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 71

ARTÍCULO 89. ACCIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO RETIRADO DEL SERVICIO. La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté ejerciendo funciones públicas.

Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo previsto en este código, y en la hoja de vida del servidor público.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 72

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

ARTÍCULO 90. TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 73

TÍTULO II.
LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 91. FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 74

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 2046 de 3 de marzo de 2011 (autorizada publicación 17/03/2011) , Consejero Ponente, Dr. Augusto Hernández Becerra.

ARTÍCULO 92. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO DISCIPLINABLE. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios, disciplinar a sus servidores o miembros.

El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables la competencia radicará

exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo la segunda en todo caso al respectivo personero, para lo cual las personerías deberán tener la infraestructura necesaria para preservar las garantías procesales.

Donde ello no fuere posible la segunda instancia le corresponderá al respectivo Procurador Regional.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 75

Ley 182 de 1995; Art. 8o. Inc. Final

Resolución PROCURADURÍA 108 de 2002

Instrucción SUPERNOTARIADO 12 de 1998

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00123-00(C) de 20 de marzo de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula.

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 24 de 12 de abril de 2007, C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 105 de 28 de septiembre de 2006 (autorizada publicación mediante Conflicto 11001-03-06-2006-00060-00 de 22/06/2006), C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo

ARTÍCULO 93. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

Este Inciso corresponde en similar sentido al Artículo 48 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-996-01 de 19 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias y para los fines anotados.

En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.

PARÁGRAFO 1o. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación conocerá y fallará las investigaciones que se adelanten contra los empleados judiciales de la entidad. La segunda instancia será de competencia del nominador o de quien este delegue.
<Concordancias>

Resolución FISCALÍA 267 de 2017 Resolución FISCALÍA 3844 de 2016 Resolución FISCALÍA 1014 de 2012; Art. 1

PARÁGRAFO 2o. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, quien deberá ser abogado, pertenecerá al nivel directivo de la entidad.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 76

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 11001-03-06-000-2017-00123-00(C) de 20 de marzo de 2018, Consejero Ponente, Dr. Germán Alberto Bula. - Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 57 de 19 de julio de 2007, C.P. Dr. Luis Fernando Alvarez Jaramillo - Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 94. SIGNIFICADO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. Cuando en este Código se utilice la locución “Control Disciplinario Interno”, debe entenderse por tal, la oficina, dependencia o entidad que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Inciso corresponde en similar sentido al Artículo 49 de la Ley 200 de 1995. El Artículo 49 fue objeto de los siguientes fallos:

. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-996-01 de 19 de septiembre de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-650-97 del 3 de diciembre de 1997, se declaró inhibida, por ineptitud de la demanda, con respecto del aparte subrayado. Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 77

ARTÍCULO 95. COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS PERSONERÍAS. Los procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales se tramitarán de conformidad con las competencias establecidas en la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en este código.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 78

ARTÍCULO 96. FALTAS COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DE DISTINTAS ENTIDADES. Cuando en la comisión de una o varias faltas conexas hubieren participado servidores públicos pertenecientes a distintas entidades, el servidor público competente de la que primero haya tenido conocimiento del hecho, informará a las demás para que inicien la respectiva acción disciplinaria.

Cuando la investigación sea asumida por la Procuraduría o la Personería se conservará la unidad procesal.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 79

ARTÍCULO 97. EL FACTOR TERRITORIAL. Es competente en materia disciplinaria el funcionario del territorio donde se realizó la conducta.

Cuando no puedan ser adelantados por las correspondientes oficinas de control disciplinario interno, las faltas cometidas por los servidores públicos en el exterior y en el ejercicio de sus funciones, corresponderán a la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con el factor objetivo y subjetivo, fueren competentes en el Distrito Capital.

Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del territorio nacional, conocerá el funcionario competente que primero hubiere iniciado la investigación.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 80

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 31 de 3 de mayo de 2007, C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

ARTÍCULO 98. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CONEXIDAD. Se tramitarán bajo una misma cuerda procesal las actuaciones que satisfagan los siguientes presupuestos:

1. Que se adelanten contra el mismo disciplinado.

2. Que las conductas se hayan realizado en un mismo contexto de hechos o que sean de la misma naturaleza.

3. Que no se haya proferido auto de cierre de investigación o que no se haya vencido el término de investigación.

Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y decidirán en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía.

La acumulación podrá hacerse de oficio o a solicitud de los sujetos procesales. Si se niega, deberá hacerse exponiendo los motivos de la decisión contra la cual procede el recurso de reposición.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 81

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 82

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 59 de 26 de julio de 2007, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 100. COMPETENCIA PARA EL PROCESO DISCIPLINARIO ADELANTADO CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. El proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, será de única instancia y se tramitará mediante el procedimiento previsto en este código. La competencia corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En el evento en que el Procurador, haya sido postulado por esa corporación, conocerá la Sala Plena del Consejo de Estado. La conducción del proceso estará a cargo del presidente de la respectiva corporación de manera exclusiva y directa.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Inciso 1o. del Artículo 66 de la Ley 200 de 1995 establecía: "1. *Conocerán del proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este Código*, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y en el evento de que haya sido postulado por esta Corporación, lo hará la Sala Plena del Consejo de Estado."

Los textos subrayados y en letra itálica fueron objeto de los siguientes fallos:

. Mediante Sentencia C-156-97, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en Sentencia C-594-96.

. Aparte en letra itálica y subrayada del inciso 1o. del numeral 1o. del Artículo 66 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-594-96 del 6 de noviembre de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz.

. Mediante Sentencia C-594-96, de Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz, la Corte Constitucionalñ declaró estese a lo resuelto en Sentencia C-244-96 .

. Aparte subrayado del inciso 1o. del numeral 1o. del Artículo 66 de la Ley 200 de 1995 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 83 Num. 1; Art. 192

ARTÍCULO 101. COMPETENCIA ESPECIAL DE LA SALA DISCIPLINARIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. La Sala Disciplinaria conocerá en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los siguientes servidores públicos:

El Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los Congresistas, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Gerente del Banco de la República y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor ~~de la Contraloría~~ General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el Personero y el Contralor de Bogotá, D. C., los Directores de Departamentos Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Autoridad Nacional de Televisión y demás servidores públicos del orden nacional de igual o superior categoría, por hechos cometidos en ejercicio de sus funciones.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte tachado "de la Contraloría" declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-560-19 de 20 de noviembre de 2019, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

El Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario General, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado.

PARÁGRAFO. Esta competencia se ejercerá para las faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad o durante su ejercicio, en estos casos aunque hayan dejado de ejercer el cargo.
<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Título XI, Capítulo II

ARTÍCULO 102. COMPETENCIA DISCIPLINARIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. El Procurador General de la Nación conocerá en segunda Instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos enunciados en el artículo anterior.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Título XI, Capítulo II

ARTÍCULO 103. TRÁMITE PROCESAL. La competencia disciplinaria especial establecida en los artículos anteriores será ejercida de conformidad con el procedimiento previsto en esta ley.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Título XI, Capítulo II

TÍTULO III.
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.

ARTÍCULO 104. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes:

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 84

1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia.

3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos procesales.

4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación.

5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales.

6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación, o formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales.

9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a menos que la demora sea debidamente justificada.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este artículo corresponde al texto del artículo 84 de la Ley 734 de 2002 en el cual las expresiones *"compañero permanente"* fueron declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029-09 de 28 de enero de 2009, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, *"... en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo"*.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 81 de 17 de agosto de 2006, C.P. Dr. Gustavo Aponte Santos

ARTÍCULO 105. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. El servidor público en quien concurra cualquiera de las anteriores causales debe declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que exprese las razones, señale la causal y, si fuere posible, aporte las pruebas pertinentes.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 85

ARTÍCULO 106. RECUSACIONES. Cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la actuación disciplinaria, con base en

las causales a que se refiere el artículo 104 de esta ley. Al escrito de recusación acompañará la prueba en que se funde.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 86

ARTÍCULO 107. PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPEDIMENTO O DE RECUSACIÓN. En caso de impedimento el servidor público enviará, inmediatamente, la actuación disciplinaria al superior, quien decidirá de plano dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su recibo.

Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento de las diligencias.

Cuando se trate de recusación, el servidor público manifestará si acepta o no la causal, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de su formulación; vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el impedimento o se presente la recusación y hasta cuando se decida.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 87

ARTÍCULO 108. IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. Si el Procurador General de la Nación se declara impedido o es recusado y acepta la causal, el Viceprocurador General de la Nación asumirá el conocimiento de la actuación disciplinaria. Si el Procurador General no acepta la causal de recusación, enviará de manera inmediata la actuación disciplinaria a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en un término de cinco días hábiles, para que decida. Si declara infundada la causal, devolverá la actuación al Despacho del señor Procurador General. En caso contrario la enviará al despacho del señor Viceprocurador General.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- La parte inicial de este artículo corresponde al texto del artículo 88 de la Ley 734 de 2002 el cual fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 88

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional Sentencia SU-712-13 de 17 de octubre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

TÍTULO IV.
SUJETOS PROCESALES.

ARTÍCULO 109. SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.

Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política. Esta misma condición la ostentarán las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de acoso laboral.

En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, esta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-014-04, mediante Sentencia C-487-09 de 22 de julio de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

- El texto de este artículo corresponde, en similar sentido, al texto del artículo de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado CONDICIONALMENTE exequible, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, *"en el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidos por la ley".*

Los sujetos procesales establecidos en el condicionamiento fueron incluidos en la nueva redacción.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 89; Art. 197

Ley 1010 de 2006; Art. 17

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-265-16 de 23 de mayo de 2016, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

ARTÍCULO 110. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES. Los sujetos procesales podrán:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 90

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y

4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal esta tenga carácter reservado.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este numeral corresponde al texto del numeral 4 del artículo 90 de la Ley 734 de 2002 cuyo aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, establece el fallo: "normas respecto de las cuales existe cosa juzgada material (Sentencias C-708-99 de 1999 y C-280-96 de 1996)".

El Literal f. del Artículo 73 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... f. Que se le expidan copias de la actuación, salvo las que por mandato constitucional o legal tengan carácter reservado, siempre y cuando dicha reserva no surja de la misma investigación que contra él se siga. ..."

El Literal f. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

PARÁGRAFO 1o. La intervención del quejoso, que no es sujeto procesal, a excepción de lo establecido en el artículo anterior, se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos efectos podrá conocer el expediente en la Secretaría del Despacho que profirió la decisión.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este parágrafo corresponde en similar sentido al texto del parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 2002, en el cual la expresión *"bajo la gravedad de juramento"* fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-158-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra, establece el fallo:

"normas respecto de las cuales existe cosa juzgada material (Sentencias C-708-99 de 1999 y C-280-96 de 1996)".

El aparte subrayado corresponde en igual sentido al texto subrayado del Inciso 2o. del Artículo 71 de la Ley 200 de 1995 el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-616-97 de 27 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr.Vladimiro Naranjo Mesa.

PARÁGRAFO 2o. Las víctimas o perjudicados, cuando se trate de investigaciones por violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario o actos constitutivos de acoso laboral, tienen la facultad de designar apoderado.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-473-17 de 21 de julio de 2017, Magistrado Ponente Dr. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

- Corte Constitucional, Sentencia T-265-16 de 23 de mayo de 2016, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

ARTÍCULO 111. CALIDAD DE DISCIPLINADO. La calidad de disciplinado se adquiere a partir del momento del auto de apertura de investigación o la orden de vinculación.

El funcionario encargado de la investigación notificará de manera personal la decisión de apertura de investigación al disciplinado. Para tal efecto lo citará a la dirección registrada en el expediente o a aquella que aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser posible la notificación personal, se le notificará por edicto de la manera prevista en este código.

El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan practicado sin la presencia del disciplinado, en tanto se surtía dicho trámite de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el disciplinado.

Enterado de la apertura de investigación disciplinaria, el disciplinado y su defensor, si lo tuviere, tendrán la obligación procesal de señalar la dirección en la cual recibirán las comunicaciones.

La omisión de tal deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la última dirección conocida.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 91

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0795 de 22 de febrero de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

ARTÍCULO 112. DERECHOS DEL DISCIPLINADO. Como sujeto procesal, el disciplinado tiene los siguientes derechos:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 92

1. Acceder a la actuación.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

El numeral 2o. del Artículo 77 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... 2. El investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso. ..."

El numeral 2o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de 1997. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

2. Designar apoderado.

3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del traslado para presentar alegatos previos al fallo de primera o única instancia.
<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2009 de 23 de marzo de 2017, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su práctica, para lo cual se le remitirá la respectiva comunicación.

5. Rendir descargos.

6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.

7. Obtener copias de la actuación.

8. Presentar alegatos antes de la evaluación de la investigación y antes del fallo de primera o única instancia.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este numeral 8 corresponde parcialmente al texto del numeral 8 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002 el cual fue declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-107-04 de 10 de febrero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería.

<Concordancias>

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Num. 3o. Inc. 8o.

ARTÍCULO 113. ESTUDIANTES DE CONSULTORIOS JURÍDICOS Y FACULTADES DEL DEFENSOR. Los estudiantes de los consultorios jurídicos podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios según los términos previstos en la ley.

<Concordancias>

Decreto Ley 196 de 1971; Art. 30 Num. 7

Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado. Cuando existan criterios contradictorios, prevalecerán los del defensor.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 93

TÍTULO V.
LA ACTUACIÓN PROCESAL.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 114. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN PROCESAL. La actuación disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la presente ley y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 94

<Concordancias>

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); Art. 3

ARTÍCULO 115. RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. En el procedimiento disciplinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales.

El disciplinado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 95

ARTÍCULO 116. REQUISITOS FORMALES DE LA ACTUACIÓN. La actuación disciplinaria deberá adelantarse en idioma castellano, y se recogerá por duplicado, en el medio más idóneo posible.

Las demás formalidades se regirán por las normas del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cuando la Procuraduría General de la Nación ejerza funciones de policía judicial se aplicará la Ley 600 de 2000 en cuanto no se oponga a las previsiones de esta ley.

<Notas del Editor>

- En relación a la referencia a la Ley 600 de 2000, en criterio del editor debe entenderse a la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Establece el artículo 533:

"ARTÍCULO 533. Derogatoria y Vigencia. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000. (...).".

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 96

Ley 1952 de 2019; Art. 22

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

Ley 906 de 2004

ARTÍCULO 117. MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES DISCIPLINARÍAS, TÉRMINO PARA ADOPTAR DECISIONES. Salvo lo dispuesto en normas especiales de este código, todas las decisiones interlocutorias y los fallos que se profieran en el curso de la actuación deberán motivarse.

En la etapa de Indagación previa e investigación, las decisiones que requieran motivación se tomarán en el término de diez (10) días y las de impulso procesal en tres (3), salvo disposición en contrario.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 97

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00482-00(1915-11) de 13 de agosto de 2018, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cueter.

ARTÍCULO 118. UTILIZACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS. Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías constitucionales.

Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente necesario.

Asimismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al del conductor del proceso, a través de medios como la audiencia o comunicación virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 98

ARTÍCULO 119. RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES. Cuando se pierda o destruya un expediente correspondiente a una actuación en curso, el funcionario competente deberá practicar todas las diligencias necesarias para lograr su reconstrucción. Para tal efecto, se allegarán las copias recogidas previamente por escrito o en medio magnético y se solicitará la colaboración de los sujetos procesales, a fin de obtener copia de las diligencias o decisiones que se hubieren proferido; de igual forma se procederá respecto de las remitidas a las entidades oficiales.

Cuando los procesos no pudieren ser reconstruidos, deberá reiniciarse la actuación oficiosamente.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 99

CAPÍTULO II.
NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

ARTÍCULO 120. FORMAS DE NOTIFICACIÓN. La notificación de las decisiones disciplinarias puede ser personal, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 100

Directiva PROCURADURÍA 55 de 2009

Circular SUPERINDUSTRIA 4 de 2015

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0532-08 de 18 de agosto de 2011, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

ARTÍCULO 121. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Se notificarán personalmente los autos de apertura de investigación disciplinaria, el de vinculación, el de citación a audiencia y de formulación de cargos y el fallo de segunda instancia.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 101

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-429-14 de 3 de julio de 2014, Magistrado Ponente Dr. Andrés Mutis Vanegas.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00140-00(0607-12) de 15 de febrero de 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0795-10 de 17 de abril de 2013, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

"Argumenta el demandante que la citación para la notificación personal se envió a una dirección diferente a la que tenía registrada y en consecuencia no tuvo la oportunidad legal de conocer el fallo de segunda instancia.

"La Sala no comparte los argumentos de la parte demandante toda vez que si bien la citación al parecer se envió a una dirección diferente a la registrada, no por esta razón se releva al demandante del deber procesal que le impone la ley de estar pendiente del proceso en defensa de sus intereses.

"Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido:

""La carga procesal, es una conducta de realización facultativa establecida en beneficio del propio interés del gravado con ella, pero cuya omisión lo expone al riesgo de soportar consecuencias jurídicas desfavorables. Por lo tanto, la carga de vigilancia, atención y cuidado a las actuaciones que se surtan en el proceso, está siempre presente en todos los procesos. De tal suerte, que no obstante estar gravado con esa carga, la ley dispone

que se le cite para que concurra al despacho para la práctica de la notificación personal; pero, si tal notificación se omite, no por eso desaparece la carga de comparecer a la secretaría del despacho a enterarse de la marcha del proceso, lo que permitiría por ejemplo, que si se dicta una providencia y no se ha efectuado la citación, podría sin embargo notificarse personalmente de ella <T-309-01>."

"Y es que el artículo 107 tiene por finalidad impedir que ante la no comparecencia del sujeto procesal a la notificación personal, se paralice la actuación. Por lo anterior y teniendo en cuenta los deberes del demandante y su apoderado, así como también las cargas procesales que le son propias, el hecho de no haber recibido la citación en la dirección exacta para efectos de la notificación personal no configura una causal de violación al debido proceso y al derecho de defensa, pues como quedó probado dentro del expediente, se procedió a la notificación por edicto, tal como lo establece la ley."

ARTÍCULO 122. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y, por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayados declarados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-570-19 de 27 de noviembre de 2019, Magistrada Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, *"bajo el entendido de que debe existir evidencia acerca de que la recepción del mensaje electrónico efectivamente se dio".*

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 102

ARTÍCULO 123. NOTIFICACIÓN DE DECISIONES INTERLOCUTORIAS. Proferida la decisión se procederá así:

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 103

1. Al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse.

2. En la comunicación se indicarán la fecha de la providencia y la decisión tomada.

3. Si transcurridos tres (3) días hábiles al recibo de la comunicación el disciplinado no comparece, la secretaría del despacho que profirió la decisión la notificará por estado. Se entenderá recibida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo.

De esta forma se notificará el auto de cierre de la investigación y traslado para alegatos precalificatorios y el traslado del dictamen pericial para la etapa de investigación.

ARTÍCULO 124. NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO COMISIONADO. En los casos en que la notificación de la citación a audiencia y formulación de cargos deba realizarse en sede diferente a la del competente, este podrá comisionar para tal efecto a otro funcionario de la Procuraduría o al jefe de la entidad a la que esté vinculado el investigado o, en su defecto, al personero distrital o municipal del lugar donde se encuentre el investigado o su apoderado, según el caso. Si no se pudiere realizar la notificación personal, se fijará edicto en lugar visible de la secretaría del despacho comisionado, por el término de cinco (5) días hábiles. Cumplido lo anterior, el comisionado devolverá inmediatamente al comitente la actuación, con las constancias correspondientes.

La actuación permanecerá en la Secretaría del funcionario que profirió la decisión.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 104

ARTÍCULO 125. NOTIFICACIÓN POR ESTADO. Se surtirá mediante anotación en estado que elaborará el Secretario, en que deberá constar:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 105

1. El número de radicación del proceso.

2. La indicación de los nombres y apellidos del disciplinado. Si varias personas son disciplinadas, bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión «y otros».

3. La fecha de la decisión que se notifica.

4. La fecha del estado y la firma del Secretario.

El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo.

De las notificaciones hechas por estado, el Secretario dejará constancia dentro del expediente en el que se profirió la decisión notificada.

PARÁGRAFO. Cuando se cuente con los recursos técnicos, los estados se publicarán en la página web de la entidad, caso en el cual no deberán imprimirse ni firmarse por el Secretario.
<Concordancias>

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012); Art. 295

Directiva PROCURADURÍA 3 de 2005

Memorando PROCURADURÍA 3 de 2018

ARTÍCULO 126. NOTIFICACIÓN EN ESTRADO. Las decisiones que se profieran en audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este artículo corresponde al texto del artículo 106 de la Ley 734 de 2002, en el cual la expresión subrayada "o no" fue declarada EXEQUIBLE, por el cargo analizado de violación del artículo 29 de la Constitución Política, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1193-08 de 3 de diciembre de 2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería. fallo inhibitorio por violación del preámbulo y del artículo 2 de la Constitución Política, por ineptitud sustancial de la demanda.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 106

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-33-33-000-2016-00625-01(1175-17) de 21 de junio de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 127. NOTIFICACIÓN POR EDICTO. Los autos que deciden la apertura de investigación, la vinculación y el fallo de segunda instancia que no puedan notificarse personalmente, se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 87 de la Ley 200 de 1995 establecía: "Los autos de cargos, el que niega pruebas, el que niega el recurso de apelación y los fallos se notificarán por edicto cuando, a pesar de las diligencias pertinentes de las cuales se dejará constancia secretarial en el expediente, no se hayan podido notificar personalmente."

El Artículo 87 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-627-96 del 21 de noviembre de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Si vencido el término de cinco (5) días a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo, no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia.

Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 107

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0795-10 de 17 de abril de 2013, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

ARTÍCULO 128. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Cuando no se hubiere realizado la notificación personal o ficta, o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el *disciplinado* o su defensor no reclama y actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del artículo 108 de la Ley 734 de 2002, en el cual las expresiones *"procesado"* y *"no reclama y actúa en diligencias posteriores"* fueron declaradas EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 108

ARTÍCULO 129. COMUNICACIONES. Las decisiones de sustanciación que no tengan una forma especial de notificación prevista en este código se comunicarán a los sujetos procesales por el medio más eficaz, de lo cual el Secretario dejará constancia en el expediente.

<Ver Jurisprudencia Vigencia> Al quejoso se le comunicará la decisión de archivo y del inicio de la audiencia. Se entenderá cumplida la comunicación cuando hayan transcurrido cinco (5) días a partir del día siguiente de la fecha de su entrega a la oficina de correo, sin perjuicio de que se haga por otro medio más eficaz, de lo cual se dejará constancia.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del artículo 109 de la Ley 734 de 2002, el cual se declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-293-08 de 2 de abril de 2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, *"...en el entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de esta última fecha"*.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 109

CAPÍTULO III.
RECURSOS.

ARTÍCULO 130. CLASES DE RECURSOS. Contra las decisiones disciplinaria proceden los recursos de reposición, apelación y queja.

PARÁGRAFO. Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 110

ARTÍCULO 131. OPORTUNIDAD PARA INTERPONER LOS RECURSOS. En la etapa de investigación los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los cinco (5) días siguientes a la notificación respectiva.

Si la notificación de la decisión se hace en la etapa de juicio, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si la misma se realiza en diferentes sesiones, se interpondrán en la sesión donde se produzca la decisión a impugnar.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Sobre el texto del artículo 111 de la Ley 734 de 2002, que en similar sentido establecía: "*Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos deberán interponerse y*

sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia", la Corte Constitucional lo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado de violación del artículo 29 de la Constitución Política, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-763-09 de 29 de octubre de 2009, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 111

Ley 906 de 2004; Art. 169

Decreto Ley 2400 de 1968; Art. 24 Inc. 4

Decreto Único 1083 de 2015; Art. 2.2.5.10.35

Resolución PROCURADURIA 240 de 2006

ARTÍCULO 132. SUSTENTACIÓN DE LOS RECURSOS. En la etapa de investigación, quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar.

En la etapa de juicio la sustentación de los recursos se hará verbalmente en audiencia o diligencia, o en la respectiva sesión, según el caso.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 112

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 133. RECURSO DE REPOSICIÓN. El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que niega la nulidad; la negación de la solicitud de copias o pruebas en la etapa de investigación, la no procedencia de la objeción del dictamen pericial, la decisión que niega la acumulación y contra el fallo de única instancia proferida por la Jurisdicción disciplinaria o quien haga sus veces.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 99 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El recurso de reposición procederá contra los autos de sustanciación, contra el que niega la recepción de la versión voluntaria y contra los fallos de única instancia."

El Artículo 99 fue objeto de los siguientes fallos:

. Mediante Sentencia C-013-01 del 17 de enero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Martha Victoria Sáchica Méndez, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-892-99

. Artículo 99 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

- El Artículo 74 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El defensor puede presentar pruebas en la indagación preliminar y solicitar versión voluntaria sobre los hechos. La negativa se resolverá mediante providencia interlocutoria contra la cual sólo cabe el recurso de reposición."

El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-175-01 del 14 de febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 113

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Num. 3o. Inc. 1o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 649-11 de 21 de noviembre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

- Corte Constitucional, Sentencia T-962-09 de 18 de diciembre de 2010, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

ARTÍCULO 134. RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la decisión que niega pruebas en etapa de juicio, la decisión de archivo, la decisión que finalice el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso temerario, y el fallo de primera instancia.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 102 de la Ley 200 de 1995 establecía en similar sentido: "El recurso de apelación es procedente contra el auto que niega pruebas en la investigación disciplinaria y contra el fallo de primera instancia."

El Artículo 102 fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión de archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas si no se han decretado de oficio.

Cuando se niegue la totalidad de las pruebas y se decreten de oficio, o la negación de pruebas a solicitud del disciplinado sea parcial, se concederá en el efecto devolutivo.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 115

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Nums. 2o. Inc. Final. 3o. Incs. 7o., 12

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-33-33-000-2016-00625-01(1175-17) de 21 de junio de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 135. PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS. El superior, en la providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción impuesta, cuando el investigado sea apelante único.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 116

Constitución Política, Art. 31, Inc. 2

ARTÍCULO 136. RECURSO DE QUEJA. El recurso de queja procede contra la decisión que rechaza el recurso de apelación.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 117

ARTÍCULO 137. TRÁMITE DEL RECURSO DE QUEJA. Dentro del término de ejecutoria de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente, se rechazará.

Dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del término anterior, el funcionario competente enviará al superior funcional las copias pertinentes para que decida el recurso.

El costo de las copias estará a cargo del impugnante. Si quien conoce del recurso de queja necesitare copia de otras actuaciones procesales, ordenará al competente que las remita a la brevedad posible. Si decide que el recurso debe concederse, lo hará en el efecto que corresponda.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 118

ARTÍCULO 138. EJECUTORIA DE LAS DECISIONES. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme cinco (5) días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar esta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.

Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, la consulta y aquellas contra las cuales no procede recurso alguno quedarán en firme el día que sean notificadas.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del artículo 119 de la Ley 734 de 2002. El Inciso 2o. que establecía: *"Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día que sean suscritas por el funcionario competente"* fue declarado EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández., "siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias"

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 119

Directiva PROCURADURÍA 55 de 2009

ARTÍCULO 139. DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS. Quien hubiere interpuesto un recurso podrá desistir del mismo antes de que el funcionario competente lo decida.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 120

ARTÍCULO 140. CORRECCIÓN, ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE LOS FALLOS. En los casos de error aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, de la entidad o fuerza donde labora o laboraba, o en la denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, o de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, este debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo profirió.

El fallo corregido, aclarado o adicionado será notificado conforme a lo previsto en este código. Cuando no haya lugar a corrección, aclaración o adición, se rechazará la petición mediante auto que no afectará la ejecutoria del fallo.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 121

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1810 de 26 de marzo de 2007 (autorizada publicación mediante Of. UJ 1398/07 de 10/07/2007), C.P. Dr. Flavio Augusto Rodríguez Arce

CAPÍTULO IV.
REVOCATORIA DIRECTA.

ARTÍCULO 141. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA. Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados de oficio o a petición del interesado.

El quejoso podrá solicitar la revocatoria del auto de archivo, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra este los recursos ordinarios previstos en este Código.

El plazo para solicitar la revocatoria directa para las decisiones de archivo por parte del quejoso será de tres (3) meses a partir de la fecha de su comunicación.

Una vez se allegue la petición de revocatoria se comunicará al disciplinado para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación se pronuncie sobre la solicitud.

PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyen infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio por parte del Procurador General de la Nación, así como el archivo de la actuación, de oficio o a petición del quejoso, de las víctimas o perjudicados.

PARÁGRAFO 2o. Cuando la revocatoria sea a solicitud del interesado, esta se deberá resolver en un término máximo de seis meses contados a partir de la radicación de la petición.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del artículo 122 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte Constitucional se pronunció así:

- Apartes subrayados del texto modificado por la Ley 1474 de 2011 que establecían: *"Los fallos sancionatorios y autos de archivo podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió. El quejoso podrá solicitar la revocatoria del auto de archivo"* fueron declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Apartes subrayados del texto original de la Ley 734 de 2002 que establecia: *"Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió"* fueron declarados CONDICIONALMENTE exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, "en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación".

<En criterio del editor este condicionamiento queda incluido en el parágrafo 1>

- El Artículo 111 de la Ley 200 de 1995 establecía: "Los fallos disciplinarios serán revocables en los siguientes casos: ..."

Este Inciso 1o. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 122

<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 65 de 2007

Directiva PROCURADURÍA 11 de 2007

ARTÍCULO 142. COMPETENCIA. El Procurador General de la Nación será la única autoridad competente que podrá revocar los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio.

En el caso de los fallos absolutorios, procederá la revocatoria únicamente cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyan violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría o autoridad disciplinaria.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 123

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Corte Constitucional, Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

ARTÍCULO 143. CAUSAL DE REVOCACIÓN DE LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS. En los casos referidos por las disposiciones anteriores, los

fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio son revocables solo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deban fundarse. Igualmente, cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

El texto de este artículo corresponde al texto del artículo 124 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual se pronunció la Corte así:

- Apartes subrayados *"los autos de archivo y el fallo absolutorio"* del texto modificado por la Ley 1474 de 2011 declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-306-12 de 26 de abril de 2012, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.

- Aparte subrayado del texto original declarado CONDICIONALMENTE exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, "en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, también procede la revocatoria del fallo absolutorio y del archivo de la actuación".

<Sobre este condicionamiento, destaca el editor que el texto original de la Ley 734 de 2002 sólo se refería a fallos sancionatorios>

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre la expresión "reglamentarias" por ineptitud de la demanda.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 124

ARTÍCULO 144. REVOCATORIA A SOLICITUD DEL SANCIONADO. El sancionado podrá solicitar, por una única vez, la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra aquellos recursos ordinarios previstos en este Código.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este inciso corresponde en similar sentido (sin incluir "por una única vez") al texto del inciso 1o. del artículo 125 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

- El Inciso 1o. del Artículo 113 de la Ley 200 de 1995 establecía: "No procederá la revocación directa prevista en este Código, a petición de parte, cuando el sancionado haya ejercido cualquiera de los recursos ordinarios".

Este Inciso 1o. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-095-98 del 18 de marzo de 1998, Magistrado Ponente, Dr. Hernando Herrera Vergara.

La revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva; con todo, si se hubiere proferido sentencia, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este inciso corresponde en similar sentido al texto del inciso 2 del artículo 125 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-014-04 de 20 de enero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 125

ARTÍCULO 145. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA REVOCATORIA DE LOS FALLOS. <Ver Jurisprudencia Vigencia> La solicitud de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este artículo corresponde al texto del artículo 126 de la Ley 734 de 2002, en el cual el texto subrayado "*se formulará dentro de los cinco años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo"* fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-666-08 de 2 de julio de 2008, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, *"en el entendido que cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria".*

1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la indicación del documento de identidad y la dirección, que para efectos de la actuación se tendrá como única, salvo que oportunamente señalen una diferente.

2. La identificación del fallo cuya revocatoria se solicita.

3. La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de revocatoria en que se fundamenta la solicitud.

La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida mediante decisión que se notificará personalmente al solicitante o a su defensor, quienes tendrán un término de cinco (5) días para corregirla o complementarla. Transcurrido este sin que el peticionario efectuare la corrección, será rechazada.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 126

ARTÍCULO 146. EFECTO DE LA SOLICITUD Y DEL ACTO QUE LA RESUELVE. Ni la petición de revocatoria de un fallo ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el ejercicio de los medios de control en materia contenciosoadministrativa.

Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno ni a la aplicación del silencio administrativo.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 127

TÍTULO VI.
PRUEBAS.

ARTÍCULO 147. NECESIDAD Y CARGA DE LA PRUEBA. Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 128

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00030-00(0135-12) de 4 de octubre de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas. - Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2014-00633-00(1973-14) de 7 de febrero de 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández. - Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2014-01086-00(3378-14) de 12 de abril de 2018, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2011-00316-00(SU) de 9 de agosto de 2016, C.P. Dr. (E) William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 148. IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO EN LA BÚSQUEDA DE LA PRUEBA. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 129

ARTÍCULO 149. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección disciplinaria y los documentos, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en este código.

Los indicios se tendrán en cuenta en el momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.

Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos fundamentales.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 130

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de julio de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 52001-23-33-000-2014-00118-01(0534-16) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

ARTÍCULO 150. LIBERTAD DE PRUEBAS. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 131

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 63001-23-33-000-2014-00243-01(4557-15) de 10 de mayo de 2018, C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0979-11 de 10 de octubre de 2013 , C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 151. PETICIÓN Y NEGACIÓN DE PRUEBAS. Los sujetos procesales pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán negadas las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 132

ARTÍCULO 152. PRÁCTICA DE PRUEBAS POR COMISIONADO. El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor de la misma Entidad. Cuando se requiera practicar pruebas fuera de la sede del despacho de conocimiento, se podrá acudir a las personerías distritales o municipales.

En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias objeto de la misma y el término para practicarlas.

El comisionado practicará aquellas pruebas que surjan directamente de las que son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido expresamente. Si el término de comisión se encuentra vencido, se solicitará ampliación y se concederá y comunicará por cualquier medio eficaz, de lo cual se dejará constancia.

Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que sean necesarias para la práctica de las pruebas. Dicha remisión podrá hacerse por medio electrónico.

El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier funcionario para la práctica de pruebas. Los demás servidores públicos de la Procuraduría solo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera de su sede, salvo que el comisionado pertenezca a su dependencia.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 133

ARTÍCULO 153. PRÁCTICA DE PRUEBAS EN EL EXTERIOR. La práctica de las pruebas o de diligencias en territorio extranjero se regulará por las normas legalmente vigentes.

En las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, el Procurador General podrá, de acuerdo con la naturaleza de la actuación y la urgencia de la prueba, autorizar el traslado del funcionario que esté adelantando la actuación, previo aviso de ello al Ministerio de Relaciones

Exteriores y a la representación diplomática acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 134

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2011-00316-00(SU) de 9 de agosto de 2016, C.P. Dr. (E) William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 154. PRUEBA TRASLADADA. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.

También podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal, aun cuando ellos no hayan sido introducidos y controvertidos en la audiencia del juicio y no tengan por consiguiente la calidad de pruebas. Estos elementos materiales de prueba o evidencias físicas deberán ser sometidos a contradicción dentro del proceso disciplinario.

Cuando la autoridad disciplinaria necesite información acerca de una investigación penal en curso, o requiera trasladar a la actuación disciplinaria elementos materiales de prueba o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo solicitará al Fiscal del caso, quien evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales de prueba o evidencias físicas puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 135

ARTÍCULO 155. ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA. El funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de las facultades de policía judicial, tomará las medidas que sean necesarias para asegurar los elementos de prueba.

Si la actuación disciplinaria se adelanta por funcionarios diferentes a los de la Procuraduría General de la Nación, podrán recurrir a esta entidad y a los demás organismos oficiales competentes, para los mismos efectos.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 136

ARTÍCULO 156. APOYO TÉCNICO. El servidor público que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar, gratuitamente, a todos los organismos del Estado la colaboración técnica que considere necesaria para al éxito de las investigaciones.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 137

ARTÍCULO 157. OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIR LA PRUEBA. Los sujetos procesales podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que sean notificados del auto de apertura de investigación disciplinaria o de la orden de vinculación.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Artículo corresponde en similar sentido al Artículo 130 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de 1997, Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.

- Mediante Sentencia C-555-01 de 31 de mayo de 2001, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-430-97.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 138

ARTÍCULO 158. INEXISTENCIA DE LA PRUEBA. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado se tendrá como inexistente.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 140

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sala Plena, Expediente No. 2011-00316-00(SU) de 9 de agosto de 2016, C.P. Dr. (E) William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 159. APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 141

ARTÍCULO 160. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 142

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2011-00707-00(2697-11) de 21 de junio de 2018, C.P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.

CAPÍTULO I.
CONFESIÓN.

ARTÍCULO 161. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La confesión deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Se hará ante la autoridad disciplinaria competente para fallar el proceso, para instruirlo o ante el comisionado o designado.

2. La persona que confiesa deberá estar asistida por defensor.

3. La persona debe ser informada sobre el derecho a no declarar contra sí misma y de las garantías consagradas por el artículo 33 de la Constitución Política.

4. La confesión debe hacerse en forma consciente y libre.

ARTÍCULO 162. BENEFICIOS DE LA CONFESIÓN. Si en el momento de instalar la audiencia el disciplinado acepta la responsabilidad que se le imputa en el auto de citación a audiencia y formulación de cargos, la autoridad disciplinaria inmediatamente la evaluará y de ser procedente suspenderá la audiencia por el término de diez (10) días para proferir el fallo sancionatorio.

En el momento de dosificar la sanción, la autoridad disciplinaria deberá disminuir la sanción de inhabilidad, suspensión o multa hasta en una tercera parte de la sanción a imponer.

El anterior beneficio no se aplicará cuando se trate de las faltas gravísimas contenidas en el artículo 52 de este Código.

Cuando la confesión se presente durante la etapa de investigación, la autoridad disciplinaria la valorará y de encontrarla procedente la evaluará y citará a audiencia y formulará cargos.

ARTÍCULO 163. CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN. Para apreciar la confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario competente tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios para apreciar el testimonio.

CAPÍTULO II.
TESTIMONIO.

ARTÍCULO 164. DEBER DE RENDIR TESTIMONIO. Toda persona está en la obligación de rendir bajo juramento el testimonio que se le solicita en la actuación procesal, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Los menores de edad que tengan más de siete años podrán rendir testimonio, diligencia que solo podrá ser recibida ante el Defensor o Comisario de Familia, en su despacho o a través de audio y video cuando las circunstancias así lo determinen. El menor absolverá el cuestionario enviado para el caso por la autoridad disciplinaria. El disciplinado o su defensor podrán formular preguntas que no sean contrarias al interés del declarante.

ARTÍCULO 165. TESTIGO RENUENTE. Cuando el testigo citado se muestre renuente a comparecer, podrá imponérsele multa hasta el equivalente a cincuenta salarios mínimos diarios vigentes en la época de ocurrencia del hecho, a favor del tesoro nacional, a menos que justifique satisfactoriamente su no comparecencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha señalada para la declaración.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Inciso corresponde en similar sentido al Inciso 1o. del Artículo 52 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

La multa se impondrá mediante decisión motivada, contra la cual procede recurso de reposición.

Impuesta la multa, el testigo seguirá obligado a rendir la declaración, para lo cual se fijará nueva fecha.

Si la investigación cursa en la Procuraduría General de la Nación, podrá disponerse la conducción del testigo por las fuerzas de policía, siempre que se trate de situaciones de urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida de la prueba. La conducción no puede implicar la privación de la libertad.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este Inciso corresponde en similar sentido al Inciso 2o. del Artículo 52 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional

mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, *"siempre y cuando se entienda que se trata de situaciones de urgencia en las cuales la conducción forzada del testigo es necesaria para evitar la perdida de pruebas"*. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Esta norma no se aplicará a quien esté exceptuado constitucional o legalmente del deber de declarar.

PARÁGRAFO. El procedimiento para aplicar la multa será el establecido para el quejoso temerario, contenido en el artículo 210 de este Código.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 139

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 25000-23-42-000-2013-06840-01(4367-15) de 18 de noviembre de 2019, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

ARTÍCULO 166. EXCEPCIÓN AL DEBER DE DECLARAR. El servidor público informará a quien vaya a rendir testimonio sobre las garantías consagradas por el artículo 33 de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 167. EXCEPCIONES POR OFICIO O PROFESIÓN. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, profesión u oficio:

1. Los ministros de cualquier culto admitido legalmente.
2. Los abogados.
3. Cualquier otra persona que por disposición legal pueda o deba guardar secreto.

ARTÍCULO 168. AMONESTACIÓN PREVIA AL JURAMENTO. Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra quien declare falsamente o incumpla lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento.

ARTÍCULO 169. TESTIGO IMPEDIDO PARA CONCURRIR. Si el testigo estuviere físicamente impedido para concurrir al despacho del funcionario competente, será interrogado en el lugar en que se encuentre a través de cualquier medio técnico que facilite su recepción.

ARTÍCULO 170. TESTIMONIO POR CERTIFICACIÓN JURADA. El testimonio por certificación jurada se recaudará mediante la formulación de cuestionario dirigido al declarante, indicando de manera sucinta los hechos materia de investigación. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho de la firma de la certificación.

La certificación jurada deberá remitirse al despacho de origen dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo del cuestionario.

Quien estando obligado a ello, y sin justificación no rinda la certificación jurada o la demore, incurrirá en causal de mala conducta. El funcionario que haya requerido la certificación pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad encargada de disciplinar al renuente.

Prestarán certificación jurada: el Presidente de la República; el Vicepresidente de la República; los Ministros del despacho; los Congresistas; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, y los miembros del Consejo Nacional Electoral; el Fiscal y Vicefiscal General de la Nación; el Procurador y Viceprocurador General de la Nación; los oficiales generales o de insignia en servicio activo; el Director Nacional de Fiscalías; el Defensor del Pueblo; el Contralor General de la República; el Registrador Nacional del Estado Civil; los Directores de Departamentos Administrativos; el Contador General de la Nación; los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República; el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.; los agentes diplomáticos y consulares de Colombia en el exterior.

El derecho a rendir certificación jurada es renunciable.

ARTÍCULO 171. TESTIMONIO DE AGENTE DIPLOMÁTICO. Cuando se requiera testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia, se le remitirá al embajador o agente, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, nota suplicatoria con cuestionario y copia de lo pertinente para que, si él tiene a bien, declare por medio de certificación jurada o permita declarar en la misma forma a la persona solicitada.

Si el llamado a declarar fuere dependiente del agente diplomático, se solicitará a este que le conceda el permiso para hacerlo y una vez obtenido se procederá en forma ordinaria.

ARTÍCULO 172. EXAMEN SEPARADO DE TESTIGOS. Los testigos serán interrogados separadamente, de tal manera que no puedan saber ni escuchar las declaraciones de quienes les preceden.

ARTÍCULO 173. PROHIBICIÓN. El funcionario se abstendrá de sugerir respuestas, de formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el testigo o de preguntar su opinión salvo que se trate de testigo cualificado, técnica, científica o artísticamente.

Esta prohibición se hará extensiva a los sujetos procesales.

ARTÍCULO 174. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO. Los testimonios serán recogidos y conservados por el medio más idóneo, de tal manera que faciliten su examen cuantas veces sea necesario, sobre lo cual se dejará constancia.

ARTÍCULO 175. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:

1. Presente e identificado el testigo, el funcionario lo amonestará y le tomará el juramento, lo interrogará sobre sus condiciones civiles, personales y sobre la existencia de parentesco o relación con el disciplinable, cumplido lo cual le advertirá sobre las excepciones al deber de declarar.

2. El funcionario le informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de la declaración y le solicitará que haga un relato de cuanto le conste sobre los mismos. Terminado este, se formularán las preguntas complementarias o aclaratorias necesarias.

Cumplido lo anterior, se les permitirá a los sujetos procesales interrogar.

Las respuestas se registrarán textualmente. El funcionario deberá requerir al testigo para que sus respuestas se limiten a los hechos que tengan relación con el objeto de la investigación.

ARTÍCULO 176. CRITERIOS PARA LA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO. Para apreciar el testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio.

CAPÍTULO III.
PERITACIÓN.

ARTÍCULO 177. PROCEDENCIA. La autoridad disciplinaria podrá decretar, de oficio o a petición de los sujetos procesales, la práctica de pruebas técnicocientíficas o artísticas, que serán rendidas por servidores públicos o particulares que acrediten conocimiento y experiencia en los temas objeto de prueba.

El dictamen presentado por el perito deberá ser motivado y rendirse bajo juramento, que se entenderá prestado por el solo hecho de la firma y se pondrán en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días para que puedan pedir que se complementen o aclaren.

ARTÍCULO 178. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DEL PERITO. Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causales que la autoridad disciplinaria competente. El perito en quien concurra alguna causal de impedimento deberá manifestarla antes de su posesión, acompañando, de ser posible, la prueba que lo sustente y el competente procederá a reemplazarlo si la acepta.

Los sujetos procesales podrán recusar al perito aportando las pruebas que tengan en su poder o solicitando las que estime pertinentes; la recusación deberá formularse motivadamente por escrito, desde su posesión y hasta antes del vencimiento del plazo concedido para emitir su dictamen.

Si el perito acepta la causal o manifiesta estar impedido será reemplazado; en caso contrario, la autoridad disciplinaria que conozca el proceso resolverá sobre la recusación, designando un nuevo perito si la declara probada. De estimarse procedente, se remitirán copias de lo pertinente para la investigación a que haya lugar.

Contra la decisión que se pronuncia sobre el impedimento o la recusación no procede recurso.

ARTÍCULO 179. REQUISITOS Y PRÁCTICA. El perito tomará posesión de su cargo jurando cumplir fielmente los deberes que ello impone y acreditará su idoneidad y experiencia en la materia objeto de prueba. El perito confirmará que tiene los conocimientos necesarios para rendir el dictamen. El competente podrá disponer que la diligencia de posesión tenga lugar ante el comisionado.

En el desempeño de sus funciones, el perito deberá examinar los elementos sometidos a su estudio dentro del contexto de cada caso. Para ello el funcionario competente aportará la información necesaria y oportuna.

El perito deberá recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia que resulte de su examen, actividad en la cual no es necesaria la presencia de los sujetos procesales. Estos podrán controvertir dichas diligencias solamente una vez concedido el traslado.

El dictamen debe ser claro, conciso y preciso, conforme a lo solicitado por el funcionario de conocimiento, y en él se explicarán, además de la metodología empleada para alcanzar la conclusión, los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.

Cuando se designen varios peritos, estos conjuntamente practicarán las diligencias y harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir el dictamen. Cuando hubiere discrepancia, cada uno rendirá su dictamen por separado.

En todos los casos, al perito se le advertirá la prohibición de emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad disciplinaria.

El perito presentará su dictamen por escrito o por el medio más eficaz, dentro del término señalado por la autoridad disciplinaria, el cual puede ser susceptible de prórroga. Si no lo hiciere, se le conminará para cumplir inmediatamente. De persistir en la tardanza, se le reemplazará y si no existiere justificación se informará de ello a la autoridad disciplinaria correspondiente.

ARTÍCULO 180. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. Recibido el dictamen, el funcionario competente examinará que se haya cumplido a cabalidad con lo ordenado; si no fuere así, lo devolverá al perito para que proceda a su corrección o complementación. De satisfacer todos los requisitos mediante decisión que se notificará por estado, se correrá su traslado a los sujetos procesales por el término común de tres (3) días para que puedan solicitar su aclaración, complementación o adición.

Cuando se decrete la aclaración, complementación o adición del dictamen, se concederá al perito un término no superior a cinco (5) días, prorrogable por una sola vez, para que aclare, amplíe o adicione su dictamen. De denegarse la solicitud, procederá el recurso de reposición.

El dictamen aclarado, ampliado o adicionado dará por terminado el trámite.

Los dictámenes podrán ser objetados por error grave. En caso de concurrencia de solicitudes provenientes de distintos sujetos procesales, en las que se objete el dictamen o se pida su aclaración, ampliación o adición, se resolverá primero la objeción.

El escrito de objeción podrá ser allegado hasta antes de correr traslado para alegatos de conclusión previos al fallo y en él se precisará el error y se podrán pedir o allegar las pruebas para demostrarlo.

Si es aceptada la objeción, se designará un nuevo perito que emitirá su dictamen de acuerdo con el procedimiento aquí previsto. De denegarse la objeción, procederá el recurso de reposición.

El dictamen emitido por el nuevo perito será inobjetable, pero susceptible de aclaración o complementación. La decisión correspondiente se adoptará de plano.

PARÁGRAFO 1o. Los traslados previstos en este artículo en la etapa de investigación se comunicarán y notificarán por estado.

PARÁGRAFO 2o. Cuando sea procedente la prueba pericial en el trámite de la audiencia se dará aplicación al trámite previsto en este artículo, pero el traslado y la sustentación de las aclaraciones, complementaciones u objeciones se sustentarán verbal y motivadamente y las notificaciones se harán en estrado.

ARTÍCULO 181. COMPARECENCIA DEL PERITO A LA AUDIENCIA. De oficio o a petición de los sujetos procesales, se podrá ordenar la comparecencia del perito a la audiencia para que explique el dictamen y responda las preguntas que sean procedentes.

ARTÍCULO 182. APRECIACIÓN DEL DICTAMEN. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta su solidez, precisión y fundamentación técnico-científica, así como la idoneidad y competencia del perito. El dictamen se apreciará en conjunto con los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero, pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave.

ARTÍCULO 183. TRÁMITE DE LA OBJECIÓN DEL DICTAMEN. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se aclare, se adicione o se amplíe.

Si no prospera la objeción, el funcionario apreciará conjuntamente los dictámenes practicados. Si prospera aquella, podrá acoger el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se aclare, adicione o amplíe.

ARTÍCULO 184. EXAMEN MÉDICO O PARACLÍNICO. Para los efectos de la comprobación de la conducta disciplinaria, sus circunstancias y el grado de responsabilidad, el funcionario competente podrá ordenar los exámenes médicos o paraclínicos necesarios, los que en ningún caso podrán violar los derechos fundamentales.

Las entidades de la Administración Pública tendrán la obligación de practicar oportuna y gratuitamente los exámenes, análisis y cotejos que los peritos requieran y que ordene el funcionario competente.

Cuando se rehúse al examen de reconocimiento médico y se trate de faltas relacionadas, directa o indirectamente, con la ingesta o consumo de bebidas embriagantes o de otras sustancias que produzcan dependencia o que alteren la conducta, se admitirán como medios de prueba subsidiarios, el testimonio de quienes presenciaron los hechos o comportamiento, así como otros medios de prueba que resulten útiles.
<Concordancias>

Ley 1862 de 2017; Art. 216

CAPÍTULO IV.
INSPECCIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 185. PROCEDENCIA. Para la individualización de autores y su posterior vinculación o la verificación o el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, inspección disciplinaria que podrá recaer sobre cosas, lugares, bienes y otros efectos materiales, de la cual se extenderá acta en la que se describirán los elementos relevantes encontrados y se consignarán las manifestaciones que hagan las personas que intervengan en la diligencia.

Durante la diligencia el funcionario comisionado podrá recibir dentro de ella los testimonios útiles al proceso de quienes estén presentes o puedan comparecer

inmediatamente en el lugar de su realización, los que se recogerán en formulario distinto al acta de inspección. Los elementos probatorios útiles se recogerán y conservarán teniendo en cuenta los procedimientos de cadena de custodia.

ARTÍCULO 186. REQUISITOS. La inspección disciplinaria se decretará por medio de providencia que exprese con claridad el objeto de la diligencia, así como el lugar de su realización. Al disciplinable se le informará la fecha y hora de la diligencia. Durante el trámite de la inspección, de oficio o a petición de cualquier sujeto procesal, se podrán ampliar los aspectos objeto de la misma.

Cuando fuere necesario, el funcionario competente podrá designar perito en la misma providencia o en el momento de realizarla. El comisionado podrá igualmente hacer tal designación al momento de practicar la diligencia. Se admitirá, también, la opinión técnica, artística o científica de quienes, por razón de su formación, calificación, especialidad o experiencia, puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, siempre que se haya autorizado en la providencia que decretó la inspección.

Cuando la inspección disciplinaria sea ordenada durante el trámite de la audiencia, se deberá señalar la fecha y hora en que se llevará a cabo, pudiéndose comisionar para su práctica.

CAPÍTULO V.
DOCUMENTOS.

ARTÍCULO 187. NATURALEZA DE LA QUEJA Y DEL INFORME. Ni la queja ni el informe ni otros medios que contengan la noticia disciplinaria constituyen por sí mismos prueba de los hechos o de la responsabilidad. Con todo, con ellos se podrá encauzar la actividad probatoria.

Los documentos allegados con la queja o informe se apreciarán siguiendo las reglas de la sana crítica.

ARTÍCULO 188. APORTE. Los documentos se aportarán en original o copia y, solo de ser necesario, se adelantarán las diligencias tendientes a verificar su autenticidad.

ARTÍCULO 189. OBLIGACIÓN DE ENTREGAR DOCUMENTOS. Salvo lo contemplado en el artículo 154 y demás excepciones legales, quien tenga en su poder documentos que se requieran en un proceso disciplinario, tiene la obligación de ponerlos a disposición de la autoridad disciplinaria que los requiera de manera oportuna o de permitir su conocimiento.

Cuando se trate de persona jurídica, pública o privada, la orden de solicitud de documentos se comunicará a su representante legal, en quien recaerá la obligación de entregar aquellos que se encuentren en su poder y que conforme a la ley tenga la obligación de conservar. La información deberá entregarse dentro

de los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en las leyes que regulen la materia.

ARTÍCULO 190. DOCUMENTO TACHADO DE FALSO. Cuando el documento tachado de falso se hallare en otro proceso, el funcionario competente podrá solicitar a la autoridad a cargo de su trámite o bajo cuya posesión se encuentre, la remisión de copia autenticada o, si fuere necesario, que le envíe el original para su eventual cotejo y devolución al despacho de origen o para agregarlo al expediente. Lo decidido sobre el documento tachado de falso se comunicará al funcionario que conozca del proceso en que se encontraba dicho documento.

Cuando se advierta la falsedad documental se dispondrá el informe correspondiente con los medios de prueba del caso y su remisión a la autoridad penal correspondiente.

ARTÍCULO 191. PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD. Los documentos allegados al proceso se presumen auténticos, así como los informes rendidos por las entidades públicas o privadas requeridas por la autoridad disciplinaria. En caso de duda deberán ser sometidos a examen técnico, para lo cual se atenderá lo señalado en lo referido a la prueba pericial.

ARTÍCULO 192. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial:

1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.

2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.

3. Los amparados por el secreto profesional.

4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en la historia clínica, hojas de vida, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.

5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.

PARÁGRAFO. Los documentos reservados deberán incorporarse al expediente en cuaderno separado y conservarán su condición de forma permanente. Los sujetos procesales podrán consultarlos pero no se expedirán copias.

ARTÍCULO 193. INFORMES TÉCNICOS. Los funcionarios podrán requerir a entidades públicas o privadas informes sobre datos que aparezcan registrados en

sus libros o consten en sus archivos, destinados a demostrar hechos que interesen a la investigación o al juzgamiento.

ARTÍCULO 194. REQUISITOS. Los informes se rendirán bajo juramento, serán motivados y en ellos se explicará fundadamente el origen de los datos que se están suministrando.

ARTÍCULO 195. TRASLADO. Los informes se pondrán en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días para que se puedan solicitar aclaraciones o complementaciones. Respecto de estos no procede la objeción por error grave.

CAPÍTULO VI.
INDICIO.

ARTÍCULO 196. ELEMENTOS. Todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro hecho.

ARTÍCULO 197. UNIDAD DE INDICIO. El hecho indicador es indivisible. Sus elementos constitutivos no pueden tomarse separadamente como indicadores.

ARTÍCULO 198. PRUEBA DEL HECHO INDICADOR. El hecho indicador debe estar probado.

ARTÍCULO 199. APRECIACIÓN. El funcionario apreciará los indicios en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con los medios de prueba que obren en la actuación procesal.

TÍTULO VII.
ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL.

ARTÍCULO 200. ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Constitución Política, para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación tiene atribuciones de policía judicial. En desarrollo de esta facultad, el Procurador General y el Director Nacional de Investigaciones Especiales podrán proferir las decisiones correspondientes.

El Procurador General de la Nación podrá delegar en cualquier funcionario de la Procuraduría, en casos especiales, el ejercicio de atribuciones de policía judicial, así como la facultad de interponer las acciones que considere necesarias. Quien hubiere sido delegado podrá proferir las decisiones que se requieran para el aseguramiento y la práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, para efecto del ejercicio de las funciones de Policía Judicial establecidas en el inciso final del artículo 277, el Procurador General de la Nación tendrá atribuciones

jurisdiccionales, en desarrollo de las cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas en el trámite procesal.

En el proceso que se adelante por las faltas disciplinarias catalogadas como gravísimas, cometidas por los servidores públicos determinados en el artículo 174 de la Constitución Política de Colombia, el Procurador General de la Nación por sí, o por medio de comisionado, tendrá a su cargo las funciones de Policía Judicial.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

Los tres primeros incisos de este artículo corresponden al texto del artículo 148 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte Constitucional se pronunció así:

- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-475-07 de 13 de junio de 2007, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

- La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-244-96, y en consecuencia declara EXEQUIBLE este artículo, mediante Sentencia C-1121-05 de 1 de noviembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

Mediante la misma Sentencia, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA sobre los cargos presentados por violación de los artículos 16, 28 y 29 de la Constitución Política.

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 135 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244-96 del 30 de mayo de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 148

ARTÍCULO 201. INTANGIBILIDAD DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Las actuaciones que se realicen en ejercicio de las atribuciones de Policía Judicial lo serán con estricto respeto de las garantías constitucionales y legales.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 149

TÍTULO VIII.
NULIDADES.

ARTÍCULO 202. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad las siguientes:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 143

1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

El texto de este artículo corresponde al texto del numeral 1 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual la Corte se pronunció así:

- Mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-1076-02 y en la Sentencia C-181-02.

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, , la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02, que declaró exequible la misma expresión que aparecía en el numeral 1 del artículo 131 de la Ley 200 de 1995.

- El Numeral 1o. del Artículo 131 de la Ley 200 de 1995 establecía: "1. La incompetencia del funcionario para fallar."

El Numeral 1o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

2. La violación del derecho de defensa del investigado.
<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
<Jurisprudencia Concordante>

Num. 3:

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 66001-23-33-000-2014-00413-01(1885-17) de 31 de mayo de 2018, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 203. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA DECLARATORIA DE LAS NULIDADES Y SU CONVALIDACIÓN.

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa.

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.

3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular.

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.

5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 143 Par.

ARTÍCULO 204. DECLARATORIA OFICIOSA. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado. Contra esta providencia no procede recurso.

<Notas del Editor>

- En criterio del editor la referencia a *"las causales previstas en la norma anterior"*, debe entenderse a las señalades en el artículo 202.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 144

ARTÍCULO 205. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD. La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula.

La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 145

ARTÍCULO 206. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD. La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de dar traslado para alegatos de conclusión previos al fallo de primera instancia, y deberá indicar en forma concreta la causal o

causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 146

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 649-11 de 21 de noviembre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 207. TÉRMINO PARA RESOLVER. El funcionario competente resolverá la solicitud de nulidad, en los cinco (5) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando sea presentada en la etapa de juzgamiento se resolverá en la audiencia

Contra la decisión que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad procede el recurso de reposición.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 147

TÍTULO IX.
PROCEDIMIENTO.

CAPÍTULO I.
INDAGACIÓN PREVIA.

ARTÍCULO 208. PROCEDENCIA, OBJETIVO Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PREVIA. En caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará indagación previa.

La indagación previa tendrá una duración de tres (3) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de Indagación previa podrá extenderse a otros tres (3) meses.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El Artículo 141 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 141. TÉRMINO. Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses.

"La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos, al vencimiento de este

término parentorio el funcionario sólo podrá, o abrir investigación o archivar definitivamente el expediente".

Los apartes subrayados fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-728-00 del 21 de junio del 2000, Magistrado Ponente, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 972-12 de 10 de octubre de 2013, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

"Violación al debido proceso por desconocimiento del término en la indagación preliminar y la investigación disciplinaria.

(...) la inobservancia del término de duración de la indagación preliminar solo vulnera los derechos del disciplinado y sus garantías constitucionales, cuando con posterioridad al vencimiento de ese límite temporal, se practican pruebas y se desarrollan actuaciones sin la debida justificación. (...)"

- Corte Constitucional, Sentencia SU-901-05 de 1o. de sepriembre de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Para el adelantamiento de la indagación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos.

Cuando se allegue a la actuación el medio probatorio que permita identificar o individualizar al presunto autor, de manera inmediata se deberá emitir la decisión de apertura de investigación.

PARÁGRAFO. Si en desarrollo de la indagación previa no se logra identificar e individualizar al posible autor o se determine que no procede la investigación disciplinaria, se ordenará su archivo. Esta decisión no hará tránsito a cosa juzgada material.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 150

ARTÍCULO 209. DECISIÓN INHIBITORIA. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no puede iniciarse, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. Contra esta decisión no procede recurso.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 150 Par. 1o.

Acuerdo JCCONTADORES 6 de 2005; Art. 2o. Lit. 2o. Inc. Final

ARTÍCULO 210. QUEJA TEMERARIA. Las denuncias y quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada la decisión que así lo reconoce, originarán responsabilidad patrimonial en contra del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales competentes.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 69 Inc. 3

Advertida la temeridad de la queja en cualquier etapa del proceso, la autoridad disciplinaria podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. En tales casos se citará a audiencia y se formularán cargos al quejoso, quien deberá concurrir dentro de los cinco días siguientes a la notificación, la cual se llevará a cabo conforme al artículo 123.

Instalada la audiencia el quejoso podrá aportar y solicitar pruebas, las cuales se practicarán en un término no superior a cinco días. Recaudadas las pruebas, se dará traslado por el término de tres días para que presente sus alegatos. La decisión se adoptará dentro de los tres días siguientes contra la cual procederá únicamente el recurso de apelación que debe ser interpuesto una vez se haya proferido.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 150 Par. 2o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

CAPÍTULO II.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 211. PROCEDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación

previa se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 152

ARTÍCULO 212. FINES Y TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN. La investigación tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

Para el adelantamiento de la investigación, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá, a solicitud del vinculado, oírlo en versión libre.

La investigación se limitará a los hechos objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 153

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia C-036-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

ARTÍCULO 213. TÉRMINO DE LA INVESTIGACIÓN. La investigación tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la decisión de apertura. Este término podrá aumentarse hasta en otro tanto, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados y culminará con el archivo definitivo o auto de citación a audiencia y formulación de cargos.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

Cuando se trate de investigaciones por infracción a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de investigación no podrá exceder de dieciocho (18) meses.

Con todo, si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación, los términos previstos en los incisos anteriores se prorrogarán hasta por tres (3) meses más. Vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos se archivará definitivamente la actuación.
<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 156

ARTÍCULO 214. RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL. Procederá en los siguientes casos:

a) Cuando se adelante investigación por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios servidores públicos y solamente se identificare uno o algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal, sin perjuicio de que las actuaciones puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso bajo una misma cuerda;
<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 151

b) Cuando en la comisión de la falta intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial;

c) Cuando se decrete la nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a reponer el trámite en relación con uno de los disciplinados o una o algunas de las faltas atribuidas a un mismo disciplinado;

d) Cuando en la etapa de juzgamiento surjan pruebas sobrevinientes que determinan la posible ocurrencia de otra falta disciplinaria o la vinculación de otra persona en calidad de disciplinado, evento en el cual se ordenará expedir copias de las pruebas pertinentes para iniciar la nueva acción en expediente separado;

e) Cuando en la etapa de juzgamiento se verifique la confesión de una de las faltas o de uno de los disciplinados, evento en el cual se continuará el juzgamiento por las demás faltas o disciplinados en actuación separada.

PARÁGRAFO. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales del disciplinado. Tampoco genera nulidad el hecho de adelantar procesos independientes para conductas en las que se presenta conexidad procesal.
<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

ARTÍCULO 215. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. La decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:

1. La identidad del posible autor o autores.

2. Fundamentación sucinta sobre la existencia del hecho o la omisión que se investiga.

3. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.

4. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios del disciplinado, una certificación de la entidad a la cual el servidor público esté o hubiere estado vinculado, una constancia sobre el sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y su última dirección conocida.

5. La orden de informar y de comunicar esta decisión.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 154

ARTÍCULO 216. INFORME DE LA INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Si la investigación disciplinaria se inicia por una Oficina de Control Disciplinario Interno, esta dará aviso inmediato a la Viceprocuraduría General de la Nación y al funcionario competente de esa entidad o de la personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del poder disciplinario preferente. La Procuraduría establecerá los mecanismos electrónicos y las condiciones para que se suministre dicha información.

Si la investigación disciplinaria se inicia por la Procuraduría General de la Nación o las personerías distritales o municipales, se comunicará al jefe del órgano de control disciplinario interno, con la advertencia de que deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos hechos o suspenderla inmediatamente, y remitir el expediente original a la oficina competente de la Procuraduría.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 1952 de 2019; Art. 155

CAPÍTULO III.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS.

ARTÍCULO 217. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Durante la investigación disciplinaría o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.

<Ver Jurisprudencia Vigencia> El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-450-03 de 3 de junio de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, *"en el entendido de que el acto que ordene la prórroga debe reunir también los requisitos establecidos en este artículo para la suspensión inicial y la segunda prórroga sólo procede si el fallo de primera o única instancia fue sancionatorio"*.

El auto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia C-908-13 de 3 de diciembre de 2013, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos.

Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al afectado.

Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en Secretaría por el término de tres días, durante los cuales el disciplinado podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días siguientes.

Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien la profirió, o por el superior funcional del funcionario competente para dictar el fallo de primera instancia.

PARÁGRAFO. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el disciplinado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado de reserva de ley estatutaria, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-015-20 de 22 de enero de 2020, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos

- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086-19 de 27 de febrero de 2019, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

- Parte del texto de este artículo corresponde en similar sentido al texto del Artículo 115 de la Ley 200 de 1995, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 157

Ley 1010 de 2006: Art. 10 Par. 2o.

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 60 de 22 de junio de 2006, C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 218. REINTEGRO DEL SUSPENDIDO. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de primera o única instancia.

En este caso, no obstante la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad, la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 158

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0360-09 de 12 de mayo de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1879-12 de 12 de mayo de 2014, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

Suspensión del cargo por orden judicial que culminó con sentencia absolutoria.

"(...) aplicación analógica del artículo 158 de la Ley 734 de 2002, dado el principio de favorabilidad que consigna el artículo 53 de la Carta Política en cuanto situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, sea reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho el reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodo de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio."

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 1384-09 de 26 de enero de 2012, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

ARTÍCULO 219. MEDIDAS PREVENTIVAS. Cuando la Procuraduría General de la Nación o las Personerías adelanten diligencias disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público. Esta medida solo podrá ser adoptada por el Procurador General, por quien este delegue de manera especial, y el Personero.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este artículo corresponde al texto vigente del artículo 160 de la Ley 734 de 2002, sobre el cual, mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-977-02.

- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-977-02 de 13 de noviembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, "con respecto de los cargos analizados y en los términos de la parte motiva de esta sentencia".

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 160

CAPÍTULO IV.
CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN.

ARTÍCULO 220. ALEGATOS PRECALIFICATORIOS. Cuando se hayan recaudado las pruebas ordenadas en la investigación disciplinaria, o vencido el término de esta, el funcionario de conocimiento, mediante decisión de sustanciación, declarará cerrada la investigación y ordenará correr traslado por el término de diez (10) días para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos previos a la evaluación de la investigación.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 160-A

Ley 1474 de 2011; Art. 46

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0979-11 de 10 de octubre de 2013 , C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 221. DECISIÓN DE EVALUACIÓN. Una vez surtida la etapa prevista en el artículo anterior, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego de cargos y citará a audiencia al disciplinado o terminará la actuación y ordenará el archivo, según corresponda.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 161

ARTÍCULO 222. PROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DE CITACIÓN A AUDIENCIA Y FORMULACIÓN DE CARGOS. El funcionario de conocimiento citará a audiencia y formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del disciplinado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

PARÁGRAFO. En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción disciplinaria el auto de citación a audiencia será dictado por el magistrado sustanciador.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 150 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 150. FORMULACIÓN DE CARGOS. El funcionario formulará cargos cuando esté demostrada objetivamente la falta y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del disciplinado."

El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-892-99 del 10 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 162

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00067-00(0285-12) de 19 de febrero de 2018, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0690-10 de 10 de octubre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 223. CONTENIDO DEL AUTO DE CITACIÓN A AUDIENCIA Y FORMULACIÓN DE CARGOS. La decisión mediante la cual se cite a audiencia al disciplinado deberá contener:

1. La identificación del autor o autores de la falta.

2. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

3. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

4. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.

5. El análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento.

6. El análisis de la culpabilidad.

7. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

8. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de este Código.

9. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 163

ARTÍCULO 224. ARCHIVO DEFINITIVO. En los casos de terminación del proceso disciplinario, previstos en el artículo 90 y en el evento consagrado en el artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada formal.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 164

<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 00 de 2002

CAPÍTULO V.
JUZGAMIENTO.

ARTÍCULO 225. TRÁMITE PREVIO A LA AUDIENCIA. El auto de citación a audiencia y formulación de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere. Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- Aparte subrayado *"si lo tuviere"* contenido, en texto similar, en el inciso 1o. del artículo 165 de la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la

Corte Constitucional Sentencia C-328-03 de 29 de abril de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

- Aparte subrayado *"y se surtirá con el primero que se presente"* contenido en el inciso 2o. del artículo 165 de la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos planteados en la demanda, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

Si vencido el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo de la comunicación, no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal y se adelantará la audiencia.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Aparte subrayado *"el procesado"* contenido en el inciso 2o. del artículo 165 de la Ley 734 de 2002, fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos planteados en la demanda, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037-03 de 28 de enero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis.

<Concordancias>

Decreto Ley 196 de 1971; Art. 30

La audiencia se celebrará, no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días, contados a partir de la notificación del auto de citación a audiencia y formulación de cargos, para lo cual, una vez surtida, se remitirá comunicación a los sujetos procesales informándoles de la hora, fecha y lugar de instalación de la audiencia.
<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 165

ARTÍCULO 226. FORMALIDADES. La audiencia se adelantará teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

1. La audiencia deberá ser grabada en un medio de video o de audio.

2. De lo ocurrido en cada sesión se levantará un acta sucinta, la cual será firmada por los intervinientes.

3. Finalizada cada sesión se fijará junto con los sujetos procesales la hora, fecha y lugar de la continuación de la audiencia y esta decisión quedará notificada en estrados.

4. Durante la suspensión y la reanudación de la audiencia no se resolverá ningún tipo de solicitud.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

ARTÍCULO 227. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA. Al inicio de la audiencia el funcionario competente la instalará, haciendo una presentación sucinta de los hechos y los cargos formulados en el auto de citación, previa verificación de la comparecencia del disciplinado o de su defensor.

Acto seguido y en el evento de que el disciplinado acuda a la audiencia acompañado de defensor, la autoridad disciplinaria le preguntará si acepta la responsabilidad imputada en el auto de citación a audiencia y formulación de cargos. Si la aceptare, se seguirá el trámite señalado en el artículo 162 de este código.

Si el disciplinado concurre a la audiencia sin defensor, la autoridad disciplinaria le preguntará si es su deseo acogerse al beneficio por confesión.

En caso de que el disciplinado responda afirmativamente, el funcionario competente suspenderá la audiencia por el término de cinco (5) días para la designación de un abogado de oficio o para que el disciplinado asista con un defensor de confianza.

En caso de no proceder la confesión o aceptarse en forma parcial, la autoridad disciplinaria le otorgará la palabra al disciplinado para que ejerza el derecho de rendir versión libre y presentar descargos; así como solicitar o aportar pruebas. Posteriormente se le concederá el uso de la palabra al defensor, si lo tuviere. De concurrir el delegado del ministerio público y las víctimas o perjudicados o su apoderado judicial, el funcionario le concederá el uso de palabra para que puedan presentar solicitudes, invocar nulidades, solicitar o aportar pruebas.

El funcionario competente resolverá las nulidades y una vez ejecutoriada esta decisión se pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 168 Inc. 1o.

Si se niega la práctica de pruebas solicitadas, dicha determinación se notificará en estrados y contra ella procede el recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en el mismo acto.

La práctica de pruebas se adelantará hasta por el término de veinte (20) días prorrogables por una sola vez hasta por el mismo lapso. En este último caso, la prórroga se dispondrá mediante decisión motivada.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 168 Inc. 2o.

Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea estrictamente necesario y procedente.
<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 166; Art. 168

ARTÍCULO 228. RENUENCIA. Si habiendo sido notificado el disciplinado o el defensor, alguno de ellos no asistiere a la audiencia, esta se continuará con el sujeto procesal que asista. Cuando el sujeto que no asista sea el abogado, la audiencia se adelantará con el disciplinado, a menos que medie justificación y este requiera expresamente la asistencia de su apoderado.

En el evento de que no se presente ninguno de ellos de forma injustificada, a pesar de haber sido notificados, el funcionario competente continuará con el trámite de la audiencia.

El disciplinado y su apoderado de confianza podrán presentarse en cualquier momento, asumiendo el proceso en el estado en que se encuentre. La misma consecuencia se aplicará en los eventos de sustitución de apoderados.

La inasistencia de los sujetos procesales distintos al disciplinado o su defensor no suspende el trámite de la audiencia.
<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 167

ARTÍCULO 229. VARIACIÓN DE LOS CARGOS. Si agotada la fase probatoria, el funcionario de conocimiento advierte la necesidad de variar los cargos, por error en la calificación o prueba sobreviniente, así lo declarará motivadamente. La variación se notificará en estrados, ordenando la suspensión de la audiencia por el

término de cinco (5) días hábiles. Reanudada la audiencia se procederá de nuevo con su instalación.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 165 Inc. 5o.

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

ARTÍCULO 230. TRASLADO PARA ALEGATOS PREVIOS AL FALLO. Sin pruebas por practicar o evacuadas las ordenadas, el director del proceso ordenará la suspensión de la audiencia por el término de cinco (5) días para que los sujetos procesales presenten sus alegatos previos a la decisión. Reanudada la audiencia se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que procedan a presentar sus alegaciones finales. Finalizadas las intervenciones se citará para la emisión de la decisión dentro de los cinco (5) días siguientes.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 169; Art. 169-A

Ley 1474 de 2011; Art. 46

ARTÍCULO 231. CONTENIDO DEL FALLO. El fallo debe constar por escrito y contener:

1. La identidad del disciplinado.

2. Un resumen de los hechos.

3. El análisis de las pruebas en que se basa.

4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.

5. El análisis de la ilicitud del comportamiento.

6. El análisis de culpabilidad.

7. La fundamentación de la calificación de la falta.

8. Las razones de la sanción o de la absolución y

9. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 170

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 2009-11 de 23 de marzo de 2017, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 0690-10 de 10 de octubre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 232. EJECUTORIA DE LA DECISIÓN. La decisión final se entenderá notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma, si no fuere recurrida.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

ARTÍCULO 233. RECURSO CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación. Este deberá interponerse en la misma diligencia y se podrá sustentar verbalmente de forma inmediata o por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes ante la Secretaría del Despacho.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. Art. 115

CAPÍTULO VI.
SEGUNDA INSTANCIA.

ARTÍCULO 234. TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA. El funcionario de segunda instancia deberá decidir por escrito dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso.

El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- El Artículo 158 de la Ley 200 de 1995 establecía: "ARTÍCULO 158. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar el proceso disciplinario en su integridad."

El Artículo mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-012-97 del 23 de enero de 1997. La Corte advierte que "en su aplicación el superior no podrá, en ningún caso, agravar la pena impuesta al apelante único, haya o no una pluralidad de disciplinados".

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 171

Decreto 4886 de 2011; Art. 3 Num. 33

Directiva PROCURADURÍA 4 de 2006

Directiva PROCURADURÍA 14 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

- Consejo de Estado, Sección Segunda, Expediente No. 649-11 de 21 de noviembre de 2013, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

ARTÍCULO 235. PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA. En segunda instancia únicamente se podrán decretar pruebas de oficio y con carácter excepcional. En dicho evento y luego de practicadas las pruebas se dará traslado por el término de tres (3) días al apelante. Para proferir el fallo, el término será de cuarenta (40) días.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández, , la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-181-02, que declaró exequible la misma expresión contenida en el inciso segundo del artículo 157 de la Ley 200 de 1995.

- El inciso 2o. del Artículo 157 de la Ley 200 de 1995 establecía: "El funcionario de segunda instancia podrá, únicamente de oficio, decretar y practicar las pruebas que considere indispensables para la decisión, dentro de un término de diez días libres de distancia pudiendo comisionar para su práctica."

El texto subrayado fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE -en relación con los cargos de la demanda- por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181-02 de 12 de marzo de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño; "se condiciona a que en el trámite de la segunda instancia, se entienda que el procesado conserva la facultad de controvertir las pruebas decretadas de oficio por la autoridad disciplinaria" .

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 171

TÍTULO X.
EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 236. FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES. La sanción impuesta se hará efectiva por:
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 172

1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de distrito.

2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.

3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción de carrera.

4. <Ver Notas del Editor> Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes hagan sus veces respecto de los miembros de las mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas. En evento de que la sanción recaiga sobre aquellos funcionarios, la sanción se hará efectiva por el Vicepresidente de la respectiva corporación.
<Notas del Editor>

- En relación con los Congresistas, en criterio del editor para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1828 de 2017,

"por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones", adicionado por el artículo 1 del Decreto 1303 de 2017, "por el cual se corrige un yerro por omisión de transcripción de ciertos artículos de la Ley 1828 del 23 de enero de 2017, “por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones”", publicado en el Diario Oficial No. 50.314 de 3 de agosto de 2017.

(Por favor remitirse a la norma original para comprobar la vigencia del texto que se transcribe a continuación:)

"ARTÍCULO 60. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN ÉTICA. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 1303 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la decisión, la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente procederá en forma inmediata a hacer efectiva la sanción. De este diligenciamiento se enviará copia a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista respectiva.".

5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan contratado, respecto de los trabajadores oficiales.

6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus representantes legales, respecto de los miembros de las juntas o consejos directivos.

7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que ejerza funciones públicas y las entidades públicas en supresión, disolución o liquidación.

PARÁGRAFO. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de tres días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.

<Concordancias>

Constitución Política, Art. 92

<Doctrina Concordante>

Concepto SENA 26629 de 2017

Concepto MINRELACIONES 16 de 2013

Concepto MINDEFENSA 15936 de 2005

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1559 de 13 de mayo de 2004 (autorizada publicación mediante Of. 18553 de 28/07/2004), C.P. Dra. Susana Montes de Echeverri

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 624 de 28 de julio de 1994 (autorizada publicación 03/08/1994), C.P. Dr. Roberto Suárez Franco

ARTÍCULO 237. PAGO Y PLAZO DE LA MULTA. Cuando la sanción sea de multa y el sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en forma proporcional durante los doce meses siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe por descuento. *Cuando la suspensión en el cargo haya sido convertida en días de salario, el cobro se efectuará por jurisdicción coactiva.*
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este inciso corresponde al texto del inciso 1o. del artículo 173 de la Ley 734 de 2002, cuyo aparte en letra itálica fue declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076-02 de 5 de diciembre de 2002, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado sus servicios el sancionado.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

- Este inciso corresponde al Inciso 2o. del Artículo 31 de la Ley 200 de 1995 que fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Si el sancionado no se encuentra vinculado a la entidad oficial, deberá cancelar la multa a favor de esta, en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la impuso. De no hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa.

Corte Constitucional:

- El aparte subrayado corresponde en el mismo sentido a la frase "... a favor de la entidad ..." contenida en el tercer Inciso del Artículo 31 de la Ley 200 de 1995 que fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996. Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Si el sancionado fuere un particular, deberá cancelar la multa a favor del tesoro nacional dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión que la impuso, y presentar la constancia de dicho pago a la Procuraduría General de la Nación.

Cuando no hubiere sido cancelada dentro del plazo señalado, corresponde a la jurisdicción coactiva del Ministerio de Hacienda adelantar el trámite procesal para hacerla efectiva. Realizado lo anterior, el funcionario de la jurisdicción coactiva

informará sobre su pago a la Procuraduría General de la Nación, para el registro correspondiente.

En cualquiera de los casos anteriores, cuando se presente mora en el pago de la multa el moroso deberá cancelar el monto de la misma con los correspondientes intereses corrientes.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 173

<Doctrina Concordante>

- Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 93 de 21 de septiembre de 2006 (autorizada publicación mediante en conflictos 11001-03-06-000-00110-00 y 11001-03-06-000-2006-00111-00 de 12/10/2006), C.P. Dr. Enrique Jose Arboleda Perdomo

ARTÍCULO 238. REGISTRO DE SANCIONES. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición y de las provenientes del ejercicio de profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes.

<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional:

El Numeral 4o. del Artículo 79 de la Ley 200 de 1995 establecía: "... 4. La Procuraduría General de la Nación, semestralmente publicará los nombres de los servidores públicos que hayan sido desvinculados o destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria o sancionados con pérdida de investidura, una vez que esté en firme sin perjuicio del correspondiente archivo y antecedentes disciplinarios. Copia de esta publicación se enviará a todos los organismos públicos. ..."

El aparte subrayado del Numeral 4o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Alejandro Martínez Caballero.

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1 del artículo 42 de este código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

<Ver Jurisprudencia Vigencia> Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.
<Jurisprudencia Vigencia>

Corte Constitucional

- El texto de este inciso final corresponde al texto del inciso final del artículo 174 de la Ley 734 de 2002, el cual fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1066-02 de 3 de diciembre de 2002, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentería, *"en el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento"*.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 174

<Concordancias>

Ley 1475 de 2011; Art. 33 Inc. 2o.

Resolución PROCURADURÍA 393 de 2005

<Jurisprudencia Concordante>

Corte Constitucional, Sentencia T-036-16 de 8 de febrero de 2016, Magistrado Ponente Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.

- Consejo de Estado, Acción de Tutela, Expediente No. 2012-00445-01(AC) de 20 de febrero de 2013, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

TÍTULO XI.
RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 239. ALCANCE DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero especial.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 193

ARTÍCULO 240. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria contra los funcionarios judiciales corresponde al Estado y se ejerce por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 3 Inc. 3; Art. 194

ARTÍCULO 241. INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la aplicación del régimen disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán los principios rectores de la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las normas aquí contenidas y las consagradas en el Código General del Proceso, Código Penal y de Procedimiento Penal, en lo que no contravenga a la naturaleza del derecho disciplinario jurisdiccional.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 195

CAPÍTULO II.
FALTAS DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 242. FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 196

<Jurisprudencia Concordante>

- Corte Constitucional, Sentencia T-213-14 de 1 de abril de 2014, Magistrado Ponente Dra. María Victoria Calle Correa.

- Corte Constituicional, Sentencia T-120-14 de 3 de marzo de 2014, Magistrado Ponente Dr. María Victoria Calle Correa.

- Corte Constitucional, Sentencia C-157-03 de 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.

ARTÍCULO 243. DECISIÓN SOBRE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, los impedimentos y recusaciones serán resueltos de plano por los demás integrantes de la Sala y si fuere necesario se sortearán con jueces. En las Salas disciplinarias duales de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, los impedimentos y recusaciones de uno de sus miembros serán resueltos por el otro magistrado, junto con el conjuez o conjueces a que hubiere lugar.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 199

CAPÍTULO III.
PROVIDENCIAS.

ARTÍCULO 244. FUNCIONARIO COMPETENTE PARA PROFERIR LAS PROVIDENCIAS. Los autos interlocutorios, excepto el auto de terminación, y los de sustanciación serán dictados por el magistrado sustanciador. Las sentencias serán dictadas por la Sala.

PARÁGRAFO. En los procesos adelantados ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, o quien haga sus veces, en única instancia, la decisión de archivo o la sentencia será adoptada por la Sala, sin perjuicio de que su lectura sea hecha por el magistrado ponente en audiencia.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 199

ARTÍCULO 245. NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO COMISIONADO. En los casos en que la notificación personal deba realizarse en sede diferente del competente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, podrán comisionar a cualquier otro funcionario o servidor público con autoridad en el lugar donde se encuentre el investigado o su defensor.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 203

ARTÍCULO 246. EJECUTORIA. La sentencia que resuelve los recursos de apelación, de queja, la consulta y aquellas no susceptibles de recurso, quedarán ejecutoriadas al momento de su notificación. La de única instancia dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, o quien haga sus veces, quedará ejecutoriada al vencimiento del término para interponer el recurso de reposición.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 205 ; Art. 206

CAPÍTULO IV.
RECURSOS Y CONSULTA.

ARTÍCULO 247. CLASES DE RECURSOS. Contra las providencias proferidas en el trámite disciplinario proceden los recursos a que se refiere este código. Además, procederá la apelación contra el auto de archivo definitivo y el auto que niega las pruebas.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 207

ARTÍCULO 248. CONSULTA. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, y que no fueren apeladas serán consultadas con el superior solo en lo desfavorable a los procesados.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 208

CAPÍTULO V.
PRUEBAS.

ARTÍCULO 249. PRÁCTICA DE PRUEBAS POR COMISIONADO. Para la práctica de pruebas, los miembros de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, podrán comisionar dentro de su sede a sus abogados asistentes, y fuera de ella a funcionarios judiciales de igual o inferior categoría.

Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, o quien haga sus veces, podrán comisionar a sus Magistrados Auxiliares, abogados asistentes y a cualquier funcionario judicial del país para la práctica de pruebas.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 209

CAPÍTULO VI.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.

ARTÍCULO 250. ARCHIVO DEFINITIVO. El archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa, cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el presente código.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 210

ARTÍCULO 251. TÉRMINO. La investigación disciplinaria contra funcionarios de la Rama Judicial se adelantará dentro de los términos establecidos en el artículo 213 del presente código.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 211

ARTÍCULO 252. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. La suspensión provisional a que se refiere este código, en relación con los funcionarios judiciales, será ordenada por la Sala respectiva. En este caso, procederá el recurso de reposición.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 212

ARTÍCULO 253. REINTEGRO DEL SUSPENDIDO. Quien hubiere sido suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo y tendrá derecho a la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la investigación termine con archivo definitivo o se produzca fallo absolutorio, o cuando expire el término de suspensión sin que hubiere concluido la investigación. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.

En este caso, no obstante la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad la obligación de hacer los aportes a la seguridad social y los parafiscales respectivos.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 213

CAPÍTULO VII.
JUZGAMIENTO.

ARTÍCULO 254. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA. El procedimiento establecido en este código procede de conformidad con la competencia de las Salas Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales o quien haga sus veces. Lo adelantará el Magistrado sustanciador en audiencia hasta antes del fallo de primera o única instancia. Dentro de los cinco (5) días siguientes registrará el proyecto de fallo que será dictado por la sala en el término de ocho (8) días.

Contra el anterior fallo procede el recurso de apelación o el de reposición en el de única instancia.

<Notas de Vigencia>

- Entra en vigencia el 28 de julio de 2020.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 200

ARTÍCULO 255. En el desarrollo de la audiencia se podrán utilizar medios técnicos y se levantará un acta sucinta de lo sucedido en ella.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 215

CAPÍTULO VIII.
RÉGIMEN DE LOS CONJUECES Y JUECES DE PAZ.

ARTÍCULO 256. COMPETENCIA. Corresponde exclusivamente a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus veces, juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los Jueces de Paz.

Corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, o quien haga sus veces, en única instancia, el conocimiento de los asuntos disciplinarios contra los Conjueces que actúan ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo y Consejos Seccionales de la Judicatura.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 216

ARTÍCULO 257. DEBERES, PROHIBICIONES, INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES. El régimen disciplinario para los Conjueces en la Rama Judicial y los jueces de paz comprende el catálogo de deberes y prohibiciones previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto resulten compatibles con la función respecto del caso en que deban actuar, y el de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses previstos en dicha ley y en las demás disposiciones que los regulen.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 217

ARTÍCULO 258. FALTAS GRAVÍSIMAS. El catálogo de faltas gravísimas imputables a los conjueces y jueces de paz es el señalado en esta ley, en cuanto resulte compatible con la función respecto del caso en que deban actuar.
<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 218

ARTÍCULO 259. FALTAS GRAVES Y LEVES, SANCIONES Y CRITERIOS PARA GRADUARLAS. Para la determinación de la gravedad de la falta respecto de los conjueces y jueces de paz se aplicará esta ley, y las sanciones y criterios para graduarlas serán los establecidos en el presente código.

CAPÍTULO IX.
EJECUCIÓN Y REGISTRO DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO 260. COMUNICACIONES. Ejecutoriada la sentencia sancionatoria, se comunicará por la Sala de primera o única instancia, según el caso, a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a la Gerencia de la Rama Judicial* o quien haga sus veces, y al nominador del funcionario sancionado.
<Notas del Editor>

- En relación con la "Gerencia de la Rama Judicial" debe tenerse en cuenta que esta gerencia, que habia sido creada por el Acto Legislativo 2 de 2015, fue eliminada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

En criterio del editor, teniendo en cuenta las anteriores dispocisiones contenidas en la Ley 734 de 2002, debe entenderse a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 220

ARTÍCULO 261. EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES. Las sanciones a los funcionarios judiciales se ejecutarán en la forma prevista en este código. Las multas serán impuestas a favor de la Gerencia de la Rama Judicial* o quien haga sus veces. Igual destino tendrán las sanciones impuestas, por quejas temerarias a que se refiere esta normatividad.
<Notas del Editor>

- En relación con la "Gerencia de la Rama Judicial" debe tenerse en cuenta que esta gerencia, que habia sido creada por el Acto Legislativo 2 de 2015, fue eliminada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-285-16 de 1o. de junio de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

En criterio del editor, teniendo en cuenta las anteriores dispocisiones contenidas en la Ley 734 de 2002, debe entenderse al Consejo Superior de la Judicatura.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 221

ARTÍCULO 262. REMISIÓN AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Los aspectos no regulados en este título se regirán por lo dispuesto para el procedimiento consagrado en este código.

<Concordancias>

Ley 734 de 2002; Art. 222

TÍTULO XII.
TRANSITORIEDAD, VIGENCIA Y DEROGATORIA.

ARTÍCULO 263. TRANSITORIEDAD. Los procesos disciplinarios en los que se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o de citación a audiencia al entrar en vigencia la presente ley continuarán tramitándose de conformidad con las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior.

Las indagaciones preliminares que estén en curso al momento de entrada de la vigencia de la presente ley, se ajustarán al trámite previsto en este código.

ARTÍCULO 264. Con el fin de promover la capacitación, investigación, divulgación y publicación del contenido de la presente ley, la Procuraduría General de la Nación podrá destinar hasta el 1% de su presupuesto al Instituto de Estudios del Ministerio Público.

ARTÍCULO 265. VIGENCIA Y DEROGATORIA. <Ver prórrogas en Notas de Vigencia> La presente ley entrará a regir cuatro (4) meses después de su sanción y publicación y deroga las siguientes disposiciones: Ley 734 de 2002 y los artículos 3o, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 132 de la Ley 1474 de 2011 y los numerales 21, 22, 23 y 24 del artículo 7o del Decreto-ley 262 de 2000. Los regímenes especiales en materia disciplinaria conservarán su vigencia.

Los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254, relativos al procedimiento reflejado en este código, entrarán en vigencia dieciocho (18) meses después de su promulgación.

<Notas de Vigencia>

- El plazo de entrada en vigencia de esta ley se prorrogo hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo

2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”", publicada en el Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019.

El editor destaca la temporalidad de cuatro años de los planes de desarrollo, según puede deducirse de lo establecido por la Constitución Política en sus artículos 339, 340, 341 y 342, y por la Ley 152 de 1994 en los artículos 13, 14 y 25.

<Concordancias>

Circular PROCURADURÍA 6 de 2019

Memorando PROCURADURÍA 3 de 2019

El Presidente del Honorable Senado de la República,
Ernesto Macías Tovar.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Alejandro Carlos Chacón Camargo.

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de enero de 2019.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra del Interior,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

La Ministra de Justicia y del Derecho,
Gloria María Borrero Restrepo.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Fernando Antonio Grillo Rubiano.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera